



REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

49ª REUNION - SESION ESPECIAL
29/30 DE JULIO DE 2001

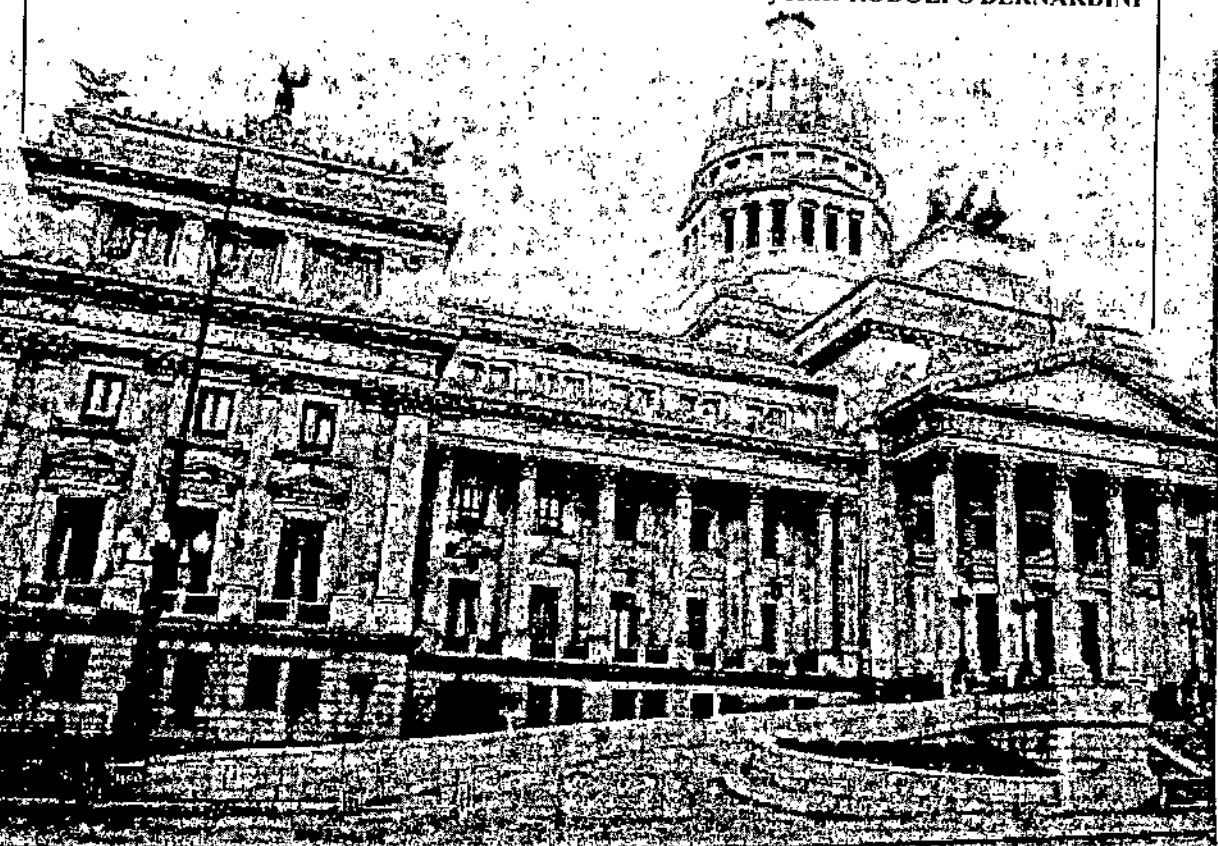
Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado, don MARIO A. LOSADA, del señor vicepresidente del Honorable Senado, doctor EDUARDO MENEM, del señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, doctor LUIS A. LEON, del señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, doctor JORGE R. YOMA y del señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, doctor CARLOSA. VERNA

Secretarios:

Señor JUAN C. OYARZUN, señor JOSE D. CANATA y señor MIGUEL J. MAMY

Prosecretarios:

Señor JUAN J. CANALS, doctor MIGUELA. FERNANDEZ ALIAS y señor RODOLFO BERNARDINI



PRESENTES:

AGÜNDEZ, Jorge A.
 ALASINO, Augusto
 ALTUNA, Juan C.
 ANGELOZ, Eduardo C.
 ARNOLD, Eduardo A.
 BAUM, Daniel
 BAUZÁ, Eduardo
 CAFIERO, Antonio F.
 CANTARERO, Emilio M.
 CARBONELL, José F.
 CORACHI, Carlos V.
 COSTANZO, Remo J.
 DE LA ROSA, Carlos L.
 GAGLIARDI, Edgardo
 GALVÁN, Raúl A.
 GARCÍA ARECHA, José M.
 GENOUD, José
 GIOJA, José L.
 HUMADA, Julio C.
 LÓPEZ, Alcides H.
 LOSADA, Mario A.
 LOZA, Juan C.
 MAGLIETTI, Alberto R.
 MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique J. M.
 MARTÍNEZ PELÁEZ, Nélida S.
 MASSACCESI, Horacio
 MASSAT, Jorge
 MAYA, Héctor M.
 MENECHINI, Javier R.
 MENEM, Eduardo
 MIKKELSEN-LÖTH, Jorge F.
 MOLINARI ROMERO, Luis A. R.
 MOREAU, Leopoldo R. G.
 NEGRÉ de ALONSO, Liliana T.
 PALACIOS, Gerardo L.
 PRETO, Ruggero

PRUYAS, Tomás R.
 RAIJER, Beatriz I.
 RODRÍGUEZ, Manuel A.
 ROMERO FERIS, José A.
 ROSTAN, Néstor D.
 SÁEZ, José M.
 SAGER, Hugo A.
 SALA, Osvaldo R.
 SALUM, Humberto E.
 SAN MILLÁN, Julio A.
 SAPAG, Felipe R.
 TELL, Alberto M.
 ULLOA, Roberto A.
 VAQUIR, Omar M.
 VARIZAT, Daniel A.
 VERNA, Carlos A.
 VILLARROEL, Pedro G.
 YOMA, Jorge R.
 ZALAZAR, Horacio A.

AUSENTES:

CABANA, Fernando V.
 DEL PIERO, Pedro
 LEÓN, Luis A.
 ORTEGA, Ramón B.
 OUDIN, Ernesto
 PARDO, Angel F.
 ROMERO, Marcelo J.
 SAPAG, Silvia E.
 TORINO, Héctor O.
 VILLAVARDE, Jorge A.

AUSENTES CON AVISO:

BRANDA, Ricardo A.
 BRAVO, Leopoldo
 USANDIZAGA, Horacio D.

SUMARIO

1. Manifestaciones realizadas por el señor senador Gioja por el fallecimiento del senador Funes. (Pág. 3657.)
2. Izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. (Pág. 3657.)
3. Homenaje al fallecido señor senador Funes. (Pág. 3657.)
4. Consideración sobre tablas del proyecto de ley venido en revisión por el que se modifica la Ley de Impuesto al Valor Agregado y sus modificaciones, la ley de competitividad 25.413 y otras cuestiones conexas (C.D.-68/01). (Página 3657.)
5. Continuación del homenaje al fallecido señor senador Funes. (Pág. 3657.)
6. Manifestaciones realizadas por el señor senador Vaquir al cumplirse el aniversario de la muerte del doctor René Favalaro. (Pág. 3660.)
7. Continuación del tratamiento del proyecto que figura en el punto 4 de este sumario. (Página 3660.)
8. Cuestión de privilegio formulada por el señor senador Alasino. (Pág. 3661.)
9. Continuación del tratamiento del proyecto que figura en el punto 4 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 3663.)
10. Consideración de las inserciones solicitadas por los señores senadores. Se aprueba. (Pág. 3749.)

11. Apéndice:

I. Sanciones del Honorable Senado.
(Pág. 3750.)

II. Inserciones. (Pág. 3750.)

—En Buenos Aires, a las 17 y 40 del domingo 29 de julio de 2001:

Sr. Presidente (Losada). — Está abierta la sesión especial convocada conforme a la resolución aprobada por el Honorable Senado el 20 de marzo último.

1

MANIFESTACIONES POR EL FALLECIMIENTO DEL SENADOR FUNES

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Gioja.

Sr. Gioja. — Señor presidente: hace muy pocos minutos hemos recibido una muy mala noticia, que conmueve a todos quienes integramos este Honorable Senado. No tenemos palabras para expresar la noticia. Hoy no vamos a hacer un homenaje. Lo haremos cuando corresponda. Estamos sentados acá por una situación crítica que vive el país en un día no habitual, en el que los creyentes cumplimos con nuestras creencias.

La noticia lamentable es que ha fallecido hace muy poquito un compañero de nuestra banca. Me refiero al "Chango" Funes, a quien llevamos muy adentro del corazón.

Señor presidente: propongo que iniciemos esta sesión con la bandera a media asta y con un minuto de silencio en memoria del "Chango" Funes.

Sr. Presidente (Losada). — Así se hará.

La Presidencia comparte los sentimientos y las palabras expresadas por el señor senador Gioja.

2

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Losada). — Invito al senador por Santiago del Estero Omar Muhamad Vaquir a izar la bandera nacional a media asta en el mástil del recinto y a los presentes a ponerse de pie.

—Puestos de pie los presentes, el señor senador Vaquir procede a izar la bandera nacional a media asta en el mástil del recinto.

3

HOMENAJE

Sr. Presidente (Losada). — Invito a los señores senadores y al público presente a permanecer de pie y a guardar un minuto de silencio en homenaje al fallecido señor senador Funes.

—Puestos de pie los presentes, se guarda un minuto de silencio en memoria del señor senador Carlos Delcio Funes.

4

MODIFICACION DE LA LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SUS MODIFICACIONES, DE LA LEY DE COMPETITIVIDAD 25.413 Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS

Sr. Agúndez. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Agúndez.

Sr. Agúndez. — Señor presidente: hago moción para que se trate sobre tablas el proyecto de ley en revisión por el que se modifica la Ley del Impuesto al Valor Agregado y sus modificaciones, la ley 25.413, de competitividad, y otras cuestiones conexas.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Gioja.

Sr. Gioja. — Señor presidente: sin intención de dilatar el debate solicito, tal como me pide el señor senador por Santa Fe, que se efectúe en nombre de todos nosotros un homenaje al "Chango" Funes.

Me parece que podemos realizarlo. Es como que su vida está marcando una voluntad y, por lo tanto, a lo mejor invirtiendo lo resuelto en la reunión de labor parlamentaria se puede efectuar primero el homenaje solicitado y, luego, considerar el proyecto mencionado por el señor senador Agúndez.

Sr. Presidente (Losada). — La Presidencia considera que no es necesario someter el asunto a votación para proceder de la manera señalada, porque cree que todos los señores senadores comparten el mismo sentimiento.

Por lo tanto, se va a realizar la modificación planteada en el plan de labor.

5

HOMENAJE (Continuación)

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

la mañana de hoy, con un grupo de colegas, estuvimos en el sanatorio. No pudimos ver al senador Funes, por supuesto, porque ya estaba en el último tramo de su vida.

No creíamos que el desenlace se fuera a producir tan rápidamente. Nadie preparó nada para hacer el más cálido de los homenajes. Creo que las mejores palabras son las que brotan del corazón y las que sinceramente se pueden decir en nombre de nuestro bloque, ratificando todo lo que se ha dicho acá.

Tenemos que recordar esto que siempre decía el "Chango", en cada una de las sesiones, especialmente cuando a este Senado se lo miraba, como todavía se lo mira, con algún tono despectivo y mucho tono crítico.

El "Chango" sabía decir: "Palo porque bogas, palo porque no bogas". Ese es el compromiso de quienes integramos esta banca. Entonces, en nombre y por la memoria del "Chango" Funes, que sean muchos palos porque boguemos, aunque nos equivoquemos.

Para terminar, quiero decir que él había pedido —era su deseo y así nos lo hizo saber su secretario—, ser velado en esta casa. Tengo entendido que, a partir de mañana a las 8, él va a estar aquí. Su sepelio realizará en la Capital Federal y en nuestro nombre queremos invitar a todos a concurrir.

Sr. Presidente (Losada). — La Presidencia hace suyas las palabras pronunciadas en este homenaje a la memoria del senador Funes y hace saber que se ha firmado el decreto por el que se establece que el velatorio se realizará en el Senado de la Nación y, en este sentido, ya se están instrumentando las medidas necesarias.

6

MANIFESTACIONES

Sr. Vaquir. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Vaquir.

Sr. Vaquir. — Señor presidente: en nombre de mi bloque y como presidente de la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública quiero recordar que hoy es el aniversario del fallecimiento del doctor René Favalaro. Considero que, dadas las circunstancias y teniendo en cuenta que no es necesario que los homenajes sean realizados en forma cronológica, en el minuto y la

hora exacta, propongo que la semana que viene rindamos homenaje a la memoria de este eminente cirujano.

Sr. Presidente (Losada). — Se tendrá en cuenta para la elaboración del plan de labor de la próxima semana.

7

**MODIFICACION DE LA LEY DE IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO
Y SUS MODIFICACIONES, DE LA LEY
DE COMPETITIVIDAD 25.413
Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS
(Continuación)**

Sr. Presidente (Losada). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor senador Agúndez.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Alasino. — Quiero que conste mi voto negativo.

Sr. Presidente (Losada). — Se deja constancia de la oposición del señor senador Alasino.

Sr. Sala. — Yo también deseo que conste mi voto negativo.

Sr. Baum. — En el mismo sentido, dejo constancia de mi voto en contra.

Sr. Tell. — Que conste mi voto negativo señor presidente.

Sr. Arnold. — En el mismo sentido.

Sr. Verna. — Que conste mi voto negativo.

Sr. Sapag. — Se deje constancia de mi voto en contra.

Sr. Martínez Almudevar. — En el mismo sentido, señor presidente.

Sr. Palacio. — Que quede constancia de mi voto en contra.

Sr. San Millán. — Que quede registrado mi voto negativo.

Sr. Pruyas. — Que se deje constancia de mi voto en contra.

Sr. Presidente (Losada). — Si levantan la mano vamos a contar si tenemos los dos tercios.

Vamos a establecer el número para el tratamiento sobre tablas.

Tiene la palabra el señor senador Menem.

Sr. Menem. — Señor presidente: los que quieren consignar el voto negativo, que lo hagan,

para que de esa manera el señor presidente, en mérito a los asistentes, comprobará si se aprobó con los dos tercios, porque ya se votó.

Sr. Presidente (Losada). — Así es.

Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Maya.— Señor presidente: quiero aclarar el sentido de mi voto afirmativo, porque deseo que se derogue lo antes posible el decreto 896, que reduce salarios y aportes previsionales.

Sr. Presidente (Losada). — Me informa Secretaría que se contó con los dos tercios, de manera que queda aprobado el tratamiento sobre tablas.

~~Recién estaba pensando cuando Perón, fastidiado por nuestra inoportuna juventud e intransigencia, nos dijo imberbes en la Plaza de Mayo y, entonces, la columna de la izquierda dio la vuelta y nos fulmó.~~

~~No sé cómo es Nik. No lo conozco; no sé si es flaco, alto, gordo, bajo, joven o viejo, pero si por experiencia se trata, creo que es un imberbe o, por lo menos, entiendo que Perón le hubiera dicho este calificativo.~~

~~En este chiste que salió publicado, Nik simula un diálogo entre Cavallo y el presidente De la Rúa —a quien lo llama “Chupiquete De la Duda” y dice que, como no se sabe qué va a pasar con el ajuste en el Senado, los senadores van a co-~~

9

**MODIFICACION DE LA LEY DE IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO
Y SUS MODIFICACIONES, DE LA LEY
DE COMPETITIVIDAD 25.413
Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS
(Continuación)**

Sr. Presidente (Losada). – Como fue aprobada la moción de tratamiento sobre tablas de este asunto, corresponde considerar el proyecto de ley en revisión por el que se modifica la Ley de Impuesto al Valor Agregado y sus modificaciones, la ley 25.413 –de competitividad–, y otras cuestiones conexas, contenido en el expediente C.D.-68/01.

Buenos Aires, 20 de julio de 2001.

Al señor presidente del Honorable Senado.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.

El Senado y Cámara de Diputados,...

TÍTULO I

Impuesto al valor agregado

Artículo 1º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para modificar la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, exclusivamente en los aspectos necesarios tendientes a establecer que los débitos y créditos fiscales se imputen al período fiscal en que se perciba y/o pague total o parcialmente el precio de las operaciones gravadas, de acuerdo a la definición de percepción y pago que el mismo establezca a tal fin.

Art. 2º – Ratifícase desde su entrada en vigencia el inciso 1 del artículo 1º del decreto 493 de fecha 27 de abril de 2001. Con carácter de excepción, para el supuesto en que no se hubiere trasladado el gravamen en razón de encontrarse ya finalizadas y/o facturadas las operaciones, la alícuota establecida por la norma que se ratifica se aplicará respecto de los hechos imponible que se perfeccionen a partir del primer día del mes siguiente al de la vigencia de la presente ley.

TÍTULO II

Impuestos sobre créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias

Art. 3º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley 25.413 por el siguiente:

Artículo 1º: Establécese un impuesto, cuya alícuota será fijada por el Poder Ejecutivo nacional hasta un máximo del seis por mil (6 ‰), que se aplicará sobre:

a) Los créditos y débitos efectuados en cuentas –cualquiera sea su naturaleza–

abiertas en las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras:

- b) Las operatorias que efectúen las entidades mencionadas en el inciso anterior en las que sus ordenantes o beneficiarios no utilicen las cuentas indicadas en el mismo, cualquiera sea la denominación que se otorgue a la operación, los mecanismos empleados para llevarla a cabo –incluso a través de movimiento de efectivo– y su instrumentación jurídica;
- c) Todos los movimientos de fondos, propios o de terceros, aun en efectivo, que cualquier persona, incluidas las comprendidas en la ley de Entidades Financieras, efectúe por cuenta propia o por cuenta y/o a nombre de otras, cualesquiera sean los mecanismos utilizados para llevarlos a cabo, las denominaciones que se les otorguen y su instrumentación jurídica, quedando comprendidos los destinados a la acreditación a favor de establecimientos adheridos a sistemas de tarjetas de crédito y/o débito.

En los casos previstos en los incisos b) y c) precedentes, se entenderá que dichas operatorias y/o movimientos, reemplazan los créditos y débitos aludidos en el inciso a) del presente artículo, por lo que a tal fin corresponderá aplicar el doble de la tasa vigente sobre el monto de los mismos.

Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, a definir el alcance definitivo de los hechos gravados en los incisos precedentes, así como también para crear un régimen especial de determinación para las entidades financieras aludidas.

El impuesto se hallará a cargo de los titulares de las cuentas bancarias a que se refiere el inciso a) del presente artículo, de los ordenantes o beneficiarios de las operaciones comprendidas en el inciso b) del mismo, y en los casos previstos en el inciso c), de quien efectúe el movimiento de fondos por cuenta propia.

Quando se trate de los hechos a los que se refieren los incisos a) y b), las entidades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras actuarán como agentes de percepción y liquidación, y en el caso del inciso c), el impuesto será ingresado por quien realice el movimiento o entrega de los fondos a nombre propio, o como agente perceptor y liquidador cuando lo efectúa a nombre y/o por cuenta de otra persona.

El impuesto se determinará sobre el importe bruto de los débitos, créditos y operaciones gravadas, sin efectuar deducción o acrecentamiento alguno por comisiones, gastos o conceptos similares que se indiquen por separado en forma discriminada en los respectivos compro-

bantes, perfeccionándose el hecho imponible en el momento de efectuarse el débito o crédito en la respectiva cuenta, o en los casos de los incisos b) y c), cuando, según sea el tipo de operatoria, deba considerarse realizado o efectuado el movimiento o entrega, respectivamente.

Art. 4º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 25.413 por el siguiente:

Artículo 2º: Estarán exentos del gravamen:

- a) Los créditos y débitos en cuentas bancarias, así como también las operatorias y movimientos de fondos correspondientes a los estados nacional, provinciales, las municipalidades y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, estando excluidos los organismos y entidades mencionados en el artículo 1º de la ley 22.016;
- b) Los créditos y débitos en cuentas bancarias correspondientes a las misiones diplomáticas y consulares extranjeras acreditadas en la República Argentina, a condición de reciprocidad;
- c) Los créditos en cajas de ahorro o cuentas corrientes bancarias hasta la suma acreditada en concepto de sueldos del personal en relación de dependencia o de jubilaciones y pensiones, y los débitos en dichas cuentas hasta el mismo importe.

A los efectos del impuesto establecido en la presente ley, no serán de aplicación las exenciones objetivas y/o subjetivas dispuestas en otras leyes nacionales –aun cuando se tratare de leyes generales, especiales o estatutarias–, decretos o cualquier otra norma de inferior jerarquía normativa.

Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a establecer exenciones totales o parciales del presente impuesto en aquellos casos en que lo estime pertinente.

Art. 5º – Sustitúyese el artículo 4º de la ley 25.413 por el siguiente:

Artículo 4º: Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para disponer que el impuesto previsto en la presente ley, en forma parcial o total, constituya un pago a cuenta de todos o algunos de los impuestos y contribuciones sobre la nómina salarial –con la única excepción de las correspondientes al régimen nacional de obras sociales–, cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía.

Art. 6º – Las disposiciones del presente título entrarán en vigencia juntamente con las normas regla-

mentarias que dicte el Poder Ejecutivo nacional en virtud de las sustituciones establecidas en el mismo.

TÍTULO III

Impuesto a las ganancias

Art. 7º – Sustitúyese el inciso a) del artículo 2º del decreto 860 del 27 de junio de 2001 por el siguiente:

- a) Lo dispuesto en el inciso a) del artículo 1º: desde el ejercicio fiscal 2002.

TÍTULO IV

Impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural

Art. 8º – Suspéndese hasta el 31 de diciembre de 2001 la aplicación de la reducción dispuesta en el artículo 2º del decreto 802 de fecha 15 de junio de 2001.

TÍTULO V

Contribuciones patronales

Art. 9º – Sustitúyese el artículo 2º del decreto 814 de fecha 20 de junio de 2001 por el siguiente:

Artículo 2º: Establécense las alícuotas que se describen a continuación correspondientes a las contribuciones patronales sobre la nómina salarial con destino a los subsistemas de seguridad social regidos por las leyes 19.032 (INSSJP), 24.013 (Fondo Nacional de Empleo), 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) y 24.714 (Régimen de Asignaciones Familiares), a saber:

- a) 20 % para los empleadores cuya actividad principal sea la locación y prestación de servicios, con excepción de los comprendidos en las leyes 23.551, 23.660, 23.661 y 24.467;
- b) 16 % para los restantes empleadores no incluidos en el inciso anterior. Asimismo será de aplicación a las entidades y organismos comprendidos en el artículo 1º de la ley 22.016 y sus modificatorias.

Las alícuotas fijadas sustituyen las vigentes para los regímenes del Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS), previstos en los incisos a), b), d) y f), del artículo 87 del decreto 2.284 de fecha 31 de octubre de 1991, conservando plena aplicación las correspondientes a los regímenes enunciados en los incisos c) y e) del precitado artículo.

TÍTULO VI

Régimen de equilibrio fiscal con equidad

Art. 10. – Sustitúyese el artículo 34 de la ley 24.156, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 34: A los fines de garantizar una correcta ejecución de los presupuestos y de

compatibilizar los resultados esperados con los recursos disponibles, todas las jurisdicciones y entidades deberán programar, para cada ejercicio, la ejecución física y financiera de los presupuestos, siguiendo las normas que fijará la reglamentación y las disposiciones complementarias y procedimientos que dicten los órganos rectores de los sistemas presupuestarios y de tesorería, excepción hecha de las jurisdicciones del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Ministerio Público que continuarán rigiéndose por las disposiciones contenidas en el artículo 16 de la ley 16.432, en el artículo 5º, primer párrafo de la ley 23.853 y en el artículo 22 de la ley 24.946, respectivamente.

Dicha programación será ajustada y las respectivas cuentas aprobadas por los órganos rectores en la forma y para los períodos que se establezcan.

El monto total de las cuotas de compromiso fijadas para el ejercicio no podrá ser superior al monto de los recursos recaudados durante éste.

Cuando los recursos presupuestarios estimados no fueren suficientes para atender a la totalidad de los créditos presupuestarios previstos, se reducirán proporcionalmente los créditos correspondientes a la totalidad del sector público nacional, de modo de mantener el equilibrio entre gastos operativos y recursos presupuestarios. La reducción afectará a los créditos respectivos en la proporción que resulte necesaria a tal fin y se aplicará, incluso, a los créditos destinados a atender el pago de retribuciones periódicas por cualquier concepto, incluyendo sueldos, haberes, adicionales, asignaciones familiares, jubilaciones, pensiones, así como aquellas transferencias que los organismos y entidades receptoras utilicen para el pago de dichos conceptos.

La reducción de los créditos presupuestarios que se disponga de acuerdo con lo previsto en el presente artículo importará de pleno derecho la reducción de las retribuciones alcanzadas, cualquiera que fuera su concepto, incluyendo sueldos, haberes, adicionales, asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones. Estas últimas en los casos que correspondiere. Las reducciones de retribuciones se aplicarán proporcionalmente a toda la escala salarial o de haberes según corresponda.

La presente norma es de orden público y modifica, en lo pertinente, toda norma legal, reglamentaria o convencional que se le oponga y no se podrá alegar la existencia de derechos irrevocablemente adquiridos en su contra.

Art. 11. — Los contratos de ejecución afectados por las reducciones dispuestas en el artículo 34 de la ley 24.156 podrán revocarse por razones de oportu-

nidad, mérito o conveniencia en el caso de que los contratistas o proveedores no acepten la reducción de la contraprestación a cargo del sector público nacional, siendo de aplicación el artículo 26 de la ley 25.344.

Art. 12. — El Poder Ejecutivo nacional garantizará con los mayores recursos y ahorros recuperados en las disposiciones de la presente ley, el restablecimiento de las retribuciones periódicas por cualquier concepto, incluyendo sueldos, haberes, adicionales, asignaciones familiares, haberes de jubilados, retirados y pensionados para todos los que percibían hasta \$ 1.000 (un mil pesos) mensuales, antes de las reducciones.

Art. 13. — La reforma dispuesta al artículo 34 de la Ley de Administración Financiera, así como las medidas complementarias que resultan de la presente ley, resultarán aplicables en lo pertinente al Poder Legislativo, Poder Judicial y Ministerio Público.

TITULO VII

Códigos procesales

Art. 14. — Sustitúyese el artículo 195 del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:

Artículo 195: *Oportunidad y presupuesto.* Las providencias cautelares podrán ser solicitadas antes o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente.

El escrito deberá expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida requerida.

Los jueces no podrán decretar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias.

Art. 15. — Sustitúyese el artículo 62 de la ley 18.345 de procedimiento laboral, por el siguiente:

Artículo 62: *Medidas cautelares.* Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Procesal Civil y Comercial, se podrá decretar, a petición de parte, embargo preventivo sobre bienes del deudor:

- a) Si se justificare sumariamente que el deudor trata de enajenar, ocultar o transportar bienes, o que, por cualquier causa, se haya disminuido notablemente su responsabilidad en forma que perjudique los intereses del acreedor y siempre que el derecho del solicitante surja verosíblemente de los extremos probados;
- b) En caso de falta de contestación de la demanda.

Los jueces no podrán decretar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias.

Cuando cualquier acto de disposición u ocultamiento de bienes por parte del empleador pudiese comprometer la efectividad de los derechos conferidos por normas del derecho del trabajo, el Ministerio Público podrá solicitar medidas cautelares.

TITULO VIII

Normas complementarias

Art. 16. — El Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Recursos Humanos, en lo que fuera materia de su competencia serán, las autoridades de aplicación de la presente ley.

Art. 17. — Las disposiciones del artículo 9º comenzarán a regir para las contribuciones patronales que se devenguen a partir del primer día del mes siguiente al de entrada en vigencia de la presente ley.

Art. 18. — Derógase a partir de la vigencia de la presente ley los decretos 430/00 y 896/01.

Art. 19. — La presente ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial, excepción hecha de las normas que tienen un plazo especial para su entrada en vigencia.

Art. 20. — Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán dictar medidas equivalentes a las previstas en el artículo 34 de la Ley de Administración Financiera, 24.156. Invitaselas a adherir en lo pertinente a la presente ley o a dictar en sus respectivas jurisdicciones medidas análogas a las aquí previstas.

Art. 21. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.

RAFAEL M. PASCUAL.

Roberto C. Marafioti.

Sr. Presidente (Losada). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador Altuna.

Sr. Altuna. — Señor presidente: voy a hacer uso de la palabra en representación de la expresión mayoritaria del bloque de la Unión Cívica Radical. Y quiero afirmar que lo hago con absoluta tranquilidad de conciencia e independencia de criterio, porque soy consciente de la responsabilidad que hoy tenemos los senadores al tratar este tema que, desde hace mucho tiempo, viene preocupando a toda la República. Este proyecto de ley, contenido en el expediente C.D.-68/01, cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados.

¿Por qué este proyecto adquiere una importancia inusitada? ¿Por qué los senadores estamos tratándolo hoy, en un día feriado? Por un lado, esto indica la responsabilidad de este cuerpo y, por el otro, señala que la República está atravesando un momento difícil.

Desde ya quiero adelantar mi apoyo al plan de austeridad que el gobierno nacional, con el apoyo de los gobernadores provinciales y de la mayoría de los diputados nacionales, ha diseñado para que el Estado argentino viva de acuerdo con el monto de sus recaudaciones, sin recurrir al crédito externo o interno.

El endeudamiento del sector público nacional se ha incrementado de manera muy significativa a lo largo de estos últimos años y se ha convertido en una variable que a todos nos preocupa. Por ejemplo, la deuda total del sector público ascendía a diciembre de 1998 a 112.350 millones de pesos. Doce meses más tarde, la deuda alcanzaba los 121.800 millones de pesos. Esto quiere decir que en sólo un año se produjo un incremento de aproximadamente 9.500 millones de pesos. Durante 2000 el incremento fue de 6.140 millones de pesos, de manera que la deuda del sector público nacional llegó prácticamente a los 128 mil millones de pesos.

Con el "megacanje" se logró reprogramar la deuda y aliviar, de alguna forma, el peso de los intereses y de la amortización. Como todos sabemos esto constituye un alivio en lo inmediato, pero somos conscientes de que estamos trasladando para el futuro las amortizaciones que dejamos de atender, así como también los intereses que ellas generan. Sin embargo, el problema de fondo continúa y la dinámica de la deuda se ha tornado prácticamente insostenible.

El presupuesto nacional para el año que estamos transitando, y aprobado como todos recordamos en 2000, contemplaba un déficit de 6.500 millones de pesos. Ha transcurrido la mitad de este año y debemos confesar lo que todos sabemos; es decir que prácticamente hemos agotado este monto del déficit previsto para todo el ejercicio. Esta es una triste realidad que nos ha llevado a pensar que no podemos seguir en este tobogán de tan abultado déficit.

La pregunta es inevitable, ¿qué nos ha llevado a este estado de cosas? Por cierto que son muchas las consideraciones que podríamos verter. Los argentinos debemos habituarnos a mirar hacia el futuro de la patria y abandonar el

facilismo de continuar debatiendo únicamente sobre el pasado, con el propósito de arrojar la totalidad de las culpas sobre los hombros ajenos. Sin embargo, no está de más reconocer que por muchos años el Estado argentino ha vivido más allá de sus posibilidades y no ha tenido en cuenta la restricción presupuestaria. Cuando los gastos exceden los recursos genuinos, no hay muchas opciones de financiamiento.

La sanción de la Ley de Convertibilidad significó una transformación sustancial orientada al saneamiento de las concepciones políticas administrativas que imperaban en la República. La Ley de Convertibilidad desterró el uso indiscriminado de la emisión monetaria para cubrir los déficit fiscales. Pero los argentinos nos hemos creído tan inteligentes que, desechada la máquina de la emisión monetaria, hemos encontrado otra alternativa para financiarnos. Me refiero a la emisión de papeles, de bonos, de letras de tesorería, de las distintas series de Bocones y de otros títulos públicos, como bien me acota mi compañero de bancada.

Cuando tuvimos financiamiento en exceso debimos ser cautos y tener disciplina fiscal, pero no lo hicimos. Desde diciembre de 1999, cuando asumió la Presidencia de la República el doctor Fernando de la Rúa, se implementaron diversas medidas a fin de equilibrar las cuentas fiscales, por un lado y, por el otro, para generar la tan postergada reactivación de la economía.

Sin embargo, debemos también confesar con honestidad intelectual que no hemos logrado los objetivos perseguidos. La economía sigue estancada y la recesión es el gran problema que nos agobia desde el segundo semestre de 1998. Así, de un producto bruto interno —a precios de mercado— de 288 mil millones de pesos, hemos pasado a tener este año, según estimaciones, una generación de riquezas que no excederá los 282 mil millones de pesos.

Las consecuencias nefastas de la recesión —que algunos ya califican como depresión— sobre el desempleo constituyen el centro del problema de la política económica argentina. Es sumamente necesario, diría que imprescindible, revertir este flagelo.

Del total de personas que actualmente desean trabajar, sólo el 84 por ciento tiene empleo. Además, las características del actual mercado de trabajo llevaron a una parte importante de los trabajadores a realizar sus tareas

bajo condiciones de subempleo. Me refiero a aquello que todos conocemos como la economía informal o el mercado negro de trabajo.

Amigos senadores: el mantenimiento y la generación de empleos es una cuestión y una política de Estado para los argentinos.

Los crecientes y crónicos déficit presupuestarios, los gastos superfluos —que los tenemos, debemos reconocerlo— y los consecuentes endeudamientos, han desplazado al sector público, constituyéndose en una amenaza para cualquier proyecto de inversión, reduciendo toda actividad. La pregunta ineludible es qué debemos hacer para salir de esta situación. Es una indiscutible verdad que una política sana es la clave para la estabilidad macroeconómica y para el desarrollo de las naciones.

El equilibrio fiscal es una condición, si no suficiente, cuanto menos necesaria para lograr el crecimiento.

Entonces, lo que hoy denominamos “déficit cero” constituye una regla imprescindible. Todos estamos de acuerdo con ella; hasta podría decir que tenemos que acuñarla como frase.

Es cierto que el déficit cero implica mucho sacrificio. Pero ese tema lo vamos a seguir discutiendo. Las últimas medidas propuestas por el Poder Ejecutivo tienen una importante trascendencia económica y social, por cuanto reducen el gasto público.

Señores senadores: para repartir se necesitan recursos. Se terminó el tiempo —al que estábamos acostumbrados— de repartir ilusiones que después no podíamos cumplir o, de cumplirlas, lo hacíamos mediante el endeudamiento creciente del país. Hoy nos atormenta el solo hecho de tener que pagar 12 mil millones de pesos en concepto de intereses de nuestra deuda.

Los recursos del Estado provienen de la actividad privada. No quiero hacer una defensa de los mercados, ni mucho menos, pero me ajusto a la economía real. Dicha actividad debe, necesariamente, producir y comercializar sus bienes y servicios generando realmente, de esa manera, la posibilidad de crear empleo.

La inversión y el ahorro son protegidos por todas las naciones, por la importancia que tienen en la economía. Para ello, se considera necesaria la vigencia irrestricta del derecho de propiedad y la atenuación de la imposición a las rentas. También los Estados tratan de no im-

ner elevadas tasas a los impuestos que gravan el consumo, como a los ingresos y al patrimonio de las personas físicas.

El Estado debe evitar imponer tributos que ahuyenten la inversión y desprotejan el ahorro; debe promover la reestructuración total de la administración pública y sincerar el manejo del gasto social para que no constituya una prebenda electoral sino que tenga el fin de ayudar a los más necesitados, sin ningún tipo de banderías políticas.

Pero hoy, en el corto plazo y en la inmediatez de la situación que vivimos, el Estado se encuentra en la encrucijada de enfrentar un desequilibrio fiscal permanente que impide que la economía argentina resurja y se reactive. Y ya no podemos —ni debemos— seguir endeudándonos. Es materialmente imposible generar nuevos recursos en forma rápida e instantánea.

Por medio del decreto 896 del 11 de julio del corriente año —que todos quisiéramos derogar— el Poder Ejecutivo se puso al frente de un plan de austeridad implementado con el objetivo de no seguir endeudando al país a las tasas de interés descomunales que exigen los mercados. Me parece que esa medida ha sido un acierto. Y debemos advertir el coraje que ha tenido el gobierno al decir la verdad a todo el pueblo argentino.

Propuso así la regla de no gastar más de lo que ingrese en las arcas del Tesoro. Para ello, en forma temporaria —remarco este aspecto—, el Poder Ejecutivo decidió reducir drásticamente las prestaciones previsionales —algo que nos duele y que ya trataremos—, las remuneraciones del personal del sector público —algo que tampoco nos gusta y que también vamos a conversar—, las asignaciones familiares y los contratos en ejecución, donde hay mucho para cortar o reducir. Además, con el objetivo de generar un aumento en la recaudación y, por su intermedio, amortiguar las reducciones programadas, el Poder Ejecutivo remitió a este Congreso de la Nación un proyecto de ley, que es el que ahora considera esta Cámara, por el que se modifica el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias.

Las medidas propuestas en el proyecto en consideración van en la misma dirección que las ya puestas en marcha, con el objetivo de afianzar y resaltar la intención de que el ajuste sea soportado de la manera más equitativa posible.

Demagógicamente, podríamos decir que no sean los más pobres los que soporten el peso de este ajuste, pero también debemos decir que eso es lo que más nos duele. No obstante, ya veremos más adelante que el ajuste propuesto por el Estado es equitativo aunque duele por igual a los de abajo, a los del medio y a los de arriba.

Sobre este tema es mucho lo que vamos a debatir esta tarde, pero por el momento, como corresponde, me referiré al proyecto que está en consideración.

Aquí no sólo se trata de reducir asignaciones familiares, previsionales o sueldos, porque también planteamos distintas alternativas para incrementar los recursos del Estado. Así es como a través del artículo 1º, contenido en el título I del proyecto en consideración, se aborda la temática del impuesto al valor agregado.

¿Qué pretende el Estado al respecto? Reparar una injusticia de vieja data. Quiere establecer un método distinto para determinar el hecho imponible en el impuesto al valor agregado.

Como todos sabemos, en este impuesto se aplica el sistema de lo devengado y se lo quiere transformar de modo que el hecho imponible se determine por lo percibido. ¿Qué implica este cambio? Que únicamente se va a pagar el débito fiscal cuando quien haya vendido un producto o prestado un servicio lo haya percibido o cobrado. Por su parte, a aquel proveedor que no pagó, no se lo tendrá en cuenta para el crédito fiscal hasta tanto él mismo también haya pagado.

De esta manera, se logrará poner en práctica, como lo hacen los programas de competitividad, un saneamiento parcial que contribuirá a frenar el deterioro de la economía que se da cada vez que quien aún no percibió el impuesto al valor agregado lo deba pagar, y quien sí debe hacerlo se tome cuatro, cinco o seis meses para realizar la contribución.

¿Cuál fue la consecuencia de esta práctica? Un ahogo financiero y una merma en el capital de trabajo de aquel productor de bienes o de servicios.

Entonces, esta medida que a simple vista pareciera que no tiene mucha significación —y que para mí sí la tiene—, será la justa reparación de una injusticia.

En otro artículo se ratifica, para que no queden dudas de ninguna naturaleza, que el gravamen a las emisiones de televisión será del 21

por ciento. De esta manera, al sancionarse este proyecto vamos a disipar todo juicio que, en el futuro, le pueda traer un dolor de cabeza a las arcas del Estado.

Otro tema importante es el impuesto a las transferencias financieras que, como todos sabemos, fue considerado no hace mucho tiempo en este Senado, dando origen a la ley 25.413, a través de la cual facultábamos al Poder Ejecutivo a fijar una tasa del 0 al 6 por mil para todos los débitos y créditos de cuentas corrientes bancarias.

¿Qué ha ocurrido en la práctica? Gracias a la viveza criolla, se utilizaba a algunas cooperativas o mutuales, que funcionaban como prestadoras de cuentas corrientes. De esa manera, se hacía una elusión del impuesto y, por lo tanto, mermaban las posibilidades de obtener la recaudación que necesitaba el Tesoro.

Respecto de este punto, se propone facultar al Poder Ejecutivo para que este gravamen sea considerado, parcial o totalmente, como pago a cuenta de las contribuciones al régimen de la seguridad social, estando exceptuada aquella parte destinada a las obras sociales.

Otro tema recaudatorio es el diferimiento hasta el ejercicio 2002 de las rebajas en el sistema tributario a las personas físicas. Naturalmente, el objeto de esta medida es evitar la disminución de la recaudación del impuesto.

Con el mismo fin, se procede de igual forma con el impuesto a los combustibles y al gas natural. Los beneficios del descuento surgidos de una resolución de hace muy poco tiempo se van a poner en marcha a partir del próximo ejercicio 2002.

En cuanto a las contribuciones patronales, se aumenta la carga tributaria para las personas físicas. Y se considera necesario aumentar la carga previsional para las empresas cuya actividad principal sea la locación y prestación de servicios, excluidas las asociaciones sindicales, las obras sociales y las entidades no incluidas en el Sistema Nacional de Seguro de Salud.

En consecuencia, se aumentan las contribuciones en cuatro puntos —del 16 al 20 por ciento— para aquellas empresas excluidas de la clasificación de micro, pequeña y mediana empresa. Y queda en el 16 por ciento para aquellas empresas que se encuentran dentro de esa clasificación. Los incrementos que se producen en

las contribuciones —que pasan del 16 al 20 por ciento—, no podrán ser considerados como pago a cuenta del impuesto al valor agregado.

Con esta medida se espera generar una mayor recaudación, que en este caso se derivará directamente a los organismos que integran el sistema de seguridad social.

Corresponde tratar ahora el núcleo central del proyecto que estamos considerando. Me refiero al régimen de equilibrio fiscal con equidad, que se establece en los artículos 10 a 13 de este proyecto.

En el artículo 10 se modifica la Ley de Administración Financiera, de manera que los gastos operativos se equilibren con los recursos presupuestarios. En tanto no aumenten los recursos o no se generen ahorros, los gastos deberán reducirse en forma de no generar déficit fiscal.

En el artículo 11 del proyecto se establece también que los contratos en ejecución estarán sujetos a las reducciones. Estas operarán de acuerdo con lo que dispongan las unidades ejecutoras. En caso de no ser aceptadas, los contratos podrán ser revocados por aplicación de la Ley de Emergencia Económica.

Todos los ahorros y recursos recuperados a partir de las modificaciones anteriores formarán una masa destinada a elevar paulatinamente, y en el menor tiempo posible, el piso de los sueldos, haberes y adicionales. Esto queda establecido en el artículo 12.

Su reducción es transitoria hasta los 1.000 pesos. Sin embargo, de acuerdo con el compromiso asumido por el Poder Ejecutivo nacional, no sufrirán disminuciones las prestaciones previsionales que no superen los 500 pesos.

—Murmillos en el recinto.

Sr. Presidente (Losada). — Pido a los señores senadores que estén atentos y que respeten al orador.

Sr. Altuna. — Debe resaltarse que los beneficiarios que no tendrán reducción de sus haberes previsionales constituyen el 85 por ciento de la masa total.

También es necesario remarcar que el resto de los beneficiarios, es decir, el 15 por ciento, se lleva el 45 por ciento del total de las prestaciones previsionales.

Respecto del personal del sector público nacional, debe quedar en claro —como lo manifes-

tó el señor presidente de la Nación—, que no habrá despidos y que continuará vigente la estabilidad en el cargo.

En lo concerniente a las asignaciones familiares, la disminución operará tanto para los beneficiarios del sector público como para los del sector privado.

El artículo 13 extiende la aplicación de lo dispuesto en el artículo 11 y de otras medidas complementarias al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al Ministerio Público.

Los artículos 14 y 15 incorporan modificaciones al Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación y a la Ley de Procedimiento Laboral, con las que se incorpora el impedimento de dictar medidas cautelares que, de alguna manera, puedan perturbar los recursos propios del Estado.

Entre las normas complementarias que se establecen en los siguientes artículos, del 16 al 20, se derogan los decretos 430/00 y 896/01. Reitero, estas medidas buscan suavizar la carga del déficit cero a fin de que el ajuste sea soportado de la manera más equitativa posible.

El Compromiso por la Independencia, firmado el 15 de julio con los gobernadores de la Alianza, y el Apoyo Institucional para la Gobernabilidad de la República Argentina, firmado el 17 de julio con los señores gobernadores justicialistas, unió las fuerzas necesarias para reconocer que el país se ha comprometido en la causa de todos: hacer viable la economía de nuestra Nación.

Estamos en un momento histórico, debemos reencauzar el país en la independencia económica, sin depender del crédito. El rumbo está delineado con estas medidas y necesitamos tomar el timón para conseguir los resultados deseados. El compromiso de vivir con lo que recaudamos, renunciando a los riesgos e incertidumbres que generan los periódicos endeudamientos, constituye —sin duda alguna— un punto de inflexión histórico.

Esta es la responsabilidad que hoy, domingo, nos tiene aquí a todos los senadores tratando este tema, tal como lo ha pedido el presidente de la República y como lo necesita la Nación. Debemos aprovechar esta oportunidad para el cambio y no para retroceder.

Ayer —cuando se malogró la sesión— decía en un reportaje que me hicieron diversos medios, y del que también participaron varios senadores, que nadie sale de una crisis sin dolor.

Esto es cierto. Todos vamos a sufrir: sufrirán nuestros hijos y, peor todavía, nuestros nietos.

Más allá de alguna subjetividad en su consideración, creo que es bueno que me permitan leer un editorial que publicó hoy el diario "La Nación" y que se refiere a este punto de inflexión en que se encuentra la República. Dice así: "Toda crisis implica una oportunidad". Siempre lo decimos: de las crisis debemos hacer una oportunidad. "En medio de las enormes dificultades financieras que han colocado al país al borde de la cesación de pagos, nos encontramos los argentinos, paradójicamente, ante una oportunidad extraordinaria para demostrarle al mundo que podemos ser creíbles."

Cuando ayer me preguntaban si lo que más queremos recuperar es la credibilidad de los mercados, yo decía que lo primero que debemos recuperar es la credibilidad en los propios argentinos: que nos tengamos fe, que nos tengamos confianza. Esta es la primera credibilidad que debemos recuperar. Y esto —palabras más, palabras menos— es lo que dice este editorial.

"El éxito o el fracaso de ese intento dependerán, antes que nada, de que la comunidad en su conjunto —y, sobre todo, los sectores de la dirigencia nacional— tome conciencia de la magnitud de una crisis que requiere retemplar el espíritu de unión nacional y el sentido de pertenencia a una patria, a un suelo, a una empresa histórica común."

"Todo ajuste es doloroso. En especial, cuando no es el primero y cuando se viene de tres años de recesión económica. Pero el ajuste será inmensamente más cruento si se deja pasar, en la Nación y en las provincias, esta oportunidad. Como lo dijimos otras veces, la actual situación es consecuencia de no haberse reconocido a tiempo que era necesario reducir fuertemente el gasto público y ni qué decir el costo de la política en el país."

Felizmente, en los últimos días estamos viendo la preocupación nacional en distintas provincias, como es el caso de Córdoba, en la cual mediante una consulta popular se van a reducir las dos Cámaras a una.

Nosotros estamos algo gastados y cansados de que en todo el país se hable del costo político, y de que también —es cierto— los medios lo hagan quizá más allá de lo necesario.

Por eso, creo que estas medidas que promueve el Poder Ejecutivo, que ya cuentan con la san-

ción de Diputados, deben requerir de los señores senadores también su apoyo, y así lo solicito.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Verna.

Sr. Verna. — Señor presidente, señores senadores: en esa rara ocasión de ser mayoría y oposición al mismo tiempo, la mayor parte del bloque Justicialista ha acompañado reiteradamente al gobierno del doctor De la Rúa.

En el momento en que asume la Presidencia de la Nación y se presenta ante la Asamblea Legislativa, formula el primer requerimiento a esta bancada, que fue la aprobación del presupuesto del año 2000. Ya entonces fue presentado como que si el presupuesto no se aprobaba sólo quedaba el abismo. Y lo votamos.

Después, vino el impuestazo de Machinea; también entonces era eso o el abismo. Nosotros le dijimos que ese impuestazo iba a detener la incipiente reactivación que había en el país y, lamentablemente, no nos equivocamos. Mantuvimos los impuestos distorsivos, incrementamos los impuestos sobre la clase media y el país nuevamente cayó en su actividad económica.

Votamos la reforma laboral, de cuyas consecuencias ya ha hablado el senador Alasino. Votamos el presupuesto del año 2001, a pesar de que en ese presupuesto hay partidas presupuestarias para servicios no personales por 1.700 millones de pesos, y hay partidas presupuestarias para contratos, es decir, para el contrato de técnicos, de consultoras, por 422 millones de pesos. Votamos el impuesto al cheque, un impuesto distorsivo, un impuesto recesivo pero que el gobierno lo presentó como una necesidad inmediata de la caja. Era eso o el abismo. Y Cavallo volvió a recurrir a nosotros para que votáramos las facultades delegadas, cosa que hizo nuestro bloque. Sin embargo, el Poder Ejecutivo ha hecho uso y abuso de ellas, a punto tal que por uno de los decretos fundados en las facultades delegadas se ha modificado la Ley de Ética. Creo que los señores legisladores del oficialismo deberían revisar, si es cierto lo que dicen los fundamentos, la postura de que un país menos ético es más competitivo.

A su vez, modificamos la convertibilidad con el famoso "empalme", que considero fue en gran parte la llave o el momento de salida de los inversores, porque si habíamos modificado el dólar comercial, por qué no íbamos a hacer lo mismo con el dólar financiero; y ahí comenzó la desconfianza de los famosos mercados.

En consecuencia, creo que hoy la mayor parte de mi bloque no va a acompañar al oficialismo. Estamos de acuerdo en el "déficit cero", en vivir con lo nuestro y en no seguir endeudándonos, pero no coincidimos en cuanto a las prioridades que se han fijado. Para nosotros las prioridades son las escuelas abiertas, los hospitales con remedios, las universidades dando clases, comida y trabajo para toda la gente, y no el pago de los intereses de la deuda pública. No estamos de acuerdo en consentir la baja de salarios; y en esto somos coherentes con nosotros mismos. Votamos la reforma laboral porque explícitamente se excluyó la posibilidad de la baja de salarios; derogamos el decreto 430 que fijaba la baja de salarios y, además, por una resolución de este cuerpo fue aprobada la derogación del decreto firmado por los presidentes de ambas Cámaras, que afectaba a los ingresos de los trabajadores legislativos. Es decir que mantenemos la posición de no votar una rebaja de los salarios.

Señor presidente: creo que voy a tener que volver a la carga sobre un viejo proyecto que presenté en junio de 2000 relacionado con un homenaje al doctor Ricardo López Murphy, por el que se destacaba de manera enfática la honestidad intelectual de este economista de la Unión Cívica Radical: es que es el único radical que dijo la verdad en la campaña electoral, cuando mencionó que la Alianza iba a rebajar los salarios. Sin embargo, los radicales lo escondieron detrás de un biombo cuando dijo eso y lo sacaron de la campaña; pero tanto Machinea como Cavallo han votado la baja de salarios. O sea que voy a tener que insistir con el proyecto de reconocer la honestidad intelectual de López Murphy, el único radical que anticipó la baja de salarios.

Tampoco compartimos recorte alguno en las jubilaciones. No se puede hacer ajuste sobre los que menos tienen ni sobre los que no tienen defensa, ni en las remuneraciones de los jubilados.

Y al respecto voy a tener especial cuidado en señalar que el presidente De la Rúa, durante mucho tiempo, tuvo un programa de radio destinado a los jubilados; sin embargo, hoy, en el ejercicio del gobierno, lo primero que hace es recortar las jubilaciones.

En verdad, señor presidente, espero que nunca tenga un programa de radio sobre los pampeanos. *(Risas.)*

Al ministro Cavallo, al contrario, lo vamos a invitar a participar en un programa de radio de un compañero llamado Alejandro Dolina, que se titula "La venganza será terrible". ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque a él lo hizo llorar una jubilada, pero con esta ley él va a hacer llorar a millones de jubilados. Y esta sí que es una venganza terrible, no la de Dolina.

Nosotros compartimos las modificaciones al impuesto al valor agregado. Creemos que es correcto pagar por lo percibido y no por lo devengado; aunque creemos que va a generar una enorme complicación en la contabilidad de las empresas, porque el artículo está mal redactado técnicamente.

Además, compartimos la generalización del impuesto al cheque, como una manera de evitar la elusión pero, casualmente, se han olvidado del sector financiero y otra vez no han gravado la renta financiera. Por eso, en la discusión en particular vamos a proponer que se graven las cuentas corrientes que los bancos tienen en el Banco Central.

Señor presidente: quiero señalar que entendemos la posición de los gobernadores de nuestro partido que han manifestado su inquietud en favor de que se apruebe esta ley. Sabemos de las dificultades financieras que tienen en sus distritos y que dichas dificultades se extienden no sólo a algunos de los distritos gobernados por el justicialismo, sino también a los gobernados por representantes de otros signos políticos.

Como ustedes saben, el gobierno los hace participar de esa feria de "todo por dos pesos", porque en ella participan todos los gobernadores. Y parece que ayer el jefe de Gabinete le ha agregado un catálogo de ilusiones a esa feria, porque indicó las cosas que les van a dar cuando esta ley se apruebe.

Les quiero recordar que el tema de los tres puntos de diferencia del IVA aún no cuenta con dictamen favorable de la Comisión Federal de Impuestos y que, cuando lo tenga, si el Estado consiente esa deuda y emite un bono, estará incumpliendo con el "déficit cero", porque estará emitiendo deuda. O sea que me parece que han prometido de manera demasiado fácil.

Pero, además, creo que cualquiera sea la promesa que hagan no la cumplirán; porque, primero, el gobierno prometió, después pactó, luego firmó los pactos fiscales I, II y III, que ratificamos por ley, y no ha cumplido con nada.

Creo que si no han cumplido con lo que está escrito y es ley, mucho menos cumplirán las promesas que acaban de hacer.

Esto comenzó con el "Pacto de la Independencia", en el cual se hablaba de "ahorro". Recuerdo que cuando era niño e iba a la escuela, la maestra nos hacía pegar estampillas en la libreta de ahorro, pero cuando esa libreta se llenaba a uno le devolvían el dinero; sin embargo, acá, a los jubilados no le van a devolver nada. O sea que no hay que hablar de ahorro; esto es un ajuste.

Han hablado de un "ajuste con equidad". Y resulta que la equidad ha comenzado por quitarle el dinero a los jubilados. Pero lo más grave es que, a pesar de los números que ha leído el miembro informante, en mi concepto este ajuste es totalmente innecesario. ¿Sabe por qué? Porque el jueves 22 de marzo Cavallo prometió que la reactivación sería rápida y el 11 de abril aseguró que la reactivación ya había comenzado. Si la reactivación ya comenzó, ¿para qué vamos a hacer este ajuste?

Además, para demostrar cuán creíble es el ministro de Economía, quiero recordar que el miércoles 18 de abril Cavallo decía: "No habrá reestructuración de los vencimientos de la deuda externa". Y fiel a su promesa hizo el "megacanje".

Finalmente, Cavallo nos dijo: "Nos van a venir a buscar para prestarnos plata". Esto lo dijo en mayo y hoy estamos acá, señor presidente, viendo cómo vivimos con lo nuestro. Parece que no encontraron el camino al Ministerio de Economía que encabeza Cavallo.

Señor presidente: en definitiva, esto que nos preocupa a todos, que nos tiene sesionando un domingo y que nos ha hecho funcionar bajo la presión de los mercados, tiene que ver con lo que se nos ha dicho reiteradamente, en el sentido de que el país está al borde del abismo, a un paso del default, a punto de entrar en cesación de pagos.

Ante la afirmación de que estamos sesionando bajo la presión del riesgo país, quiero recordar algunos números. El 10 de diciembre de 1999, cuando el doctor Fernando de la Rúa se hizo cargo del gobierno, el riesgo país era de 607 puntos. Esa era la herencia recibida. El 16 de julio era de 1.629. Quiere decir que 1.022 puntos son todos de ustedes, muchachos; esos más de mil puntos son de ustedes. Esa es la adminis-

tración de Machinea, es la administración de López Murphy, es la administración de Cavallo y es la presidencia de Fernandó de la Rúa.

El día en que se fue Machinea el riesgo país era de 886 puntos. Por lo tanto, 743 son de Cavallo.

—Murmillos en el recinto.

Sr. Verna. — En la curva del riesgo país se ve claramente cómo, a partir de la renuncia del entonces vicepresidente de la Nación y con la crisis política, comienza a escaparse la variable. Entonces, creo que en esto ni los jubilados ni los trabajadores tuvieron algo que ver. Por lo tanto, no tienen por qué estar pagando el costo del ajuste.

Sr. Altuna. — No estuvieron en la fiesta.

Sr. Verna. — Creo que otra vez estamos ante lo que ya dijimos hace un tiempo: “¡A votar, a votar, que se cae el sistema!”. Nuevamente Cavallo los ha convocado a todos. Como dijo el senador Moreau, a nosotros ya nos tiene acostumbrados. A ustedes les está enseñando esto de: “¡A votar, a votar, que se cae el sistema!”.

Pero yo quiero señalar, señor presidente, que voy a votar por el rechazo de este proyecto de ley, y lo voy a hacer porque estoy en este Senado en representación de La Pampa; más concretamente, de los peronistas de mi provincia. Todos sabemos que la mayoría del peronismo proviene del sector menos protegido, del sector más débil. A ellos represento yo en este Senado. Por lo tanto, no puedo votar a favor del recorte de los salarios. No puedo votar a favor del recorte de las jubilaciones porque represento a los que menos tienen; porque no puedo volver a mi provincia y, mirando cara a cara a los jubilados, decir que les hemos bajado el salario. No puedo volver a mi provincia y decir a los pampeanos que no hay plata para pagarles, pero sí para la usura del sistema financiero que tiene los bonos de la deuda pública. Por eso es que voy a votar por el rechazo de esta norma, porque no coincidimos con las prioridades que el Estado ha asignado.

Consideramos que se deben priorizar la educación, los salarios, la seguridad, pero no el pago de la deuda pública.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Maya.

Sr. Maya. — Señor presidente: nuestro bloque 17 de Octubre adelanta su voto de rechazo

a esta propuesta del Poder Ejecutivo y a la sanción que ha venido de la Cámara de Diputados. Pero antes de entrar de lleno en la cuestión, formularé algunas consideraciones sobre el marco y la realidad en la que nos abocamos al tratamiento de la cuestión. Fijense la realidad con que nosotros concurrimos a este recinto y la imagen que está instalada en el país.

Al comienzo de la sesión se planteó una cuestión de privilegio que realmente invalida las decisiones de este cuerpo, porque pocos han venido aquí por su propia voluntad. En efecto, vinieron condicionados y casi sin libertad para lo que vamos a hacer. Eso se llama tener un vicio de la libertad, que es un elemento invalidante de los actos jurídicos, porque hemos venido como consecuencia de la instalación de una imagen en el país, a quien se le ha hecho creer que la suerte de lo que pase en toda la geografía nacional depende de nosotros y que el Senado es el gran responsable de lo que vaya a ocurrir. No pudimos soportar la presión de tratar el proyecto el miércoles venidero y este sábado y domingo hemos logrado conseguir un quórum como pocas veces en la historia de nuestro Parlamento.

Evidentemente, este tema ha entrado con el rigor que los medios de comunicación han instalado en el país; con una presión y una necesidad en la cual no sólo los propios medios sino las estructuras que lo gobiernan y el propio Poder Ejecutivo han venido instalando desde el 10 de diciembre de 1999.

Este era un reducto donde el peronismo tenía mayoría y había que plasmar una estrategia concreta para mutilar la posibilidad de que hubiera una expresión genuina; había que invalidar esta mayoría peronista y, en consecuencia, se instaló una política perfectamente articulada, vertebrada y destinada a deteriorar la voluntad de este cuerpo, a manejarlo y, en definitiva, a facilitar la concreción de textos legales que van en contra de lo que piensan y sienten la inmensa mayoría de los que forman parte de esta bancada. Por eso, hoy nuevamente vamos a viabilizar la posibilidad de que se apruebe una iniciativa en contra de lo que pensamos.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Eduardo Menem.

Sr. Maya. — Somos mayoría y vamos a viabilizar esto porque la mayor parte de los que están aquí se ven limitados en su libertad de

decisión. En este marco de condicionamientos, por las presiones no sólo de la conducción del país sino del verdadero poder que está detrás de este gobierno inexistente, está alterado lo que debe ser una política legislativa de consenso, de propuesta positiva y definitiva en la búsqueda de un objetivo para un país mejor.

Ahora me referiré específicamente al tema en debate. La única política que ha instrumentado el gobierno desde que asumió es la de perfilarse por la vía electoral a destruir a la oposición, pero estuvo carente de las más elementales previsiones, como son la elaboración de una arquitectura económica, de esquemas de gobernabilidad o planteo de propuestas.

El testimonio de que lo que afirmo lo brinda el proyecto de ley en tratamiento. Me pregunto si para esto se ha reunido este cuerpo, con tanta expectativa para el país. ¿Con este esquema de medidas que estamos por instrumentar se pretende despertar una ilusión en los argentinos, en el sentido de que las cosas se van a organizar y todo va a mejorar? Creo que nuevamente estamos en la antesala de una nueva frustración que nos ofrece este gobierno.

Esta iniciativa es de una mediocridad inigualable. Es insuficiente, de poco nivel, mediocre y casi irresponsable. ¿Han estado diez años en la oposición para plantear esta iniciativa? ¿Es esta la imaginación y el vuelo que tienen: solucionar las cosas recortando las remuneraciones de los empleados públicos que menos ganan y las del sector previsional? ¿Es este el nivel de imaginación y de propuestas que tiene este gobierno? ¿Adónde van a llegar? ¿Adónde van a continuar llevando al país con este desgobierno? Realmente, los argentinos no merecen esta respuesta. Casi me parece una burla.

Algunos dicen que el presidente de la Nación no tiene sentido del humor. Creo que lo tiene y mucho más que todos nosotros. Recuerden cuando afirmaba durante la campaña electoral que se acababa la fiesta de unos pocos. ¿Estaba diciendo que se acababa la fiesta de los jubilados y la de los empleados públicos que ganan 500 pesos? Desde la perspectiva política esto debe ser tomado como una defraudación hacia la sociedad; debe interpretarse que existe realmente un humor negro en el mensaje que nos planteó la Alianza.

Quiero anticipar nuestro voto negativo a esta propuesta del gobierno, a esta chirinada que se pretende instrumentar, así como también el planteo de un proyecto alternativo.

No creemos que este proyecto vaya a conducir a buen camino. Coincidimos con el objetivo de lograr el déficit cero; es concordante con una vieja propuesta formulada desde nuestro bloque, cuando hace algunos años el entonces senador y actual gobernador por Córdoba De la Sota presentó un proyecto denominado de convertibilidad fiscal. Pero el déficit cero no se puede alcanzar sacándole a los que menos tienen. El déficit cero es perverso e insolidario si lo buscamos sobre la base de quitar a los que consumen el ciento por ciento de lo que perciben, a pesar de lo cual también tienen insatisfechas sus necesidades básicas. En consecuencia, el déficit cero debe obtenerse quitando a los sectores privilegiados, a quienes desde hace muchos años tienen una elevada capacidad de ahorro.

Quiero analizar la situación a través de un ejemplo de fácil percepción, inteligible para todos. Una persona que hoy gana 1.000 pesos consume el ciento por ciento de lo que percibe, pero está pagando el 21 por ciento de IVA en cada uno de sus consumos y el 4 o el 5 por ciento en concepto de impuestos internos. Y ahora, con esta propuesta del gobierno de la Alianza, se les quita un 13 por ciento más; es decir que a los 1.000 pesos hay que restarle un 40 por ciento de descuento o, lo que es lo mismo, 400 pesos. He ahí el nivel de sensibilidad del gobierno.

Por otro lado, también nos hallamos ante el sector financiero. ¿Cómo es posible que la denominada Ley del Cheque se extienda a las cajas de ahorro familiares o de aquellos que tienen un elevado nivel de ingresos? ¿Cómo es posible que el alcance de esa ley no contemple las operaciones interbancarias? ¿Acaso los bancos en este país tienen algún perfil filantrópico, compiten con Cáritas o con alguna otra entidad de beneficencia? Al contrario, aplican más que nadie la rueda sin fin del interés compuesto y la usura financiera, que bien conocen los que son víctimas de créditos bancarios.

Esto es lo que se debe cotejar. Pero se protege a los que más ganan y se castiga a los sectores de menores ingresos.

¿Cómo es posible que en la aplicación del impuesto a los bienes personales continúen sin

ser gravados los inmuebles de aquellas sociedades que, constituyéndose en el exterior, trasladan como fraude o ficción los domicilios, eludiendo así el pago del mencionado gravamen?

El nivel de contribución del impuesto a los bienes personales equipara a la Argentina con Biafra o con un desierto en el que no hay inmuebles. Nadie paga ese gravamen y, sin embargo, no se modifica el texto legal para que esos señores comiencen a pagar. ¿Pero cuál es el argumento para no realizar la modificación? ¿Acaso se van a llevar las casas del país? ¿No se van a construir nuevas casas? La razón es que se prefiere castigar a los que menos ganan, reducir el consumo y profundizar la desocupación antes que castigar o hacer pagar con justicia y equidad tributaria a aquellos que hoy no lo hacen.

Me pregunto en qué lugar del mundo la renta financiera está exenta de pago, tal como sucede en este país. Y no hablemos de gravar con el impuesto a las ganancias los intereses de los plazos fijos, porque saldrían los que dirán que eso implicará una fuga de depósitos. Pero cómo puede ser que la renta de los títulos públicos, que no pueden salir del país porque están capturados en la relación jurídica con la Nación, esté exenta del pago del impuesto a las ganancias. Más grave aún: los tenedores externos de los mencionados títulos públicos pagan en sus países de origen y, si hubiese inversiones que estuvieran alcanzadas por el impuesto a las ganancias en aquellos países, aquí se las tomaría a cuenta, lo cual constituye un acto de injusticia, falta de equidad y suma gravedad, porque no sólo se pierde recaudación que ayudaría a mejorar el nivel de vida de los argentinos sino también porque se facilita la recaudación y el pago de tributos en los países de origen del capital.

Estas cosas marcan el perfil de lo que busca un gobierno que nos defraudó y engañó cuando decía que se iba a acabar la fiesta. Pero la fiesta se profundizó y los que la disfrutaban ahora son menos que antes. Siguen las políticas tuitivas y tutelares de los sectores financieros y de los sectores privilegiados y, mientras esto se permite, se pretende recaudar recurriendo a los sectores de menores ingresos.

Por estas razones, vamos a votar negativamente el proyecto en consideración y plantearemos un proyecto alternativo, que también busca alcanzar el déficit cero, pero exigiendo pagos

de aquellos que pueden hacerlo y tienen capacidad de ahorro, y no de quienes dejan de consumir. Aun así, creemos que estas medidas son altamente insuficientes; de allí, que sea necesario aplicar, con más firmeza y decisión, políticas que generen cambios estructurales en el país.

Esto no es para mediocres, tibios ni para gente que va y viene sino para los que asumen las responsabilidades del Estado. En materia económica, para solucionar las cosas y hacer cambios estructurales, hay que colisionar con alguien. Y para este gobierno, lo más fácil ha sido colisionar con los más débiles.

Planteamos que hay que colisionar con los sectores que tienen mayor capacidad de ahorro, tal como ya lo hemos hecho. ¿O se olvidan de que cuando hubo que salir de la hiperinflación, el gobierno de Carlos Menem tuvo que tomar la decisión —dolorosa, fuerte, costosa y agresiva— de incautarle a los ahorristas los plazos fijos y entregarles bonos?

Fue una medida dolorosa y que hoy ya no es necesaria, porque el sistema financiero y monetario heredado tiene una gran fortaleza. Pero hay que tomar medidas similares, que permitan capturar recursos de parte de los sectores privilegiados. Hay que terminar con los prebendas y arrancar hacia la transformación que significa trasladar las utilidades de los sectores financieros hacia los sectores de la producción.

Es trascendente proteger al país para que no se produzca el default financiero, pero para nosotros, los peronistas, es mucho más importante evitar el *default* social.

Ante esta realidad, me pregunto cómo vamos a hacer los peronistas de este cuerpo —que vamos a permitir que se sancione este proyecto de ley—, para poner la cara en nuestros pueblos ante nuestros compañeros y decirles que hicimos una ingeniería aritmética para que unos voten negativamente y otros presten el quórum necesario, cuando la conclusión de nuestro comportamiento es la materialización de un descuento en los sectores previsionales y asalariados, mientras quedan protegidos los sectores de la renta y los grandes inversores y evasores del país. Esto es inexplicable.

Yo vine a este Senado por el voto de los peronistas de mi provincia, y quiero ser leal a mis sentimientos y convicciones. Por lo tanto, voy a votar en contra de este proyecto. No voy a posibilitar que se siga castigando al pueblo

argentino reduciendo la capacidad de consumo de los que menos tienen, para que los sectores de la patria financiera sigan creciendo.

Por último, quiero destacar la profunda desilusión que nos han provocado estas medidas propuestas por el equipo económico. Anunciaron que se había acabado la época en que se pagaban altas tasas de interés y que se terminaba la "leche de clemencia" para el sector financiero. El ministro Cavallo decía "yo no les voy a pagar más el 11 por ciento". Se avecinaba una disputa de seria confrontación y dignidad, en donde el país no iba a estar a merced de la usura. Sin embargo, nosotros teníamos la duda respecto de si ese "disparo hacia la izquierda" de Cavallo no era una ficción y en ese camino que cruzaba de Chicago y Harvard, amagando ir a Cuba, no terminaría en Miami. Y así ocurrió.

Todas las cuestiones que se están planteando desde este gobierno conducen a una sola realidad: seguir con el empobrecimiento, la injusticia, la inequidad y cargar a los sectores de menores recursos.

Vamos a propiciar la misma mecánica que se adoptaría en nuestras propias familias. Cuando en nuestras casas hay que hacer un ajuste no empezamos cortándole la leche que toman nuestros gurises sino que primero pensamos, como padres de familia, en ajustarnos nosotros mismos; y si con eso no alcanza, le pedimos a nuestra mujer que nos ayude, que haga un esfuerzo y que tenga privaciones. La última medida que tomamos es limitar las posibilidades de los que sufren más y de los que necesitan más protección en nuestra casa, que son nuestros hijos.

En la sociedad y en el manejo del poder debe ocurrir lo mismo. Por eso planteamos que si el ajuste se debe aplicar, que se empiece por nosotros, por los sectores políticos que percibimos más y no por los que ganan 1.000 pesos. En efecto, se debe comenzar por los sectores de altos niveles de rentabilidad y de capacidad de ahorro en el país, en vez de seguir apretando, ajustando y mutilando las posibilidades de vida de los más necesitados; de lo contrario, el estallido y el *default* social van a ser incontenibles y de eso nos vamos a lamentar mucho más que del *default* financiero.

De esta manera adelanto mi voto negativo y la propuesta de un proyecto alternativo a esta iniciativa del Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes, Bloque Autonomista.

Sr. Romero Feris. — Señor presidente: sin duda alguna, éste es un tema de suma importancia.

Creo que esto que se ha dado en llamar déficit cero es lo que todos deseamos, pero no considero que sea un mérito del gobierno lograrlo sino que entiendo que es su obligación.

No obstante esto, quiero señalar mi profunda preocupación por algunas cuestiones que contiene este proyecto. Y debo decir, con total sinceridad que, según mi criterio, los resultados van a ser a la inversa de lo que se viene manifestando. Si bien es cierto que ésta es una hora dramática en la vida del país, creo que con estas medidas no se van a solucionar los problemas.

No soy economista sino abogado, pero hablando con mis asesores, analizando el tema y estudiando la cuestión, he llegado a la conclusión de que la reducción del salario del personal de la administración pública y de lo que perciben los sufridos jubilados que hicieron su aporte correspondiente, etcétera, va a traer como consecuencia menor recaudación, menos consumo y, por lo tanto, mayor recesión.

Como luego voy a solicitar la inserción de la parte técnica de mi discurso, teniendo en cuenta la cantidad de oradores que hay anotados y la hora y el día en que estamos sesionando, por ahora quiero simplemente hacer estas manifestaciones.

Hace un rato el senador Verna dijo que cuando el ministro de Economía asumió el cargo, manifestó que en un mes —contado desde su asunción— iba a haber reactivación; y también hizo otra serie de manifestaciones, que después no se cumplieron. Han pasado varios meses de la asunción del ministro y estamos en el peor de los momentos. Hemos hablado, conversado y evaluado este tema, incluso con él mismo, pero a veces no se quieren entender las razones ajenas.

Sin lugar a dudas que todo esto coincide, en gran medida, con lo que vine diciendo en los otros ajustes que se hicieron. Es decir que mi posición es totalmente coherente en este aspecto. No se trata de que la sostenga hoy por el hecho de que se haya enviado este proyecto sino que es lo que he venido diciendo a través del tiempo.

En este aspecto, tengo la tranquilidad espiritual y de conciencia de que, cuando tuve el honor de ser gobernador de la provincia, los jubilados tuvieron una gran mejora. También se sancionó la estabilidad de los empleados públicos, porque antes la administración era el botín del partido triunfador. Es decir que coincido en este aspecto.

Por eso, sostengo que no puede admitirse que los menos pudientes sean nuevamente los castigados en esta circunstancia. Pero sé también de las tremendas dificultades y problemas derivados de la evaluación del riesgo país y de la situación por la que estamos atravesando que es —como dije antes— dramática e histórica.

De ninguna manera deseo ser visto como alguien que pone obstáculos en esta tarea. En definitiva, voy a prestar mi apoyo y dar mi voto positivo en general a este proyecto, a efectos de que mañana no se adjudiquen a mi posición personal los males o los nuevos ajustes que se puedan producir.

Quiero quedarme tranquilo con mi conciencia; por eso, reitero, voy a apoyar en general este proyecto, formulando mis disidencias en el tratamiento en particular. Oportunamente, voy a señalar mis observaciones, haciendo hincapié especialmente en lo relativo a los jubilados y a los empleados de la administración pública.

Dada la extensión de los aspectos eminentemente técnicos de mi discurso, voy a solicitar su inserción en el Diario de Sesiones para acelerar el curso de esta sesión.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por la Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: una vez más esta Cámara se reúne presionada por las urgencias y la sobreactuación de la colisión gobernante; perdón, de la coalición gobernante. Aunque a esta altura es una colisión de partidos.

Esta coalición transmite al país mayor inseguridad, nerviosismo e inestabilidad institucional al convocar al Congreso en días no convencionales, con discursos apocalípticos a los cuales, desde hace casi dos años, se nos tiene acostumbrados a este Parlamento y al pueblo argentino.

Nuevamente se nos convoca con palabras rimbombantes y efectistas, advirtiéndonos que estamos al borde del abismo y de la cesación de pagos, por lo cual debemos convalidar el Pacto por la Independencia.

Qué dirían nuestros próceres de Tucumán si advirtieran que hoy, al cabo de dos siglos de aquella declaración, nuestra independencia pasa por bajar los sueldos a los jubilados y a los empleados públicos estatales, o por los impuestazos. ¡Qué curioso concepto de independencia tiene este gobierno!

Pero, además de injusto, ilegal, arbitrario e inconstitucional, este proyecto que estamos por tratar representa un gravísimo y recurrente error de diagnóstico de la situación económica del país y de los caminos que necesitamos para salir de esta situación.

En estos últimos días nos hemos preguntado los legisladores cuál es la razón que lleva al Poder Ejecutivo a solicitar al Congreso la sanción de este proyecto de ley si el decreto que establece la reducción de salarios ya se encuentra vigente, tal como lo sostuvo ayer el señor ministro de Economía.

Es precisamente para darle algún viso de legalidad a la barbaridad jurídica y a esta afrenta al estado de derecho que significa el decreto 896. Luego voy a pasar a explicarlo.

Además, esto representa un error de diagnóstico en materia económica, porque una vez más, en poco menos de dos años, se apela al impuestazo, a la reducción del ingreso popular y al achicamiento de la economía para combatir lo que ellos llaman el “déficit fiscal”. Como si el déficit fiscal se combatiera con recesión y caída de la actividad económica.

Hoy he repasado, a través de Internet, lo que dicen los mercados —o los llamados mercados— en el diario “La Prensa”. Se trata del Bank of America. A eso me imagino que se refiere Cavallo cuando habla de los mercados.

“La política de déficit cero del gobierno puede haber llegado demasiado tarde para resolver los problemas en la Argentina”, aseguró el Bank of America.

Sigue diciendo: “Mantenemos nuestra recomendación del 29 de junio último de evitar la exposición a las inversiones en los mercados latinoamericanos, porque le asignamos un alto riesgo a la posibilidad de que la Argentina abandone la convertibilidad y entre en la cesación de pagos”.

Más adelante, el artículo señala: “Una recuperación de la economía argentina es rehén del pesimismo del mercado. Y la ausencia del crecimiento (no el gasto público) es lo que genera la poca confiabilidad de la economía argentina”.

Luego agrega: "Si la economía argentina es incapaz de recuperarse, los consumidores continuarán perdiendo confianza y será difícil detener la incipiente corrida de los depósitos".

Y agrega: "Más allá de que la política de déficit cero del gobierno es encomiable, puede haber llegado demasiado tarde para reinstaurar la confianza. Y en este momento (escúchemos bien, presidente) una mayor austeridad fiscal es como cortar las posibilidades de crecimiento en el corto plazo".

Esto es lo que piensan los mercados de este proyecto de ley que estamos por votar. Este "déficit cero" —llamado así por el gobierno— significa cortar las posibilidades de crecimiento en el corto plazo; es aumentar la falta de credibilidad de la economía argentina. Porque el problema de la economía argentina es la caída en la actividad económica, es la profunda recesión, es la falta de crecimiento; no es el problema del gasto. En todo caso, el equilibrio fiscal lo lograremos con un mayor crecimiento. La caída en el ingreso popular y en el consumo popular, obviamente, traerá aparejada la profundización de la recesión y la caída de la recaudación, profundizando así los problemas de déficit.

También leímos en los diarios de ayer o anteayer las propias previsiones del equipo económico que, a partir de la confesión del secretario de Ingresos Públicos en cuanto a que este mes cayó un 6 por ciento la recaudación, se preguntan si es razonable mantener en un 13 por ciento los recortes o si no será posible llevarlos más allá de ese porcentaje en virtud de la caída de la recaudación.

Estoy seguro de que dentro de treinta días estarán anunciando el aumento en los porcentajes de recorte a los haberes de los jubilados y de los empleados estatales. Hoy mismo ya lo están confesando; hoy mismo es materia de discusión en el gabinete económico y, si no lo anuncian, seguramente es para no trabar la sanción de este proyecto de ley.

No tiene retorno el camino elegido por el gobierno. Nos está llevando progresivamente a la más absoluta inestabilidad; no solamente a la imprevisibilidad en materia económica, sino a la inestabilidad institucional. No en vano el Parlamento está reunido un domingo. Las políticas y las actitudes del gobierno son las que generan la desconfianza, señor presidente.

Los peronistas somos consecuentes con lo que venimos realizando en materia del régimen

salarial de los jubilados y de los empleados del sector público, aun desde la gestión de nuestro gobierno, donde hubo un solo intento de reducción salarial. Me refiero al decreto 290 que establecía una rebaja del 5 por ciento en los salarios de los empleados estatales que ganaban más de dos mil pesos. Sin embargo, este Congreso derogó ese decreto transitorio durante el gobierno del presidente Menem.

El año pasado, en este Senado, los peronistas impulsamos la derogación del decreto 430 que establecía la reducción del 12 por ciento en los salarios estatales y del decreto 438 que establecía una reducción en las jubilaciones.

Hoy, nuevamente, estamos aquí para decir que éste no es el camino, que las políticas del gobierno nos llevan al borde del abismo. Somos la oposición y, no obstante, acudimos ante la convocatoria, más allá de fechas u horarios no convencionales; lo hacemos para debatir y plantear seriamente que es necesario corregir las políticas y los caminos que eligió este gobierno.

A las provincias nuevamente "se nos pone la zanahoria" y se nos dice que el dinero destinado a sueldos, al funcionamiento de los hospitales y escuelas, está condicionado a la aprobación de impuestazos o bajas salariales. Hace dos años que nos vienen diciendo lo mismo y que la Nación no cumple con sus compromisos. Es como si los riojanos, los pampeanos, los misioneros o las provincias acá representadas, fuésemos ingenuos; nos dicen "les vamos a mandar el dinero que nos piden sus gobiernos, pero a cambio de sacarle la plata a los jubilados y empleados públicos nacionales de sus provincias".

¿Cuál es el negocio? Esta reducción representa para la provincia de La Rioja un millón de pesos por mes, más allá de la injusticia que implica para los ingresos de miles de familias riojanas. ¿Cuál es el negocio para La Rioja? ¿Le sacan el dinero a su pueblo y se lo transfieren al Estado!

Repito: hace dos años que los sucesivos ministros de Economía de este gobierno vienen aplicando las mismas políticas, con idéntico discurso, y cada día es más seria la situación del país y de las provincias argentinas. Hoy los peronistas no podemos votar este proyecto de ley.

Recientemente, hablaba de la ilegalidad de esta norma y de que este Congreso le está brin-

dando al ministro de Economía Domingo Cavallo mucho más de lo que pide. Por ejemplo, a través del decreto 896, se establece el carácter aleatorio del salario de los trabajadores estatales; el ingreso de los jubilados tiene carácter transitorio. Esto es a efectos de ese recorte. Pero por este proyecto de ley estamos modificando el artículo 34 de la ley 24.156 y le damos carácter permanente al acto de disposición ilegal que el Estado va a hacer de los sueldos de los empleados estatales y de los ingresos de los jubilados.

¿Cómo se va a reactivar la economía y qué grado de justicia y hasta de moralidad —diría yo— tiene este proyecto? No solamente recortan los haberes a los empleados estatales y a los jubilados sino que les impiden el más mínimo derecho a planificar sus ingresos y sus gastos. Por lo menos ahora con lo poco que ganan pueden pagar la factura de la luz, pagar la factura del agua, destinar una parte para el mercado y otro tanto para los medicamentos que necesitan.

Pero, a partir de la sanción de este proyecto de ley, además de quitarles una parte de su salario —de su ingreso—, se les impedirá planificar sus gastos, porque no sabrán cuánto van a recibir a fin de mes, ya que —reitero— la reducción no es siquiera del 13 por ciento. Aclaro que por este proyecto de ley le damos carácter permanente y no se fija ni un tope ni un piso. Los salarios se fijarán según el nivel de la recaudación. Como decía recién, como este mes cayó la recaudación un 6 por ciento, a fin de mes el ministro de Economía estará autorizado a elevar el recorte al 20 por ciento.

¿Quién le va a dar un crédito a un empleado público o a un jubilado que no sabe cuánto cobrará a fin de mes? O sea que esto afecta también al funcionamiento del crédito en la Argentina.

El proyecto que estamos por votar es enormemente injusto e ilegal y, sintéticamente, voy a mencionar cuáles son mis objeciones.

Recién, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el ingeniero Verna, marcó algunas cuestiones técnicas que seguramente van a generar problemas que no se tiene previsto cómo se solucionarán.

Por ejemplo, quiero citar el caso del artículo 1º. Es cierto que técnicamente es correcto el cambio en la percepción del IVA, pero en el

paso de un sistema al otro existe un "bache" de 400 millones de pesos. ¿Cómo va a hacer el Estado para hacer frente a ese "bache"?

Sr. Altuna. — Solicito una interrupción, señor presidente.

Sr. Presidente (Menem). — ¿Autoriza la interrupción, señor senador?

Sr. Yoma. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Menem). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador por Chubut.

Sr. Altuna. — Señor presidente: en parte es cierto lo que dice el señor senador por La Rioja, pero nosotros no podemos estimar de ninguna manera que en principio ese "bache" será de 400 millones. Porque lo que también va a ocurrir ahora es que los supermercados, que estaban acostumbrados a comprar muchísima mercadería —y todos sabemos que al otro día la vendían prácticamente al contado—, le estaban pagando a los proveedores a cuatro, cinco y seis meses, y se tomaban el crédito del IVA. Eso se termina, porque si usted lee bien el primer artículo del proyecto de ley se dará cuenta que dice que debemos arreglar tanto los débitos como los créditos.

Técnicamente, esto se arregla con una cuenta puente —IVA en suspenso— en el sistema contable; no ofrece ningún tipo de dificultades. Se va a contraer el compromiso tanto por el que lo cobra como por el que lo paga, pero éste último —es decir el comprador— se va a tomar el crédito del IVA cuando realmente lo pague, y el vendedor recién lo va a pagar cuando lo perciba.

Así que, no digo que esto vaya a ser positivo en el transcurso del primero o segundo mes, pero en más de noventa días esta situación, que además restablece un principio de equidad financiera y de justicia, va a poner las cosas en su lugar.

Creo que en noventa días se normalizará la situación y después seguirá el curso de la reactivación o no de la economía. No creo que pueda influir tanto como acaba de expresar el señor senador.

Sr. Presidente (Menem). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. — Respetuosamente, señor senador, le sugiero que llame por teléfono al señor ministro de Economía y le transmita su confianza, porque todas las consultas que hicimos mar-

can que no tiene la más mínima idea de cómo va a enfrentar el "bache" que se va a crear en la recaudación.

El artículo 3º del proyecto que estamos tratando se establece otro impuesto más. Se generaliza el llamado "impuesto a los débitos y créditos bancarios", pero esa generalización significa otro impuesto más. Es otra detracción de dinero del circuito económico que va a las finanzas del Estado y profundiza la recesión.

El artículo 3º *in fine* es gravísimo, y por eso Cavallo vino a pedir la sanción de este proyecto de ley; porque el decreto no resistiría el análisis de un juez de faltas, y mucho menos lo hará este proyecto.

Estamos dando una delegación legislativa, otra más, además de los "superpoderes" de los cuales, como bien dijo el senador Verna, hicieron uso y abuso. Estamos dando otros "superpoderes" más, otra delegación legislativa sin plazo, no como marca la Constitución, y sin base de la delegación, como obliga el artículo 7º. No va a haber juez que no declare inconstitucional esta norma.

El artículo 3º del proyecto establece en uno de sus párrafos que se faculta al Poder Ejecutivo nacional a definir el alcance definitivo de los hechos gravados en los incisos precedentes, como así también para crear un régimen especial de determinación para las entidades financieras aludidas. Y desarrolla toda la delegación legislativa. No hay plazos ni base de la delegación. Seguimos otorgando facultades extraordinarias al ministro Cavallo. Seguimos dando ametralladoras a los monos.

Reitero: esto es ilegal. Por lo menos se debe establecer un plazo en este artículo.

Ya me referí recién al artículo 10, por el que se establece la modificación del artículo 34 de la ley 24.156. Las reducciones salariales tienen que ser transitorias y para el futuro. Así lo ha dicho la Corte en el caso "Guida". Si bien es cierto que estas reducciones se aplicarán en los próximos sueldos, en los hechos funcionan para haberes que ya debieron haberse percibido. Entonces, se va a establecer la reducción sobre días trabajados, es decir que funciona para atrás. A fin de mes se dirá al empleado cuánto se le va a pagar por los días que ya trabajó. La reducción es retroactiva y es ilegal, además de injusta.

Decíamos que esta norma transforma la remuneración en aleatoria. En el mismo caso

"Guida", la Corte estableció que cuando hay reducciones en la remuneración de un trabajador se le debe reconocer el derecho a recibir una compensación, ya sea por la vía de menor cantidad de horas de trabajo o por la de otro tipo de modificaciones o beneficios en su jornada laboral a efectos de compensar, precisamente, la reducción salarial. Acá no hay ningún tipo de compensación para el trabajador, mucho menos para el jubilado. La reducción debe ser transitoria y para el futuro, pero aquí no es ni una cosa ni la otra.

Reitero, señor presidente, ¿cómo va a poder planificar un trabajador o un jubilado su economía familiar? No sabe cuánto va a percibir a fin de mes. Además, no es por esta emergencia o por esta urgencia. Es para siempre, porque se lo incluye en la Ley de Administración Financiera del Estado. Por lo menos lo hubiéramos dejado en el decreto de necesidad y urgencia 896 sin incluirlo en una cláusula permanente de una ley.

Esto es lo grave, señor presidente: si este Congreso aprueba este proyecto de ley, se estaría generando una enorme injusticia, absolutamente ilegal, y ya cristalizada en una modificación legislativa. No es una norma de emergencia la que estamos votando; es una norma definitiva y permanente.

Sr. Altuna. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Presidente (Menem). — Le solicitan otra interrupción, señor senador.

Sr. Yoma. — Cómo no.

Sr. Presidente (Menem). — La Presidencia solicita a los señores senadores se sirvan administrar bien las interrupciones porque hay muchísimos oradores y se va a dar el tiempo justo a cada uno.

Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Altuna.

Sr. Altuna. — Sí, señor presidente. Voy a tratar de ser absolutamente breve.

Lo que dice el señor Yoma no se compadece con el artículo 34 actual. Es decir, lo que se está proponiendo a través de esta modificación del artículo es respetar la realidad económica.

Los presupuestos se hacen, son presupuestos. Con respecto a los créditos de las distintas partidas, lo que establece este proyecto de ley, y me parece de absoluta higiene administrativa, es que en los presupuestos no se puede com-

prometer más de los recursos previstos. Entonces, cuando el poder administrador se da cuenta de que los recursos no van a alcanzar para cubrir los montos de los créditos, las jurisdicciones —a través de sus órganos de contralor— tienen la responsabilidad automática de bajar y de ajustar todos los presupuestos, todos los créditos que se habían dado a todas las partidas, incluidos sueldos, jubilaciones, asignaciones. Todo se baja en la misma proporción.

Nosotros estamos diciendo hoy que respetamos esa situación, pero cuando los ahorros y el incremento por los nuevos recursos lo posibiliten, la primera atención va a ser restablecer los salarios que fueron reducidos anteriormente. Pero esto lo dice la actual ley, con esto no innovamos absolutamente nada. De modo que yo creo que debemos ajustarnos a la realidad actual.

Sr. Presidente (Menem). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. — Señor senador: con todo respeto, no subestime mi inteligencia ni la de sus pares.

Sr. Altuna. — No, no.

Sr. Yoma. — El trabajador o el jubilado tienen derecho a saber cuánto van a ganar a fin de mes. Por esta modificación se transforma en incierta la remuneración que van a recibir, porque eso va a depender del nivel de recaudación. Y como la recaudación viene en caída desde hace dos años a esta parte, y se va a profundizar con esta medida, también aumentará el recorte de los salarios de los jubilados y de los empleados públicos. Ahora estamos autorizándolo a través de la ley 24.156, como norma permanente. Esta es la enorme incertidumbre que se le va a generar a cientos de miles de argentinos que, reitero, con su magro salario no van a poder planificar su economía cotidiana.

Señor presidente: voy a tratar de ir finalizando.

¡Hay que ser bárbaros! En la parte final del artículo 10 se están abrogando derechos constitucionales elementales. ¿Cómo puede ser que el Congreso sancione normas de estas características, que violan garantías constitucionales expresas, que violentan el estado de derecho?

El artículo 10 dice en el último párrafo: "La presente norma es de orden público y modifica, en lo pertinente, toda norma legal, reglamentaria o convencional que se le oponga y no se

podrá alegar la existencia de derechos irrevocablemente adquiridos en su contra".

Resulta que el derecho constitucional a percibir una remuneración no podrá ser alegado por ningún ciudadano que accione ante los tribunales. Se le impide lo más elemental que es ir al órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos y garantías constitucionales. Por una ley del Congreso le estamos diciendo que no puede invocar el artículo 14 o el 14 bis de la Constitución Nacional contra esta norma.

El artículo 14 de la sanción venida de Diputados es lamentable. Se modifica el Código de Procedimientos. Dice que los jueces no podrán decretar ninguna medida cautelar. ¿Qué juez va a tolerar esta norma? ¿Qué juez va a tolerar esta cláusula? Se les prohíbe por ley del Congreso ejercer la magistratura, dictar medidas cautelares. Es como si el Poder Ejecutivo sancionara un decreto prohibiéndole al Parlamento sancionar una ley. ¿Cómo podemos decirle a un juez que se le prohíbe dictar medidas cautelares? ¿Cómo le podemos decir a un ciudadano que no puede ir en amparo frente a una decisión del poder administrador que afecta partidas presupuestarias? ¿Cómo se puede plasmar esto en una norma legal y aceptar que este Congreso la esté tratando? ¿Cómo se puede incluso haber recibido en Mesa de Entradas una norma de estas características?

Señor presidente: seguramente para el debate en particular vamos a tratar de impulsar algunas modificaciones. Pero el peronismo no puede votar favorablemente este proyecto de ley tal como está planteado, por ilegal, injusto y bárbaramente inconstitucional.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Formosa, del bloque de la Unión Cívica Radical o Alianza, señor senador Maglietti.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: todos apoyan el principio de lograr el déficit cero. Pero, evidentemente, ese principio se puede lograr a través de medidas totalmente distintas y opuestas a las planteadas en el proyecto de ley en tratamiento.

Interpreto que puede haber dos caminos para lograr el déficit cero: El primero es combatir la evasión. Se trata de algo que han proclamado tanto el gobierno anterior como éste, pero nada se ha hecho hasta ahora para enfrentarla. La evasión y la corrupción en el país siguen intactas.

tas. En ese sentido, conocemos la calificación que ha dado al respecto un organismo internacional a la Argentina: en el último periodo del gobierno anterior era de 2,42 puntos y, en este — nuestro gobierno— es de 3,50 puntos. Es decir, seguimos aplazados, sin que nada haya mejorado mayormente la situación. Asimismo, también podríamos lograr el déficit cero en el marco de este primer supuesto gravando a los sectores privilegiados.

Pero el gobierno ha optado por otro camino. Es decir, por el peor, sacrificando al pueblo y privilegiando a los privilegiados que hoy tenemos en el país. O sea, al establishment financiero.

¿Cuáles son las consecuencias que está sufriendo el país y cuáles van a ser las consecuencias en el futuro? Es indudable, por más que se afirme lo contrario, que la recesión se va a acentuar. Es indudable que va a haber más pobreza, más desocupación y más concentración de la riqueza.

Una encuesta del INDEC, que se publicó casualmente hoy, señala que actualmente los ricos —que son el 10% de la población de la Argentina— ganan 26,4 veces más que el sector de los pobres. Esa proporción, hace diez años atrás, era de doce a uno; ahora es de veintiséis a uno. Esta diferencia en los ingresos ha distorsionado totalmente la situación en que se encuentran los argentinos.

¿A qué nos llevarán estas medidas que se proponen como la panacea y que creo que producirán el efecto contrario al deseado? Nos llevarán a nuevos ajustes, que serán cada vez más intolerables, y seguramente vendrá luego alguna reacción popular para cambiar este modelo que, nos guste o no, está representado por este equipo económico. Este equipo es un fiel exponente del sector financiero y de un neoliberalismo que ha sido calificado, por numerosos autores, como salvaje. Además, solamente se aplica en los países subdesarrollados, porque en las naciones desarrolladas este tipo de globalización y de neoliberalismo no tienen vigencia. En ellas los capitales tienen frenos, existen leyes al respecto, actúa una justicia independiente y se defienden los intereses del pueblo, los mercados internos y la justicia social. Eso no sucede en los países subdesarrollados, donde el capitalismo globalizado utiliza todo su poder para imponer sus apetencias, obtener privilegios y, lógicamente, perjudicar a los pueblos latinoamericanos.

Desde el inicio de este gobierno, y ante el primer ajuste planteado por el ministro de Economía de entonces, hice una serie de planteos dentro de nuestro bloque, porque adoptar esas medidas era ir en contra de lo que habíamos proclamado en la "Carta a los Argentinos".

Sostuve en aquellos momentos que las medidas traerían más recesión y que, en lugar de mejorar, la situación del país empeoraría gradualmente. Desgraciadamente, los vaticinios hechos en el seno del bloque, y que por disciplina partidaria nunca salieron de ese recinto, se fueron cumpliendo indefectiblemente.

En consonancia con lo que sostenía, presenté numerosos proyectos por los que se gravaba con impuestos a distintos sectores que, tanto el anterior gobierno como el actual, jamás quisieron imponer, so pretexto de que los sectores financieros crearían gravísimos problemas y las inversiones huirían, trayendo muy serias consecuencias. Pero la declamación siempre fue la misma: que no se graven los intereses financieros, como bien se dijo en este recinto, y que las medidas de ajuste recaigan sobre el pueblo argentino para, cada vez más, sostener a este voraz sector que, cada día que pasa, se queda con un pedazo más grande de la riqueza argentina, en contraposición con el pueblo que, frente al paso del tiempo, recibe menos, aumentando la desocupación, la pobreza y la miseria.

Señor presidente: el primer ajuste se aplicó y estuvo encaminado a la clase media, al imponer el pago del impuesto a las ganancias a los que ganaban más de 1.500 pesos. Luego siguieron los restantes ajustes porque, lógicamente, no se alcanzaron los resultados esperados. Sin embargo, no se iba al fondo de la cuestión y nuestro gobierno no comprendió que el error estuvo en recurrir a economistas que responden al sector financiero. Tanto el doctor Machinea como el doctor López Murphy, que se dicen radicales, demostraron con sus políticas de ajuste que sus ideas estuvieron al servicio del neoliberalismo y del establishment financiero; ideas que nunca coincidieron con las del radicalismo. Pero eso no fue todo, porque llegamos a algo que los argentinos que militamos en la Alianza jamás hubiéramos creído que íbamos a hacer: se recurrió al "salvador" de la Patria, al actual ministro de Economía.

El nos hizo creer, y seguramente también lo creyeron los principales dirigentes de la Alianza

—incluso un vicepresidente de la República lo solicitaba para el cargo de ministro de Economía—, que aplicaría un programa de reactivación. Pero nos engañó. Había logrado ponerse la piel de cordero en la apariencia de que estaba al servicio de la producción. Así es como muchos dirigentes de la Alianza le creyeron y se lo nombró ministro, con la esperanza de que sacaría al país adelante en poco tiempo y tomaría las medidas adecuadas para revertir la situación. Pero ahora se sacó el antifaz y ha implementado este ajustazo, cuyas consecuencias serán pagadas por todo el país.

Así, el modelo neoliberal, que tanto criticamos durante la gestión del gobierno anterior, ahora es el que se aplica con la más absoluta intensidad.

Nuestro gobierno, en lugar de rodearse de los dirigentes del Frepaso, de la Unión Cívica Radical y de los sectores del trabajo y de la producción —tanto del campo como de la industria—, para enfrentar al voraz sector financiero adoptó, a través de Domingo Cavallo y en forma definitiva, el modelo neoliberal que está empobreciendo y que empobrecerá todavía más a los argentinos.

Ese modelo que destruyó al aparato productivo, que se apoderó de nuestras empresas, que vació al Estado, que trajo desocupación y miseria, y destruyó a las economías regionales, es el que necesitamos cambiar si queremos una Argentina rica. Es indispensable cambiarlo por un modelo productivo. No podemos seguir apañando la usura financiera que está hundiendo al país.

Nuestro gobierno no está reaccionando. Y, desgraciadamente, las consecuencias las vamos a pagar nosotros, porque el país cada día está más hundido y sometido a esos intereses.

Y la afirmación de que no tenemos otra solución es la mentira más falaz que he escuchado. Existen otras soluciones. Tenemos soluciones y recursos para salir adelante sin necesidad de descontar los sueldos, las jubilaciones, las pensiones y las asignaciones familiares que, como bien se dijo aquí, son intocables.

Tocar esas retribuciones es absolutamente inconstitucional. Estamos destruyendo toda la pirámide jurídica del país y entrando en un sistema autoritario en donde la democracia se desnaturaliza porque no se respeta la Constitución.

He propuesto, y así lo sigo sosteniendo, que hay cuatro maneras de solucionar los proble-

mas de nuestro país sin atacar al sector más pobre de la economía argentina, que es el de los empleados y los jubilados.

La primera de ellas, es restituir al Estado los aportes patronales. Eso ya lo impulsó la Cámara de Diputados y, como hemos visto, contó con consenso, pese a que nos corrían con el "cuco" de que dicha medida era imposible.

Ahora falta restituir los aportes patronales, tal como lo he propuesto en un artículo, en virtud de lo cual el Estado tendría los recursos necesarios. No entiendo por qué aquí no se apoya una medida de esta naturaleza, que permitirá no sólo solucionar el problema del déficit, sino también contar con fondos para planes de reactivación.

También se puede solucionar el problema combatiendo la evasión de las grandes empresas y de la Aduana. Respecto de la evasión en este organismo, mucho declamó el gobierno anterior, y no hizo nada.

Nuestro gobierno también declamó mucho y tampoco hizo nada, porque los grandes evasores —que son los bancos, las financieras, las petroleras y las empresas privatizadas— siguen evadiendo con absoluta impunidad, porque en el gobierno están sus cómplices apañando esas evasiones. Por eso no se va tomar ninguna medida al respecto.

Hay que combatir la corrupción y el despilfarro, pero no con frases grandilocuentes que nunca se cumplen; hay que combatirlos con honestidad, seriedad y responsabilidad.

Hemos cometido un gran despilfarro, tanto en el orden nacional como provincial. Es por eso que hay que hacer ajustes para terminar, por ejemplo, con las jubilaciones "truchas", los empleados fantasmas, los gastos improductivos y las inversiones que no son reales.

En ese sentido, señor presidente, lamento en el alma tener que decir esto porque soy radical desde que cumplí los dieciocho años, y lo seguiré siendo durante toda mi vida. Siempre he creído en los principios del radicalismo. Hoy he decidido hacer este discurso porque, a esta altura de mi vida, mientras pueda seguir luchando, no voy a claudicar del radicalismo, no voy a claudicar de nuestros principios, ni a entregar el país a los intereses financieros. Voy a morir en esta banca si es necesario. Y, si es necesario, que me pidan la renuncia; en ese caso, voy a renunciar antes que avalar cualquiera de estas cosas.

Desde 1994 hasta 2001 el país ha sufrido las consecuencias de la desfinanciación del nefasto plan Cavallo-Menem... y discúlpennos si tengo que hacer esta referencia al gobierno anterior, pero es la absoluta realidad... se implementaron los recortes a los aportes patronales, así como también se crearon las AFJP. Y desde 1994 hasta 2001, el Estado dejó de recaudar en materia de aportes patronales 24.157 millones; en cuanto a las AFJP, la pérdida de la recaudación fue de 27.185 millones. Es decir que el Estado se desfinanció en 51.315 millones mediante deudas contraídas. Si no hubiéramos hecho esto a través del señor Cavallo, hoy el país, en lugar de deber 150 mil millones, estaría debiendo 99 mil millones, con lo cual nuestra situación sería completamente distinta.

Ese desfinanciamiento, señor presidente, es el que nos llevó a esta crítica situación. Implica el 33 por ciento de la deuda externa. Sin embargo, a pesar de que nos dijeron que era imposible reponer los aportes patronales, vimos que sí lo fue, porque la Cámara de Diputados los repuso y todos estuvimos de acuerdo. Y ahora también estamos de acuerdo en apoyarlos. Entonces, ahora necesitamos recuperar los aportes que se entregaron a las AFJP. Invito a todos los señores senadores a que logremos ese objetivo. De esa manera, podríamos encontrar, por lo menos por ahora, una solución rápida e inmediata a todos los problemas sin hacer ningún recorte a los empleados, a los jubilados y a los pensionados.

Señor presidente: lo que propongo en el proyecto que obra en Secretaría es tomar los recursos de las AFJP, emitiendo un bono a diez años con el interés de la tasa libor y, al mismo tiempo, no permitiéndoles a las AFJP que cobren el 30 por ciento de comisión. Es una barbaridad que se les permita hacer esto, porque eso sí es esquilmar los recursos de los argentinos que están aportando para su futura jubilación.

Entonces, si aplicamos lo que yo propongo en esta sesión y declaramos la emergencia con una ley, este sistema no puede ser modificado sino únicamente por otra ley. De esa manera, el Estado tendrá un ingreso, durante estos seis meses, de 2.200 millones de pesos; mientras que con el recorte de las pensiones y jubilaciones solamente recaudará unos 700 millones. Quiere decir que todavía nos quedarían 1.500 millones de pesos para planes de reactivación económica.

Ahora, pregunto a los señores senadores, ¿por qué nadie habla de este tema? Hace dos o tres años que venimos diciendo que por este camino puede pasar la solución. Pero no somos capaces de votar algo para hacer lo necesario a fin de que sea realidad. Y no es un imposible. Según tengo entendido, lo aplicaron los chilenos con excelente resultado. ¿Por qué, entonces, no nos juntamos hoy, apoyamos esta idea, y logramos solucionar el problema sin recortar los sueldos de los argentinos?

Así, evitaremos la recesión y se podrá, al mismo tiempo, aplicar un programa de reactivación porque, de lo contrario, qué va a ocurrir con los descuentos que pretende aplicarse a jubilados y pensionados, como bien se dijo en este recinto.

La inseguridad va a reinar en todos lados. Nadie va a saber, en definitiva, si se podrán otorgar créditos a los empleados. ¿Cuántos van a dejar de pagar las cuotas de sus créditos hipotecarios? ¿Cuántos van a perder sus casas? ¿Cuántos van a encontrarse en la situación de perder su vehículo? ¿Cuántas personas se van a ver damnificadas? ¿Y cuántos pobres jubilados tal vez no puedan comer o dar de comer a sus hijos, porque hoy resulta que ayudan a sus hijos que están desocupados?

¿Cuánto daño es capaz de hacer este ministro de Economía que casi destruye el país en el gobierno anterior? Ahora lo volvimos a traer creyendo que era un mago y nos va a volver a destruir; y lo voy a demostrar con algunos ejemplos.

En su momento, los bonos de la deuda argentina tenían una cotización del 18 por ciento, y con 5.688 millones de pesos estábamos en condiciones de recuperar nuestra deuda externa. Sin embargo, el señor Cavallo, Plan Brady mediante, renegoció la deuda por 31.600 millones de pesos y allí el país perdió 25.912 millones de pesos.

Quiere decir que gracias a este señor economista el país viene perdiendo los siguientes importes: 51.342 millones de pesos por reducción de aportes patronales, 27.185 millones de pesos vinculados con los aportes a las AFJP y 25.912 millones de pesos por la renegociación del Plan Brady, es decir que el país perdió alrededor de 77.000 millones de pesos y, por lo tanto, tuvo que recurrir al endeudamiento para cubrir esa suma.

Si hoy no se hubieran cometido esos hechos desgraciados el país, que debe 150 mil millones de pesos, estaría debiendo nada más que 72 mil millones. Esto quiere decir que la Argentina no estaría hoy en crisis; al contrario, estaríamos floreciendo y podríamos tener la posibilidad de lograr la reactivación, porque este país, con 72 mil millones de pesos de deuda externa, no se vería afectado de la manera en que actualmente está.

Entonces, ¿quién fue el autor del endeudamiento argentino? Nuestro actual ministro de Economía, quien ahora quiere poner la cincha al pueblo argentino para seguir privilegiando a los sectores financieros y continuar empobreciendo a nuestra gente.

Es indudable que el señor Cavallo, para mantener la convertibilidad con estas crisis, va a tener que ir de ajuste a más ajuste y de recesión a más recesión. A ello se suma el déficit estructural provocado por el pago de los intereses de la deuda, que alcanza los 11.200 millones de pesos este año y las remesas de utilidades de empresa privatizadas, que representan 6.000 millones de pesos. Además, debemos agregar también la amortización de la deuda, que este año representa 11.437 millones de pesos. En total, necesitamos 28.637 millones de pesos para refinanciar nuestra deuda. Como ustedes podrán apreciar, el estado en que se encuentran nuestras finanzas es realmente crítico.

Como conclusión, porque veo que mi tiempo se está agotando, quiero decir que soy un hombre de la Alianza, fundamentalmente del radicalismo, y lucharé siempre por los principios radicales. Respeto a todos los partidos políticos y, si alguna vez tuve que criticar a la oposición, lo hice porque creí que lo que decía era correcto. Pero hoy, desgraciadamente, estoy viviendo el peor día de mi vida como político, porque tuve que criticar a mi propio gobierno. Esto no es fácil.

Creo que es muy difícil, pero se impone la verdad. Y tengo que hacerlo, porque de otra manera estaría traicionando a mis hijos y a la Unión Cívica Radical; entonces, voy a mantenerme firme en esta banca sosteniendo esos principios, porque son sagrados para mí y para la historia del país. *(Aplausos.)*

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Mario A. Losada.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Sala.

Sr. Sala: — Señor presidente: después de una exposición como la que ha realizado el señor senador que me precedió en el uso de la palabra, es difícil hilvanar las ideas que quería exponer en esta oportunidad.

En primer lugar, voy a decir que mi costumbre siempre ha sido estar a la hora de la convocatoria de la sesión y honrar a la bandera argentina cuando el señor presidente, habilitando el quórum, da por abierta la sesión ordinaria correspondiente. Pero en esta oportunidad, atento a la decisión que prácticamente por unanimidad había tomado mi bloque el jueves de la semana pasada, día en el cual nos quedamos trabajando en el Congreso hasta última hora en los borradores del dictamen, sentí la obligación de trasladarme a mi provincia para compartir con mis vecinos la gravísima emergencia por la que están atravesando muchos chubutenses por el gran desastre climático ocurrido en aquella región, que me imagino que será de igual magnitud en otras provincias patagónicas.

Gracias a la acción de los hombres de la Fuerza Aérea Argentina, fue posible que en la tarde de hoy pudiera partir la aeronave del vuelo comercial que nos trajo a la Ciudad de Buenos Aires. Y llegué en el momento en que me hice presente en este recinto, cuando se estaba rindiendo homenaje a una gran persona que nos dejó en este mundo, pero que espero que encuentre en el otro la paz que tanto se merece por sus grandes condiciones.

Por supuesto que este fin de semana me tocó comprender muchos de los temas que, a veces en este cuerpo, queremos tratar y resolver en nuestros discursos. Yo, que no tenía la posibilidad de llevar respuesta alguna a los pobladores de mi provincia, que están padeciendo con muchísimo dolor la situación por la que atraviesan, los acompañé con mi presencia, los escuché y, en más de una oportunidad, tuve que hablar, porque en varias reuniones que mantuve en lugares de extrema pobreza, me pedían explicaciones por lo que iba a tratar el Senado acerca del famoso ajuste que los medios tanto estaban comentando. Imagínense mi situación.

Además, complementariamente con esa situación —y luego voy a tratar de relatar las explicaciones que di—, asistí al acto del 28 de julio, que para los chubutenses es una fecha

importante, porque en 1865 desembarcó la colonización galesa que trajo una nueva fuente de producción y de progreso en la provincia. Y, tanto los hombres del justicialismo como los de todas las corrientes políticas, votaron por unanimidad la restitución de un busto de la señora María Eva Duarte de Perón al mismo lugar del que fuera volteado en 1955 por manos de la incompreensión, de la intolerancia y de la subversión. Fue un acto emotivo, que conmovió a todos quienes bajo la nieve nos habíamos juntado en un cruce de avenidas en la maravillosa ciudad de Esquel, en mi provincia. Los oradores de todos los niveles sociales que hicieron uso de la palabra resaltaron la vocación de esa mujer, que hoy es parte del patrimonio de los argentinos, de los sudamericanos y de otros hombres del mundo, y destacaron su auténtica vocación de apoyo y de ayuda a los más necesitados.

Pero, simultáneamente, mientras me trasladaba de ciudad en ciudad, comprobaba la labor de los hombres de Gendarmería Nacional que, en cada operativo de apoyo a una familia o de rescate de un necesitado, arriesgaban su vida en las maniobras que realizaban con los humildes aparatos de transporte aéreo con que cuentan.

Entonces allí nació mi primer cuestionamiento. ¿Los trabajadores del Estado son todos iguales en la República Argentina? ¿Todos gozan de la misma situación para merecer similar sanción cuando el país reclama un sacrificio a los hombres que trabajan en la función pública? ¿Vive la misma situación un hombre del regimiento de Gendarmería o del Ejército Argentino que está en la frontera de mi provincia que otro que tiene un destino distinto? Hace unos años, como señal de progreso les pusieron zeppelines de gas para conectar la calefacción en lugares donde hoy no puede llegar ningún tipo de vehículo a fin de restituir lo que ya se consumieron y, por eso, están hachando la leña entre la nieve para seguir subsistiendo en esos puestos. ¿Estas personas son iguales a los empleados de cualquier repartición del Estado nacional —sean del Congreso, del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo—, en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Es lo mismo un hombre de las fuerzas armadas del edificio de ese comando en jefe que el que está en un destino en el interior del país, cualquiera sea la provincia? Por supuesto que mi

respuesta fue categórica: son diferentes, son hombres distintos, por lo menos mientras tienen ese destino que la fuerza les ha asignado.

Me pregunto si los profesores universitarios de la Universidad de Buenos Aires son iguales a los de las facultades del interior del país, en cuanto al soporte de las situaciones y las condiciones en que tienen que desenvolver sus actividades; o si los hombres del INTA, a quienes vi salvando con sus manos a los animales para que no perecieran debajo de la nieve, son iguales a los empleados públicos de la Capital Federal, para que los englobemos en una ley “de la justicia y de la equidad”, como le escuché decir al miembro informante. Y estoy seguro de que al señor senador miembro informante del oficialismo le debe haber costado una barbaridad dar el discurso de hoy porque sé de sus cualidades humanas.

Por eso, es muy difícil el tratamiento de esta iniciativa. La presión de las organizaciones financieras y los prestamistas —en nuestro pueblo les decimos usureros— hoy han implementado un mecanismo de lobby que se llama “consultoras”, que a diario establecen el riesgo país. Los pobres no tienen consultoras para medir a diario el índice de riesgo de pobreza y mortandad. Y entonces no los pueden escuchar para que el Congreso sesione un domingo y resuelva sus problemas de subsistencia, sus dificultades terminales, de vida o muerte, no de índice de utilidad o de rentabilidad.

Ninguno de los senadores, que sé que comparten lo que de mala forma estoy expresando, se resisten a buscar el equilibrio fiscal y el déficit cero; es más, quiero decir que éste es un grave error del anterior gobierno peronista, porque el equilibrio fiscal y el déficit cero deben buscarse en tiempos de crecimiento y no de recesión y depresión, porque las consecuencias que produce su instalación son muchísimo más gravosas. De manera que entiendo que ésta es una deuda que los peronistas asumimos, por lo menos quien habla; y lo quiero decir públicamente, porque es una deuda que tenemos con nuestros conciudadanos.

Para que nadie haga esfuerzos intelectuales, repito que ninguno de los aquí presentes se opone al equilibrio fiscal y al déficit cero sino todo lo contrario; entendemos que debemos propender a ello.

Pero me tocó explicarle esto a la gente. Imaginense la situación; pónganse el sábado en la piel de un senador nacional, con el bombardeo de los noticieros televisivos. Y me voy a referir a cómo veíamos desde el interior a todos los que fueron reporteados en Buenos Aires y, en especial, a algunas expresiones vertidas por el presidente de la Unión Cívica Radical.

Imaginense el bombardeo de los noticieros y las tapas de los periódicos de Buenos Aires que, de alguna forma, nos hacían conocer la situación en aquella región. En ese marco tuve que explicar esto a los ciudadanos que estaban en ese desequilibrio social, producto de esta catástrofe no deseada por persona alguna.

Entonces, apelando a la imaginación, les dije que esto era como mi familia, que lo que pide el presidente de la República es nada más y nada menos que lo que hacemos en nuestros hogares, que cuando tenemos un programa de gastos de 1.000 pesos por mes y, por alguna circunstancia de la vida los ingresos disminuyen, tenemos que tomar decisiones para poder equilibrar los gastos con los ingresos, porque no hay familia que subsista si las erogaciones diarias son mayores que los recursos.

Pero me pidieron permiso para hacerme una pregunta y me interrogaron acerca de si en mi familia me animaría a apagar el calefactor de la habitación de mi madre, de 82 años, para ahorrar y buscar el equilibrio familiar. Me preguntaron si en mi familia, en lugar de salir a comer afuera, tener reuniones con mis amigos y poder cambiar el vehículo en el cual me desplazo por un modelo mejor, me animaría a recortar el presupuesto de mi madre, jubilada de 82 años, para comprar sus remedios. Y me preguntaron si sabía que en la cordillera del Chubut un altísimo porcentaje de los habitantes viven de la jubilación de sus padres porque los hijos no tienen trabajo; y son hijos que ya tienen grupo familiar, con nietos de los jubilados. La verdad es que las oportunidades de explicación del plan se me hacían cada vez más complejas.

Entonces, ellos me decían que éste era un problema que terminaba con los gastos de la política, porque eso lo escuché en cuanto discurso por televisión quisieron brindarnos. Y el primero que protestó fue el ministro de Acción Social de la Nación, el señor Juan Pablo Cafiero, porque ante la crisis dijo: "Llegaron del Ministerio del Interior 1.700.000 pesos de ATN". En-

tonces, el ministro de gobierno de la provincia dijo que ese millón setecientos mil pesos lo habíamos tramitado antes y eran para tres comunas -Trelew, Comodoro y Rada Tilly-, intendencias encabezadas por dirigentes de la Unión Cívica Radical que tienen déficit en su presupuesto mensual. La gente no entendió esto, y el ministro tampoco. Por lo tanto, pienso si es cierta la convocatoria al ajuste, porque todos debemos achicar para salvar a la patria.

En julio este cuerpo rindió tres homenajes trascendentes a las memorias del general Juan Domingo Perón, de don Hipólito Yrigoyen y de María Eva Duarte de Perón. Yo escuché atentamente los discursos; silenciosamente, le presté atención al señor senador por el Chaco, aunque algunos hablaban, porque aprendí de un hombre tan talentoso como el doctor León las virtudes de ese gran prócer que él trataba homenajear y cuyos valores más fundamentales quería resaltar. ¿Qué decir del homenaje a la memoria del general Perón o de la síntesis en una resolución del homenaje a la memoria de Evita!

¿Es esta sanción de hoy coherente con esos homenajes? ¿O los homenajes del Senado son para cumplir con un acto académico? Porque homenaje es compromiso y compromiso es lealtad con los idearios de los hombres que resaltamos. (*Aplausos.*) Eso implica un homenaje para cualquier hombre de escasos conocimientos, que se emociona cuando otra persona habla con talento. Eso aconteció hoy con el discurso del senador Maglietti, quien al tener dificultades oratorias nos hizo emocionar a todos.

Aquí no se trata del partido al que pertenezcamos. Asumo totalmente la cuota de responsabilidad del peronismo en la situación a la que hemos llegado, sin ningún menoscabo de nuestras responsabilidades.

Finalmente, quiero manifestar que nuestra generación proviene de personas mayores que trataron de inculcarnos la cultura del trabajo. Mi papá, que ya falleció, era un jubilado. Mi mamá, que gracias a Dios vive, es jubilada. Y siempre me enseñaron que en la vida hay que producir para ganar el sustento de la familia, que detrás de este trayecto existe un sistema que nos contiene y que no es deshonorado vivir de la jubilación. ¿Cómo puedo hablar con mi madre hoy en día si como producto del déficit fiscal, de quines se gastaron la plata de la Argentina, tenemos que pedir a los jubilados no un ahorro sino que acepten la baja en sus ingresos?

¿Es un orgullo para la Argentina que el 70 por ciento de los jubilados ganen 300 pesos? ¿Es un orgullo que haya quienes ganen 500 pesos? Ese es un indicador de nuestra miseria y de las diferencias sociales que existen en este país entre quienes tienen concentrado el poder y los que pusieron el lomo para construir lo que hoy tenemos.

Por eso, al igual que el señor senador Verna, voy a rechazar este proyecto de ley y me voy a sumar a la ley correctiva que tiene que darle las herramientas pertinentes al señor presidente de la Nación que le permitan llegar al equilibrio fiscal y al déficit cero, pero sin acudir a estas medidas que seguramente van a producir los mayores desequilibrios que podamos imaginar.

Porque, ¿dónde residen las quitas que se van a hacer? En los números de las computadoras del Ministerio de Economía, pero esos son los haberes de los pueblos de cada uno de los que estamos sentados en este recinto, que van a ver disminuidos sus ingresos.

Y que con la disminución de sus ingresos van a disminuir su consumo. Esta disminución va a producir sus efectos en la disminución de ingresos de otros sectores que viven de ese consumo. De esta forma, aumentará el nivel de las dificultades derivadas de este plan que le saca a los más débiles y sigue defendiendo los privilegios de los más fuertes.

Anoche escuchaba atentamente en Esquel al señor presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, quien decía que el miércoles se podría haber sesionado y el peronismo no quiso hacerlo. Sostenía que estaba todo listo para sesionar y que el radicalismo estaba unido, con excepción de dos senadores que, por cuestiones ideológicas, iban a mantener otra posición. Estaba rodeado de esquelenses de todos los partidos políticos y decía el señor senador que compartía todas esas cuestiones ideológicas, pero que para él era decisivo la responsabilidad de ser un legislador oficialista y apoyar la solicitud del gobierno nacional para salir de la crisis.

Entonces, qué nos vienen a decir de los recursos para las próximas elecciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si votamos los discursos y después se hace cualquier cosa? No es una cuestión únicamente de la Unión Cívica Radical sino de la política; es un muy mal mensaje. Si mañana dijéramos que las elecciones de octubre no son obligatorias, votaría el 30 por

ciento de los ciudadanos argentinos, aquellos que están comprometidos con el ejercicio de la política. No iría a votar el ciudadano común y corriente.

Señor presidente: oportunamente pediré que la votación sea nominal porque hoy hay tres votos: afirmativo, negativo y ausente. El ausente se suma al afirmativo. Esa va a ser la lectura de la sociedad argentina; no engañamos más a nadie. No hagamos ingeniería para salir del paso. Hoy se verá qué Senado es el argentino; el que atiende los problemas de quienes representa o el que atiende las presiones internacionales.

Por eso digo que hoy hay tres votos, y de allí la importancia del voto nominal: afirmativo, negativo y ausente, como ocurrió en la Cámara de Diputados. Afuera están esperando el resultado de lo que hoy votemos. Esa es la razón del voto que adelanté y del pedido de votación nominal.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Moreau.

Sr. Moreau. — Señor presidente: en estos días seguramente a muchos senadores, a muchos dirigentes políticos, se les habrá acercado un jubilado para decirles que no voten la ley o no acompañen el decreto del Poder Ejecutivo. También se les habrá acercado algún agente de policía, de estos que están aquí, en la vereda, o algún empleado del Estado para decirnos lo mismo: no voten la ley porque voy a perder parte de mi salario. Pero también se nos habrá acercado un ahorrista y nos habrá dicho que votemos la ley porque tiene miedo por sus ahorros. O un inversionista importante que también, influenciado por sus inversiones o por este clima que se ha generado en la Argentina, nos habrá pedido que votemos favorablemente este proyecto.

En el medio de los que pedían una cosa y la otra, están los pequeños comerciantes, los pequeños industriales, los propietarios de las pequeñas y medianas empresas. Algunos de ellos, muy asustados por el terrorismo financiero de estos últimos días, se habrán plegado a los que creen que hay que aprobar este proyecto de ley y acompañar el decreto del gobierno para evitar el descalabro. Otros, quizá no tan asustados, con una actividad vinculada muy directamente con el consumo, nos deben haber pedido que no votemos favorablemente esta iniciativa, por tener dudas sobre ella o por considerar que va a

deprimir el consumo —en virtud de la baja de los salarios que promueve— y, probablemente, va a provocar la quiebra de su actividad. Hay para todos los gustos. Cada uno de nosotros habrá recibido un pedido o una expresión de dicha naturaleza.

Pero, en todos los casos, existe un denominador común: quienes sostenían una cosa y quienes afirmaban exactamente lo contrario, tenían miedo de perder algo. Esa la manifestación de la crisis.

Efectivamente, están todos en riesgo; están todos por perder algo. Unos están más cerca que otros, sencillamente, porque aprobar o no este proyecto no significa entrar o salir de la crisis. Ya estamos inmersos en ella y, en consecuencia, todos tienen miedo de perder algo.

Entonces, hay que afrontar esta realidad tal como es. Ya se ha dicho aquí que no es malo el principio teórico del déficit cero. ¿Quién no lo entiende desde la economía familiar o desde los libros de contabilidad? El problema es que no estamos escribiendo un manual de contabilidad; ni siquiera, con más pretensión, un manual de política económica, para explicar cómo funciona el déficit cero. Estamos actuando sobre una realidad política, económica y social simultáneamente, y esto no está escrito en muchos libros y, mucho menos, en los manuales de los profesores de contabilidad.

Hay que decir entonces que esta propuesta de déficit cero, como dijo el señor senador preopinante, llega tarde. Y es tardía porque llega en el escenario de una monumental deuda externa y en el marco de un monumental déficit fiscal.

Para expresarlo en términos que pueda entender cualquier persona: es como querer parar en seco a un avión que va a 1.500 kilómetros por hora. ¿Qué sucedería? Reventaría y morirían todos sus pasajeros.

Esto no significa que no adhiera al principio de la sana administración, que es algo que ahora se presenta como un descubrimiento: vivir con lo nuestro.

Si alguien hubiera planteado hace diez años atrás —como dijo Aldo Ferrer y está escrito en un libro— que había que vivir con lo nuestro, ¿saben qué le hubieran dicho los economistas liberales y los escribas que ahora reclaman esa conducta? Que estaba fuera del mundo; que era un anacrónico; que eso significaba cerrar las

fronteras de la Argentina y que, por el contrario, nosotros debíamos abrirnos al mundo, tomar créditos y endeudarnos.

Porque en aquella época, el negocio de los que ahora nos dicen que tenemos que vivir con lo nuestro era prestarnos y endeudarnos porque aún teníamos capacidad de pago y activos nacionales para vender y enajenar.

Repasemos los editoriales de hace veinte años de los grandes medios de expresión que representan esas ideologías y vamos a ver si no es cierto lo que digo en este recinto.

¿Por qué ahora nos dicen que hay que vivir con lo nuestro? Porque no tenemos más capacidad de endeudamiento, no hay más activos para enajenar, no queda casi nada para vender y solamente tienen una garantía para cobrar lo que nos prestaron, y por eso vienen.

Vivir con lo nuestro es un eufemismo. No es cierto. Digamos la verdad: vamos a vivir con lo que nos quede de lo nuestro. No con lo verdaderamente nuestro ni de lo que sale de los productores en el campo, de lo que se gana con el esfuerzo de los que invierten en fábricas y trabajan en ellas, de lo que fluye de nuestros recursos naturales o de lo que se gana con el sudor de los todos días. Eso es lo nuestro. Si se tratara de vivir con esos recursos y riquezas sería muy bueno. Pero no es así. Primero nos sacan un pedazo de todo eso, de lo nuestro, y hay que vivir de lo que nos quede. De modo que no hablamos de lo mismo.

Para mí, vivir con lo nuestro es tener la plena disponibilidad de esas riquezas y recursos, producto del esfuerzo y de la inversión de generaciones argentinas.

Claro está que vivimos insertos en un mundo, donde hay limitaciones y realidades que respetar y donde, alegremente, no se puede decretar la cesación de pagos internacionales sin afrontar consecuencias serias. Tampoco se puede plantear el desconocimiento de la deuda o calificarla simplemente de ilegítima. Eso es un acto de irresponsabilidad. Eso es lo que algunos quieren que la gente suponga que pretendemos cuando nosotros planteamos un camino distinto. Es decir que planteamos el desconocimiento de la deuda o su no pago. Siempre nos llevan a posiciones extremas para hacernos aparecer como los cucos. Pero no cabe la menor duda de que la deuda externa tiene un papel relevante y lo tendrá de modo decisivo en la Argentina.

¿A quién le vamos a hacer creer que el problema de la Argentina es un problema fiscal? ¡Claro que hay un problema de ese tipo, pero no es el único!

Un gobierno en serio, que debe transformar la realidad, tiene que asumir que también el problema de la deuda es un problema estructural. ¿O simplemente, se trata de recuperar confianza para que volvamos a tener crédito y se continúe con la bicicleta?

Decía hace instantes el miembro informante que la renegociación realizada a través del megacanje alivió en el corto plazo el problema que significa la deuda. Demostraré que esto es relativo.

No obstante, haré previamente una aclaración para que no haya dudas y para no recibir réplicas innecesarias por malos entendidos.

Creo que lo peor que podemos hacer los dirigentes políticos en esta crisis en la que estamos inmersos es echarnos las culpas: es lo peor que podemos hacer. Me refiero al esfuerzo dialéctico por demostrar que todas las culpas fueron del gobierno anterior y que éste no tiene ninguna. Esto es tan absurdo como hacer el esfuerzo dialéctico por demostrar —o intentar demostrar— que toda la culpa la tiene este gobierno, y el anterior es inocente.

Hago esta aclaración porque no vengo a polemizar ni a echar culpas. Pero no me voy a ir de este recinto cuando se está dando un debate histórico, sin revisar algunas de las causas que nos llevaron a esta situación. Esto evitará, de alguna manera, que se vuelvan a cometer los mismos errores, ajenos y propios.

El miembro informante decía que tenemos que habituarnos a no hablar del pasado...

Sr. Altuna. — No dije eso.

Sr. Moreau. — Es cierto, no hay que habituarse a hablar del pasado.

Pero sí hay que repasar el pasado y el presente, y tratar de proyectarse hacia el futuro. Los que no quieren revisar el pasado es porque desean que ese pasado se olvide para llegar a la situación que hoy vivimos.

¿Cuál es la situación que estamos viviendo? Si tuviéramos que hacer un simil, sería como haber hecho entrar a un paciente en un hospital, y que el médico que lo tuvo que tratar no solamente no lo curó, sino que lo enfermó. Y cuando está a punto de morir y llega el sacerdote para darle la extremaunción, el médico le echa la culpa al sacerdote.

Eso es lo que quiere Cavallo. Pretende que este enfermo —o mejor dicho este “muerto”— que le dejó a la Argentina, lo sigan cargando la dirigencia y el sistema político. Ese es el “muerto” que nos quieren cargar haciéndonos creer que, si no terminamos rápido el debate, se van a desplomar los mercados del mundo y mañana no van a abrir los bancos.

No se trata del “muerto” nuestro. No tenemos nada que ver con la triplicación de la deuda externa de la Argentina. Ya se explicó aquí el significado que tuvo el ingreso al Plan Brady, para no irnos más atrás. Si nos queremos ir un poco más atrás, llegaremos no solamente a los gobiernos constitucionales anteriores, sino también al gobierno militar.

Cuando cayó Isabel Perón —al margen de toda valoración política que, reitero, no es mi intención hacer—, la deuda externa de la Argentina era de 7 mil millones. Había crecido solamente el 62 por ciento en ese período.

Cuando se fue el gobierno militar —no sin antes estatizar la deuda, a través de estos ingenios a los que nos tiene acostumbrados el ministro de Economía, que signa la política económica de este país desde hace muchísimos años—, la deuda externa argentina era de 45 mil millones. Reitero que antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 era de 7 mil millones. Terminó aproximadamente en un 364 por ciento más. Pero no era suficiente. Como ese endeudamiento había sido tomado fundamentalmente por sectores privados con una gran influencia en el poder —tanta como tienen hoy—, Cavallo les estatizó la deuda para que no tuvieran problemas.

El argumento esgrimido fue el de siempre —es el que se utiliza ahora—: hay que favorecer a la inversión y a los sectores privados de la economía.

Pero en realidad no están favoreciendo a los sectores privados de la economía —y ya voy a demostrarlo con otros ejemplos—; están produciendo una transferencia fenomenal de ingresos del sector público al sector privado. Pero no al sector privado que conocemos, el de los chacareros o el de los que tienen talleres en las ciudades, sino al sector privado concentrado. Eso es lo que ha empobrecido, además de los “ñoquis” o de las jubilaciones de privilegio, al Estado nacional y al sector público. Ha sido la transferencia de ingresos a los grupos concen-

trados que empezó hace tiempo, fundamentalmente al amparo de esa dictadura militar, que no solamente fue nefasta desde el punto de vista de la violación de los derechos humanos sino también del cambio conceptual que le dio al manejo de la economía. ¿O acaso transferir responsabilidades del sector privado al sector público no es estatizar la deuda? ¿No es empobrecer a la sociedad y al Estado hacerlos cargar con esas responsabilidades?

Y después, esto se volvió a repetir por otros mecanismos. Por ejemplo, cuando se decidió semiprivatizar el régimen de jubilaciones y pensiones. Ahí el efecto fue todavía peor, porque no solamente hubo una transferencia de recursos del sector público al sector privado empobreciendo al primero sino que, además, Cavallo lo transformó en el principal responsable de la explosión del déficit fiscal, del déficit del sector público. ¡Miren qué perverso es todo esto! Empobrecen al Estado, lo hacen cargar con deudas ajenas, le producen un agujero fiscal fenomenal y, después que lo tienen en el piso, que lo endeudaron y le provocaron el déficit, vienen a decir que el problema de la Argentina es el tamaño del Estado.

¿Saben cómo empobreció Cavallo al Estado y cómo provocó déficit a través de esa perversa ley llamada, encima, de solidaridad previsional? Muy sencillamente, señor presidente. Creó un sistema de capitalización privada que, paradójicamente, para que nadie se escapara —violando las leyes de la libertad de mercado— tiene carácter obligatorio. Si uno no opta, cuando empieza a trabajar, lo dejan adentro, engrillado, y no puede volver al sistema de reparto. Y ¿qué pasó? Miren al punto al que hemos llegado. Le hizo un agujero enorme al gasto público de la Argentina. Primero, porque transfirió recursos de los sectores que podían pagar sus cargas previsionales al sector privado y las sacó del régimen de reparto. En segundo lugar, porque cargó con el déficit de cajas previsionales a las que pasó al sistema nacional. Por supuesto, lo hizo en el contexto de una Argentina donde la desocupación crecía, al igual que el trabajo en negro y, por lo tanto, se iba desfinanciando el sistema público de reparto.

Pero la perversidad no se detiene allí. ¿Saben qué es lo que quieren que paguemos con esta ley de déficit cero, recortándoles a los jubilados? Los bonos que las AFJP, con la plata de

los argentinos, le prestan al Estado nacional a tasas del 15 por ciento. Y nos quieren hacer creer que vamos hacia un sistema de capitalización privado. Mentira. Es una patraña más de este brujo que viene soportando el sistema político argentino, al que va a terminar enterrando si no reaccionamos a tiempo.

¡Qué sistema privado! El 60 por ciento de los capitales de las AFJP están invertidos en bonos del Estado, es deuda del Estado, y si han comprado fondos de pensión, alcanza al 70 por ciento. Porque dentro de los fondos de pensión también hay bonos del Estado. Esto quiere decir, estimados amigos, que es el Estado quien vuelve a tener la deuda con los jubilados.

¿De qué sistema de privatización me hablan! Dentro de unos años, aproximadamente diez, cuando empiecen a jubilarse los primeros que ingresaron a ese sistema: ¿quién les va a pagar?, ¿de dónde van a salir los recursos?

En este momento, tienen 15 mil millones de dólares y el 70 por ciento son bonos del Estado. El Estado les va a tener que pagar levantando esos vencimientos y esas obligaciones. ¿Dónde está el sistema de capitalización privada?

Estamos construyendo un nuevo déficit hacia adelante y un nuevo sistema de reparto. Porque como las jubilaciones van a ser muy bajas, el Estado les tendrá que adicionar unos pesitos más, si no queremos que nuestros jubilados del futuro —los *yuppies* que creían que iban a tener un gran futuro porque se habían acercado a una AFJP para jubilarse— cobrarán algo así como 100 pesos. Si queremos que cobren un poco más, el Estado va a tener que adicionar alguna prestación básica. ¡Ese es el problema!

¿Qué pasó en el camino? En seis años las AFJP se llevaron 7.700 millones de dólares de ganancia. ¡Ni las telefónicas lograron una rentabilidad de ese tipo!

Hay una diferencia, se llevaron 7.700 millones de dólares de ganancia sin inversión alguna, salvo algunos stands en las esquinas durante algunos meses y algunos alquileres pasajeros de locales. Hasta esa inversión desapareció, ya no los vemos por ningún lado porque empezaron a arreglar con los gerentes de las empresas para que les pasen los paquetes de empleados.

Fijense, el Estado se está quedando con la deuda futura de los jubilados y ahora nos vienen a hablar de déficit cero. Además, los bancos que hicieron de intermediarios se llevaron una

ganancia de 7.700 millones de dólares casi sin inversión, salvo la publicitaria. ¿Por qué? Porque cobran las comisiones más altas del mundo capitalista en lo que respecta a regímenes de capitalización privada: el 30 por ciento. Cobrando esas comisiones y las primas de seguro ganaron 7.700 millones de dólares. Transfirieron los recursos al sector privado y ahora el Estado es pobre. No contento con eso, no solamente empobrecieron al Estado sino que, además, se empobreció la economía argentina.

En esta economía que casi ya no existe, el gasto público aparece como gigantesco; sobre todo, si lo comparamos con el tamaño de la economía. Decir economía, a esta altura, es casi un eufemismo. ¿Qué economía vamos a tener los argentinos si ya no tenemos mercados!

Miren qué cosa paradójica: nosotros, que no tenemos formación liberal, debemos explicar que el problema de la economía argentina es que no tiene mercados y, por lo tanto, no funciona. No tiene mercado externo o lo tiene escuálido y con muchas dificultades, porque nos fueron desalojando del comercio internacional. Nos tenemos que aferrar al Brasil, porque es casi el único comprador y porque venimos manteniendo de manera persistente un tipo de cambio fijo que nos fue sacando de la competitividad, además de los problemas de competitividad que podemos tener por decisiones de política interior. Y por supuesto, no tenemos mercado interno, porque con 14 millones de compatriotas por debajo de la línea de pobreza no hay consumo; ¿qué mercado interno podemos tener?

Entonces, ¿quién puede creer, honradamente, que vamos a resolver este problema? Creo que hay quienes sí lo creen honradamente. Considero que el presidente de la Nación cree —o le han hecho creer— que si vamos al déficit cero podemos evitar males mayores: lo cree gente del común. Honradamente, por supuesto, lo creen mis colegas de bancada. Es tan grave la crisis que, hasta sin creerlo, los senadores de la oposición están sentados aquí para ejercitar un acto de responsabilidad aunque tengan la íntima convicción de que esto no resuelve el problema. Todos sabemos que no lo resuelve.

Todos sabemos que, en realidad, aquí tendríamos que estar discutiendo otra cosa, señor presidente. ¿Saben por qué? No porque lo digamos nosotros. No es que tenemos diagnósticos pesimistas; no es que no tenemos propuestas; no es

—como dice el secretario general de la Presidencia—, que nos sentamos en las bancas porque no tenemos la responsabilidad de gobernar, pero nos gusta hablar.

Todavía estamos esperando el Plan de Infraestructura y su ejecución, si de hablar se trata. Y además, quiero advertirle que vamos a seguir hablando, no nos vamos a callar ni hasta Naviidad ni más allá, porque eso sería un tremendo retroceso.

Pero no somos nosotros los que esta noche venimos a decir aquí que esto no alcanza, que es insuficiente. Cuando ayer nos estábamos por reunir —aunque luego no lo hicimos—, llegó un cable a las 15 y 57 que decía que un analista de crédito soberano de la calificadora Moody's, un señor llamado Mauro Leos —estos que combinan nombres latinoamericanos con apellidos americanos—, consideró que la aprobación del proyecto de déficit cero es una condición necesaria pero no suficiente.

No soy yo, no somos los tremendistas, los que decimos que esta ley no sirve para resolver el problema de la Argentina, que es insuficiente. Lo dicen ellos, pero con un sentido distinto.

¿Saben qué nos está anunciando este señor? Que vienen por más. ¡Vienen por más y éste es el fondo de la discusión! ¡Hoy vienen por los 21 mil millones de dólares del sistema de la seguridad social argentino! Porque es lo único que queda para satisfacer la necesidad de dinero que tienen para que les aseguremos el pago total al cien por ciento de sus acreencias.

Y por si fuera poco, otro economista —éste de un banco, tal como lo publica hoy el diario "Clarín"— dice que hay mucha preocupación y que los próximos días son cruciales, no sólo por la aprobación en el Congreso del programa de austeridad, sino por la reacción social. Saben que va a haber reacción social y ya abren el paraguas.

Entonces, la semana que viene van a decir que va a crecer el riesgo país, no porque no haya déficit cero, sino porque hay lío en las calles de Buenos Aires.

Y van a pedir, como ya pidió por anticipado Éscasany en la apertura de la Asociación de Bancos, "mano dura", porque hay mucho desorden, porque hay mucha violencia delictiva, como si la violencia delictiva que ha crecido en el país no tuviera que ver con la miopía de ellos, que creen que todo es pura ganancia.

Esto es lo que está en discusión. Nosotros podemos votar esta norma o no, señor presidente. Seguramente la vamos a votar o, sin votarla, de todos modos va a salir. Pero la discusión es ésta y continúa.

Sr. Presidente (Losada). — Señor senador: le recuerdo que usted tiene un determinado tiempo para hablar.

Sr. Moreau. — Le agradezco mucho que me avise, señor presidente.

Pido autorización al cuerpo para continuar con mi discurso.

Sr. Presidente (Losada). — Si hay asentimiento así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Losada). — Continúa en uso de la palabra el señor senador Moreau.

Sr. Moreau. — Como decía, señor presidente, este tema no se detiene aquí. Luego hablaré específicamente sobre la ley y sobre los recursos, si hay dinero o no para financiar a los jubilados. Pero yo sé que algunos me van a brindar la licencia de tenerme un poco de paciencia para escuchar otras cosas de carácter general.

Y es bueno aprovechar esta expectativa pública, pero no para hacerme famoso ni para realizar demagogia barata, ni para desprenderme de mi condición radical —estoy seguro de que el día en que me entierren a mi ataúd lo va a envolver la bandera del partido—, sino para hacer un aporte a un debate político que me parece que está en ciernes, en la puerta de nuestra casa; para ver si somos capaces entre todos de brindar la oportunidad de que la Argentina salga de esta crisis. ¡Por supuesto que lo va a hacer! ¡Lo hará con dolor, con esfuerzo, con sacrificio; hasta aquí no llegamos para salir a una fiesta!

Pero todos sabemos que aquí estamos discutiendo cuánto dolor, cuánto esfuerzo y en qué medida lo vamos a repartir. Si de eso se trata, a estos anuncios que ya nos dicen antes de votar la norma “que esto no sirve para nada y que vienen por más y nos van a pedir más”, hay que agregarle otro dato. Hoy, al despertarme —como muchos de ustedes, seguramente, tengo una especie de adicción a los diarios—, lo primero que hice fue leer “Clarín” y me encontré con un título que dice: “La hipótesis de suspender la elección de octubre está en boca de todos”. “El cavallismo estudia atajos constitucionales para

determinar si es posible suspender las elecciones.” “Es un tema de alta sensibilidad política que puede derivar...”

—Murmillos en los palcos.

Sr. Moreau. — Señor presidente: ¿podría solicitar que la gente ubicada en los palcos guarde silencio?

Sr. Presidente (Losada). — La Presidencia solicita a las personas que se encuentran ubicadas en los palcos que por favor guarden silencio.

Continúe, senador.

Sr. Moreau. — “Es un tema de alta sensibilidad política que puede derivar en un pedido concreto al gobierno para que traslade los comicios legislativos a marzo, según revelaron... fuentes de Acción para la República.”

La verdad es que quedé relativamente azorado; me lo esperaba. Y aquí se menciona a un constitucionalista que muchos de ustedes conocen: Daniel Sabsay, a quien dice que se había consultado. Es un hombre ligado a nuestro partido, para qué ocultarlo. Lo llamé por teléfono —no porque descrea de la información de un medio tan importante pero, a veces, los que hemos ejercitado el periodismo sabemos que las cosas pueden tener interpretaciones semiliterales—. Y hace una hora le pregunté, mientras estaba hablando mi colega Maglietti, si era cierto que lo habían tanteado, a lo que me respondió afirmativamente.

Es más, me autorizó a decir públicamente que lo fueron a ver para proponerle un mecanismo que suspendiera las elecciones en la Argentina; a lo que respondió que ésa era una actitud golpista. Me comentó la conversación que tuvo y me autorizó, si hace falta, no sólo a reproducir los términos sino a decir quiénes fueron.

Los que están siguiendo este debate se preguntarán qué tiene que ver esto con el recorte a los jubilados. ¡Tiene mucho que ver, señor presidente! Estamos discutiendo algo más importante: ¡estamos en medio de la crisis y el problema es quién la cabalga, quién la domina, quién la conduce! ¡Si llegan éstos antes que nosotros nos van a hacer perder la paz social y las instituciones! ¡Y no solamente estas instituciones, porque la perversidad sigue al tratar de instalar la idea de suspender las elecciones, y nos quedamos aquí sentados!

Allá por diciembre, cuando haya que discutir otra cosa, van a decir que no tenemos legítimi-

dad porque nadie nos eligió; y entonces van a pedir la disolución del Congreso y, además, un día se van a querer "llevar puesto" al presidente legítimo de los argentinos. Por eso, el primer ciudadano que tiene que darse cuenta de esta trampa es el presidente.

El debate de hoy no es éste, por más que le interese naturalmente a todos los que pueden ganar o perder. El debate de hoy es si construimos un gobierno de salvación nacional frente a la crisis que padecemos, pero no para suspender las elecciones, porque no se suspendieron ni siquiera en Inglaterra mientras bombardeaban los aviones enemigos, no para lograr el silencio de los políticos, aunque claro que les gustaría ese silencio, porque de esa manera les pueden meter la mano en el bolsillo a los jubilados o a cualquiera. Y después van a pedir el silencio de los periodistas. ¡Esa película ya la conocemos! Ahora no van a golpear las puertas de los cuarteles, van a golpear la puerta de los centros internacionales financieros para presionarnos, para hacernos perder las instituciones.

El sistema político de la Argentina tiene que llegar antes a la crisis para poder manejarla. No porque vayamos a evitar dolores y sacrificios; no porque en vez de discutir una reducción de salarios vayamos a discutir un aumento de éstos a los jubilados o a los estatales. Sería un canalla, un hipócrita y un mentiroso si le dijera a la gente que si a esta crisis la maneja el sistema político argentino vamos a evitar sacrificios o a aumentar salarios, pero lo que seguramente no va a ocurrir es el hecho de que nos agarremos solamente con los salarios, porque vamos a encontrar equilibrios y vamos a repartir las cargas del esfuerzo de otra manera.

Al igual que todos ustedes y todos mis colegas —a los que vi preocupados—, estuve trabajando en este tema, yendo y viniendo y buscando números. Quería encontrar una explicación de por qué no podíamos fijar el piso en 1.000 pesos para los jubilados o empleados del Estado. Hicimos números, al derecho y al revés. Como consecuencia de eso se votó esta iniciativa en Diputados, que es distinta al decreto del Ejecutivo, porque agrega recursos a los ya previstos por éste; y, aun después de votada esa norma, seguimos discutiendo. Y llegué a este debate sin que nadie me pudiera precisar exactamente los números.

¿Qué significa, por ejemplo, mantener el piso salarial de los jubilados en 1.000 pesos? ¿Qué

significa monetariamente? ¿De qué estamos hablando? Y digo "en 1.000 pesos" no porque haya una competencia entre "85 por ciento" y "95 por ciento", sino porque hay que blindar en el piso más elevado, de modo tal que los sucesivos recortes —porque éste no va a ser el último— no deterioren demasiado el salario y, además, porque obviamente ninguno de los que estamos aquí quiere defender un 4 por ciento —y "monedas"— que quedaría afuera, entre los cuales hay algunos —muy pocos— que tienen ingresos de alrededor de 1.000 y pico de pesos pero también están los que cobran 3.100. Ninguno de nosotros quiere defender las jubilaciones que están dentro del marco de los regímenes de privilegio.

¿Saben cuánto significa pasar de 500 a 1.000 pesos?: 34 millones de dólares por mes. Si debemos cubrir un déficit en el semestre de 1.500 millones, estamos hablando de aproximadamente 208 millones de dólares para que nuestros jubilados no tengan recortes de 1.000 para abajo; y, en el caso de los empleados públicos, estamos hablando de 107 millones en el semestre, tomando la masa salarial con los adicionales; es decir, unos 17 millones. O sea que, en conjunto, son 50 millones por mes.

¿Qué hizo la Cámara de Diputados? En el proyecto de ley en revisión la Cámara de Diputados dice: rechazamos el decreto, pero a los recursos que preveía el decreto agregamos nuevos recursos. Diferimos la devolución del impuesto a las ganancias, porque es loco y absurdo devolver impuesto a las ganancias a alguien que tiene un salario de 3 mil pesos, mientras se proyecta sacar recursos a alguien que gana 500 —eso es equidad—, suspendamos la disminución de los 10 centavos del impuesto a la nafta y aumentemos 4 puntos los aportes de las empresas de servicios de bienes no transables.

Esta última medida es casi revolucionaria. Hace once años que andamos detrás de esta cuestión. En volumen, las empresas de servicios no transables son los bancos, las privatizadas, en algo YPF —que es empresa productora y no de servicios— y los hipermercados. Ahora están gritando como locos, pero para que ustedes tengan una idea quiero recordar que antes aportaban el 27 por ciento. Ahora los haríamos aportar el 20. Ellos creen que esta crisis sólo la deben pagar los sectores de menores recursos, no así ellos. Ellos están esperando la sanción de esta noche para ver cuánto aportan al Fondo Fiduciario de Provincias y con qué tasa de inte-

rés. Yo todavía tengo la duda de si va a ser la patriótica o la colonial. Me inclino por pensar que nos van a aplicar una tasa colonial.

Entonces, digo que trabajamos mucho y que cuando se concretó la sanción de la Cámara de Diputados yo me entusiasmé. Dije: "Bueno, hemos agregado recursos, bastantes por cierto" La no devolución del impuesto a las ganancias representa 280 millones de dólares de aquí a fin de año, entre lo que no hay que devolver —que creo son 110 millones— y lo que se va a seguir recaudando.

Si bien es cierto que no se puede hacer una estimación exacta de cuánto vamos a recaudar con la suspensión de la disminución de los 10 centavos del impuesto a la nafta, días pasados los propios funcionarios del Ministerio de Economía me dijeron que serían unos 150 millones de dólares en el semestre. Entonces sumamos 150 más 280.

Tampoco tienen una estimación concreta sobre lo que vamos a recaudar con el aumento de los 4 puntos en los aportes patronales, pero pongamos la cifra más pesimista del semestre: 150 más. Estamos en 580.

Además, ellos habían agregado el aumento de recaudación como consecuencia de la eliminación de exenciones del impuesto al cheque. Tampoco nos dieron una estimación, pero el ministro de Economía, en esos momentos de euforia que preceden a las depresiones, nos habló de 50 millones de recaudación. De ser así, estaríamos hablando de 50 millones por mes. Son 300 en el semestre. Entonces hicimos la suma. Ahora nos dicen que no son 50.

Hicimos la suma y entonces dijimos: "Bueno, acá están los recursos para sostener el piso de mil". No digo que sobran, porque en esta Argentina no sobra nada, pero acá están. Nos encontramos no solamente con que jamás nos dieron los números precisos, sino con evasivas de todo tipo: "Que en realidad la disminución del impuesto a la nafta que se suspendía, si volvía a aumentar, iba a hacer caer el consumo y entonces no había una estimación". Bueno, es posible que ocurra. Puede ocurrir con cualquier impuesto que se aumente, pero siempre hay un promedio normal.

Después nos decían: "Los 4 puntos referentes a los aportes patronales tampoco los podemos estimar. No sabemos muy bien...". No sabían nada, absolutamente nada.

Entonces, a esta altura me pregunto dos cosas: si cuando hicieron el decreto ellos pusieron la extensión de la llamada Ley del Cheque, más estas modificaciones en el IVA, que son buenas —y que yo acompaño—, ¿por qué los impuestos que ellos prevén son buenos y los nuestros son malos? ¿Por qué los de ellos tienen previsibilidad de recaudación? Nos dijeron que con esos gravámenes iban a garantizar un piso jubilatorio, pero con los nuestros no lo pueden hacer porque los de ellos son impuestos buenos y los nuestros son malos. Cuando en realidad son tributos muy sencillos, de muy fácil recaudación, como el de la nafta o el de los aportes patronales.

Entonces, empecé a pensar otra cosa, que habían errado el cálculo de base para ir al déficit cero, que en realidad no estamos frente a un déficit de 1.500 millones de pesos para el semestre sino frente a la posibilidad de uno mucho mayor. Pero, por supuesto, tampoco pude lograr que me reconocieran este dato, que realmente no sé si es cierto.

No me voy a sumar a los que crean alarma diciendo que puede ser el doble. Si llega a ser así es porque esta medida es mala, porque si empezamos con el déficit cero en julio y sigue cayendo la recaudación en agosto, setiembre, etcétera, es porque la medida —como bien se ha dicho— produce un efecto contractivo en la economía y hace caer la recaudación.

De todos modos, no voy a hacer una afirmación sobre un supuesto: no sé si es así. Pero ¿saben qué convicción me llevé de todo esto? No si los recursos alcanzaban o si la estimación de base que se ha hecho es mala. Fíjense en el brete que nos pone a toda la sociedad argentina si el ministro de Economía nos mintió otra vez. Porque si llegó a calcular mal —no sería la primera vez en estos últimos tiempos que lo hace— y arrancamos con una estimación para el déficit cero de 1.500 millones, que no es correcta, ni les quiero contar los problemas que va a tener la economía real de la Argentina en los próximos seis meses. Eso sí sería irresponsabilidad, jugar con fuego, o bailar en la cubierta del Titanic. Pero no lo puedo afirmar.

No obstante, después de todo esto, sí tengo la convicción de que no estamos discutiendo acerca de si los recursos alcanzan sino de un problema de reputación, de señal. En efecto, estamos debatiendo si la Argentina sí o si va a

dar la señal, con plata o sin plata, con recursos o sin recursos, de que vamos a pegarle un recorte brutal a los gastos de la seguridad social para garantizar el pago de la deuda. Entonces, si es así, que lo digan. ¿Para qué vamos a andar con subterfugios? En las crisis la gente puede entender cualquier cosa, en tanto también se le imponga un esfuerzo a otros; porque de ella nadie va a salir indemne. Reitero que si es así, que nos lo digan, de manera de poner en los botes a quien realmente tenemos que subir y así repartimos las cargas del esfuerzo como lo tenemos que hacer.

¡Que no nos vengan a disfrazar con el cuento del déficit cero en este contexto de deuda externa que tenemos, porque lo único que quieren hacer es dar la señal de que vamos a recortar los gastos de toda la seguridad social! Porque acá ¿qué estamos recortando? Lo visible son las jubilaciones y los salarios del personal del Estado, pero saben qué estamos recortando en realidad. ¿Saben a quién le vamos a sacar un 13 por ciento en la actividad privada, no en la estatal? A las mujeres embarazadas; es a ellas a las que les vamos a recortar el 13 por ciento de la asignación por maternidad. Y también le vamos a recortar el 13 por ciento a quienes tengan hijos discapacitados. Este es todo el régimen de la seguridad social.

Cuando uno se refiere a la seguridad social, cree que está hablando solamente de los jubilados, pero éste es el recorte que quieren, que nos exigen estos señores que ya nos adelantan que tampoco con eso se van a conformar y que lo que tenemos que cuidar ahora es la reacción social.

Ahora bien, ¿el presidente De la Rúa impulsa estas medidas porque es perverso o porque se olvidó de lo que decía en los programas de radio? No. El problema no es una crisis del gobierno. Es cierto que la Alianza no estuvo a la altura de las circunstancias con la homogeneidad necesaria —y, como ya dije, no voy a hablar de eso ahora—, pero lo que está en crisis es la Argentina, y no lo está para que hagamos a cada rato apelaciones a la unidad nacional y desgastemos el término sino que ella es mucho más profunda.

Seguramente, este proyecto de ley hoy será sancionado. Sin embargo, si me permiten mis colegas, voy a disentir del colega preopinante, el señor senador Sala, porque no creo que votar

afirmativa o negativamente esta iniciativa defina el fondo de la cuestión —aunque considero que hay que computar las ausencias; por eso, a pesar de que tengo diferencias con el proyecto, estoy aquí sentado, ya que la ausencia es una cobardía, sobre todo en una hora tan importante como la que vive la Argentina—, o que el hacerlo de uno u otro modo signifique que uno se está colocando del lado de aquellos que quieren o no recortar los salarios.

Por otra parte, no voy a abundar en razones como las esgrimidas por el señor senador por La Rioja para fulminar jurídicamente el proyecto en tratamiento. Algunas de sus objeciones las comparto, otras no tanto y, algunas de ellas, serán objeto de propuestas de modificación que elevaré oportunamente al cuerpo.

Por ejemplo, voy a plantear una modificación con respecto a la última parte del artículo 10, porque arrasa derechos constitucionales. Pero no abstractos sino que, por ejemplo, echa por tierra con la cuota alimentaria del salario; y no hay juez en el mundo que, aun admitiendo una rebaja salarial, no preserve la cuota o el porcentaje alimentario del salario.

Pero tampoco pienso que votando en contra de esta iniciativa resolveremos el problema, porque en términos prácticos, si lo hacemos, quedaría vigente el decreto del Poder Ejecutivo. Es cierto que quedaría en pie con la debilidad propia de un decreto, pero no puedo anticipar cuál podría ser la reacción de la Corte cuando el tema le llegue a su consideración. Esta podrá rechazarlo o podrá ocurrir, como dijo el señor senador Yoma, que lo haga un juez de faltas. Pero también puede suceder lo contrario; es decir que frente a las condiciones de necesidad y urgencia y por la misma razón que hoy estamos reunidos —porque si no lo hacemos, se viene el mundo abajo—, los jueces actúen de la misma manera y apoyen la norma, porque tienen responsabilidad institucional, porque son seres humanos y, probablemente, porque no desearían aparecer como los que provocaron el default de la Argentina. Entonces, quedaría en pie el decreto.

Y si ello ocurriera estaríamos peor. ¿Por qué? Por cuanto ya ni siquiera tendríamos la garantía de que el piso para efectuar el recorte sería de 500 pesos. Además, si votáramos en contra de este proyecto y éste fuera rechazado, el decreto no quedaría desplazado. Y si ello sucediera,

no contaríamos con esos nuevos impuestos creados por la Cámara de Diputados, algunos de ellos muy justos—y por los que levantaría la mano dos veces—, por ejemplo, el que implica un aumento en los aportes patronales; y estoy seguro de que también ustedes están de acuerdo con ese tributo. También es muy justo diferir la devolución del impuesto a las ganancias, aunque tal vez no sea eficiente desde el punto de vista económico.

Pero si no se sancionara este proyecto de ley, la discusión que tendríamos con los jubilados no sería acerca de si el piso del recorte abarcaría a los haberes que van desde los 500 o los 1.000 pesos sino que debatiríamos sobre si el piso arrancaría en los 300 pesos, porque se supone que, si con todos los recursos que el propio proyecto establece, el Ministerio de Economía afirma que no puede garantizar los haberes superiores a los 500 pesos, de no contar con esos ingresos, con el aumento de los aportes patronales, ni con el diferimiento del impuesto a las ganancias, va a pretender establecer el recorte de haberes a partir de los 300 pesos. O tal vez menos. Qué sabemos.

Entonces, la línea divisoria no está en votar afirmativa o negativamente. Lo que tendríamos que hacer—que es difícil bajo esta presión de ser aquellos que si esta noche no aprobamos el proyecto de ley en consideración seremos como los curas a los que se les echa la culpa de que el enfermo se murió porque le dieron la extremaunción—, es analizar si podemos llegar a elaborar un blindaje para los jubilados y los estatales. Es decir, si los excluimos total o parcialmente de este recorte.

Es cierto lo que se dice en cuanto a las modificaciones del artículo 34 de la ley 24.156. Pero hay una solución legislativa para ello y, en ese sentido, haré una propuesta concreta cuando abordemos la discusión en particular del proyecto en consideración. Y esto no la haré por ser discolo, rebelde o por todos los anatemas que en los últimos días quisieron aplicarme algunas personas, aunque no del partido político al que pertenezco, ya que en él saben de la honestidad intelectual de mi planteo y de la legitimidad que hace poco hemos revalidado. Es decir que ni siquiera venimos del resentimiento de un grupo interno que perdió una elección; tampoco pensamos en las elecciones.

Alguna vez, ante una crisis muy parecida a la actual, que desembocó en la Revolución del Parque, casi cuando la Argentina simultáneamente salía del patrón oro y hubo una unidad nacional, luego repetida en los grandes movimientos históricos, Leandro Alem, el fundador de nuestro partido, decía que la misión no era electoral, ni siquiera transitoria sino que ella consistía en denunciar un sistema, poner fin a una época. Justamente, creo que estamos asistiendo al fin de una época: el fin del modelo neoliberal.

Nos dejaron el cadáver. Tenemos que reemplazarlo por una nueva vida. He allí el desafío.

Por eso, voy a proponer modificaciones, aun a sabiendas de que ni siquiera eso resuelve el problema. En este sentido, concretamente, voy a plantear una modificación al artículo 10, que a su vez modifica el artículo 34 de la ley 24.156, para establecer un blindaje que excluya a los jubilados y a los empleados estatales que ganan menos de 1.000 pesos. Pero que los excluya definitiva y legalmente de cualquier recorte presente o futuro.

Hago este planteo porque es posible que más adelante, si es que nos damos cuenta de que hace falta formar un gobierno de salvación nacional, tengamos que pedir un nuevo esfuerzo a la gente. Pero hay que tener un límite y dar alguna certeza. Esto no invalida que otros señores senadores, como bien se ha adelantado, propongan la exclusión total de jubilados y asalariados.

Cualquier propuesta en ese sentido es buena y, lógicamente, es obvio que debe estar acompañada de cierta racionalidad con los recursos disponibles.

No plantearé una discusión al respecto, pero hay que fijar un blindaje no sólo por el actual 13 por ciento sino también por los que vendrán en el futuro en virtud de lo que nos anuncian estos señores. Es legítimo haber dejado de lado a los acreedores externos. Solamente un irresponsable podía decir que no íbamos a pagar. Pero no es legítimo que el default o la cesación de pagos ocurra solamente hacia el interior de nuestra economía. Allí está el desafío a la imaginación que nos plantea la actual realidad del país.

Voy a votar en forma favorable en general, porque estoy de acuerdo con el aumento de los aportes patronales, con el diferimiento de la devolución del impuesto a las ganancias y con la

extensión de la aplicación de la Ley del Cheque, en virtud de los fraudes descubiertos. Pero adelanto que también propondré modificaciones cuando el proyecto se trate en particular.

Propondré el blindaje para los jubilados, el cual no está claro en el proyecto sancionado en la Cámara de Diputados, a pesar de que la intención del artículo 12 fue la acordada con el gobierno nacional. La norma no quedó clara no sólo por un problema de redacción sino también porque no hubo claridad política en los acuerdos.

Creo que hay que mejorar esa redacción. En las leyes no sólo hay que reflejar la voluntad sino también —y con mucha precisión—, la decisión de que determinadas cosas ocurran o no. Yo no me siento agraviado ni corro a nadie por izquierda o por derecha. Miren si vamos a estar a esta altura —con el drama que tenemos entre manos—, en la tontería de hacer ese jueguito.

Para terminar, y sin demasiada grandilocuencia, quiero decir que los jubilados que nos paraban por la calle y nos decían “no voten la ley”; que los empleados del Estado que nos decían “no voten la ley”; que los inversores que nos decían “voten la ley” y que los ahorristas o los pequeños comerciantes, que están en el medio y con miedo, no esperan de nosotros solamente una explicación contable del déficit cero sino que aspiran a que el presidente de la Nación —que es el único que tiene legitimidad, además de ser el vértice de este gobierno— advierta que llegó la hora de desembarazarse de los “brujos”. En otros tiempos, otros tuvieron que desembarazarse —y así lo hicieron— de otros “brujos”. Tal vez llegaron tarde. No sea cosa que nosotros también.

(Aplausos en las galerías)

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Varizat.

Sr. Varizat. — Señor presidente: después de haber escuchado las palabras de los señores senadores que me precedieron, sería prácticamente imposible pretender dar claridad y aportar algo de peso a mis fundamentos acerca de mi negativa a la aprobación de este proyecto. Simplemente haré algunas observaciones, porque deseo dejar sentado que mi voto negativo no significa disentir de la filosofía del déficit cero o la idea de que los argentinos no tengamos que vivir con lo propio.

En este sentido, gracias al esfuerzo de todos los santacruceños, en mi provincia lo venimos

haciendo desde hace algo más de una década. Se trató de un esfuerzo equitativo que no recayó sobre los que menos tenían sino que fue estudiado para que afectara principalmente a los que más poseían. En consecuencia, hace más de diez años que podemos decir con orgullo que los santacruceños vivimos con lo que tenemos, con lo propio.

Y muchas veces debemos vivir con menos de lo propio, fundamentalmente, porque parte de lo nuestro no llega, en virtud de que el gobierno nacional no cumple con los compromisos asumidos con la provincia. En consecuencia, parte de lo nuestro queda retenido por el Ministerio de Economía de la Nación. Es por eso que muchas veces estamos obligados a vivir con menos de lo que nos es propio.

Entiendo que no compartir esta filosofía, sería negar una realidad que es contundente. Nada tiene futuro en lo económico si se gasta más de lo que ingresa. Pero tampoco tiene futuro el tratar de basar esta filosofía en los que menos tienen. Porque la hace perversa, injusta y casi de imposible cumplimiento.

Voy a hacer algunas observaciones basándome en que personalmente creo que el riesgo país, que tanto atormenta hoy a los argentinos, tiene nombre y apellido. El riesgo país en la Argentina se llama Domingo Felipe Cavallo; y creo que mientras este personaje siga rigiendo —como bien lo han explicado varios senadores que me precedieron en el uso de la palabra, desde hace muchos años, desde 1991— o interfiriendo en la política económica argentina, sentando políticas y acciones que han ido generando un desfinanciamiento del Estado y una monstruosa transferencia de recursos de los asalariados y de los que menos tienen hacia ciertos sectores concentrados de la economía, y mientras no se apunte a corregir esto, ningún esfuerzo que se haga va a tener efecto, como ha ocurrido con todas las medidas que ha implementado este gobierno desde 1999 hasta la fecha.

En su gran mayoría los ajustes han recaído sobre los sectores medios y los sectores más desprotegidos de la Argentina. Y no han tenido mayor efecto que el de agravar la recesión, los problemas económicos de nuestro país e ir estrechando las posibilidades de salida de este modelo, que se cae solo. Creo que esto es lo que no alcanza a percibir el gobierno, que había prome-

tido cambiar, salir de este modelo, y por lo que fue acompañado por el voto de casi el 82 u 83 por ciento del electorado argentino en octubre de 1999. Pero después se encargó de desvirtuar esa representación, ese mandato popular y se aferró a un modelo que había prometido cambiar.

Creo que ahí nace y radica en gran parte la falta de credibilidad de este gobierno, que está basado fundamentalmente en la mentira, en decir que va a hacer una cosa y terminar haciendo precisamente lo contrario.

A esto hay que agregar que nuestro presidente incorpora al gobierno de la Nación al máximo responsable de esta situación. El otro día escuchaba y veía por televisión un mensaje del señor presidente en el que les preguntaba a todos los argentinos si sabían dónde estaban los que habían endeudado a la Argentina. Y precisamente sentado a su lado estaba Domingo Felipe Cavallo que, si no fue el ideólogo, fue el principal ejecutor de este endeudamiento, por lo menos fue el broker de los sectores que han propiciado y llevado adelante este aumento de la deuda. Además, tiene un triste récord, porque con las medidas que tomó durante su gestión se duplicó, en tres oportunidades, la deuda externa argentina. Por eso digo que el riesgo país tiene nombre y apellido.

Creo que es muy difícil pedirle credibilidad a los argentinos y a los sectores de la economía cuando gran parte del sector político que integra el gobierno desmerece de las políticas que se están llevando adelante.

No va a cambiar ni a aportar en mucho que este Senado apruebe o no esta ley. Creo que son las medidas y las acciones que viene llevando adelante este gobierno las que han generado este clima de incertidumbre y de escasa o casi nula credibilidad.

Es muy difícil creer en un gobierno cuyo presidente firma un decreto a la mañana restableciendo las jubilaciones de privilegio y a la tarde firma otro porque se había equivocado. Es muy difícil pedirle credibilidad a los argentinos cuando el coraje de un gobierno radica en recortarle sus ingresos a quienes menos tienen. Es muy difícil que podamos creer en esto, al menos los que venimos del seno de un partido de extracción popular y que decimos representar a los que menos tienen.

Creo que se nos ha mentido mucho, se nos ha dicho hace poco tiempo que a través de esta

operación de megacanje íbamos a solucionar lo urgente para poder luego, desde la tranquilidad que íbamos a ganar con el resultado de esa medida, empezar a dedicarnos a lo importante.

Si lo urgente era lograr un negocio para cuatro banqueros amigos de alguien que embolsaron más de 150 millones de dólares de comisión por autovenderse bonos, y lo importante es recortarle las jubilaciones y las pensiones a los argentinos, realmente espero que este gobierno no empiece a tratar de tomar decisiones muy urgentes o de afrontar problemas muy importantes, porque, de ser así, no quiero pensar lo que va a ser el destino de los habitantes de este país.

Finalmente, adhiero a lo dicho por el señor senador Sala en el sentido de que se practique votación nominal.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — Señor presidente: la verdad es que escuché una parte del discurso del senador Moreau y nos ha dejado absolutamente conmovidos, porque es de una gran claridad y rigidez intelectual en su mayor parte. Después voy a explicar el por qué. Es un toque de atención, no solamente para este cuerpo sino también para los que están administrando el país.

Debo decir que nosotros, los peronistas, los del bloque Justicialista, no podemos sino adherir al déficit cero como una cuestión de Estado. Nosotros acompañamos la iniciativa del gobernador De la Sota cuando era senador y fuimos quienes promovimos la Ley del Déficit Cero. En la Cámara de Diputados sufrió algunas modificaciones y, tal vez, no tuvo allí el resultado final esperado. Pero conceptualmente el déficit cero está plasmado en la ley 25.152, que es ley de la Nación y fue iniciativa, específicamente, de nuestro bloque.

Lo que rechazamos absolutamente es que el déficit cero se logre a costa del salario de los trabajadores del sector público y de los haberes de los jubilados. No admitimos, bajo ningún concepto —en esto mi opinión es terminante y definitiva— que esta política de Estado tenga como resultado final la baja de jubilaciones y de pensiones.

Esto me hace acordar, señor presidente, el relato mitológico según el cual los atenienses, cada nueve años, mandaban a jóvenes para que los matara el Minotauro en el laberinto del rey Midas y eso les permitiera vivir con tranquilidad nueve años más.

Ahora le estamos enviando a la concentración económica que define la política del país otro contingente para que el Minotauro —mitad toro y mitad hombre— se lo coma. Esta vez, le mandamos a los jubilados, a los pensionados. Estos son los que ahora, detrás de esta política, tienen que ser devorados para que sobreviva el sistema. Esta no es simplemente una cuestión alegórica, señor presidente. Este bloque, aún en los momentos más difíciles y complicados, ha sostenido una posición respecto de la cual —al menos personalmente— no está dispuesto a volverse atrás.

Haré rápidamente un *racconto*, señor presidente. En la sanción del proyecto de ley de reforma laboral protegimos tres cosas: no bajar los sueldos, no discutir convenios a la baja y evitar que se desintegrara el movimiento sindical, posibilitando la celebración de convenios por abajo o en inferiores niveles que, de alguna manera, dinamitaran la organización gremial actual.

Fuimos los que, en una decisión absolutamente pensada y meditada, derogamos el decreto 430 el 14 de julio del año pasado, que rebajaba sueldos, porque creímos que era confiscatorio. Era un impuesto, porque se hacía una quita, no había devolución y, en definitiva, lo que se estaba haciendo era cobrar un impuesto al salario.

Fuimos los que derogamos la resolución 668/00, que firmó el presidente de esta Cámara y el de la Cámara de Diputados, que decidía bajar los sueldos de los empleados legislativos.

Ahora viene este proyecto de ley y se dispone consagrar un hecho mucho más grave: bajar las jubilaciones y las pensiones con un criterio absolutamente injusto, "a lo financiero", cortando por lo grande, sin advertir nada, sin ningún criterio de equidad o de justicia. Le da lo mismo un jubilado que cobra 501 pesos, que aportó durante treinta años y que tiene tal vez una expectativa de vida menor, que un empleado que gane como el jefe de Gabinete 45 mil o 6 mil pesos.

No existe en este proyecto de ley ningún criterio que pondere algún elemento de justicia, que establezca algún mecanismo por el cual, quienes están dispuestos o decididos a ayudar, tengan a su favor elementos que les permitan acompañar lo resuelto por el Poder Ejecutivo.

En un primer momento pensé, señor presidente, que nosotros debíamos hacer un proyecto alternativo. Y trabajé en él. En esa iniciativa

se establecía una serie de mecanismos que, considero, evitaban un aumento de la pelea entre los pobres —que es lo que parece ser que ocurre— debido a las medidas que se van a llevar adelante en cuanto a los jubilados, pensionados y asalariados. De alguna manera, permitía que este asunto no terminara siendo un elemento confiscatorio de sus sueldos o jubilaciones.

Sin embargo, luego de haberlo elaborado pacientemente y de establecer mecanismos de devolución, me di cuenta de que no servía armar un proyecto alternativo ni proponer modificaciones en particular porque esa película ya la vimos: el proyecto pasa a la Cámara de Diputados y allí, la Alianza, con su mayoría, define la ley tal como está redactada aquí.

Pero este proyecto de ley tiene aspectos muy graves que, de ninguna manera, podemos admitir. Porque si nosotros trabajamos en el texto del proyecto, y si además elaboramos algún criterio —como lo pretendimos hacer a través de un sistema en donde la solución no sea la rebaja de sueldos ni de pensiones sino mecanismos de devolución o de atraso en el pago—, lo que vamos a conseguir es que cuando pase a la Cámara de Diputados se sancione la ley con el mismo texto que en su oportunidad se aprobó allí.

Entonces, vamos a convalidar una situación que va a asentar definitivamente y por ley, la injusticia en la Argentina. ¿Por qué digo esto, señor presidente? Porque hay un punto que se ha soslayado y que es de una gravedad enorme: se va a modificar de modo definitivo el artículo 34 de la Ley de Administración Financiera; se va a establecer así, para siempre, que los haberes y las jubilaciones son variables de ajuste para afrontar un déficit de caja. ¡Esto es lo que se va a votar y nadie dice nada! ¡No se va a hacer como excepción, no tiene carácter transitorio, no es simplemente por un problema que se presenta en este mes o el que viene! ¡Es para siempre!

Estamos incorporando el salario y la jubilación como variable de caja en forma definitiva en una ley en donde no tienen por qué figurar, aun afuera de la emergencia.

Por lo tanto, de nada sirve que hagamos todo tipo de ejercicios dialécticos cuando la consecuencia final es clara. Creo que tanto el decreto del Poder Ejecutivo como el proyecto de ley —y me hago cargo de lo que digo, porque cuan-

do fuimos gobierno alguna vez se recortaron sueldos— ni siquiera tuvieron en mira un mecanismo o sistema que se ajustara mucho más a la cuestión de equidad. ¿De qué equidad hablan? ¡Si acá están definiendo para siempre la rebaja salarial, la de pensiones y jubilaciones, como elemento de ajuste para cuando existan problemas de caja!

Entonces, señor presidente, nos preguntamos: ¿vale el esfuerzo que hagamos aquí, las modificaciones que propongamos y nuestras propuestas en particular, cuando en definitiva éste es el texto que se va a aprobar?

Y lo que es peor es que me da la impresión de que somos tontos, no solamente por lo que decía el señor senador por la provincia de Buenos Aires de que no tenemos capacidad para crear impuestos, sino porque estamos aumentando las alícuotas, las cargas sociales, nivelamos con nuevos recursos que, supuestamente, van a acompañar a la rebaja de sueldos, y facultamos al Poder Ejecutivo para que, en forma total o parcial, disponga que los impuestos o contribuciones sobre la nómina salarial puedan ser compensados con los que aquí se crean.

Nosotros le estamos delegando facultades al Poder Ejecutivo para que el aumento de las cargas y del impuesto sea mentira o para que hagan lo de siempre: cuando pagan el aumento a las contribuciones les hacen un crédito para pagar IVA; cuando pagan el impuesto a los combustibles les hacen un crédito para pagar ganancias. Estamos delegando estas facultades al Poder Ejecutivo y a su ministro de Economía sin marco y sin plazo, contrariamente a lo que exige la Constitución.

Entonces, nos preguntamos si en estas condiciones se puede votar el proyecto de ley. Esto me asusta mucho, señor presidente, y por eso valoro el coraje y valentía de nuestro bloque, que ha decidido permitir que esta ley sea sancionada porque, como siempre, no queremos obstruir ni poner palos en la rueda.

Pero sé que lo único seguro luego de la sanción de este proyecto de ley será la rebaja de las jubilaciones y pensiones, por eso no voy a acompañar esa posición y voy a pedir el rechazo liso y llano de esta iniciativa. Porque el hecho de que se paguen más o menos impuestos, en definitiva, dependerá de que el Poder Ejecutivo no arme un sistema compensatorio entre los impuestos que se pagan.

Veinte mil de los cuarenta y cuatro mil millones de nuestro presupuesto se destinan al sistema previsional. Pero puede suceder que la reducción del trece por ciento no resulte suficiente, en virtud de un incremento en el índice de riesgo país, ese raro mecanismo al que recurren quienes lucran con la especulación —y que no se resignan a ganar menos—. De esa forma, en una o dos semanas el efecto benéfico que podría conseguirse con esta medida podría desaparecer. Hago esta reflexión porque los medios más importantes están anunciando que tal vez todo este esfuerzo y este recorte no alcance para producir el efecto que debe generar en la economía del país.

El default ya lo tenemos aquí y ahora. ¿O no es default que recortemos las jubilaciones, que no tengamos las obras sociales para atender a los jubilados, que bajemos los sueldos, que la gente no consuma y que todos los días, por el aumento de la desocupación, tengamos gente pidiendo trabajo? ¿Qué es el default? ¿Que no podamos pagar los intereses?

Hace unos días, un amigo vinculado al trabajo de la tierra me dijo que el precio del trigo bajó un 25 por ciento. Pero nadie se acordó de esto, que termina constituyendo un perjuicio mucho mayor para la Argentina que la baja del 1,7 de los bonos.

—Ocupa la presidencia el señor vicepresidente 2º, senador Luis A. León.

Sr. Alasino. — Señor presidente: creo que en algún momento hay que terminar con esto. Y me hago cargo de los errores. Me haré cargo de todo el esfuerzo que hicimos cuando tal vez no nos fue bien. Pero, como dije al principio, creo que alguien nos debe prestar el hilo para salir del laberinto y, aparentemente, este gobierno no lo tiene. Este gobierno no nos puede sacar porque vamos por más de lo mismo, vamos a hacer cosas que van a agravar más la situación.

Para terminar, creo que estando prácticamente la mayoría de los senadores justicialistas en desacuerdo con lo que está haciendo el gobierno, van a permitir que este proyecto de ley sea sancionado.

El Partido Justicialista nunca tuvo el criterio de obstruir la acción del gobierno. Nunca quisimos poner el palo en la rueda. No estoy para echar culpas a los que gobiernan ahora ni a los que gobernamos antes, pero debo decir que este

gobierno tomó una situación, hizo más de lo mismo y la agravó. Ello es patente por el hecho de que los miembros de la misma Alianza que llegó al gobierno se formulan hoy denuncias entre sí porque de alguna manera no atienden los reclamos o las propuestas que hicieron durante la campaña electoral.

Señor presidente: considero que el esfuerzo de cualquier compañero senador —compañero o no— en un proyecto alternativo no cambia el hecho de que hoy, por ley, estamos estableciendo para siempre como variable de ajuste los salarios y las jubilaciones. Eso es mucho más grave que lo que se pueda suponer. Por eso me parece que esta norma debería rechazarse y, en un ámbito distinto, ver qué mecanismos encontramos a efectos de posibilitar que el país salga de la situación en que se encuentra.

Para finalizar, debo decir que no estoy de acuerdo con esta norma; no estoy de acuerdo con una ley correctiva que es más de lo mismo y que, como ya hemos visto, no pasará más allá de la Cámara de Diputados; y no estoy de acuerdo con modificar este proyecto de ley. Más allá de las dificultades que pueda causarle al país el default externo, porque el interno ya lo tenemos, y la explosión externa, porque la interna ya la tenemos, puede ser para bien de todos.

Sr. Presidente (León). — Tiene la palabra el señor senador López.

Sr. López. — Señor presidente: para mi concepto el debate en lo ideológico está agotado y tiene un claro ganador, independientemente de cuál sea el resultado de la votación.

Uno llega aquí con la responsabilidad de que las instituciones continúen y de que la Argentina pueda pagar su deuda; con la responsabilidad de que al gobierno le vaya lo mejor posible para bien de los argentinos. Es nuestro gobierno. Es el gobierno que votamos desde la Alianza con nuestros principios, donde obviamente no habíamos prometido este tipo de medidas al pueblo argentino. Entonces, tenemos condicionamientos hasta ideológicos para ocupar nuestras bancas tratando una norma que el gobierno necesita y que dicen que la Argentina requiere.

Como voy a hablar muy brevemente, quiero ser claro y decir que comparto el análisis realizado por mi compañero de bancada por la provincia de Buenos Aires. No sé si va a servir que se apruebe este proyecto. Es más, tengo alguna certeza de que no va a servir en el mediano plazo

para lo que el gobierno se propone, pero la voy a apoyar en general. Voy a acompañar el esfuerzo de la bancada para que se busquen los recursos alternativos, de tal manera que los jubilados y las retribuciones de los empleados del Estado sufran el menor daño posible. Por ello voy a votar afirmativamente cada uno de los artículos por los que se crean impuestos, que en mi concepto obviamente van a traer más recesión.

Pero tengo un límite de conciencia en lo ideológico, que viene desde hace mucho tiempo atrás. En alguna oportunidad lo he dicho en el recinto y no quiero repetirlo. Voy a decir simplemente que en la Cámara de Diputados y en este Senado representé a mi partido, a la bancada oficialista, desde las comisiones de legislación del trabajo. En ese papel me ha tocado enfrentar debates y embates flexibilizadores y recortes de salarios o de adicionales, siempre con una profunda convicción que no puedo patear y dejar de lado en esta sesión de hoy, por grave que sea la situación, porque afectaría mi conciencia; lo repito. Mi límite está dado por los que menos tienen. Mi límite es afectar jubilaciones y retribuciones del Estado. Acá hay recursos alternativos; se los ha buscado y se los ha patentizado. Y hay voluntad de seguir buscando recursos alternativos en una economía castigada, donde es posible que cada impuesto que creemos en vez de producir lo que se dice, produzca mucho menos y que la recesión se acentúe. En definitiva, se trata de los que pueden pagar; los que no pueden hacerlo son los trabajadores del Estado y los jubilados argentinos.

Entonces, luego del esfuerzo que se hizo en la Cámara de Diputados, con la asistencia de los senadores para tratar de encontrar estos recursos, para evitar que las retribuciones y jubilaciones de menos de 1.000 pesos se vean afectadas, con todas estas limitaciones, voy a acompañar el tratamiento de la iniciativa, por la responsabilidad de ser oficialista y por disciplina del bloque. Pero no puedo acompañar una rebaja de salarios y de jubilaciones a los sectores que menos tienen. Haré el esfuerzo necesario para que la norma se vote hoy, porque soy consciente de que es necesario, pero hay límites que no puedo traspasar.

Sr. Presidente (León). — Tiene la palabra la señora senadora Raijer.

Sra. Raijer. — Voy a hacer dos o tres reflexiones. Estamos asistiendo hoy a uno de los más severos ajustes de la administración nacio-

nal con esta propuesta de rebaja de salarios y jubilaciones. Hace dos o tres semanas el gobierno propuso como estímulo a la economía el incentivo del consumo. ¿Cómo vamos a incentivar el consumo de esta manera? Hay otras formas que el gobierno tendría que buscar para equilibrar los presupuestos. Una de ellas es fácil e injusta: es ésta; y hay otra por la cual se debería lograr que los evasores paguen los impuestos. Hay 25 mil millones de dólares que se fugan al año. Hoy el gobierno está hablando de un Pacto de la Independencia. Es una paradoja, éste es el momento de mayor dependencia de la Argentina. La deuda externa nos ha quitado toda capacidad de decisión autónoma, de libertad y de dignidad.

El problema de la Argentina no es solamente el del déficit. Hay un problema de refinanciamiento de la deuda externa, de cómo distribuir mejor la riqueza, cómo hacer a la Argentina más competitiva. Estamos asistiendo al séptimo ajuste de este gobierno y no se pudo poner en marcha el país.

Es evidente que aquí no solamente tenemos un problema de tipo económico sino también uno de tipo político. Hay falta de confianza y de credibilidad en aquellos que conducen los destinos de la Nación. Y también se pide al peronismo que ponga su esfuerzo para sancionar este proyecto de ley. El justicialismo no fue votado para comandar este gobierno. Si hubiéramos estado en el gobierno, hubiésemos hecho las cosas de muy distinta manera para no llevar al país a esta situación dramática. Por eso no es justo atribuir al justicialismo la responsabilidad de salvar el país. Y nos tratan de obligar a votar medidas en contra de nuestras convicciones. Hoy están pidiendo únicamente que las cuentas cierren. Las cuentas tienen que cerrar, pero también es necesario que cierren los proyectos de vida, que cierren los proyectos comunitarios, que cierre un proyecto de Nación. Hay que restituir el tejido social en la Argentina, que está roto. Hay que restituir el tejido institucional que los mercados y las políticas neoliberales han dejado de lado.

Aquí hay responsabilidades, pero también se pueden hacer las cosas de distinta manera. Este gobierno tiene que tratar de combatir uno de los flagelos más importantes que hoy tiene la humanidad y nuestro país, que es la pobreza. Porque la pobreza no es solamente un problema

económico. Es una forma de ver el mundo, de percibir el tiempo. Es una forma de pensar y de proyectar. ¿Cómo es posible que haya una producción de granos de 72 millones de toneladas por año y que la gente se muera de hambre y los niños mueran por desnutrición? Por eso, aquí hay responsables. Se pueden hacer las cosas de otra manera; hay una responsabilidad que tiene este gobierno, el cual fracasó con su política fiscal, con su política de crecimiento y con su política económica.

Sin embargo, hay provincias que hacen las cosas de manera diferente. Represento a la provincia de Córdoba, en la cual se bajaron impuestos, se alentaron inversiones y se efectuó una consulta popular tendiente a disminuir los costos de la política. Es decir, hay cosas que se pueden hacer en la Argentina.

Por eso, considero que en nuestro país se unieron dos partidos para sacar al justicialismo del poder, sin un programa para gobernar y, evidentemente, los resultados están a la vista.

Sr. Presidente (León).— Tiene la palabra el señor senador Sager.

Sr. Sager. — Señor presidente: la verdad es que vine a esta sesión con un conjunto de ideas —plasmadas en algunos de mis papeles—, pero a medida que fueron exponiendo los diversos señores senadores, se ha ido enriqueciendo el debate. Es así que muchos de los conceptos que pensaba verter ya han sido expresados, tanto por señores senadores de mi bancada, como también del bloque oficialista. Ello me obliga a improvisar y a expresar algunas de las cosas que llevo adentro; a exponer conceptos con la mayor riqueza discursiva posible, aunque algunos no dispongamos de ella con igual fluidez que otros. Pero debemos ser capaces, al menos, de hacer llegar nuestra voz en este ámbito federal, a fin de transmitir lo que sienten aquellos que no tienen la posibilidad de salir en los cables.

Hoy, cuando comenzábamos esta sesión, dolorosamente hicimos referencia a un compañero que hasta hace tres o cuatro días prestó a este Senado ocupando una banca por la provincia de Santa Fe. En esa ocasión, algunos de mis compañeros hicieron referencia a una frase que él siempre solía repetir, o a proyectos que él supo llevar adelante, y nos invitó a acompañar. Quiero sumarme a una reflexión que él permanentemente hacía y que seguramente estará varias veces reflejada en sus discursos.

El "Chango" Funes hablaba de las dos Argentinas: de aquella de los 24 o 27 mil dólares per cápita, y de aquella de los 1.700 o 2 mil pesos per cápita. Yo vengo de esta última Argentina; de la segunda, del extremo norte, a miles de kilómetros de aquí. Sin embargo, en cuanto a los principios, mi discurso es exactamente igual al pronunciado por mi compañero de bancada, el señor senador Sala. Porque mientras hoy la Patagonia está bajo varios centímetros de nieve y la situación ha obligado a dicho legislador a reflexionar respecto de la equidad del ajuste, nosotros estamos saliendo de una crisis provocada también por un desastre natural. Estos desastres no generan la crisis, sino que la desnudan. Y este planteo, naturalmente, nos tiene que servir a todos.

Aquí se habló de equidad. Creo que ningún ajuste es equitativo. Todos son igualmente dolorosos. Pero algunos tienen el placebo de presentarlos de tal manera que aparezcan como menos sentidos. Entonces, si a ese ajuste inequitativo le agregamos que, al mismo tiempo, es recesivo, vienen a mi mente las palabras que vertimos algunos de nosotros cuando se nos convocó a votar la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo.

Recuerdo haber dicho, cuando la euforia de la gente impulsaba a muchos de los presentes en este recinto a dar el visto bueno, no a quien las pedía sino a quien las iba a ejecutar, que tuviéramos cuidado porque la euforia que motiva a mucha gente, por aparecer como la última oportunidad, si se ve frustrada se convertirá en desazón. Y hoy, esa gente, mencionada por los señores senadores Sala y Moreau, que pedían no votar el ajuste que se propone, es la que se encuentra movida en cierta manera por una gran desazón. ¿Y por qué está así? Porque, como en aquel momento, sigue teniendo una alta dosis de inseguridad. Sin embargo, aquélla era una inseguridad con una pequeña luz de esperanza. Ahora, es una inseguridad con desazón. Esto no hace más que agregar otra piedra a los inconvenientes y al difícil camino que los argentinos tienen por delante.

Es en este contexto que nuevamente somos convocados con urgencia y bajo presión a sesionar en este Senado. Y así es muy difícil diferenciar entre nuestras responsabilidades como legisladores, las urgencias de quienes deben llevar adelante las políticas económicas y los sentimientos de gran parte de la población.

Se nos ha convocado a partir de la necesidad de la búsqueda del déficit cero. Cómo no vamos a estar de acuerdo con este principio familiar. Y hablo de principio familiar porque es un concepto presente en lo que es la célula básica de la sociedad. Ninguna familia gasta más de lo que tiene. Y cuando lo hace comienza a endeudarse. Esto es lo que hemos hecho en algún momento, quizá con un criterio hasta dispendioso.

El concepto del déficit cero o del equilibrio fiscal es algo que no podemos dejar de compartir. Pero debe hacerse gradualmente ya que ni siquiera los países integrantes de la Unión Europea se han atrevido a conseguirlo tan bruscamente. Precisamente, el Tratado de Maastricht prevé que los países miembros lleguen a un déficit de 3 puntos del producto bruto, pero en el término de cinco años. Y si observamos que muchos de esos países tienen índices macroeconómicos mucho más sólidos que los nuestros y aún no han alcanzado esa meta, uno no puede menos que coincidir con la visión expuesta por el señor senador Moreau.

No sé qué pasaría con el avión yendo a 1.500 kilómetros por hora, pero si la velocidad es de 400 kilómetros y lo frenamos, seguramente se producirán muy serias consecuencias. Y las sufrirá no sólo el avión sino también los que en él viajan.

Entonces, frente al acto decisivo que habré de tomar hoy, debo preocuparme tanto por el avión como por los que están en su interior.

Decía a un colega que, frente a la realidad que vivimos, que nos mueve y nos conmueve, tenía muchas ganas de hablar sobre el lugar del que uno proviene y al que regresa todos los fines de semana.

Vivo en un pueblo de once mil habitantes, antiguamente de trabajadores y hoy de trabajadores y desempleados, lleno de gente con problemas y con esperanzas, que alguna vez me cedió la responsabilidad que les pedí para conducir sus destinos políticos.

Se trataba de una comunidad que en ese momento tenía serios inconvenientes económicos. Me dirigí a mis ciudadanos con propuestas, sabiendo que tenía que buscar ese equilibrio del que tanto hoy se habla, porque estaban comprometidos —además de la ciudadanía—, hasta los sueldos de aproximadamente cuatro meses de los empleados.

Alejándome absolutamente de una cuestión personal, pero teniendo en cuenta que este dé-

ficit cero lo tenemos que buscar en todas las escalas, puedo decir que se logró con muchísimo esfuerzo.

No hubo necesidad de cortarle el sueldo a los empleados, pero fue imprescindible que los dirigentes que estábamos a la cabeza diéramos señales.

En consecuencia, creo que además de este proyecto —cuya aprobación nos dicen que es de imperiosa necesidad para que mañana reaccionen positivamente los mercados—, habrá que dar otro tipo de señal.

En ese pueblito hubo que tomar decisiones, y quiero aclarar que también fue necesario tener coraje, tocar intereses intocables, salir a cobrar impuestos que antes no se cobraban, discutir y encuadrar a una sociedad en la búsqueda de esa equidad a la que me referí hoy —y a la que ningún ajuste llega—, y que quisiera que fuera menos dolorosa.

Llevó tiempo. Hubo sacrificios, costos, y se tuvo que poner en beneficio de la gente esa misma voluntad con la que no se había contado antes.

Por eso creo, señor presidente, además de votar este proyecto —respecto de lo cual aclaro que lo voy a hacer en forma negativa—, habrá que sumar a la voluntad de salir de esta crisis, el coraje cívico y la voluntad política de quien tiene que llevar adelante la conducción del país.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Eduardo Menem.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador San Millán.

Sr. San Millán. — Señor presidente: nos encontramos hoy aquí para considerar este proyecto mediante el cual, con el objetivo de arribar al déficit cero —principio de prolijidad presupuestaria que nadie discute— se efectúa un nuevo ajuste sobre el bolsillo de los más desprotegidos, afectando la vida y el futuro de miles de argentinos.

Para ello se nos ha convocado de urgencia. El gobierno, los bancos y algunos medios de comunicación vienen presionando, una vez más, para que aprobemos este proyecto, porque —según nos dicen— la Nación se encuentra al borde del abismo. Quiero apelar a la memoria de mis colegas. En efecto, no es la primera vez que se nos convoca a aprobar iniciativas del

Ejecutivo, bajo la amenaza de que si no le damos pronta sanción y sin modificaciones, daríamos un salto al vacío. Comenzó, a principios de la gestión actual, en diciembre de 1999 con la reforma de la Ley de Ministerios y el impuestazo; siguió con la Ley Antievasión, los compromisos federales (pactos fiscales), con la reforma laboral, también la Ley de Emergencia Económica, la Ley de Impuesto a las Transacciones Financieras y por último la concesión de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo. Todas estas herramientas, consideradas fundamentales por el gobierno para poner en marcha el país y solucionar los problemas fiscales o coyunturales, fueron concedidas por nuestra bancada, aun cuando muchos no estábamos de acuerdo con las mismas. Hoy, a un año y medio de gestión y pese a haber otorgado todos los instrumentos que se nos pidieron —en una actitud sin precedentes históricos por parte de la oposición—, parece que nos encontramos, nuevamente, al borde del abismo. ¿Que pasó? ¿Las herramientas que nos pidieron y que concedimos, no sirvieron? ¿No eran idóneas? ¿No estábamos, entonces, al borde del abismo y ahora sí lo estamos? ¿Nos mintieron antes? ¿Nos mienten ahora?

Ante esta circunstancia, en lo personal, quiero decir ¡basta! No puedo aceptar que, como consecuencia de la ineficaz acción de gobierno, se termine castigando una vez más a los sectores más desprotegidos, especialmente a nuestros jubilados. Este nuevo ajuste, vuelve a afectar a los empleados públicos. Pero si, por imperio del decreto 430/00, estaba vigente un recorte del 12 % a los asalariados del sector público, ¿qué necesidad había de aumentar la tensión social al solo efecto de elevar dicha deducción a un 13 %?

Por supuesto que estoy de acuerdo en una reingeniería del Estado tendiente a hacerlo más eficiente y menos costoso para el conjunto de la sociedad argentina. Pero este fin sólo se logrará con estudios serios y mediante la aplicación de metodologías apropiadas, pero nunca a través de la aplicación de hachazos salvajes e indiscriminados que, muchas veces, recaen donde no deberían. Y no es que no existan otros sectores de donde obtener los recursos que necesita la Nación sin afectar los ingresos de la gente, como por ejemplo mediante la eliminación de los recursos destinados a la publicidad del Estado, o gravando a las entidades financie-

ras en sus operaciones de *call money* y cuentas corrientes en el Banco Central; por qué los bancos no y si el tenedor de una cuenta corriente o caja de ahorro. Bajar las comisiones de las AFJP; que paguen impuestos a los bienes personales los que tienen domicilio en el extranjero y residen en el país, como lo hace cualquier argentino y como rige en todos los países del mundo. Este Senado, en actitud solidaria, no sólo ha recortado y ajustado en un 15 % su presupuesto anual, sino que sus integrantes nos hemos reducido parte de nuestros salarios, habiendo renunciado, también, a la percepción del aguinaldo y terminado con los gastos reservados. Resulta extraño que en un momento de ajuste generalizado que exige la solidaridad de toda la ciudadanía, el Poder Judicial no se haya puesto a la altura de las circunstancias, bajo pretexto de la intangibilidad de sus ingresos. Este principio de intangibilidad, consagrado por el artículo 110 de la Constitución Nacional resulta así interpretado con un alcance distinto al que originalmente tuvo en cuenta el legislador. En efecto, mediante el principio de intangibilidad de la remuneración, se consagra la independencia de las decisiones de los magistrados. Sin embargo, ello no autoriza a interpretar que los integrantes de ese poder del Estado puedan permanecer ajenos a los sacrificios que el país requiere de la sociedad toda. No parece, en definitiva, que una reducción generalizada en los ingresos de los jueces pueda afectar su independencia de criterio. Más grave aún es la situación de los sectores pasivos, ya que no sólo es injusta en virtud de la especial y precaria situación por la que atraviesan sino porque, a través de la metodología que se pretende implementar, se les está quitando su propio dinero, ahorrado a través de los aportes efectuados a lo largo de su vida laboralmente activa. Es la plata de los jubilados, no es la plata del Estado nacional.

Señor presidente: el incumplimiento a esta obligación implica una fuerte agravio a la seguridad jurídica y, por ende, a la imagen exterior del país que, por otro lado, tanto se trata de defender.

Además, atacar el salario y las jubilaciones implica una nueva caída del consumo y un agravamiento de la espiral recesiva, que terminará provocando una crisis mayor, más aún si consideramos que estos salarios y jubilaciones estarán condicionados al nivel de recaudación, por lo que nada impide que estos descuentos puedan aumentar, con lo que la incertidumbre e in-

seguridad de la situación de los asalariados generará una crisis social de consecuencias imprevisibles.

Nos están diciendo que del total que se recaude primero se pagará hasta el último centavo de los intereses de la deuda externa, cumpliendo así con los acreedores, y que luego se verá hasta qué monto se pagan las jubilaciones, los salarios y se atienden todas las demás necesidades de funcionamiento del Estado nacional. En la Argentina hay superávit primario. Si quitáramos del presupuesto de la Nación lo que se paga en concepto de intereses de la deuda externa, los ingresos superarían los gastos que anualmente realiza el Estado nacional. Por eso hay que plantear un tratamiento en serio de la deuda externa. ¿Qué estamos esperando para abordar, con responsabilidad y madurez, la negociación que el país tiene que llevar adelante y plantear a nuestros acreedores que nadie quiere dejar de cumplir los compromisos? ¿Por qué nuestros acreedores financieros tienen que ser la excepción?

Vivimos una situación claramente recesiva, y ésta es la raíz del problema. Aplicar estas recetas de ajuste —reducir salarios, jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y el pago a los contratistas del Estado— conduce al círculo vicioso que ya estamos viviendo: caída de la actividad, disminución de la recaudación, agravamiento del déficit fiscal y nuevo ajuste. Este es el sexto ajuste de nuestro gobierno.

Si estoy de acuerdo con que el país está en una crisis muy delicada, que es necesario un programa de equilibrio fiscal.

Sólo digo que el esfuerzo no lo pueden hacer una vez más los jubilados, los trabajadores, y los carenciados de nuestro país. Es necesario que por una vez el esfuerzo se reparta equitativamente en términos sociales y de capacidad económica.

Cuando se ataca el salario y a las jubilaciones las medidas se vuelven inconducentes desde el punto de vista económico, pues se provoca una nueva caída en el consumo y con esto se acentúa la espiral recesiva, llevándonos desgraciadamente a una crisis más grave.

Ningún país sale de la recesión con un ajuste recesivo, hay una sola manera de lograr este objetivo: haciendo crecer la economía.

Por último, debo señalar que nuevamente el sector financiero, uno de los pocos segmentos de

la economía que ha fructificado sus ganancias en los últimos años con tasas usureras, a expensas de la sociedad en general y del Estado en particular, ha sido excluido por el Poder Ejecutivo para hacer su contribución, circunstancia ésta que toma aún más inequitativo e irritativo el sentido del ajuste, ya que no se grava con el impuesto a los movimientos de las cuentas corrientes y operaciones de *call money*, que son préstamos entre los bancos para luego prestarlos a terceros, mientras que las cajas de ahorro de cualquier ciudadano, por humilde que sea, sí se gravan.

Es más, con el declamado combate contra la evasión, el gobierno ha contribuido a aumentar la bancarización de la sociedad, lo que no implica otra cosa que derivarle a las entidades bancarias nuevos e involuntarios clientes que aumentarán sus utilidades, sin que esto se vea reflejado en una proporcional baja de las tasas de interés.

También los sectores productivos que vienen soportando ajustes del gobierno, el que, mediante el recorte e incumplimientos en el envío de sus recursos, los empuja hacia el abismo de la desaparición. Un claro ejemplo de ello lo sufre el sector tabacalero, a quien se le han retenido los recursos correspondientes al Fondo Especial del Tabaco en forma arbitraria y desproporcionada. Ya nos cansamos de manifestar y defender que el Fondo Especial del Tabaco no es un subsidio, sino que constituye parte integrante del precio que debe recibir el productor por el tabaco ya entregado. Además, al ser un recurso con asignación específica, no puede ser utilizado para otros fines que no sean los previstos en la ley que le dio origen.

El Estado nacional adeuda al sector tabacalero más de cincuenta millones de pesos, recaudados con el fin específico de integrar el precio del tabaco ya producido.

Esto demuestra que el ajuste que lleva adelante el gobierno no sólo afecta principalmente a los sectores más desprotegidos sino que además, violenta el estado de derecho, generando una absoluta inseguridad jurídica, no cumpliendo con sus obligaciones legales. Para ello se pretende modificar códigos procesales, exonerando de responsabilidad a los funcionarios que actúan con la mayor arbitrariedad, cuando pretende impedir a los jueces la imposición de cargas pecuniarias personales a los funcionarios (última parte de los artículos 14 y 15 del proyecto).

Esto, en cuanto al carácter general de la ley. Habida cuenta de que a lo largo de su articulado se verifican una serie de aspectos con los que no concuerdo en razón a que los mismos evidencian graves distorsiones a los principios de equidad social, me reservo su consideración para el momento de su tratamiento en particular. En definitiva, si no se aceptan cambios en la ley, en cuanto a sustituir la rebaja de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares por gravámenes fundamentalmente a sectores de privilegio como el financiero, a pesar de estar totalmente de acuerdo con el déficit cero, voy a votar en contra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Arnold. — Señor presidente: a esta altura del debate está prácticamente todo dicho en cuanto a las diferentes posturas. Se han planteado con absoluta claridad jurídica, económica y política cada una de las posiciones.

He realizado un trabajo junto con mis asesores respecto del tema en discusión, cuya inserción voy a solicitar en el Diario de Sesiones, de modo que haré unas breves consideraciones.

Al día siguiente del dictado del decreto 896, presenté un proyecto junto con el señor senador Sala solicitando su derogación. Y parece que desde el punto de vista jurídico no estábamos tan equivocados, porque ya hay un juez que ha echado por tierra este decreto frente a algún reclamo que ha formulado algún sector afectado. Pero nuestro planteo no consistía en derogar este decreto debido a cuestiones jurídicas, sino porque nos dimos cuenta rápidamente de que perjudicaba una vez más a la gente. Por eso, adelanto que voy a votar por el rechazo de este proyecto de ley que viene de la Cámara de Diputados.

El senador Sala me quitó buena parte de mi discurso. Por algo somos patagónicos: aunque yo soy de un poquito más al sur: él viene de Esquel y yo de Río Turbio. De todas maneras, vivimos situaciones bastantes parecidas.

Cuando llegué a este Senado en 1998 no pensaba convertirme en economista ni en resolver los problemas financieros del país sino que venía como representante de miles de trabajadores de las empresas estatales que fueron privatizadas, algunos de los cuales recibieron en concepto de indemnización importantes sumas de dinero, pero como no fueron educados u

orientados para invertir esa plata, compraron un auto de alquiler o un quiosco y muchos se volvieron a su pago —la mayoría de ellos eran del Norte—, pero al poco tiempo volvieron, porque se habían gastado todo, y hoy forman parte de esa inmensa legión de desocupados con los que debemos vivir todos los días en muchos pueblos de mi provincia.

En aquel tiempo no pensábamos que hoy —extorsionados por esta mafia financiera— íbamos a estar tratando de ver de qué manera una vez más les reducimos el ingreso a aquellas personas que no se pudieron jubilar, ya que son jóvenes, y que hoy forman parte de la legión de desocupados, porque son viejos para el mercado laboral.

Entonces, sentados en estas bancas y en su representación, debemos ver de qué manera podemos frenar, con nuestra mayor fuerza, este nuevo atropello que sufren —reitero— no solamente los jubilados sino también los empleados estatales, que con este mismo gobierno ya han tenido que sufrir ajustes en sus salarios.

En ese aspecto —lo decía recién el señor senador Sala—, no voy a estar de acuerdo con lo que propone en ese proyecto de ley supuestamente correctivo el senador Moreau, que tan bien y coherentemente ha planteado su posición desde la Unión Cívica Radical. Creo que el piso no debe existir para las jubilaciones normales, aunque sí para el caso de las de privilegio, si es que todavía existe alguna.

El senador Sala lo decía muy bien. Los gendarmes que están en Esquel o en los hitos 50º, 45º, 38º, Lago Blanco, Escuadrón 39, Lago Buenos Aires, Río Mayo, no viven la misma situación de los que están aquí, en el edificio Centinela, de Buenos Aires. ¿Y saben cuánto cobran estos mismos gendarmes, cuarenta y uno de los cuales el otro día recibieron tiros y fueron heridos cuando se enfrentaron con los piqueteros que están cortando rutas, que es la forma de protestar de la gente, ya que no tienen otra manera de hacerlo? El 41 por ciento de la fuerza de Gendarmería Nacional gana 300 pesos.

Hace dos días se cumplió el 63º aniversario de la fuerza y tuve el honor de participar en el homenaje que se rindió a la memoria de un amigo comandante, a quien el año pasado se lo llevó el río Santa Cruz al tratar de sacar a una familia que había quedado aislada en una estancia de Comandante Luis Piedrabuena. Esos no son los mismos gendarmes que están por acá.

Entonces, ¿ustedes creen que son privilegiados los mineros del socavón del carbón en Río Turbio y los profesionales y técnicos, que aportaron efectivamente a través de toda una vida para jubilarse, y hoy cobran 3 mil pesos? Sí, seguro que no tienen pulmones, porque estuvieron respirando durante veinticinco años la carbonilla del socavón. Esos no son privilegiados.

Por lo tanto, no estoy de acuerdo con que se trate de la misma manera a situaciones distintas. Y otro tanto ocurre con el caso de las maestras, como también creo que lo señaló el senador patagónico Sala. Mis hermanas fueron maestras en escuelas de personal único, se jubilaron después de treinta y cinco años de trabajo y recuerdo que cuando salían de una escuela debían ir a caballo hasta el pueblo más cercano, como Alto Río Mayo, Alto Río Senguerr, Pasto Blanco, El Coyte, localidades que el señor senador por el Chubut debe conocer, porque están en su provincia. En consecuencia, ¿ustedes creen que aquellos que trabajaron durante treinta y cinco años, como mis hermanas, y hoy cobran 1.500 pesos, son privilegiados?

Asimismo, si es que se va a hacer esa norma correctiva, tampoco estoy de acuerdo con que se establezca un tope de 1.000 pesos; no tiene ningún sentido; no se puede hacer porque es absolutamente injusto. Si existe alguna persona de esas que juraron teniendo cuarenta años y al día siguiente se fueron de la función, pero aún siguen cobrando, no solamente tiene que devolver el dinero sino que, además, deben ir presas.

Deseo hacer otra consideración. Resulta paradójico que este vilipendiado cuerpo hoy sea llamado para salvar la gobernabilidad, evitando así el caos total, mientras que quienes ordeñaban y ordeñan la vaca muerta de los supuestos sobornos de esta casa siguen haciendo prensa, tratando de sacar algún rédito mediático de una conducta que está poniendo al país al borde del desastre.

¿Cómo me voy a convencer yo, que soy peronista, de que éste es el camino adecuado para resolver el problema si ni siquiera los integrantes de la fuerza gobernante pueden ponerse de acuerdo!

Días atrás, el doctor Terragno dijo algo que coincide con lo mencionado por el señor senador Yoma cuando expresaba que, si no había crecimiento, era imposible que esto funcionara. Les voy a leer brevemente un artículo titulado

La verdadera historia. Dice que, a propósito del gasto público, el posible candidato a senador Rodolfo Terragno hizo, en el programa "Contrapunto" de radio América, un razonamiento verdaderamente esclarecedor: "Por más que se controle el gasto —decía Terragno— hay problemas que son desbordantes. Mire; le hago un cálculo: usted suponga que se decide eliminar el Poder Ejecutivo, se elimina al presidente, ministros, secretarios, directores y, por supuesto, todo el personal de la Presidencia; de los ministerios, de las secretarías, absolutamente todo. Entes reguladores, también fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, la policía, todo. Y se elimina al Poder Legislativo con los legisladores, los empleados, los ñoquis y todo. Y el Poder Judicial, todo. Lo que ahorraríamos en sueldos no alcanza para pagar los intereses de la deuda. Entonces, cuando usted tiene esa situación, la idea de que va a resolver los problemas de la economía haciendo algunos ajustes —que hay que hacerlos— no es absolutamente para nada del todo cierta". Esto, reitero, es lo que decía hace pocos días el ex ministro Terragno.

Y el actual ministro de Desarrollo Social —el hijo de nuestro amigo el senador Cafiero— decía en otro periódico, bajo el titular *Juampi sigue confrontando*: "El verdadero riesgo país es el riesgo social, declaró ayer el ministro de Desarrollo Social, Juan Pablo Cafiero, en la localidad bonaerense de Ramallo". Más adelante sostiene que: "...El Estado no puede estar enfrente de las demandas sociales legítimas, sino junto a ellas". Y en otra parte del artículo se menciona que: "Cafiero aprovechó para reclamar nuevamente que 'se aplique todo el peso de la ley y aun la cárcel, a quienes están en la especulación financiera en contra del país'".

Pero además de lo mencionado por los integrantes del gobierno de la Alianza, quiero referirme a otras dos manifestaciones. Una es la del monseñor Alfonso Delgado, obispo de San Juan —de los pagos del querido presidente de nuestro bloque y del senador Losa—, que dice: "Hemos dilapidado alegremente hasta el fruto del trabajo de nuestros bisnietos, en una especie de carnaval de desorden de insensatez y de corrupción. A estas alturas nadie se anima a prestar un peso al Estado nacional o los estados provinciales o municipales. Ya nadie nos da ni la hora".

La otra expresión corresponde a monseñor Justo Laguna, obispo de Morón, quien también

dijo hace unos días que "no podemos de nuevo hacer ajustes que caigan sobre los que menos tienen. No pueden ser tocados los jubilados. Yo no tengo manías demagógicas, pero los jubilados son algo especial en nuestro país y en el mundo. Es gente que aportó con su trabajo, que construyó el país".

Para finalizar, digo que dentro de estos ajustes también se han incluido las pensiones para los discapacitados. Es decir que un minusválido que cobraba 80 pesos, luego de la aplicación de este ajuste va a percibir 69 pesos.

Solicito que se inserte en el Diario de Sesiones el discurso que tenía pensado hacer, en donde explico técnicamente por qué estoy en contra de cada uno de los puntos de la sanción de la Cámara de Diputados.

Por lo expuesto, anticipo mi voto categóricamente negativo y de rechazo a este proyecto de ley.

Sr. Baum. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por el Neuquén.

Sr. Baum. — Señor presidente: quiero adelantar que voy a votar por el rechazo de la ley, aunque ello me impida demostrar que otro hubiera querido ser mi voto. Hubiera querido votar un proyecto con un dictamen, tal como lo propiciara el miércoles pasado nuestro bloque cuando planteó una preferencia con dictamen. Seguramente que en ese despacho, juntamente con el oficialismo, hubiésemos podido construir consensos fuertes para incorporar aquellas modificaciones positivas que tiene la sanción de la Cámara de Diputados y, fundamentalmente, agregar lo que el señor senador Verna y muchos colegas que me precedieron en el uso de la palabra plantearon esta noche con tanta responsabilidad.

¡Cuánto me hubiese gustado que ese mensaje y discurso del señor senador Moreau fuese de la bancada oficialista! Estoy seguro de que, de ser así, otro hubiera sido el voto de este legislador de la Patagonia.

Por eso, voy a fundamentar muy brevemente mi oposición a la sanción de este proyecto de ley de ajuste. Tres son las razones principales. En primer lugar, porque se quiere realizar sobre las espaldas de los jubilados y de los trabajadores, y el peronismo al que pertenezco no puede ni debe avalar este camino.

En segundo término, porque se nos hace terrorismo financiero, con las consecuencias que

pagaría el país si se caen los mercados y explota aún más el riesgo país. Pero esto yo ya no lo creo. Quiero hacer una breve reflexión sobre algo que, desde el corazón y con preocupación por el país, nos dijo durante una discusión en nuestro bloque un señor senador, quien haciendo referencia al cuento del pastor y el lobo, mencionó lo siguiente: "Nos han mentido tanto, que yo tengo miedo de que ahora nos estén diciendo la verdad y realmente se nos caiga el país". Por mi parte, debo decir que mi razonamiento se inscribe en una actitud lógica, pero en la parte del cuento en la que se dice que no se cree, porque ya no creo. Después de tantas catástrofes incumplidas y de tantas veces que se nos dijo: "A votar o se cae el país", no creo que ahora vaya a ocurrir algo.

La tercera razón por la que me opongo a la sanción de este proyecto de ley es porque desde el Ministerio de Economía se descarta dogmáticamente y con un fundamentalismo mesiánico cualquier alternativa que desde el Parlamento podamos proponer para solucionar el déficit del país. Se elige lo fácil: cortar el hilo por lo más delgado.

Nadie está en desacuerdo con que tenemos que recrear la credibilidad en la Argentina y que ésa es una tarea de todos y por encima de cualquier interés partidario. Sin embargo, a la hora de trabajar, para levantar la imagen de este Senado de la Nación, revisando leyes como esta que hoy estamos tratando, en la que tenemos la responsabilidad de ser la Cámara revisora, se nos plantea que a la sanción de la Cámara de Diputados no se la puede tocar porque se nos cae el país.

Como manifestó el señor senador Sala, desde el bloque oficialista se argumenta que hay que apoyar la aprobación de esta iniciativa, porque lo pide el gobierno, y se dice que ésa es la responsabilidad del oficialismo en el Senado. Pero, por suerte, al mismo tiempo escuchamos voces duramente críticas que parten de la misma bancada sosteniendo lo contrario.

Una vez más manifiesto que todos estamos de acuerdo con el equilibrio de las cuentas públicas, con la sana administración y con esta política de Estado, como se define a la idea del déficit cero, pero no puede ser a costa de bajarle los haberes a los trabajadores y, mucho menos, a los jubilados.

Cuando en 1996 se hizo aquella famosa pueblada en mi Cutral-Có y en Plaza Huincul, en la

que nació esta nueva expresión social que son los piqueteros, ellos formularon un petitorio y una de las cuestiones que allí se planteaba era la necesidad de crear un régimen intermedio para aquellas personas que no cumplían con los requisitos establecidos por la ley de jubilaciones, es decir, 30 años de aportes y 65 años de edad.

Cuando manifesté que teníamos que presentar algún proyecto de ley de jubilación anticipada se me dijo que no tenía que caer en la demagogia. Ya se había vetado un proyecto del entonces senador Oraldo Britos, porque no tenía financiamiento. Entonces, nos pusimos a trabajar y presentamos una iniciativa respecto de la cual hasta tuvimos la delicadeza de no llamarla "de jubilación anticipada" sino "de régimen de retiro compensatorio solidario para los ex trabajadores de YPF". Allí establecíamos un financiamiento genuino. Las empresas petroleras tenían que poner 20 pesos de contribución solidaria voluntaria por cada trabajador activo. Pero tengo que decir con dolor que, a pesar de que se sancionó por unanimidad en esta Cámara de Senadores y en la de Diputados, el gobierno de mi partido vetó esta ley porque los señores empresarios del petróleo fueron a decirle al gobierno que se violaba la seguridad jurídica del país; que había derechos adquiridos con la concesión de las áreas petroleras que no podían lesionarse.

Me pregunto si una persona que aportó durante 30 años al sistema jubilatorio de nuestro país y a la que se le otorgó la jubilación, no tiene el derecho adquirido a cobrar ese haber. ¿No se está violando la seguridad jurídica del país al reducir el haber jubilatorio? Estoy seguro de que sí. Es por eso, lamentablemente, que debo votar por el rechazo de este proyecto de ley sin ver las cosas positivas que, como dije al comienzo, vienen incluidas en la sanción de la Cámara de Diputados.

Voy a rechazar esta norma, porque una de las pocas cosas que hoy les quedan a mi Cutral-Có y a mi Plaza Huincul desde el punto de vista de los ingresos, son las jubilaciones de cientos de mujeres y de hombres, ex "ypefianos", fundamentalmente.

Quiero volver a mi provincia sabiendo que con mi voto de rechazo a esta norma defendí los derechos de los jubilados de Cutral-Có y de Plaza Huincul.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra la señora senadora por San Luis.

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: en primer lugar, quiero manifestar que, indudablemente, estamos de acuerdo con el déficit cero; y no podría ser de otra manera cuando provengo de una provincia que fue una de las primeras que dio su ejemplo al país con el déficit cero y hoy tiene superávit.

Pero también debo señalar que hoy hemos venido a dar nuestro apoyo para que, a *contrario sensu* de lo que en forma reiterada la Alianza hizo en nuestra provincia a través de la Unión Cívica Radical y del Frepaso, este Senado pueda tratar sobre tablas este proyecto de ley.

Nosotros ya transitamos este camino, y cuando en su oportunidad tuvimos que sancionar la ley de emergencia, quienes hoy nos piden el apoyo para lograr el tratamiento de esta norma, fueron los que más fustigaron la brecha a recorrer para llegar hoy al superávit fiscal.

Nos impactaban con amparos, nos impedían las votaciones. Salían de la Cámara de Diputados y patrocinaban los amparos, nos hacían cadenas de campañas en las radios, etcétera. Esto es lo que primero resalto hoy y la diferencia de actitudes políticas y de actitudes responsables frente a la situación que vive el país. Pero también debo adelantar mi voto en forma negativa para este proyecto de ley porque, viniendo de una provincia que transitó todo este camino varios años atrás y lo hizo en forma indolora, no creemos que esta ley sea la solución o el camino correcto para llegar a cumplimentar el déficit cero.

Consideramos que hay otras medidas, otros procedimientos: que el ajuste debe venir por un real ordenamiento del Estado.

Un titular de la sección Economía del diario de "La Nación" de hoy consigna que existen once mil jubilados de más de ciento diez años. Hoy la Argentina cuenta con once mil treinta y tres personas que han logrado superar la barrera de los ciento diez años, aunque el promedio de vida sea de sesenta y ocho años. Todas ellas están cobrando jubilaciones. Según da cuenta el diario, esto proviene de una auditoría de la ANSES e, indudablemente, no se ha tomado ninguna medida al respecto.

Los caminos a recorrer son volver a sus justos límites el sobredimensionamiento del Estado, eliminar los gastos corrientes e impactar sobre los sectores que más tienen. Una justicia igual para los desiguales no es

justicia. No podemos con una ley atacar a los sectores más necesitados de la sociedad, resguardando a los viejos privilegios y a los sectores que indudablemente son los autores de los llamados golpes del mercado. Indudablemente es más fácil tocar una tecla y afectar a la inmensa mayoría de los asalariados en relación de dependencia con el Estado, a los jubilados y a los pensionados, que adoptar determinadas medidas legislativas puntuales y calificadas dirigidas a todos aquellos sectores que pueden afrontar y colaborar con mayor razón en esta crisis.

Recientemente decía monseñor Bergoglio, exactamente el 30 de junio, que la persona humana no puede convertirse en mercadería del sistema político, económico y social. Que la persona humana, el hombre y la mujer, son objeto y fin en sí mismos y no pueden convertirse en mercadería humana transformados en suma de proyectos. Indudablemente este proyecto, en la forma en que afecta a los trabajadores y al segmento de jubilados al cual va destinado, ha transformado a la persona humana en una mercancía. Hoy el ajuste pasa por los trabajadores. ¡Cómo vamos a apoyar nosotros un ajuste que pase por los trabajadores cuando en la provincia de San Luis se acaba de elevar el salario mínimo, vital y móvil a 550 pesos en el sector público! Consecuentemente sería una incoherencia y no una simple retórica discursiva. Sería una incoherencia viniendo de nuestra provincia y con el ejemplo que ella ha dado logrando el superávit fiscal mediante ajustes correctivos que se han dado en forma indolora y hoy se vuelcan a sus trabajadores. Hoy la provincia de San Luis no hace ajustes. Hoy no hay reducción de salarios; por el contrario, a partir del 1º de Mayo ha habido aumento de los haberes. Pero creo que tampoco debemos dejar de mencionar lo que Juan Pablo II le dijo al presidente Bush cuando se entrevistó con él la semana pasada. Le pidió que se globalice la solidaridad. Entonces, nos preguntamos si realmente este proyecto globaliza la solidaridad. Y la respuesta es que no. Porque globalizar la solidaridad implica establecer un régimen en el que los distintos sectores, a través de las distintas posibilidades, coadyuven para superar la crisis. Sin embargo, por el contrario, hoy resultan únicamente afectados los sectores de bajos salarios y de escasos ingresos.

Además, a través de los medios de comunicación nacional, hemos advertido que el famoso apoyo solidario que iban a realizar los sectores financieros estaba condicionado a que los señores senadores sancionáramos el proyecto de ley en tratamiento y a que no se afectaran sus derechos ni se les impusieran mayores impuestos.

Consecuentemente, nosotros no vamos a acompañar este proyecto de ley. No podemos acompañar la reducción de los salarios de los trabajadores. Hemos venido con responsabilidad política a brindar el quórum necesario y votaremos favorablemente el tratamiento sobre tablas de esta iniciativa. Pero no vamos a acompañar la sanción de este proyecto.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

Sr. Costanzo. — Señor presidente: seré muy breve.

Deseo expresar mi opinión con respecto a este proyecto de ley. Adhiero a todos los argumentos, fundamentos y consideraciones vertidos por quienes, como yo, consideran necesario rechazar esta iniciativa.

Creo que está absolutamente todo dicho. No quiero entrar en ningún tipo de redundancias. Por eso, solicito a la Presidencia la incorporación en el Diario de Sesiones de algunas reflexiones que he plasmado por escrito.

Por otra parte, quiero manifestar que mi coincidencia con quienes me precedieron en el uso de la palabra en cuanto al rechazo expreso de este proyecto, se debe a cuestiones técnicas, políticas, jurídicas y sociales.

También quiero hacer referencia a las expresiones vertidas en este recinto desde una visión de la región patagónica, porque nosotros también en nuestro Río Negro tenemos situaciones sociales de extrema gravedad. Hoy nos están golpeando muy duramente fenómenos climáticos que han agravado la situación de zonas importantes de nuestra provincia.

Los ejes centrales sobre los que se basa mi rechazo a este proyecto de ley son, sin duda alguna, su falta de justicia y de equidad.

Nadie puede estar en desacuerdo con el propósito de lograr un déficit fiscal cero, es decir, con que logremos vivir de lo que ingresa y con que el Estado no gaste más de lo que recauda. Pero establecer ese principio básico, primario y fundamental sobre la base de perjudicar a los que menos tienen, hace que este proyecto

carezca de los elementos éticos necesarios como para que podamos apoyarlo.

El señor senador Baum hizo referencia a la fábula del pastor y el lobo. Hice una reflexión similar en mi bloque, porque entendí que existía realmente una amenaza —como tantas otras veces—, en el sentido de que si no sancionábamos este proyecto de ley, el país sufriría situaciones de conflicto social, económico y financiero.

Y pensé desde una perspectiva de preocupación, ¿no nos pasará como en la fábula? ¿No vendrá el lobo ante la situación de extrema gravedad económica y financiera?

Pese a ello, aún en esta situación de crisis generalizada, pensamos que hay otros mecanismos y otros sectores de mayor poder económico y mejores condiciones sociales que bien pueden hacer su aporte para que el país supere esta situación de deficiencia o de crisis. Por otro lado, estoy preocupado por lo que ha ocurrido en los últimos días con la prensa nacional. Realmente, no me gustaría que apareciera el lobo.

No sé si, tal vez, estemos ante la alternativa de que la perversidad de alguien, que un día fue capaz de elaborar un anónimo, ahora quiera volver a cometer una tremenda actitud como aquélla, típica de un psicópata. Lo digo porque se ha puesto de manifiesto que este Senado quizá pueda entrar en mecanismos que, desde luego, rechazamos totalmente.

Cuando consideramos el proyecto de reforma laboral planteamos límites a la posibilidad de la reducción laboral y, además, se incorporaron reformas sustantivas que, según lo señalado por un señor senador, fueron revolucionarias. Sin embargo, ese anónimo generó una situación de investigación que puso en vilo a la totalidad de esta Cámara.

Hoy, justamente, se planteó en este recinto una cuestión de privilegio por dichos, manifestaciones o escritos de un periodista y un diario muy importantes.

Señor presidente: por la ilegitimidad y falta de fundamento ético del proyecto en consideración es que considero muy poco conveniente que asumamos un voto positivo.

Sin perjuicio de que voy a solicitar la inserción de algunas reflexiones en el Diario de Sesiones, nuevamente manifiesto mi voto negativo al proyecto de ley en consideración.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Mario Losada.

Sr. Presidente (Losada). – Tiene la palabra el señor senador Carbonell.

Sr. Carbonell. – Señor presidente: seré breve porque intentaré no reiterar conceptos que ya se han vertido por parte de miembros de mi bancada, con los que estoy de acuerdo, tanto para el tratamiento en general como en particular de este proyecto de ley.

Simplemente, quiero destacar algunas cosas que han quedado en el tintero con relación a la naturaleza de los contenidos de los títulos VI y VII, que constituyen el corazón, el meollo y el motivo de la actitud opositora y del rechazo conceptual por parte de mi bancada.

Cuando se enuncia la necesidad del déficit cero y se articula la propuesta del Poder Ejecutivo tendiente a achicar el déficit por la vía del ingreso y del gasto, se intenta aplicar, como en otras alternativas legales mal llamadas de emergencia, lo que en el derecho moderno se considera como la teoría del concurso del Estado.

El Estado no puede quebrar, no debe quebrar. Pero, a veces, frente a las circunstancias como las que vive la Argentina, el Estado no tiene capacidad para atender todos sus compromisos. Entonces, formula leyes de emergencia que neutralizan principios básicos del derecho y principios constitucionales y vulneran el concepto de que todos los pactos están para ser cumplidos en plenitud.

Este principio tan "cacareado" y defendido por parte de los juristas, analistas de la deuda, calificadores de riesgo y el gobierno –no sólo el actual, sino también el nuestro–, de darle seguridad jurídica a todos los que contraten con la Nación –a los inversores que hicieron inversiones y a todos los que de un modo u otro tuvieron que relacionarse con la Argentina en términos contractuales–, se vulnera lamentablemente a través de este proyecto por lo más débil y delgado.

Al escuchar algunas de las exposiciones, reflexionaba acerca de por qué se altera el principio de la seguridad jurídica respecto de los empleados estatales, y sobre todo de los pensionados y jubilados, defendiéndose tan a rajatabla la seguridad jurídica cuando se habla de circunstancias probadamente injustas –dada la evolución de sus negocios–, como es el caso de algunas concesiones de servicios públicos que se hicieron en la Argentina en la década pasada, las comisiones de las AFJP –a las que hizo referencia

algún senador del oficialismo–, o las certezas de la banca nacional y extranjera que opera dentro de nuestro país.

¿Por qué no se intenta un mecanismo para salir de la emergencia presupuestaria que tiene la Argentina de un modo más equitativo y justo? ¿Por qué no se vulnera la seguridad jurídica de un modo más extensivo, sin utilizar el modo fácil o el recurso más expeditivo como es alterar las remuneraciones de empleados estatales –que no son tantos–, pero sí lo son los aproximadamente tres millones de jubilados y pensionados que tiene el sistema previsional argentino?

La clase pasiva va a tener, como ya se ha dicho en el recinto, una inmediata y severa connotación en cuanto al consumo general. Y esta imperativa reducción del consumo va a redundar en una vuelta de tuerca sobre la recesión que hoy presenta la economía argentina.

Tenemos en claro que el déficit fiscal que, en términos internacionales, no es tan grave –el proyectado para este año, sin contar con estas medidas de ajuste, no llega al tres por ciento de nuestro producto bruto interno–, es una de las causas estructurales de la grave crisis argentina.

Pero creo que es mucho más grave el nivel de la deuda externa comparado con el de nuestras exportaciones. Y es más grave todavía el nivel de estancamiento de la economía argentina, que no crece desde hace tres años.

A pesar de esto, este déficit fiscal aparece como el gran condicionante para que las tasas de interés lleguen a niveles atractivos, y la actividad privada pueda volver a invertir y a imaginar negocios rentables versus tasas de interés.

Estas medidas de ajuste no sólo me parecen inequitativas respecto de lo que es la seguridad jurídica que tanto se declama sino también en cuanto a otras alternativas que podría utilizar rápidamente el Poder Ejecutivo para intentar el ajuste por el lado del gasto.

En general, coincido con las propuestas en materia impositiva que contiene esta ley. Reitero que mi oposición se basa en los títulos VI y VII; luego daré mis fundamentos.

¿Por qué no se han articulado desde el Poder Ejecutivo medidas de ajuste tomando en cuenta otros elementos irritantes del gasto público?

¿Por qué no hemos empezado, por ejemplo, recortando los aproximadamente cuatrocientos millones de dólares que están previstos para gastos de consultoría?

¿Por qué no pensamos en un nuevo régimen para el manejo de las universidades argentinas? Eso ya lo había anunciado el ministro López Murphy, con muy poca fortuna.

El Estado está gastando mucho y mal en educación terciaria. Eso ha fomentado el crecimiento de las universidades privadas, y el deterioro lento y seguro, además del descrédito, de la universidad pública en nuestro país.

¿Por qué no pensamos en anular o recortar contratos, de los muchos miles que se han generado durante este gobierno, desde el Poder Ejecutivo o de organismos dependientes de él, y que suman cientos de millones al cabo del año?

¿Por qué no se pensó también en fusionar, achicar o reordenar los entes públicos descentralizados, que gastan más de mil millones de pesos del presupuesto nacional?

Esto, a veces, ha escandalizado a los que hemos estudiado el tema porque tienen los sueldos más altos que, hasta ahora, pagaba el Estado nacional.

¿Por qué no pensamos que también la Presidencia de la Nación tiene que reducir en alguna medida los 450 millones de pesos que tiene asignados en el presupuesto anual para sus gastos? ¿Y por qué no nosotros, que tenemos que empezar a pensar seriamente cómo se achica y se reordena el gasto del Congreso de la Nación?

También los jueces, señor presidente, deberían pensar que en un estado de emergencia tienen que pagar impuestos y que hay algunos aspectos del gasto del Poder Judicial que tienen que ser reordenados en pos de este déficit cero tan necesitado y tan compartido por todas las fuerzas que se expresan en este Senado.

Creo que esto justifica plenamente mi oposición a los contenidos del título VI, que prevé esta francamente inequitativa, distorsiva y dañina reducción en los haberes de los pensionados y jubilados argentinos y también de los empleados del sector estatal.

Pero también me parece un absurdo el contenido del título VII cuando reforma el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Además de su francamente deficiente redacción —y algunos abogados procesalistas que brillan en este cuerpo sabrán a qué me refiero—, de un texto torpemente estructurado que tiende a preservar la liquidez del Estado, de los depósitos de fondos públicos, lo que es incomprensible es que este principio de preservación, por supuesto de

difícil consolidación en los tribunales, de dudosa constitucionalidad, se extienda también a los funcionarios, como lo dicen los artículos 14 y 15, en sus últimos párrafos. Esto parece puesto, además, con mayor torpeza y a las apuradas, por algún redactor de texto temeroso de alguna consecuencia en un eventual juicio de responsabilidad.

Y esto es realmente inadmisibile, señor presidente. Me refiero a que le estemos otorgando un *bill* de indemnidad a aquellos funcionarios que tienen responsabilidad respecto de sus actos de gobierno.

¿A qué se refiere el texto de la ley en estos puntos? ¿Qué clase de funcionarios quiere proteger? ¿A quiénes se quiere preservar de la acción de la Justicia? Esto me parece francamente inexplicable y, desde el punto de vista de quien lo propuso, inconfesable. Por eso también me voy a oponer a este concepto.

Porque creo que es tarde, que ya se ha dicho todo y porque no quiero ser redundante, voy a pedir la incorporación de algunos conceptos y sugerencias que, por escrito, he formulado. Pero quiero hacer una reflexión final sobre el funcionamiento de nuestro bloque. Es probable que el texto de este proyecto de ley —tan presionado por los medios, tan exigido por el Poder Ejecutivo, tan reclamado enfrentándonos con el abismo, la desaparición del país, la captura de los plazos fijos, la salida de la convertibilidad y tantas otras calamidades que se nos ponen delante—, termine siendo ley esta noche con la colaboración positiva y tácita de muchos senadores de la oposición.

¿Hasta cuándo el bloque mayoritario de este cuerpo, opositor con relación al gobierno nacional, va a seguir recibiendo cachetadas que muchas veces se extienden a la Cámara en su conjunto pero que, en general, se profundizan, se enfatizan y se acentúan cuando se habla del peronismo? ¿Hasta cuándo se va a seguir soportando esto, cuando realmente este bloque ha dado una lección de oposición inestimable en los anales de la historia parlamentaria argentina? Porque terminamos colaborando abnegada y solidariamente con todos los pedidos del Poder Ejecutivo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando la falta de simetría que existe en las provincias gobernadas por el justicialismo con relación a los bloques opositores de la Alianza? Estos bloques, cuando los gobiernos justicialistas

les requieren medidas de ajuste, medidas que a veces son dramáticas, para ordenar los presupuestos provinciales, apelan a la Justicia, a la Constitución, a los principios de Yrigoyen y de Leandro Alem, pero siempre se las ingenian para no dar quórum, para no estar en el recinto o para votar en contra. Si no, vean lo que ocurrió en Córdoba respecto de las medidas propuestas por el Ejecutivo provincial sobre la reforma estructural del Estado, tendientes a achicar el gasto político y público.

Creo que en algún momento hay que requerírsele al oficialismo en la Nación, que es opositor en muchas provincias, y a veces opositor ciego, irresponsable y que en ocasiones actúa de mala fe.

Espero que me escuchen y que reflexione el Poder Ejecutivo nacional, porque muchas veces —más allá de la buena fe y de la compañía, de boca para afuera, con los ajustes provinciales— no operaron adecuadamente con la Nación en tiempo y en forma a fin de tomar medidas que debían ser tomadas.

Para terminar, solicito que oportunamente se vote la inserción, cuyo texto haré llegar por Secretaría.

Sr. Presidente (Losada). — Así se hará, señor senador.

Tiene la palabra el señor senador Tell.

Sr. Tell. — Señor presidente: no quiero ser redundante respecto de lo que aquí se ha dicho en esta jornada histórica. Indudablemente, el proyecto sancionado por la Cámara de Diputados peca de los mismos vicios y errores que su antecedente, es decir, el decreto de necesidad y urgencia 896 de este año, cuya manifiesta ilegalidad pretende cohonestarse ahora, además, mediante la incorporación de componentes tributarios.

Desde mi punto de vista, la iniciativa llegada de Diputados merece un triple reproche porque es inequitativa, inconsistente e inconstitucional.

Es inequitativa porque pretende cargar sobre la espalda de los jubilados y pensionados de esta querida Argentina y de los empleados públicos, para toda la vida y de manera permanente, el costo del ajuste; con cuyo objetivo genérico "déficit presupuesto cero" estamos todos de acuerdo y a él adherimos, pero con otros contribuyentes.

Para su logro y más eficiente asignación —a la que se refería puntualmente el compañero

por Tucumán que me precedió en el uso de la palabra— se podría haber echado mano de muchas cosas como las que describió. Fundamentalmente, del proyecto que tiene sanción de la Cámara de Diputados y del que nunca nos acordamos por el gran lobby que hacen los medios, hoy tiburones de la comunicación en la Argentina. También pueden ahorrarse las cifras millonarias que paga el Estado nacional, más de 1.700 millones de pesos, en publicidad, en los contratos de los amigos y en las consultorías. Así podemos lograr un cúmulo de recursos de donde se podría haber echado mano.

Pero hoy se echa mano a lo que está más cerca, a lo que permanentemente este gobierno —y también el nuestro— con distintos proyectos intentó bajar: la jubilación y, fundamentalmente, el sueldo de los activos estatales. Por eso, también esta Cámara derogó el decreto 430 que hacía mucho mal a los trabajadores argentinos. Hoy se pretende pagar el costo de este ajuste con lo que comen los jubilados y los trabajadores argentinos.

La iniciativa es inconsistente, porque las mayores cargas tributarias y previsionales que consagra, sea por la vía del aumento de impuestos o por la postergación de reducciones ya decididas, no harán otra cosa que profundizar la espiral del estancamiento de nuestra economía. A eso debe sumarse el progresivo desfinanciamiento directo de la seguridad social bajo la forma de un intrincado sistema —si usted analiza concienzudamente el proyecto en tratamiento— impositivo que nadie entiende.

Fundamentalmente, lo más grave es que es inconstitucional, porque la veda que impone en la legislación procesal, que impide a los jueces dictar medidas cautelares cuando se vean afectados los intereses estatales, tal como está redactada la norma, lesiona gravemente la garantía del debido proceso.

Señor presidente: como decía recién, tampoco es la primera vez que se intenta esto. Ya lo hicieron; se intentó. Este cuerpo tan vapuleado tuvo que afrontar el embate de quienes hoy manejan las finanzas en la Argentina. Y en la misma línea ideológica se ha pretendido hacerlo con las futuras jubilaciones y pensiones, con los discapacitados —como acá se dijo— con las mujeres embarazadas. Esto es lo que no debemos permitir como peronistas.

El Poder Ejecutivo nacional, señor presidente, vuelve a las andadas, inspirando ahora un

contenido más amplio a esta medida que contiene la sanción de la Cámara de Diputados.

Por eso, así como el señor senador por Río Negro contaba la fábula del lobo, muchas veces he dicho en el bloque que a veces quisiera votar distinto por curiosidad, como lo voy a hacer esta noche. He acompañado cada una de las medidas que este gobierno necesitó. Porque es cierto que permanentemente se decía que había que votar una ley o caeríamos en el abismo. Hoy sinceramente, señor presidente, quiero ver qué pasa el día de mañana. Porque hemos sido presionados permanentemente. Hemos sido embestidos continuamente, por quienes manejan las finanzas, por quienes manejan los medios en la Argentina, convirtiéndose en el cuarto poder.

Hoy también adherí a la cuestión de privilegio relacionada con un medio cómplice de otros tiempos oscuros de la Argentina. Porque he tenido la responsabilidad de legislar sobre una iniciativa del Poder Ejecutivo que nos decía que, si no votábamos de tal manera, no bajaba la desocupación en la Argentina. Y hoy estamos encartados, señor presidente, por esa actitud.

Por eso voy a seguir siendo coherente con mi razonamiento gremial y mi sentir peronista. En esa iniciativa del Poder Ejecutivo prohibimos la baja salarial al sector privado. ¿Cómo vamos a pensar distinto respecto del sector público? También ahí cercábamos las posibilidades de despidos. Y también, en cada una de las distintas normas que hemos votado en este Parlamento cuidamos el sistema previsional argentino.

Por eso, señor presidente, en consonancia con mi propio partido, que en la época de la crisis mexicana no les bajó el sueldo a los trabajadores argentinos, poniéndoles inclusive un piso a los que ganaban más de dos mil pesos. ¿Cómo puedo pensar y votar hoy de manera distinta, si mi partido se nutre de los jubilados y de los más desposeídos de la Argentina?

Para ir cerrando, señor presidente, ya que hay más oradores, de manera contundente quiero que se tome expresa consideración de mi voto. Por esta razón, no quiero que el día de mañana un juez me impute haber participado en un acto ilícito.

Por eso voy a votar de manera negativa, señor presidente, y tome nota de mi voto en tal sentido, por los fundamentos que expresé.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Menem.

Sr. Menem. — Señor presidente: a esta altura del debate es muy poco lo que puedo agregar a lo que aquí se ha dicho.

No obstante, además de pedir la inserción de mis reflexiones sobre este proyecto de ley, donde en particular detallo todas las objeciones que me merece, no puedo dejar de hacer algunas consideraciones sobre el tema.

Debo reconocer, señor presidente, que desde el año 1983, que tengo el honor de ocupar esta banca en representación de la provincia de La Rioja, nunca me he sentido tan presionado, tan compelido, ni he experimentado esta angustia existencial en torno a la votación en favor o en contra de una determinada ley.

Hemos pasado por situaciones muy difíciles en estos 18 años de democracia, con debates larguísimos y días como el de hoy, en los que también debimos sesionar los sábados y domingos.

En la época del presidente Alfonsín recuerdo haber votado un presupuesto un día domingo, allá por septiembre, cuando más que presupuesto se trataba de una rendición de cuentas, pero lo teníamos que aprobar antes de que terminara el año parlamentario, también así, a las apuradas y con la angustia de sancionar un proyecto de ley.

Viene a mi memoria la consideración del Tratado del Beagle, que en su momento enfrentó a los argentinos y que generó tantas tensiones; había problemas entre partidos y en los bloques. Entre otros casos, también recuerdo el tratamiento de la reforma al Código de Justicia Militar, cuando debimos enfrentar votaciones tan importantes como las referidas a la Ley de Obediencia Debida y el Punto Final, donde nuestra bancada votó en contra; o el envío de naves al Golfo, en la época del conflicto. Si bien fueron debates trascendentes, nunca se nos planteó la situación de hoy: o se sanciona esta ley o viene el apocalipsis, o se aprueba esta ley o mañana el país estalla en pedazos.

A su vez, surge la presión de todos los medios de comunicación que le echan la culpa al Senado porque aún no se cuenta con esta ley, como si hiciera un mes que está aquí para su tratamiento. Y nosotros hemos aprendido a leer el mensaje: cuando se habla del Senado y de su culpa siempre se menciona al bloque de senadores justicialistas, porque somos mayoría.

Sin embargo, con esa responsabilidad hemos venido prestando la más amplia colaboración que jamás una oposición en la historia del país le haya dado a un gobierno, pese a los antecedentes de la oposición que hizo el gobierno de la Alianza, que utilizó todas las estrategias parlamentarias posibles para evitar que sancionáramos las leyes que permitieron sacar al país del incendio en 1989.

Como decía un senador del oficialismo: no es hora de echarnos las culpas, es hora de ver cómo salimos de esta crisis. Pero la crisis no es meramente económica, porque yo tampoco creo que con la sanción de esta norma se solucionen todos los problemas, ni mucho menos. Creo que la crisis es eminentemente política.

Entiendo que la falta de credibilidad y de confianza en nuestro país se suscita porque no hay confianza en el gobierno; porque éste ha sido el fracaso más estrepitoso que haya tenido un gobierno constitucional en la historia de nuestro país. Nunca un gobierno se desgastó tan rápidamente, nunca perdió tanto la credibilidad, nunca bajaron tanto los índices de aceptación de un gobierno, como con el actual. No lo digo en tono de reproche, es un dato objetivo de la realidad. Lo que ocurre es que fracasó la Alianza. Lamentablemente teníamos razón cuando decíamos que solamente se trataba de una alianza para ganar una elección y que no serviría para gobernar.

La Alianza se hizo pedazos al poco tiempo de asumir el gobierno porque no existía una coincidencia de programas, porque era nada más que un conjunto de partidos, sobre dos principales, que se unieron, solamente para reunir votos.

Era muy fácil escribir la "Carta a los Argentinos", era muy fácil diseñar los flashes de televisión para un publicista creativo que pudiera denostar al anterior gobierno y hacer creer que éste traería todas las soluciones.

Todo fue una defraudación para la gente que votó a la Alianza, pero no sólo para ellos, porque generó además una falta de credibilidad hacia afuera. Porque ¿qué credibilidad puede tenerse en un país en el cual un vicepresidente de la Nación renuncia a los diez meses de asumir el gobierno por una pequeña pelea, como la ocurrida entre los integrantes de la Alianza?

Recordemos cuando el bloque de la Alianza se empezó a hacer pedazos en la Cámara de

Diputados y cuando tuvieron que echar manos a funcionarios que habían sido denostados durante diez años.

Señor presidente: no se me puede hacer creer que el tema sea el de la deuda, tal como se ha dicho aquí, y que estemos mal solamente por la deuda externa, que ya no es externa sino pública, porque hay otros países que están mucho más endeudados que nosotros y no tienen estos problemas, hablo de países centrales que tienen un índice de endeudamiento mucho más alto que la Argentina con relación al producto bruto.

Aquí se ha dicho que el Tratado de Maastricht establece hasta un 60 por ciento de endeudamiento como límite para pertenecer a la Unión Europea, y la Argentina está en un 46 por ciento. Si vemos datos de otros países, podemos decir que España está en un 100 por ciento, Estados Unidos en un 56 por ciento, los Países Bajos en un 54 por ciento, el Reino Unido en un 49 por ciento, Suecia en un 48 por ciento, Finlandia en un 44 por ciento, y el menos endeudado es Suiza, con un 26 por ciento. Entonces, el tema no es solamente el de la deuda externa.

Pero, además, se ha dicho que el tema es el déficit; y, sí, es cierto, tenemos un déficit elevado: el 2,4 por ciento del producto bruto, pero tampoco es inmanejable, porque el mismo Tratado de Maastricht establece un 3 por ciento como tope del déficit. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos esos países a los que hice referencia también partieron de déficit elevados y han ido modificando el funcionamiento de sus economías hasta lograr el déficit cero e inclusive el superávit.

Entonces nuestro problema, señor presidente, no es que hayamos triplicado la deuda. Porque si es cierto que la deuda se ha triplicado, también lo es que se cuadruplicó el producto bruto interno. Entonces, cuando alegremente se dice que debemos 128 mil millones de dólares, también habría que recordar que nuestro producto bruto es de 280 mil millones de pesos o de dólares. Yo recuerdo que cuando terminaba el gobierno del doctor Alfonsín la deuda declarada era de 60 mil millones —de hecho, era mayor—, pero había un producto bruto de 90 mil millones de pesos, o sea que el endeudamiento era mucho más grave en aquel entonces.

Señor presidente: si no admitimos que si bien la crisis tiene una consecuencia económica también tiene una raíz de índole política, nunca va-

mos a saber cómo solucionarla. Entonces, más allá de las medidas que se tomen, lo importante es que el gobierno sepa que es a él a quien no se le cree y no a las posibilidades de la República Argentina.

Ya han detallado mis compañeros de bancada todas las veces que este bloque votó a favor o al menos permitió la sanción de las leyes propuestas por el gobierno. No las voy a repetir. También han detallado todas las oportunidades en que se advirtió que el tema de la crisis no se supera con medidas recesivas. Lo advertimos en diciembre de 1999 y a comienzos del 2000, cuando dijimos que el "impuestazo" y el recorte de los sueldos no eran un buen camino porque traían más recesión y el problema de la Argentina, precisamente, era la recesión.

Estuvimos más de dos años sin crecer. Pudimos soportar las crisis del "tequila", la del sudeste asiático, la de Rusia y la del Brasil. Cuando en el último trimestre del 99 habíamos empezado a salir de la recesión, vinieron las medidas que nos volvieron a sumergir en ella. Porque además, el gobierno de la Alianza trajo un mensaje desalentador. Ya en ese entonces, señor presidente, se hablaba de que estábamos al borde del abismo. En vez de tratar de salir de la recesión y de tirar buenas ondas decía que estábamos al borde del abismo. Ponían énfasis en la magnitud del déficit y en los errores del gobierno anterior. Así fuimos cayendo cada vez más. Ahora no se sabe si realmente ya estamos en el abismo o al borde de él. No sabemos si esta norma que hoy se propone, que ha sido criticada con tanta razón, realmente nos permitirá salir del abismo o evitar que caigamos en él, pero esto es responsabilidad del gobierno.

Este bloque de senadores justicialistas va a seguir actuando con la misma responsabilidad. No va a poner palos en la rueda. Yo ardo en deseos de saber qué habría hecho la Alianza como oposición si hubiéramos estado en la misma situación. Pero nosotros hemos aprendido del general Perón que primero está la patria, después el movimiento y luego los hombres.

Por eso actuamos con la mira levantada. Sabemos que si no se sanciona la ley, mañana no se le va a echar la culpa al Senado sino al bloque justicialista; se va a decir que somos responsables de la eventual hecatombe, de que hay

más fugas de depósitos, más retiros de los bancos, que hay menos inversión y menos credibilidad. Sin embargo, repito, la raíz de esta crisis es netamente política.

Pero, además, nos angustia la situación de nuestras provincias. Se nos ha dicho que, si no se aprueba este proyecto de ley, no vamos a recibir un peso en nuestras provincias para poder cumplir con nuestras obligaciones; y a quienes venimos de provincias desfinanciadas, con graves problemas, esto nos angustia muchísimo porque estamos realmente abrumados. ¿Con qué cara vamos a ir a nuestras provincias si se nos dice que por culpa de no aprobarse esta iniciativa no se le pueden pagar los sueldos a los empleados públicos de los estados provinciales? Entonces, estamos ante una encrucijada muy difícil y tenemos que actuar con la mente fría.

Por supuesto que no podemos dejar de señalar que este proyecto de ley tiene gravísimos errores. ¿Cómo vamos a aceptar calladamente que se nos recorten sueldos y jubilaciones? Obviamente que no lo aceptamos. ¿Cómo vamos a aceptar silenciosamente esa modificación al artículo 34 de la ley 24.156, que significa introducir en una ley permanente un mecanismo de emergencia? Claro que está mal. ¿Cómo vamos a aceptar normas inconstitucionales como esta que recorta jubilaciones, introduce reformas al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, inhibiendo la posibilidad de que se adopten medidas cautelares? ¿Cómo vamos a hablar de que no hay derechos irrevocablemente adquiridos?

Esta es responsabilidad del gobierno, de quienes proponen esta ley. Nosotros se lo advertimos; no vamos a precipitarlos al escenario apocalíptico, pero tampoco vamos a callarnos frente a los graves errores y peligros que encierra esta iniciativa, porque seguramente más de una de sus normas van a ser atacadas de inconstitucionalidad.

La mayoría de nuestros gobernadores nos han pedido que facilitemos la sanción de este proyecto de ley porque, de lo contrario, muchas provincias mañana mismo corren el riesgo de caer en cesación de pagos, con los conflictos sociales que ello traerá aparejado.

Por eso, en esta instancia, yo voy a exigir una respuesta categórica del presidente de la bancada oficialista acerca de los compromisos que la Nación ha asumido frente a las provin-

cias. Algunos de ellos están contenidos en ese denominado Pacto de la Independencia, del 17 de julio, que se encuentra firmado; pero otros constituyen compromisos de honor del gobierno nacional para con los estados provinciales.

Me refiero a cinco compromisos puntuales: la garantía de cumplimiento del Fondo Fiduciario, comprometido en el acta firmada con el presidente De la Rúa por 1.000 millones de pesos; la efectiva refinanciación de los vencimientos de capital del semestre, incluido el correspondiente a julio —tal como se había contraído el compromiso—; un reconocimiento de la deuda por la diferencia de los tres puntos del IVA, cuando el impuesto pasó del 18 al 21 por ciento, mediante la emisión de certificados a dieciséis años; la emisión del bono federal por parte del Fondo Fiduciario por cuenta y orden de cada provincia; y el último, pero no menos importante, el cumplimiento de todos los pactos especiales entre la Nación y las provincias. Y digo último, pero no menos importante, por cuanto mi provincia tiene firmados pactos especiales con la Nación en materia de asistencia financiera.

El presidente de la Nación y los funcionarios de rango inferior se han comprometido a respetar estos acuerdos; se lo han prometido a nuestros gobernadores. Por eso, solicito al presidente de la bancada radical que en este acto manifieste si avala y certifica que se van a cumplir. Le solicito que informe si tiene conocimiento del compromiso y si ellos avalan con su palabra su cumplimiento.

Sr. Presidente (Losada).— Señor senador por La Rioja: ¿usted desea que el señor senador Agúndez le responda ahora?

Sr. Menem.— Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Losada).— Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Agúndez.— Señor presidente: cuando a través de los medios hoy me enteré de estos cinco compromisos mencionados por el señor senador por La Rioja, le pedí al señor jefe de Gabinete de Ministros que me informara al respecto, y él me contestó que ellos forman parte de compromisos anteriores entre la Nación y las provincias.

En cuanto al tercer compromiso, es decir, el reconocimiento por parte del gobierno de la deuda con las provincias por los tres puntos del IVA no coparticipado, cuando dicho gravamen pasó del 18 al 21 por ciento mediante la emisión de

una deuda certificada a dieciséis años, por unos 1.200 millones de pesos, está contemplado en un compromiso del anterior gobierno, que data de 1995.

De todas maneras, en cuanto a los cinco compromisos citados por el senador Menem, el señor jefe de Gabinete de Ministros me informó que se quiere cumplir con todos. Por lo tanto, como no puedo dudar de mi gobierno, entiendo que fue positiva la respuesta que se me brindó.

Sr. Presidente (Menem).— Continúa en el uso de la palabra el señor senador Menem.

Sr. Menem.— Señor presidente: agradezco muchísimo al presidente de la bancada del oficialismo su ratificación del compromiso asumido, porque dentro de esta situación tan difícil que vivimos nos hace alentar la esperanza de que esta vez se van a cumplir, ya que anteriormente, pese a estar contemplados en los pactos, ello ocurrió. Por eso manifesté nuestra preocupación.

Finalmente, el justicialismo asume una vez más su responsabilidad como partido de la oposición. Es el rol que nos ha dado el pueblo argentino cuando votó a la Alianza para ser gobierno y nosotros respetamos las reglas de juego: que la Alianza gobierne el país durante la totalidad del período constitucional para el cual fue electa y nosotros seguiremos ejerciendo una oposición responsable, lo cual significa advertir cuándo se toma el rumbo equivocado.

Por otra parte, y como algo obvio, les solicitamos que si el proyecto en consideración es aprobado esta noche, procuren hacer de él un uso racional y equitativo, que cause los menores sacrificios posibles a nuestra gente y que traten de ser ecuanímenes.

No desconocemos que vivimos un período preelectoral; por lo tanto, esperamos que también sean ecuanímenes a la hora de repartir recursos a las provincias, que las hay gobernadas por la Alianza y por el justicialismo.

Ya que estamos frente a un proyecto tan cuestionado y discutido con toda razón, esperamos que no se convierta en un instrumento para aumentar una injusticia, algo que no estamos dispuestos a tolerar.

Finalmente, solicito que se inserte en el Diario de Sesiones el análisis particular que pensaba realizar sobre el instrumento en consideración.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Sapag.

Sr. Sapag. — Señor presidente: a esta altura de los acontecimientos no queda ninguna genialidad por decir. Solamente quiero puntualizar que hago más las palabras del señor senador Baum, con quien comparto una gran cantidad de ideas y la preocupación por la gente de nuestra provincia.

También coincido con las palabras pronunciadas por los señores senadores Verna, Yoma, Sala, Moreau y, aunque parezca mentira, con las del señor senador Maglietti, con quien tantas veces he discutido.

Por otro lado, debo decirle al señor miembro informante del oficialismo, cuando citó un artículo periodístico que decía que la conducción política debía tener conciencia, que la cosa no es tan fácil. Pareciera que solamente la clase política debe tener conciencia; ella no se le reclama al sindicalismo ni al periodismo. En este sentido, un periodista aparentemente de deportes, anteanoche se dio el lujo de decir que eran flacos los sobres que nos habían ofrecido para llevar adelante este acto patriótico. Se trata de un periodista gordito al que, indudablemente, se ve que la grasa también le tapó el cerebro.

Debemos vivir con la agresión permanente de una situación en la que nos meten a todos en la misma olla y por la que quieren destruirnos a nosotros y también a la clase política.

Hablar de la reforma política es fácil. ¿Por qué no hacemos como los militares, y dejamos solamente al presidente de la República? Más reforma que ésa no se puede hacer. ¿Para qué vamos a tener al Senado y a la Cámara de Diputados, si solamente producen gastos? Además, según muchos de estos señores, no representamos a nadie.

Creo que están errando el camino con este proyecto. Se están equivocando al pensar que a la gente le importan los mercados, porque en realidad le interesa saber cómo va a subsistir, qué seguridad de trabajo le vamos a dar, cómo va a seguir educando a sus hijos o cómo va a ser el futuro. Sin embargo, nosotros no estamos dando ni una proyección al día de mañana.

A esta altura de la noche, reitero, ya no hay genialidades. Simplemente digo que mi voto va a ser negativo, porque camino por el país, por mi provincia, hablo con sus habitantes y entiendo que la gente no está preparada para un pro-

yecto como éste. Espero que agudicen el ingenio y se imponga la inteligencia. Para hacer una reforma política se tienen que preparar alternativas afuera del Estado.

Un funcionario sacó a relucir la espada de los "ñoquis". Quisiera saber qué estamento del Estado no está recargado de empleados. Me gustaría conocer qué gobernación, municipio o comisión de fomento no tiene exceso de personal. Esto se produce porque no existe alternativa afuera del Estado. Si la opción es bajar el sueldo o reducirle a los jubilados sus haberes, para mí ésas no son alternativas.

Para los jubilados no debe existir un piso de 500, 1.000 o 1.500 pesos. La clase pasiva que cobra 1.500 pesos ha trabajado durante toda su vida para disponer de esa jubilación; ha hecho los aportes con sacrificio y, entonces, no merece que le efectúen descuentos sobre sus haberes. Si existen jubilaciones de privilegio creo que hay que identificarlas y hacerles el descuento. Pero no hay que tocar a los hombres que hicieron los aportes correctamente.

En consecuencia, vuelvo a reiterar mi voto negativo al proyecto que estamos considerando.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Preto.

Sr. Preto. — Señor presidente: no tengo duda alguna de que hoy es uno de esos pocos días en la vida de los hombres en que hay que tomar decisiones fuertes. No sólo estamos presos de nuestro sentido común sino que, además, somos esclavos de nuestro conocimiento.

Y digo esto porque en diciembre de 1999, cuando el presidente Fernando de la Rúa tuvo la gentileza de visitar a los senadores de los partidos provinciales —cortesía que lamentablemente nunca más se volvió a repetir—, realizamos un cordial debate acerca de lo que el gobierno pensaba hacer a partir de la asunción de su mandato.

En esa corta charla me permití decirle con todo respeto al presidente Fernando de la Rúa —y el señor senador Sapag fue testigo de ello—, que si pensaba iniciar su período de gobierno aumentando impuestos, haciendo ajustes aislados en lugar de propiciar una profunda reforma político-administrativa del Estado y exagerando la herencia recibida para lograr un resultado electoral —que luego los números demostraron que no era la que se decía, porque se hablaba de 11 mil millones de dólares de déficit, y este sólo alcanzó aproximadamente los 6.970 millones—, tendría que vivir con-

firmando y cambiando a sus ministros de Economía. Además, le señalé que ante esa situación, la incipiente reactivación que por aquel momento se insinuaba se iba a transformar en recesión e iba a profundizarse. Y finalmente le dije que iba a tener serios problemas de gobernabilidad para contener y llevar adelante al país en los términos que estaba planteando hacerlo.

En aquella circunstancia y desconociendo la realidad —la terca realidad que nunca cambia—, quizá yo hubiera actuado igual. El presidente se sintió algo molesto con mis palabras; entonces, se levantó y simplemente se fue. El senador Sapag me hizo una broma al respecto, diciendo que me había salido de adentro mi corazón de economista.

Sr. Sapag. — Así es.

Sr. Preto. — Hoy estamos aquí tratando una vez más de lograr el objetivo de sancionar una ley que no satisface a nadie y a mí tampoco.

Quiero equivocarme, pero estoy cerca de creer que, a partir de mañana, una vez sancionada esta norma —si es que se aprueba—, solamente un milagro de gobernabilidad y de ejercicio de la autoridad que se prolongue durante el tiempo suficiente para lograr el efecto que se busca con este proyecto, va a permitir que la Nación Argentina no caiga en lo que quienes tenemos el conocimiento para ello lamentablemente prevemos que puede llegar a ocurrir.

Hubiera preferido no estar discutiendo acerca del salario de los empleados públicos o de lo que percibirán los jubilados de nuestro país, que está muy lejos de ser una dádiva por parte del Estado, ya que es el fruto del trabajo y del esfuerzo proyectado en años de aportes, en un sistema solidario de derecho público que hace al interés de que nuestros ancianos, cuando lleguen al ocaso de sus vidas, cuenten mínimamente con qué sustentarse. Aunque también entendemos que la mayoría de las jubilaciones argentinas está muy lejos de ese objetivo.

Pero estamos debatiendo este proyecto de ley en lugar de discutir en profundidad los problemas estructurales que tiene la economía de nuestro país, de manera tal de lograr, de una vez por todas, que un esfuerzo y un sacrificio más de los argentinos, o de un sector de ellos, sirva para siempre, para que no tengamos que aprobar —por supuesto que para esa ocasión no voy a prestar mi voto— nuevos ajustes y medidas que van a ser absolutamente inconducientes.

A fuer de extenderme en mi exposición, deseo hacer algunas apreciaciones acerca de lo que pretendo decir cuando me refiero a los problemas estructurales de nuestro país. En primer lugar, está la evasión impositiva. Diariamente, leemos en publicaciones de todos los niveles que se evaden anualmente en nuestro país 25 o 30 mil millones de pesos de impuestos. Ahora bien, si sabemos quiénes los evaden, porque los conocemos cuando efectuamos el cálculo de los números, ¿por qué no los vamos a cobrar?

Recuerdo cuando Carlos Tacchi —y pido perdón por lo que voy a expresar, pero quiero repetir sus palabras— dijo que iba a hacer mierda a los evasores. Carlos Tacchi hizo bastante en contra de ellos, pero él —que descansa en paz— está muerto y los evasores están tan saludables como siempre.

En la Argentina se declara mucho sobre la evasión fiscal, se habla mucho de combatirla, pero, evidentemente, los poderosos intereses que hay detrás de ella, a lo que agregaría la todavía desorganizada ubicación en la que se encuentra el Estado para atacar este grave problema de los argentinos, ha hecho que la evasión impositiva sea una realidad que nos agobia. Y nos agobia mucho más cuando hablamos de las jubilaciones o del salario de los empleados públicos y sabemos que, con el 8 o el 10 por ciento de esta cifra, que no es ningún porcentaje descabellado podríamos, en lugar de estar discutiendo esta iniciativa, pensando en cómo pobres contra pobres van a solucionar el problema de la Argentina.

Creo que ésta ha sido una deuda pendiente de muchas administraciones y continúa siendo una deuda pendiente de este gobierno nacional para con los argentinos.

En segundo lugar, quiero referirme al problema cambiario que nos agobia mucho más de lo que creemos. La Ley de Convertibilidad no implica sólo la paridad cambiaria sino también la posibilidad de disponer de cuentas corrientes en divisas extranjeras y recibir y girar moneda extranjera desde y hacia el exterior. También asegura la paridad cambiaria, que por aquel entonces mereció, a tenor de las autoridades de turno, la calificación a la que todos los argentinos nos aferramos como a una bandera incontrastable: un peso igual a un dólar.

Hasta el día de hoy un peso es igual a un dólar, solo que debemos ser conscientes de cómo hemos llegado hasta aquí para sostener esta

paridad cambiaria. A nadie se le escapa —y mucho menos a mí— que el factor psicológico condicionante o potenciador en aquella oportunidad era un fuerte componente para reactivar la economía y aventar la duda de los argentinos de que un peso era igual a un dólar. Pero creo que faltó un debate serio acerca de las posibilidades de sostener en el tiempo esa situación.

¿Por qué digo esto? Porque si las cosas en el mundo hubieran seguido otro curso, la paridad cambiaria no hubiera resistido más de un par de años.

Entre los años 1992 y 1994 el entonces presidente Bush quería ser reelegido y había nombrado como presidente de la Reserva Federal a un señor que hasta el día de hoy usamos como parámetro de muchas de nuestras evaluaciones. Alan Greenspan quería colaborar con la reelección del ex presidente Bush reactivando la economía y reduciendo los índices de desempleo, para lo cual debía mantener bajas las tasas de interés. Por aquel entonces, el ex presidente Clinton lo advirtió en su campaña y utilizó aquel slogan tan peyorativo: "Es la economía, estúpido". La gente de Clinton advertía que ya era tarde para sostener la economía bajando las tasas de interés, porque ésta ya estaba en recesión, lo cual llevó a Bush a perder las elecciones.

A los argentinos nos sirvió porque durante más de dos años tuvimos tasas en los Estados Unidos lo suficientemente bajas como para que la paridad cambiaria en la Argentina no sufriera los embates que, de otra manera, no podría sostener. Además, por aquel entonces, tuvimos el aliciente de que pusimos en venta el grueso de las empresas ahora privatizadas. Obviamente, también nos ayudó el hecho de que los inversores norteamericanos perdieron el incentivo de comprar títulos públicos de su país y prefirieron invertir en los países emergentes para buscar otro tipo de rentabilidad.

Paralelamente, en el año 1994 Brasil revalúa su moneda en un 40 por ciento y esto nos permite tener un nuevo verano para seguir sosteniendo la convertibilidad. Sin embargo, en 1997 y 1998 las tasas empiezan a subir en los Estados Unidos, y Brasil devalúa su moneda, lo que provoca una importante asimetría en el intercambio comercial con la Argentina.

Es así que si en 1999 hubiéramos sido capaces e inteligentes, deberíamos haber realizado aquella salida ordenada de la convertibilidad

—que también declamé aquí hace quince o veinte días— de manera tal de evitar que el parámetro de la paridad cambiaria se transforme en un corsé de hierro que aprisione cada vez más a la actividad económica argentina, especialmente la dedicada a las exportaciones.

El otro gran problema estructural que tenemos que resolver es el déficit previsional, señor presidente. Y uno de los principales parámetros por el cual el déficit fiscal de la República Argentina está en los valores insostenibles que estamos discutiendo permanentemente los argentinos, tiene que ver pura y exclusivamente con el déficit previsional. Este nace, obviamente, de un interés legítimo: cambiar un sistema quebrado —el sistema de reparto— por un nuevo sistema que con el tiempo le permitiera a los argentinos tener sus ahorros lo suficientemente protegidos como para poder contar con una jubilación que fuera sostenible en el tiempo y todo lo decorosa y digna que merecían quienes aportaran a ese sistema.

Esto se acompañó también con reducción de aportes patronales. Se decía en aquel entonces que se lo hacía a los efectos de hacer más competitivas a las empresas, especialmente a las exportadoras, y al mismo tiempo permitir a las empresas privatizadas cobrar tarifas más baratas a los usuarios, de manera tal que el bolsillo de los argentinos no sufriera un embate por esta vía.

Lo más lamentable, señor presidente —y digo esto sin poner en duda alguna la buena fe y la intención de quienes trabajaron en este aspecto— es que llevaron el esquema adelante y lo pusieron en marcha, pero la historia y la terca realidad —insisto— nos volvieron a demostrar que se habían utilizado cuanto menos parámetros equivocados para evaluar las consecuencias que esto iba a traer.

Esto es así, señor presidente, porque se pensaba y se creía que en el año 2000 el déficit, producto del cambio del sistema previsional, no iba a superar los 2.000 o 2.500 millones de dólares, cuando la realidad nos demostró que hoy estamos en el orden de los 9.000 millones de dólares; es decir, unas cuatro veces más de lo que se había estimado.

En este punto, señor presidente, voy a hacer un reproche tanto a las calificadoras de riesgo como a las instituciones financieras que utilizan determinados parámetros para evaluar la economía argentina.

Como bien dijo aquí el senador Menem, la Argentina, medida en los fundamentales parámetros del Tratado de Maastricht, cumple perfectamente con todos ellos. Tiene reservas holgadas y suficientes en el Banco Central, su endeudamiento no equivale a más del 45 por ciento del PBI, con el agravante de que los mismos países, las mismas evaluadoras de riesgo, los mismos inversores y sus asesores técnicos y financieros que le pidieron a la Argentina dar este paso trascendental, hoy deberían tener en cuenta que parte del déficit estructural argentino, parte del endeudamiento total nacional, ya sea interno o externo, es producto precisamente de la transición entre el viejo y el nuevo sistema.

Además, para que un sistema muriese debía nacer otro, y ese otro debía nacer sano y fuerte y debía ser financiado. Y así se nos dijo, que se nos iba a financiar el tránsito de ese sistema, pero cuando descubrieron que los números eran demasiado elevados nos abandonaron a nuestra suerte.

Hoy, torpe y arteramente, porque sí sirve a algunos sectores de la especulación financiera, se utilizan éstos parámetros sin evaluar por separado lo que es endeudamiento público producto del gasto público y del déficit fiscal por esta vía, y lo que proviene lisa y llanamente del déficit previsional por el cambio de sistema.

Si esto fuera así —y todos los medios especializados coinciden en ello—, sinceramente, la Argentina merecería otra calificación crediticia y no estaríamos enfrentando hoy el fantasma de la cesación de pagos que nos rodea en forma continua.

Señor presidente: podría hacer muchas más enunciaciones, pero creo que la urgencia de la hora no permite que me explaye más sobre los problemas estructurales que, además de los mencionados, nos llevan a discutir hoy este proyecto de ley tal como ha venido de la Cámara de Diputados.

Nadie duda de que los ajustes siempre son recesivos por la sencilla razón de que —como en el caso que estamos analizando ahora— se pagan salarios, jubilaciones y se sostiene el gasto público total no sólo con la recaudación tributaria sino también con financiamiento. Y como el financiamiento ha desaparecido, esa porción de la torta, esa parte de los recursos, no lo tenemos más; entonces, obviamente, el Estado se

ve obligado —por alguna vía— a distribuir menos dinero; en este caso, también entre los asalariados y los jubilados. Por lo tanto, esto implica una medida recesiva.

A su vez, los ajustes siempre son inequitativos, injustos y, además, cuando llegan tarde y mal, hasta son aberrantes. Considero que estamos frente a un ajuste aberrante: porque llega tarde y bastante mal, señor presidente.

Como bien dijo aquí el senador Sala —cuya expresión creo que ha sido producto de largas charlas que hemos tenido al respecto—, los ajustes no se hacen en épocas de crisis sino de bonanzas.

¿Qué hacen los norteamericanos cuando creen que se va a recalentar su economía? Rápidamente corrigen la tasa de interés para lograr el efecto contrario o toman otras medidas correctivas.

¿Quién no recuerda hace unos años atrás, durante la administración Clinton, cuando en momentos en que no tenían el presupuesto aprobado, durante una semana o diez días despidieron a los empleados públicos por falta de fondos. Fue una medida muy dura, muy drástica. Pero en los países a los que muchas veces usamos como parámetros y admiramos en diversos aspectos —aunque en otros preferimos no ser como ellos— siempre es válido aquel concepto que los abogados siempre esgrimen: *dura lex, sed lex*, la ley es dura pero es la ley; y lo primero que se debe hacer es cumplirla en todos los niveles y órdenes.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Honorable Senado, senador Jorge Yoma.

Sr. Preto. — Los norteamericanos cumplen con la ley y por eso tienen un país previsible y son lo que son y tienen la economía que tienen y, además —por decirlo de algún modo—, se dan el lujo de ser los gendarmes del mundo. Han adquirido la fortaleza económica, la viveza política y el sentido de oportunismo —en el buen y mal sentido de la palabra— para manejar todas las variables que se les ocurre de manera de que estén siempre al servicio de sus intereses.

Lejos de eso, señor presidente, nosotros siempre estamos actuando tarde y mal sobre la coyuntura que se prolonga en el tiempo y nunca se agota.

En este punto, deseo hacer una reflexión y quiero que me escuchen bien todos aquellos que van a estar involucrados en el ajuste relacionado con la ley que estamos considerando.

Hoy, nos encontramos frente a dos posibilidades concretas: una de ellas es que se sancione el proyecto tal como está redactado. Si ello ocurre, tal vez podamos aventar la posibilidad de que esta vez el lobo llegue en serio. Quizá podamos lograr que mañana los mercados reaccionen bien, que las variables económicas empiecen a tomar un rumbo distinto y que las calificadoras de riesgo nos empiecen a mirar con otros ojos. Pero, fundamentalmente, debemos tratar de que el Estado cumpla con el nuevo contrato social adquirido a partir de la sanción de esta ley. Debemos respetarlo y cumplirlo, de manera tal que en los próximos meses volvamos a tener ese mínimo de credibilidad que los argentinos necesitamos para recuperar el crédito mínimo suficiente que, a partir del equilibrio fiscal, el déficit cero y el crédito acotado, nos permita mantener a la Nación a flote hasta que pueda reactivarse la economía privada, ese formidable motor, que es el único que va a permitir llevar adelante a la Nación como tal.

No debemos equivocarnos, señor presidente; a la actividad privada no le podemos pedir más nada. Le hemos pedido impuesto sobre impuesto, que ajuste sus salarios, que baje sus gastos, que baje sus costos, que haga todos los esfuerzos y sacrificios; y los ha hecho.

Entonces, señor presidente, ésta es la hora en la cual el gobierno nacional debe demostrar, en un elemental ejercicio de la autoridad, que lo que nos está pidiendo lo va a cumplir, de manera tal que los argentinos tengamos un futuro previsible en el tiempo y que nos permita salir de esta coyuntura realmente deplorable en la que estamos metidos.

Y, si sancionando este proyecto de ley permitimos eso, obviamente los salarios y los recursos de los jubilados que hoy están siendo sometidos a un descuento porcentual se recuperarán y ese porcentaje se va a ir achicando con el tiempo hasta volver a cero, cuando cada uno cobre su salario o su jubilación y las cosas empiecen a funcionar por carriles más normales.

Eso va a ser así de lograrse el efecto esperado de esta ley, por la conducta del Estado y de los actores que giran alrededor de ella.

Si esto no es así, señor presidente, aun con la ley caeremos en el abismo; ese abismo significa la cesación de pagos primero y la devaluación monetaria después.

Y en este punto quiero hacer una reflexión. ¿Qué significa el salario para cada uno de los que lo perciben? El salario tiene dos parámetros fundamentales de evaluación: el salario visto como unidad de cuenta, como valor nominal, y el salario visto como unidad de valor, es decir, qué poder adquisitivo tiene, cuánto podemos comprar con él.

Cuando todos los meses, con la convertibilidad y con la supuesta fortaleza —entre comillas— que todavía tiene nuestra moneda, recibimos en nuestro sobre 500, 800, 1.000, 2.000 o la cifra que sea, habremos recibido un valor nominal, el que el contrato laboral ha estipulado que debemos percibir. Pero nada nos asegura que con ese valor nominal, tomado el salario como unidad de valor, podamos adquirir todos los meses las mismas cosas para atender las necesidades de nuestra familia, de nuestros hijos, cumplir con nuestros compromisos o pagar nuestras deudas y demás.

Pero lo más lamentable, señor presidente, es que tanto un default como una devaluación nos llevarán inevitablemente a la pulverización del poder adquisitivo de los salarios.

¿Quién no recuerda en la República Argentina las desgastantes negociaciones entre sindicatos y empresas, entre el Estado y las organizaciones gremiales, para lograr nuevos salarios en su factor nominal que llegaban con dos, tres o cuatro meses de atraso, mientras día a día la hiperinflación se iba “comiendo” el valor adquisitivo del salario de los argentinos? Y eso es lo que nos va a volver a pasar si caemos en default primero y en devaluación después.

Solamente una devaluación ordenada, previsible y desde un Estado con sus cuentas ordenadas y previsibles puede hacer racional el sostenimiento del poder adquisitivo del salario.

Al respecto, podemos citar el caso de Ecuador, que cayó en cesación de pagos y no quiso devaluar pero, después de hacerlo varias veces, dolarizó la economía. ¿Cómo está Ecuador hoy? Con el mundo desarrollado de espaldas, con salarios de 20 o 30 dólares, con cero crédito y en una situación que, honestamente, no quiero imaginar para ninguno de los argentinos.

Si no aprobamos el proyecto de ley y ocurre todo lo que suponemos que va a ocurrir, de to-

das maneras no vamos a tener salario, porque va a estar absolutamente depreciado por las consecuencias que acabo de puntualizar.

Por esta razón, señor presidente, y por muchas otras sobre las que no me quiero extender porque creo que lo avanzado de la hora anterior que de una vez por todas finalicemos esta sesión, voy a dar mi apoyo crítico a esta norma. Voy a votar afirmativamente en general y en particular sólo y exclusivamente con el íntimo convencimiento de que los argentinos estamos frente a un abismo que debemos cruzar, pero que podemos hacerlo solamente en dos pasos, señor presidente.

Así, a tenor de lo que el gobierno asegura que con esta ley vamos a crear, pondremos un punto invisible en el medio para cruzar ese abismo y no tener que sufrir todas las consecuencias mencionadas y muchas otras que me he permitido no enunciar para hacer más breve mi alocución.

Por esa única razón, señor presidente, para no sentirme responsable el día de mañana de que el país efectivamente haya caído en todas las calamidades que seguro van a ocurrir, voy a acompañar esta norma. Y como ya manifestaron muchos otros señores senadores, quiero ver qué va a hacer el gobierno con esta ley. Quiero ver si va a ser capaz de ejercer la autoridad suficiente como para que produzca el fruto esperado en el menor tiempo posible, y así los porcentajes se vayan reduciendo aceleradamente, de manera que volvamos al salario y a la jubilación plena. De lo contrario, asistiré atónito a la confirmación de que el gobierno una vez más no supo aprovechar esta formidable oportunidad que le hemos vuelto a dar para tener en sus manos una herramienta que, según su propio decir, será la solución para todos los males de la Argentina.

Sr. Presidente (Yoma). — Tiene la palabra el señor senador Massat.

Sr. Massat. — Señor presidente: con este ajuste aberrante, como dijo el señor senador Preto, estamos viviendo una noche en que se va a consagrar uno de los más graves retrocesos sociales.

La reflexión en el sentido de que no se debe gastar más de lo que se tiene es racional. Por eso, debemos hacer un llamado para que cada uno de nosotros asuma la conducta debida, y también lo haga el Estado. Pero de ninguna

manera, señor presidente, puede intentarse el logro del equilibrio fiscal o del déficit cero ajustando jubilaciones miserables de 300 o 400 pesos. De ninguna manera, señor presidente, puede buscarse el equilibrio fiscal o el déficit cero disminuyendo los salarios de los trabajadores.

El debate de esta noche ha sido uno de los más profundos en los que he participado en este Senado. Hoy hemos tenido el coraje de profundizar y de analizar puntualmente las cuestiones que vivimos en la Argentina, así como los problemas que podemos llegar a enfrentar.

En este sentido, dentro de las alocuciones de los oradores que me precedieron en el uso de la palabra, que han constituido en todos los casos mensajes y piezas oratorias extraordinarias, quiero rescatar particularmente dos: primero, la de un colega de mi bancada, el compañero Sala, realizada con un profundo sentido social y tal vez leyendo el sentimiento de cada uno de los senadores peronistas. En segundo lugar, la de un integrante de la bancada oficialista, con un análisis técnico crítico hacia lo que son las políticas de su propio gobierno.

Hoy deberíamos estar modificando este proyecto de ley, señor presidente. Deberíamos haber tenido el coraje para modificar esta ley, porque me parece que hoy pasamos la raya de lo tolerable en lo que se refiere a las decisiones parlamentarias y deberíamos haber tenido el coraje de comenzar a discutir la refundación de la República, porque se debe discutir, con objetivos que sostengan la integridad de la Nación, el equilibrio fiscal, el déficit cero. Pero observamos, lamentablemente, nichos de grandes negocios de la Argentina que siguen siendo un privilegio; y esta noche vemos la indefensión de miles de humildes jubilados que van a sentir la decisión de este Senado de una u otra manera. Y quiero decirles que, tal vez, las presiones de todos estos días y el temor nos llevó a los peronistas a estar sentados en estas bancas, votando en contra pero con racionalidad.

Me parece que debemos comenzar a tomar conciencia de que el Parlamento debe cambiar su actitud, debe dejar de tener una actitud pasiva en la política de la Nación y comenzar a plantear ideas con rigor. Quiero decir a los señores senadores del oficialismo que nosotros lo tuvimos a Cavallo de ministro; en muchas ocasiones nos planteó que era la ley o el precipicio y, entonces, lo acompañamos con nuestro voto.

Anteriormente, el senador Moreau decía sobre el sistema privado de jubilaciones que ese mismo ministro —que llevó adelante la idea y que nosotros acompañamos— hoy está vulnerando el sistema. Los jubilados o los aportantes al sistema privado de jubilación están viendo vulnerado su futuro y eso lo discutíamos en el bloque peronista. Más del 70 por ciento de los recursos de la Administradora de Fondos de Pensión lo tiene el Estado nacional.

Estas son las cosas que tenemos que rever y debemos ponernos los pantalones largos desde el gobierno. Hay mensajes de apoyo y a ellos debemos acudir. Escuchábamos al presidente de Francia Chirac que decía que no va a dejar caer a la Argentina y que va a acompañar. Y también decía el primer ministro de Italia, Berlusconi, que va a acompañar a la Argentina. Pues bien, que esta crisis no se profundice. Junto al presidente de la Nación —y con él a la cabeza— nos debemos sentar en los próximos días a discutir con los países poderosos de la Tierra una nueva situación para el país, porque en eso coincidimos con el senador Moreau en el sentido de que con esta deuda internacional, con las condiciones que nos imponen, no vamos a poder salir, por más que le saquemos cincuenta pesos a un jubilado o treinta o cincuenta pesos a un trabajador público. Si no rediscutimos en forma madura y racional la deuda de la Argentina, la Nación no va a salir. En todos estos días no se escuchó hablar a los hombres del gobierno sobre una sola idea para la reactivación, una sola propuesta para el trabajo y la producción. Y estamos viendo con preocupación que hay proyectos de competitividad que constituyen privilegios sectoriales. El Parlamento debe tener al respecto una actitud mucho más dura.

El justicialismo ha tenido actitudes altamente positivas. Hemos acompañado al gobierno desde que el presidente De la Rúa asumió el poder en representación de la Alianza. Sin embargo, hasta ahora han tenido nada más que desaciertos.

Creemos que, a partir de esta noche, se produce un punto de inflexión. A partir de ahora debemos comenzar a pensar, más allá del déficit, de la capacidad del gobierno, en actitudes mucho más rigurosas por parte del Parlamento.

Hace poco tiempo hemos delegado facultades legislativas en el Poder Ejecutivo. Pero hoy vemos, a veces hasta con burla, que dicho poder abusa de esas delegaciones.

El señor senador Verna ha señalado que se ha modificado la Ley de Ética. Incluso, se han hecho muchas más modificaciones. Por eso, quiero llamar a la reflexión a los hombres del gobierno y al propio presidente.

Hoy, tal vez se sancione un proyecto de ley que establezca una emergencia permanente. Es algo que no existe en ninguna parte del mundo. Se deben buscar las correcciones inmediatas. Es una aberración establecer una emergencia permanente. Y, más todavía, si dicha norma afecta a los más débiles: a los jubilados y a los trabajadores.

Me parece que el acompañamiento que ha brindado hasta hoy el justicialismo —hoy también, con algunos gobernadores de rehenes— va a tener que cambiar, por el bien de todos. Porque la madurez que vamos a adquirir a partir de esta sesión nos permitirá tener el coraje de comenzar a decir que no a ciertas cosas y a aceptar otras.

Hay ajustes posibles en el sistema financiero argentino, aquel en donde están los nichos de las ganancias y de los negocios. Pero, otra vez, no nos hemos atrevido a tocar a ese sector.

Si queremos un país con una actitud distinta, debemos comenzar con una base ideológica diferente. La Argentina así, no tiene futuro. Cuando desde el poder del Parlamento afectamos a los más débiles porque tenemos miedo de que la situación se desmorone, siento que la Argentina no tiene futuro.

Por eso, espero que esta noche, que es triste y que lo será mucho más para millones de ciudadanos argentinos, sirva para plantear un punto de inflexión y para comenzar a discutir la refundación de la Argentina con una base ideológica distinta.

Sr. Presidente (Yoma). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Cafiero. — Señor presidente, señores senadores: ya se va agotando este largo y ciertamente rico debate. Y ya podemos extraer algunas conclusiones.

La primera de ellas es que el oficialismo no necesita oposición. La tiene dentro de sí, con una agresividad y una virulencia que nunca tuvo por parte de los genuinos opositores.

Otra conclusión es que si se pretende creer que este esquema del déficit cero y sus consecuencias sociales van a ser remediados por el señor presidente de la República, con todo el

respeto que me merece su persona y su figura, les recuerdo que el señor presidente de la Nación ha dicho que va a dar la vida por este modelo y por esta política económica que hoy debatimos entre nosotros.

A los operadores del mercado, que están siguiendo este debate tan ansiosamente como los jubilados y los empleados públicos, y que están pensando qué posición tomarán a partir de las ocho o nueve de la mañana del próximo día, les diría que no crean demasiado en el discurso de la izquierda progresista del radicalismo, cuyo propósito es más bien de tipo mediático.

Mi experiencia me dice que, generalmente, este tipo de discurso termina por coincidir con los intereses del statu quo y que se anula. Por lo tanto, les diría que no tomen decisiones apresuradas. Todavía queda mucho por debatir y aún falta la votación del proyecto en consideración.

No quieran imponernos mañana el castigo de los mercados si es que este Senado no aprueba esta noche el proyecto de ley en revisión, en un anticipo de lo que será nuestra decisión dentro de muy poco tiempo.

Señor presidente: el fenomenal filósofo político Max Weber decía que los hombres políticos están ganados por dos tipos de ética: la de las convicciones y la de la responsabilidad.

La ética de las convicciones es esa promesa que hemos hecho al iniciar la vida política de sustentar determinados valores. Acá he visto bien expresada esa ética de las convicciones a través de las exposiciones de algunos colegas. Pero no es suficiente para la vida pública. También existe la ética de la responsabilidad. Es decir que no siempre podemos hacer valer el plexo de nuestras convicciones cuando encontramos obstáculos estructurales creados por la misma realidad.

Claro que rendirse a la realidad es rendirse al statu quo. Claro que rendirse a la ética de la responsabilidad es aceptar en cierta forma el inmovilismo y es traicionar nuestra vocación política, si es que hiciéramos de ella el patrón exclusivo de nuestras decisiones y accionar político.

Pienso que muchos de los que estamos en este recinto nos hallamos tironeados por ambas éticas. Y como hay muchos que provenimos de un partido que hizo de lo social su bandera fundamental y su valor paradigmático, lo queremos imponer frente a cualquier otra realidad que se

nos quiera mostrar como opositora o inconveniente a nuestras convicciones. Pero también hay otros que, ganados por la llamada ética de la responsabilidad, caen en un inmovilismo que no es propio de quien asume la vocación política.

Escuché decir al señor senador Massat, y creo que también hubo una referencia del señor senador por Tierra del Fuego, que este cuerpo tiene una deuda pendiente. Nunca hemos hecho un debate a fondo, ya no sobre la República que deberíamos construir sino sobre las causas por las cuales atravesamos este problema.

¿Por qué la Argentina está sumergida en esta crisis? ¿Es que los argentinos padecemos alguna suerte de mal metafísico o tendríamos que escribir entre nosotros aquel libro famoso que leíamos en los años sesenta, *El male latino*, que narraba las desventuras de las que hoy son potencias, Francia e Italia? ¿Es que los argentinos hemos iniciado una introspección a través de algún autor como Marcos Aguinis que acaba de publicar el libro *El atroz encanto de ser argentino*? Hay algo para lo que, por ahora, no tengo respuesta, porque nadie se lo explica en el mundo.

Acuérdense de aquello que decía Samuelson, en el sentido de que en el mundo existían cuatro clases de países: los desarrollados, los subdesarrollados, Japón —que nunca se sabrá por qué se desarrolló— y la Argentina —que nunca nadie explicará por qué se subdesarrolló—.

¿Cuáles son las causas de esta situación que estamos viviendo? Hay dos expresiones muy claras que en los últimos días hemos tomado de los diarios. El señor Paul O'Neill, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, acaba de decir sobre los argentinos, muy suelto de cuerpo, que no tenemos ninguna industria de exportación que valga la pena, que nos gustan las cosas así y que nadie nos obligó a ser como somos. Esto es lo que dice un alto funcionario gubernamental de una potencia que tiene impuestas 1.306 barreras paraarancelarias para impedir la exportación de productos argentinos al mercado norteamericano.

Eso es lo que dice un funcionario de un gobierno que gasta 350 mil millones de dólares en subsidios para su producción agrícola, en abierta violación de las disposiciones de la OMC, inyectando esta competencia desleal que tanto daño le causa al valor de nuestras exportaciones.

Otro comentarista—por supuesto mucho más agudo—, Paul Krugman—probablemente el economista más notable de este tiempo—, señala que lo que resulta sorprendente sobre la crisis política y económica de nuestro país no es tanto su gravedad, sino que es asombroso ver el castigo que se le está aplicando a un país que hace apenas tres años era el orgullo de Wall Street, a pesar de que su deuda, en realidad, no es tan grande comparada con el tamaño de su economía nacional, y cuyo déficit presupuestario es relativamente modesto, producto de una depresión económica por la que se ve obligado a un drástico recorte del gasto que agravará aún más esa caída. Para Estados Unidos eso resulta intolerable.

Pero los banqueros de Nueva York le dicen a los argentinos que no tienen otra alternativa.

Y eso viene de Washington—y no de la administración Bush, que se mantuvo misteriosamente en silencio mientras la Argentina se desmoronaba—, de los *think tanks*, los tanques del pensamiento conservador, que ayudaron al país a meterse en una camisa de fuerza monetaria.

Por eso digo, señor presidente, que nos falta este debate, el cual no es ideológico. Es un debate más bien metodológico para tratar de entender por qué la Argentina, que tuvo un desempeño bastante satisfactorio en la primera mitad de la década del 90, hoy se encuentra en esta situación crítica que la ha colocado al nivel de los países altamente subdesarrollados del mundo.

¿Tendremos que decirnos, como lo hacía Scalabrini Ortiz en *El hombre que está solo y espera*, que todo lo que nos rodea es falso e irreal; que falsa es la historia que nos enseñaron, falsas las creencias económicas de las que nos imbuyeron, falsas las perspectivas mundiales que nos presentan, falsas las disyuntivas políticas que nos ofrecen e irreales las libertades que los textos aseguran? Cuando caemos en esta suerte de decepción colectiva, estas frases dichas en los años 30 se vuelven de perentoria realidad y actualidad.

Coincido con el señor senador Menem, cuando dice que nunca en su vida política ha debido legislar bajo una extorsión como la que estamos viviendo esta noche los hombres que integramos este cuerpo.

Tenemos, y lo estamos experimentando, un fantasma. Como decía Carlos Marx o el Mani-

fiesto Comunista del 48, un fantasma recorre el mundo: el comunismo. Hoy decimos que un fantasma recorre la Argentina: el default. Claro que el default lo vemos en el incumplimiento de nuestras obligaciones internacionales. Pero también hay un default social, uno político, uno cultural, un default ético. Son muchas las causas que hoy agravan la situación de los argentinos.

Este es el séptimo ajuste que hace este gobierno, señor presidente. Y después de un año y medio de gestión no se puede decir que esto es herencia recibida. Acá lo han dicho otros oradores y yo no los voy a cansar. Pero, en el año 99, el producto bruto interno era de 283 mil millones y este año se calcula que será de 279 mil millones. El producto per cápita, que en 1999 fue de 7.744 dólares, hoy es de 7.458 dólares. La producción industrial bajó, entre diciembre del 99 y junio de este año, un 6,2 por ciento. La deuda externa subió de 145 mil millones a 153 mil millones. La deuda pública de la Nación y la provincias, en porcentaje del producto bruto, subió del 50,1 al 57,3 por ciento. La deuda pública de la Nación subió de 121 mil millones en 1999 a 135 mil millones en 2000.

No los quiero cansar, pero la tasa de interés del plazo fijo en pesos, promedio anual, que fue del 8 por ciento en el 99 y 8,4 en el 2000, este año es del 21 por ciento. Se ha morigerado y debilitado la paridad de la convertibilidad, que era del 99 por ciento en 1999: 101,8; ahora es del 90 por ciento. La liquidez, en porcentaje, ha bajado del 25 al 20 por ciento y el riesgo país subió del 585 puntos en diciembre del 99 a 1.365 puntos, que tuvo ayer o anteayer. La bolsa subió 28 por ciento en el 99, bajó un 24 por ciento en el 2000 y un 19 por ciento en lo que va del 2001. La tasa de desempleo subió del 14,3 al 16,4 por ciento.

Y los índices de corrupción, señor presidente, que los mide Transparency Internacional, muestran que la Argentina ha ascendido en el ranking de los países más corruptos del mundo desde el 55º lugar al 52º. Es decir, algo está fallando. No quiero, con esto, cargar las tintas excesivamente sobre la gestión del gobierno radical, ya que dejó de ser el gobierno de la Alianza.

Pero quiero decir que no va a ser fácil remontar esta cuesta descendente. En este período de un año y medio, yo lo confieso, he visto de todo. He visto el desarrollo de la ortodoxia ba-

sada en saberes convencionales que expresó muy bien López Murphy. Pero he visto la heterodoxia de Cavallo, cosa que jamás me iba a imaginar en él, que fue un ortodoxo casi fundamentalista. Sin embargo, creó el factor "empalme", devaluó comercialmente el tipo de cambio, bajó los requisitos mínimos de liquidez, del 20 al 18 por ciento. Ensució la liquidez: al permitir cumplir con bonos los requisitos mínimos de liquidez, la ensució. Admitió la renegociación voluntaria de la deuda. Aumentó los aranceles a los bienes de consumo. Empezó las políticas activas sectoriales basadas en la eliminación del impuesto a los intereses, del impuesto a la renta presunta, la baja selectiva del IVA, los aportes patronales a cuenta del IVA.

Esto es muy importante. Confieso que, en su momento, lo recibí y creo que el conjunto de economistas que no somos neoliberales aceptamos esta otra cara del ministro de Economía que nos prometía una política alejada de los patrones fundamentalistas del neoliberalismo. En cambio, se mostraba partidario y activo propulsor de políticas de tipo sectorial y de políticas activas en material industrial.

He visto de todo, actitudes keynesianas y monetaristas; neoliberales y de la tercera vía. El discurso radical hoy se impregna con la tercera vía, de Blair, Clinton, Schroeder y Felipe González. Como dije en su momento, esto es algo así como un peronismo tardío. Ahora han descubierto lo que los peronistas siempre hemos enarbolado como una de nuestras banderas ideológicas fundamentales, es decir, no una tercera vía como síntesis de dos anteriores sino como superación de las mismas.

Según nuestro modo filosófico de ver la historia, las políticas cumplen su ciclo y la tercera vía o tercera posición —como decíamos en un tiempo— viene después de la primera y la segunda, pero no es el resultado de la fusión del comunismo y el capitalismo, sino que es una nueva forma de pensar la política y el país.

El avance de la derecha hoy tiene preso a este país. Por más que no lo queramos admitir, el pensamiento del poder es de derecha, pero el discurso es progresista. Esta es una gran contradicción dialéctica, que no solamente la tienen los radicales sino también nosotros, los peronistas. Esto ha infectado a los partidos políticos populares, que a veces se ven obligados a pronunciar un doble discurso; en efecto, son derechistas

cuando tienen que aplicar medidas de gobierno y populistas o liberales de izquierda cuando hablan desde la oposición.

Fíjense los términos que en este año y medio han aparecido y que antes no existían. Alguien se acuerda cuando se llenó la Capital de afiches que decían: "Llegó el blindaje, salarios y trabajo para todos". Algunos creían que era una persona que se llamaba blindaje, sin embargo, era una forma de denominar a la masa de créditos con la cual tendríamos todos los problemas solucionados. Pero después no alcanzó e inventamos la palabra "megacanje". Todo se hizo mega, grande, macro.

También encontramos la expresión "Pacto de la Independencia"; aunque no sé como nos atrevemos a hablar de la independencia. Esto no es culpa del gobierno de De la Rúa sino de un proceso que nos invadió a todos, pero lo cierto es que la Argentina nunca ha sido más dependiente que en este momento, a punto tal de que estamos sesionando bajo la mirada muy exquisita, certera y condicionada de los órganos internacionales y no sólo los públicos sino también de los privados, como los bancos y los fondos de inversión.

Y ahora hemos inventado el "déficit cero". Realizamos un nuevo contrato social, porque esto es lo que constituye este proyecto de ley: un nuevo contrato en donde de alguna manera la Justicia queda anulada al no poder intervenir y se declaran de orden público las medidas que tienden a hacer el ajuste al cual estamos refiriéndonos.

Obviamente que esto es muy creativo. Los argentinos no tendremos suerte en equilibrar el balance de pagos o el fiscal, pero sí en crear términos que sugieren situaciones de satisfacción como "megacanje", "blindaje" "empalme" y "déficit cero".

No tendremos muchas divisas, pero terminología creativa tenemos y de sobra, ya que en el mundo se preguntan qué es blindaje o megacanje, porque al déficit cero lo conocen, aunque no lo practican.

Debemos ser el único país del mundo que cifra como norte de toda su política social y económica el déficit cero. No digo que en este momento a lo mejor no sea conveniente hacerlo. No sé; no quiero ser tan pesimista.

Esta filosofía del déficit cero y la forma que tenemos para alcanzarlo, que es a través de la

reducción de la demanda y de la reducción de los salarios, me hace acordar una frase del economista Gunnar Myrdal, que ganó el Premio Nobel en los años cincuenta o sesenta. El empezaba su libro con una frase bíblica que decía: "Al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará". Este economista decía que esta frase del Evangelio, tan incomprensible para quienes queremos leerla a la luz de la racionalidad común, se aplicaba en la economía. "Al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará." Claro que en el Evangelio posiblemente esto esté referido a la vida eterna, pero él la aplicaba a la realidad y al mundo de los negocios; en este mundo económico en el que todos estamos inmersos.

En función de todo esto hemos elevado una propuesta alternativa. No queremos simplemente votar en contra de este proyecto de ley sino que deseamos arrimar soluciones, queremos posibilitar, ya sea modificando esta iniciativa o poniéndonos en el extremo de proyectar un nuevo proyecto de ley, la entrega de instrumentos y elementos al gobierno para que pueda alcanzar el déficit cero. Pero no pasando por el recorte de las jubilaciones ni de los salarios sino atacando los nichos de excesiva utilidad que aún existen en la economía argentina.

En este sentido, creo que éste debe ser el único país del mundo que no grava las rentas financieras. En todos los países del mundo, en función de lo que es la equidad tributaria, dicen: "usted tiene que pagar impuestos por lo que gana; no importa su origen sino los ingresos que usted obtiene".

En la Argentina no se grava la renta financiera, de manera que el tenedor de un título, o el titular de un plazo fijo está mucho mejor tratado fiscalmente que el que arriesga en una actividad industrial, comercial o de servicios.

Hemos conversado esto con los miembros de nuestro bloque y con algunos expertos que citamos, y no quisimos proponer lisa y llanamente la reimplantación del impuesto a las ganancias sobre las rentas de cualquier origen, porque los mercados están muy sensibilizados y no queremos crear más complicaciones, pero sí proponemos que se graven las ganancias para la renta de títulos públicos y para inversiones superiores a los 100 mil pesos. Entiendo que ésta sería una forma de generar un espacio tributario que pueda llevarle recursos absolutamente legítimos y genuinos al Estado nacional.

A veces creo que nos hemos vuelto muy cuidadosos. Me parece que le tememos a la represión. Ustedes saben que el poder de los mercados ha sustituido al de los tanques y las bayonetas. En efecto, antes le temíamos al coronel de turno y ahora le tememos al mercado de turno. No sé si esto es un avance de la civilización o no, porque tal vez alguien puede pensar que es preferible ser castigado por los mercados que por los militares. Reitero que alguno puede creer que esto es un avance en la civilización.

Sr. Maya. — El "comandante Escasany".

Sr. Cafiero. — Estaba recordando un libro que leí no hace mucho tiempo, que significaba que en términos de la historia de la humanidad, el avance del *homo economicus* y el del economi-cismo es superior al del autoritarismo militar y que constituye una ventaja para el hombre despojar a la gente de esos sueños creados por los grandes autoritarios para dárselos al mercado.

En fin, no quiero entrar en este debate; simplemente menciono que en nuestro proyecto alternativo se propone la creación de un impuesto de hasta el 6 por mil, tal como lo establece la legislación sobre el impuesto al cheque para las operaciones interbancarias que efectúen las entidades financieras.

Alguien dirá que esto no es nuevo y contribuirá a ahuyentar el capital y, evidentemente, no vamos a lograr los objetivos de atraer nuevas inversiones por lo que, entonces, el capital se va a ir al Uruguay. Ahora bien, ¿qué pasa en ese país? En el Uruguay —supuesto paraíso financiero— existe un impuesto del 2 por ciento a la compra de moneda extranjera, hay un 10 por ciento de impuesto a los activos de las empresas bancarias, un 3 por ciento a las sociedades financieras de inversión y un 0,18 por ciento anual en concepto de control del sistema financiero. Todo esto se encuentra en el Uruguay, el supuesto paraíso financiero al que hay que fugarse si en la Argentina se llega a establecer un gravamen sobre las operaciones interbancarias.

¿Por qué este tipo de negocios va a quedar excluido del régimen del impuesto al cheque? ¿Por qué tenemos que admitir estas excepciones? No quiero profundizar en el tema de la recaudación que significa todo esto. Si bien no tengo hecho el cálculo, la cifra debe rondar unos cuantos centenares de millones de pesos.

Sin embargo, con esto agredimos a los mercados, caemos en el default y generamos una corrida espectacular de depósitos, como lo sostienen algunos ante la aprobación o no de esta norma; ya que hemos demorado mucho en su sanción y mañana los mercados nos pueden castigar. ¡Si hasta nos piden fotografías! Hubo un pedido expreso de una calificadora de riesgo que quería una foto de los senadores con los gobernadores para demostrar que estábamos bien encaminados.

Por otro lado, de los 22 mil millones de dólares o pesos que administran las AFJP —tema sobre el cual el senador Moreau hizo una descripción muy adecuada— el 7 por ciento se invierte en el exterior. ¿La Argentina puede permitir que el ahorro que se acumula en las AFJP, sea el porcentaje que fuese, se destine a inversiones en el exterior, ya sea en el Brasil, Chile o donde fuese?

En 1999 las AFJP ganaron 700 millones de dólares y en la actualidad esta ganancia ha aumentado a 2 mil millones de dólares. Ahora bien, esto no significa que se lo ponen en el bolsillo los directores de las AFJP sino que lo ganan sus afiliados; pero éste es un rendimiento absolutamente descomunal que no resiste la menor ley. No puede sostenerse un sistema de previsión social en utilidades del 15 al 20 por ciento anual sobre la inversión. ¡Esto es una barbaridad o la demostración palmaria de que estamos en default, porque solamente se pagan estas tasas cuando se teme que no se puede cobrar lo que se presta!

Nuestra propuesta radica en que el 1 por ciento de las comisiones que perciben las AFJP quede en poder del Estado, o mejor dicho pasen al sistema de reparto con lo cual el Estado se exime de hacer el aporte que le corresponde para su mantenimiento.

Y, entre otras cosas, lo hacemos porque uno de los principales componentes del costo de las AFJP, que es el del seguro por invalidez y fallecimiento que tienen que contratar por cada uno de sus miembros, cayó del 2,29 por ciento al 1 por ciento del salario. Sin embargo, las AFJP no han bajado la comisión que cobran a sus afiliados. En consecuencia, nosotros proponemos que un punto de esto pase a las arcas del fisco, pero no directamente sino al sistema público, al estatal, al de reparto, que hoy subsiste junto con el sistema de capitalización privada.

Otra modificación que hacemos, y que creo que el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda va a entender, es con respecto al artículo 1º de la iniciativa. El tema de pasar del devengado al percibido parece muy fácil, pero en Chile lo quisieron hacer y tuvieron que sacarlo porque no dieron abasto, ya que tuvieron que hacer cinco libros por cada empresa para poder distinguir entre el IVA devengado y el percibido.

Nosotros preferimos que lo dejen, pero hacemos una distinción: esta facultad de pagar por lo percibido solamente tendría que ser obligatorio para aquellos que tengan una facturación menor a 600 mil pesos, que es la gran masa de los contribuyentes. No sé si me expliqué bien. La verdad es que yo no entiendo cómo los funcionarios de Economía no advierten que, si en lugar de pagar contra lo devengado las empresas pueden pagar contra lo percibido, se produce un "bache financiero". No sé cómo tendrán pensado solucionar esto.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, señor senador Carlos A. Verna.

Sr. Cañero. — Por último, hay otra innovación que espero que reciban de buen grado los hombres que administran la economía del país en el Poder Ejecutivo.

Ustedes saben que en el impuesto al patrimonio, a los bienes personales, aunque el contribuyente tenga todos sus bienes en el país actualmente no paga el gravamen si da un domicilio en el exterior. Por ejemplo, hay una enorme cantidad de contribuyentes que quieren evitar el impuesto a los bienes personales y, entonces, constituyen domicilio en el Uruguay.

El dueño de Repsol, de Telefónica o de Telecom tendría que declarar bienes personales en el país y pagar, sin embargo no lo hacen porque seguramente dan un domicilio en España, Italia o Francia.

Entonces, hemos generado un mecanismo—que está descrito en nuestro proyecto alternativo— por el cual cambiamos las reglas de juego. Es decir que mientras los bienes están en jurisdicción nacional, se paga por todo lo que hay en el país, se resida en él o no. De este modo evitamos la elusión del impuesto—como dicen los técnicos en materia tributaria—, no la evasión, y le allegamos recursos genuinos al Estado.

Estas son las alternativas que nosotros hemos imaginado como contribución a esta política de déficit cero, pero teniendo en cuenta la equidad social, gravando a aquellos sectores de la economía que obtienen rentas que, a nuestro juicio, son desproporcionadas con relación a la situación de escasez que vive la sociedad argentina.

Y espero que en este devenir del déficit cero no le pase al gobierno —que tiene que recortar el gasto público— algo que recuerdo haber visto en una película de Carlitos Chaplin. En una de sus películas Chaplin tenía que irse de viaje, entonces, metió toda su ropa en una valija, pero como parte de la vestimenta quedaba afuera, recortó lo que sobresalía y se fue. Ahora bien, cuando la abre nuevamente, resultó que había cortado partes fundamentales de la ropa que llevaba en ella. Espero que al Poder Ejecutivo no le pase lo mismo.

Asimismo, ansío que tampoco le suceda lo que le ocurrió al doctor Scker, presidente de la Academia Americana de Dermatología, quien en uno de sus discursos contó lo siguiente: "Tenía una entrada para escuchar en un concierto la *Sinfonía inconclusa* de Schubert. Como no podía utilizarla contraté a un técnico, a un auditor, a un contador, para que fuera en mi reemplazo a escuchar la sinfonía". El técnico, el auditor, el contador fue a la sinfonía y después entregó su informe al jefe de esta empresa de salud diciendo lo siguiente: "Primero, por un período considerable, los que tocaban oboe no tenían nada que hacer. Su número debe ser decididamente reducido y su trabajo distribuido entre toda la orquesta, evitando así picos de inactividad". Esto es flexibilidad laboral por el trabajo. "Segundo, los 12 violines estaban tocando notas idénticas. Esto parece una duplicación innecesaria y el plantel de esta sección debe ser drásticamente disminuido. Si se requiere un gran volumen de sonido se podría utilizar en su lugar un amplificador. Tercero, no se cumple con ningún propósito útil al repetir con los cornos un pasaje ya tocado por las cuerdas. Si todos esos pasajes redundantes fueran eliminados el concierto podría reducirse de 2 horas a 20 minutos. Y por último, esta sinfonía tuvo dos movimientos. Si Schubert hubiera logrado sus objetivos musicales al final del primer movimiento debería haberse detenido allí. El segundo es innecesario y debe ser suprimido." La crítica concluía diciendo que si Schubert le hubiera prestado la

atención necesaria a estos asuntos hubiera tenido tiempo para terminar la sinfonía.

Yo espero que a los autores del déficit cero, que tienen que administrarlo, no les pase como a Chaplin ni como al auditor que fue a escuchar la *Sinfonía inconclusa* de Schubert. Terminemos con una nota amable en una noche que se ha hecho demasiado amarga.

Sr. Presidente (Verna). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja de la Unión Cívica Radical, el doctor Galván.

Sr. Galván. — Señor presidente: la verdad es que no tenía pensado hablar; eso era lo que habíamos convenido en el bloque, pero se han dicho cosas importantes y algunas no tan ajustadas a la verdad o a la realidad.

En los rudimentos de la historia que uno recuerda —es el *corsi* y el *ricorsi* de la historia, como decía un pensador italiano—, los acontecimientos pasan dos veces por la vida de los países. Hace veinte siglos Cicerón reprochaba al Senado romano: "Catilina está en las puertas de Roma y ustedes están deliberando".

Nosotros tenemos al país en las puertas de la bancarrota y estamos deliberando. Por supuesto que es nuestro derecho. Estos son los privilegios que la Constitución brinda a las Cámaras del Congreso. Pero yo debo decir en esta corta intervención —para ello me ayudó amable e intelectualmente el senador preopinante— que aquí se dio la teoría de Max Weber: por un lado, la ética de la responsabilidad y, por el otro, la de las convicciones. Y yo creo que esta noche el voto de los senadores un poco está ahí, navegando en ese dilema.

Debo decir estas cosas porque cuando yo dé mi voto, éste debe tener un sentido. Voy a hablar como senador y no como candidato. Vengo a hablar sin complejos de inferioridad porque podría decir un magnífico discurso y hablar para el conjunto, tocar los sentimientos legítimos de mis compatriotas y decir hasta dónde ha llegado la profundidad del agravio que los argentinos en su conjunto hemos recibido todos estos años.

La ética de mi convicción, como muchos de mis compañeros que tengo la pretensión —si no, me excedo— de representar, me dice que pertenecemos a una legión, modesta pero convencida, que desde muchos años atrás viene combatiendo el neoliberalismo en el país. Y nadie puede tener duda de la conducta y de la actitud de la Unión Cívica Radical.

En lo personal, si tuviera que eximirme de alguna responsabilidad, sabe la opinión pública que desde mi partido me opuse a la incorporación del señor domingo Cavallo a este gobierno, que es mi gobierno, y también sabe el cuerpo que yo no voté los llamados superpoderes al ministro de Economía. Pero me dice también la ética de mi responsabilidad que debo votar este proyecto, que es distinto de decir que voto por oficialista. No se da acá la dicotomía fácil de la oposición y del oficialismo. Se trata de advertir o no en qué grado de peligro está la República.

Señor presidente: no soy un visionario pero estoy viendo el fondo del abismo. El senador preopinante hablaba de una película vieja. Vieja por la película, no por el que la vio. *(Risas.)* Era una película de Carlitos Chaplin, pero yo vi una más reciente, donde el protagonista atravesaba un puente sobre un abismo. El puente estaba tendido; era un viejo puente hecho por los indígenas. Apenas llegó al otro lado el puente se derrumbó. Yo tengo esa sensación en este momento.

Debo decir estas cosas porque no por casualidad está deliberando este Senado que comenzó a hacerlo ayer —esto es para la versión taquigráfica—, domingo, y ahora estamos en día lunes. ¿Por qué estamos deliberando? Lo estamos haciendo porque el país no está atravesando un momento fácil. No quiero decir que si este proyecto no se aprueba, ponemos en peligro inclusive la estabilidad del gobierno.

La modernidad nos interrumpe sin querer; las cosas no están bien. El martes habrá cortes de rutas y existe quien piensa en postergar las elecciones nacionales que deben realizarse dentro de dos meses.

Este es mi gobierno, pero si actuara según mi conciencia o mi amor propio, tendría que votar en contra de este proyecto. Ustedes saben por qué lo digo. Pero el país es más importante que mi amor propio.

No quisiera que le ocurra al presidente lo que alguna vez le pasó al doctor Illia, cuando se estaban creando las condiciones para el nefasto golpe de Estado del 28 de junio. En aquella ocasión, la Cámara de Diputados no aprobó el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación. Esa fue una de las razones invocadas, en ese momento, por los militares perversos para derrocar al gobierno de la Unión Cívica Radical. Y no quiero traer aquí otros de mis recuer-

dos de mozo. También había algunos que escribían y se burlaban. Son los mismos que hoy escriben y se burlan en nuestro país. Qué más da; después se arrepienten. Parece que éste es el país de los arrepentimientos y de los perdones fáciles.

¿Qué democracia es ésta, señores senadores, que le está vedado opinar al presidente del partido oficial, al doctor Alfonsín? Cada vez que el presidente de nuestro partido habla, aparecen todos los diarios, sobre todo los liberales, denostando su opinión. Y se trata del hombre que puso los mayores ladrillos de la reconstrucción democrática en la República. Sin embargo, ahora no puede hablar. ¿Sabe por qué, señor senador Cafiero? Y permítame, señor presidente, que me dirija personalmente al señor senador. Porque creo que tanto los peronistas como los radicales estamos perdiendo la batalla ideológica en la República. Nos están ganando el neoliberalismo y la derecha. Es el drama que tenemos.

Claro que también quisiera tener ese debate; no porque tenga talento, sino porque tengo preocupación.

Incluso, me iría un poco atrás, por cuanto fui discípulo de Balbín. El me dijo un día, después de hablar con Perón: "Esto no es para politólogos. Voy a sembrar esta semilla para poder verla yo. No sé si la voy a ver", me decía. Este es parte del drama político argentino; cuando las mayorías se dividen, entran como cuña estas minorías en las decisiones económicas y en los gobiernos, como está sucediendo ahora.

No nos rasguemos las vestiduras. Cavallo fue ministro del gobierno justicialista y es ministro de nuestro gobierno. Entonces, no tratemos de sacarnos la responsabilidad como hacen las mujeres con sus vellos, delicadamente con una pinza. Todos somos en parte responsables.

Ahora estamos frente a una encrucijada perversa: si voto a favor del proyecto, algunos podrán decir que no soy radical. Pero si lo hago en contra, voy a tener responsabilidad sobre hechos muy graves que pueden suceder en la República. Yo le temo al fantasma de la bancarrota.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Mario Anibal Losada.

Sr. Galván. — Recuerdo un viejo discurso de Mirabeau en la Asamblea Francesa quien, ante

un dilema crucial de la historia de su país, hablaba de lo súbito del tránsito. En esa ocasión, él apelaba al sentido común de los asambleístas para que voten favorablemente la norma que proponía para salvar la Revolución. No pretendo tanto, pero éstos son momentos de decisión.

Comprendo y respeto absolutamente a todos, pero una cosa es hablar para la simpatía de muchos y otra votar con la responsabilidad de algunos.

También soy candidato a senador por mi provincia, todos lo saben, y no puedo estar alambiando si voy a perder votos o no. Sé que es terrible quitar un porcentaje de su remuneración a los jubilados y empleados estatales. Pero me temo que no se les pueda pagar a los unos y a los otros si sobreviene la bancarrota en el país.

Es por ello que voy a votar afirmativamente el proyecto en consideración. Es la responsabilidad de los hombres de gobierno —iba a decir de Estado, pero no tengo semejante estatura—, porque esto es parte del gobierno.

Seguía con atención al senador preopinante, a veces con fruición y a veces no tanto, cuando hacía comparaciones, porque es bueno apelar a la historia. Pero no quiero en este momento para mi país un nuevo "rodrigazo".

Todos vivimos aquel hecho —quien habla era diputado nacional— y asistimos al desmadre de la democracia para terminar haciendo el saludo al militar de turno que venía a hacerse cargo. Es verdad que ahora no hay generales. Los generales están en la Bolsa de Comercio o en algo parecido. No necesitan tanques, precisan computadoras. Tampoco necesitan fusiles. Basta con la prensa cómplice para acorralarnos, tal como estamos ahora. Lo debo reconocer en mi conciencia. Pero un paso en falso es el paso en falso de la República; y yo no estoy dispuesto a darlo. Me quiero arrastrar con los talones antes de dar ese paso hacia el precipicio.

No comparto tampoco el proyecto en consideración. Lo digo con honradez. Pero es el drama de los hombres. ¿Y qué hace aquel al que le ponen una pistola en la sien y lo obligan a hacer algo determinado frente a rehenes? Nosotros hoy padecemos esa moda delictual: somos rehenes.

Desde luego que no me iré a mi casa con la queja. Lo expresaré a mis conciudadanos en la vía pública, si el día de mañana los partidos mayoritarios no recogemos el común denomi-

nador de esta noche, que es la condena al neoliberalismo, lo cual es un triunfo de la democracia. A éstos les va bien en cualquier situación. Les va bien con las democracias y con las dictaduras. Ganan siempre. En cambio, nosotros somos la ficción, los pobres negros que debemos andar buscando votos para que gobiernen los mercados desde la concentración de la riqueza. Ese es nuestro drama. Por eso, está bien que hagamos estos debates.

Señor presidente: tenía necesidad de decir estas cosas. No quiero un nuevo Chávez en la Argentina. Eso se podrá dar en otras partes del continente. No quiero que esta noche encendamos la mecha; al contrario. Por lo menos, quiero mojar la pólvora para que el día de mañana no sea demasiado tarde.

Tampoco temo que la responsabilidad histórica caiga sobre este vituperado Senado, como bien se ha dicho en este recinto. Supongo que alguna vez tendremos que discutir esa cuestión, aunque no sé si tendremos tiempo; quizá no lo tengamos.

Es muy fácil imputar delitos y no probarlos. Es fácil desmerecer las instituciones y no jerarquizarlas. Es fácil condenar a los partidos políticos y alabar a los poderosos.

Tengo respeto por todos, pero cuando comienzan a hablar ciertos comentaristas políticos, veo quiénes son los que pagan ese programa y los avisos. Ahí aparecen todas las corporaciones.

Entonces, se dice que la culpa es de los políticos, que todos son corruptos, que el Senado no sirve y que no sirve el sistema. El mensaje es que hay que amputar y aniquilar, porque no saben lo que es la política. Y no lo sabrán nunca.

La política significa sacrificio, austeridad y mucho coraje civil. Si fuera un hombre ambicioso, si pudiera, haría la gran convocatoria de los partidos mayoritarios, porque a nosotros —los radicales— nos puede ir mal. Pero estoy seguro de que a los justicialistas no les va a ir mejor, porque los mercados no son peronistas ni radicales...

Sr. Gioja. — Son del Frepaso. *(Risas.)*

Sr. Galván. — Ni menos de ellos. Los mercados tampoco son de los desertores.

Acá tendrían que estar presentes responsables que hoy no se encuentran. Seguramente mañana andarán detrás de un canal de televisión, para que les maquillen la hipocresía y pue-

dan decir que estuvieron en contra de este proyecto. ¡Porque no han tenido las pelotas de sentarse ahí (el señor senador Galván señala la banca vacía del señor senador Del Piero) y oponerse a la sanción de este proyecto de ley!

Esa es la situación, señor presidente. Y vuelvo a Cicerón: "Catilina está en las puertas de Roma y deliberamos".

No sé si aun aprobando este proyecto de ley, llegaremos a tiempo. (*Aplausos en las bancas.*)

Sr. Presidente (Losada). – Tiene la palabra el señor senador Villarroel.

Sr. Villarroel. – Señor presidente y colegas: desde luego que no voy a intentar una pieza oratoria –menos todavía después de las que acabamos de escuchar–; simplemente diré algo que en un primer momento de este debate había pensado omitir.

En virtud de las expresiones que hemos escuchado esta noche, y ante la eventual perplejidad de quien haya seguido todo el debate y se encuentre con que este proyecto va a ser aprobado, a pesar de que casi todos los que han hablado se expresaron en forma negativa, me obligan a explicar el por qué voy a votar afirmativamente en general y en particular, para que no haya dudas al respecto.

Considero –y disculpen mi ignorancia los políticos que saben más de política que yo–, que tanto peronistas, radicales, autonomistas, bloquistas, miembros de la Cruzada Renovadora y de cualquiera de los partidos políticos que hacen el espectro nacional, estarían encantados de la vida –sobre todo si fueran gobernantes– de tener los empleados y jubilados mejor pagados del mundo.

Recíprocamente considero inadmisibles –sobre todo cuando hablamos del presidente de la República, cuya trayectoria cívica y capacidad son conocidas, más allá de que algunos comparan o no su política– que se piense o implique que este presidente por torpeza, maldad y por unos pocos cientos de millones de pesos, no acierte en encontrar otro instrumento o medio para subsanar una situación de crisis, que el de bajar los haberes de los jubilados y empleados públicos.

Digo también que más allá del espíritu de solidaridad y de sensibilidad social que trasuntan todos los discursos, deberíamos reparar en el hecho de que existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el del caso "Tiburcio, López Padilla", de Tucumán, que hace

tantos años como los que tiene este senador que habla –vale decir que este fallo es de 1937– ha dicho que el derecho constitucional del jubilado es a su *status* de jubilado y no a la cuantía de su haber. De manera que una rebaja de la remuneración del jubilado no significa necesariamente violación de una garantía constitucional a menos que esa rebaja sea irrazonable, desproporcionada o confiscatoria.

Digo, también, que en esta cuestión de los haberes jubilatorios –porque varias veces he escuchado, esta noche, que no puede ser que las jubilaciones sean la variable de ajuste de la economía argentina– nos estamos olvidando de que hace muy pocos años, en este mismo recinto y con muchas de las personas que ahora conformamos este cuerpo, se aprobaron leyes generales de jubilaciones que significan exactamente convertir a los haberes jubilatorios en variables de ajuste de la economía. El famoso sistema de reparto sustituye el antiguo sistema, según el cual el trabajador iba haciendo su ahorro, sus aportes, lo que al final le iba a ser restituído proporcionalmente a esos aportes. El sistema de reparto no significa otra cosa que el derecho de cada jubilado está condicionado a lo que el presupuesto de cada año fije como cuántum para el reparto de jubilaciones. De modo que me parece un poco tarde para escandalizarse porque se tome al sistema jubilatorio como variable de ajuste.

Lo propio podría decirse, y con más o menos iguales fundamentos, respecto de la cuestión de los salarios del empleo público. Aquí se ha dicho que este Congreso, o este Senado, jamás convalidó los intentos del gobierno anterior de rebajar los salarios del empleo público. En realidad, los hechos no son exactamente así. Hubo una rebaja dispuesta en 1995 por decreto del Poder Ejecutivo nacional. El presidente era el doctor Carlos Menem. Y ese decreto fue convalidado por el Congreso, que se compone de ambas Cámaras, en la Ley de Presupuesto de 1996. Así que tuvo consagración legislativa.

No quiero decir con esto que esté satisfecho y dando hurras por el hecho de que hay un par de normas que tocan esos haberes. Estoy diciendo que, si vamos a ser ecuanímenes y, además, de memoria un poco más completa sobre los acontecimientos, deberíamos reparar en estos antecedentes para no sacar tanto pecho en defensas que, en más de un caso, aparecen extemporáneas cuando no inconsecuentes con antecedentes de conducta de este mismo Congreso.

Digo también que no califico ni me permitiría jamás calificar la conducta de los colegas que asistan a este debate o no, que voten de una manera u otra. No creo que sea así. Creo que hay dificultades, incluso de conciencia, que se les presentan a algunos colegas nuestros. Me refiero, por ejemplo, al discurso emitido por el señor senador por La Rioja, el doctor Menem. Lo que ocurre es que la situación de que sea la oposición mayoría en el cuerpo significa, de por sí, que esa mayoría del cuerpo también está ejerciendo responsabilidades de gobierno. Se es gobierno. Se quiera o no se quiera, se es gobierno. Entonces, lógicamente, las actitudes de quien se siente parte del gobierno, porque es mayoría y controla las decisiones de ese cuerpo, desde luego que deben tener una perspectiva y una óptica distinta de las de un opositor que es minoría y que, por tanto, se siente desligado de las responsabilidades inmediatas a las que habrá que hacer frente tal vez dentro de unas horas.

También quiero decir otra cosa. Han expresado acá varios oradores—esto es una cosa obvia pero, a veces, lo obvio necesita ser dicho—, que no se puede poner en duda la legitimidad del presidente. Desde luego que no en nuestro sistema constitucional. Pero eso también debería llevarnos a reflexionar sobre la potestad—que en nuestro derecho significa “poder” y “deber”—que el presidente tiene de nombrar y remover a sus ministros. Por lo tanto, el ejercicio de la misma por parte del presidente no es una cuestión que, como legisladores, nos incumba poner en tela de juicio. Mucho menos en momentos difíciles y para sugerir que esa potestad debe ser delegada en críticos de ocasión de la conducta del presidente.

No creo tampoco que sea admisible algún sarcasmo que pretenda poner al presidente en el papel de quien no sabe distinguir—como ha ocurrido con algún otro—entre un músico barroco y uno romántico, para que pretenda valorar una sinfonía según los criterios de un contador. No es el caso del presidente De la Rúa.

Me parece que los niveles de crítica deben ser adecuados también a lo que conocemos de quien ejerce la Presidencia, más allá de la legitimidad de la democracia. Lo hemos tenido de colega en este recinto y bien sabemos cuáles son los puntos que calza en orden a su condición de hombre de Estado.

Prometí no hacer discurso y no lo hago. Pero el texto que fue sancionado por la Cámara de Diputados es producto de un muy trabajoso acuerdo o consenso—como se usa ahora—entre legítimos representantes del pueblo de la Nación argentina.

Creo que lo que está puesto en esas normas expresa el sentido de ese acuerdo, lo que se llama garantías sobre el restablecimiento de la integridad de haberes jubilatorios y de sueldos de los empleados en actividad hasta los “un mil pesos”, como dice el texto de la norma.

Creo también que votando afirmativamente ese texto no estoy siendo otra cosa que consecuente—más allá del radicalismo, del peronismo o lo que fuese—con un acuerdo tomado de modo legítimo y por representantes legítimos, habida cuenta también de que alguna modificación que podría sugerirse—desde luego el texto es perfectible—conduciría, si se aplicara sobre este texto normativo que estudiamos, a un fracaso del intento legislativo. Porque sabemos las dificultades que traería una eventual reconsideración de este texto en una vuelta a la Cámara de origen.

Por estas brevísimas razones es que dejo fundado mi voto afirmativo en el sentido que he dicho.

Sr. Presidente (Losada).—Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Gioja.—Señor presidente: creo que a esta altura de la noche, de esta jornada y de las anteriores, son muchas las cosas que se han dicho. Tengo para insertar lo que originariamente pensaba sobre esta cuestión, pero me voy a limitar a hacer algunas reflexiones para justificar y explicar cuál es la posición mayoritaria del bloque Justicialista; posición que hemos tomado después de muchas reuniones y consultas con quienes tienen que ver con el justicialismo y con el poder del mismo en la Argentina.

Los padecimientos que está sufriendo nuestro pueblo, sin duda, exige de nosotros el más alto sentido de la responsabilidad y de la madurez.

Creo que la crisis es tan grave que, en términos políticos, pareciera que las cosas se han invertido. El gobierno nacional necesita y reclama el apoyo permanente de la oposición frente—como se ha dicho acá—al abandono y a la irresponsabilidad de los dirigentes que llevaron a esta Alianza al triunfo en 1999.

Creo que también se ha dicho—y lo tengo que ratificar— que fueron casi insoportables las presiones que todos hemos recibido; los legisladores que estamos sentados en las bancas y nuestros gobernadores, a quienes hemos consultado mayoritariamente. Las presiones fueron ejercidas por los formadores de opinión pública, sin ninguna duda; también por los mercados. Y todos, temerosos de la suerte de un gobierno que parece que está en permanente agonía.

Pero aun en medio de esta crisis tan aguda creo que hay que poner las cosas en su verdadero lugar. Ya se ha dicho y lo ratifico: los justicialistas no fuimos elegidos para gobernar al país en este momento; somos la oposición. Y si estuviéramos en el gobierno estoy seguro de que no estaríamos en esta circunstancia y en una situación tan crítica y tan dramática.

En ningún momento fuimos consultados sobre las medidas de gobierno que se ha decidido tomar a través de esta norma. Y no es lícito ni justo, por lo tanto, atribuir a la oposición justicialista la responsabilidad de salvar al país votando medidas con las cuales no estamos de acuerdo. Porque nunca estaremos de acuerdo en rebajar jubilaciones.

Sin embargo, el justicialismo nunca le ha faltado al país. Y como oposición constructiva y civilizada que somos, nuestro deber no es obstaculizar la acción de un gobierno que fue legítimamente electo por el pueblo, sin que tolereamos que el día de mañana se nos acuse de trabar el país.

Además, los justicialistas —y esto es cierto— tenemos con nuestros gobernadores responsabilidades y compromisos en las provincias que gobernamos. No deseamos que nuestra actitud sirva de excusa para que el gobierno nacional no cumpla con el envío de fondos de coparticipación o siga incumpliendo los compromisos que tenemos y que ya han sido firmados, poniendo a todas las provincias en una situación de crisis casi terminal.

Por eso, la posición de nuestro bloque mayoritario —como digo— ha sido y será la de dar quórum necesario en este Senado para que los senadores oficialistas sean quienes voten este proyecto de ley para reducir el déficit y con el ajuste que en él se propone.

Esto hay que hacerlo como un deber patriótico y plenamente conscientes de los riesgos im-

plicitos que, de no hacerlo, correríamos todos los argentinos. Pero también debe quedar bien en claro que ni frente a la peor crisis alguien puede pedirnos el apoyo que ni sus propios partidarios le están dando hoy al oficialismo.

En consecuencia, señor presidente, la posición de nuestro bloque va a ser coherente con lo que hicieron nuestros compañeros de la Cámara de Diputados. También lo será con las consultas que realizamos a la mayoría de nuestros gobernadores y, a su vez, con la voluntad mayoritaria de nuestro bloque.

Es por ello que un grupo de senadores justicialistas permanecerá en este recinto para asegurar el quórum; vamos a votar en contra, no vamos a votar. Como consecuencia, algunos de nuestros compañeros no tendrán que estar acá, y quienes tienen que votar esta ley, con responsabilidad —porque para eso los eligieron, y ése es el respeto que tenemos—, son precisamente los representantes del oficialismo en esta Cámara.

Por lo tanto, señor presidente, dejo expresamente aclarada nuestra posición. Reitero que ésta es una de las noches quizá más complicadas en cuanto a la toma de decisiones y de la cual —en gracia o desgracia— nos ha tocado participar.

Dejo así fundada la posición del bloque Justicialista.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Agúndez.

Sr. Agúndez. — Señor presidente: debido a la hora y al trabajo que hemos venido desarrollando durante los últimos cinco días, solicito que se vote directamente el proyecto de ley.

Sr. Maya. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Maya.

Sr. Maya. — Señor presidente: voy a apoyar la propuesta formulada por el señor senador Sala en el sentido de que la votación sea nominal; ello, por los fundamentos que él expresó y con los cuales coincido.

Sr. Agúndez. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Agúndez.

Sr. Agúndez. — Señor presidente: no vamos a acompañar esa solicitud.

Sr. Presidente (Losada). — En consideración la moción de votación nominal.

La Presidencia aclara que se requiere mayoría absoluta para proceder de la forma indicada; es decir 37 votos.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta negativa.

Sr. Presidente (Losada). — Queda rechazada la moción. Se procederá a votar por signos.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Verna. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Verna.

Sr. Verna. — Señor presidente: solicito que se consigne mi voto negativo, no sólo para la versión taquigráfica sino teniendo en cuenta una publicación que apareció en el día de ayer en un medio de circulación nacional.

En una nota, uno de sus columnistas dice: "Un alto funcionario del gobierno se quedó intrigado después de que el senador peronista Carlos Verna (o sea yo), con quien conversaba sobre la necesidad de aprobar la ley, le aconsejara modificar la legislación que juzga las decisiones de los directivos del Banco Central. Mucho después se enteró de que Verna, un miembro del viejo esquema de poder del Senado, le estaba pidiendo que lo designara como integrante del directorio del Banco. Verna, como todos los senadores, concluye su mandato a fin de año".

Manifiesto, señor presidente que es cierto que mi mandato concluye a fin de año, al igual que el de todos los miembros que integran esta Cámara. También menciono que el Partido Justicialista de mi distrito, La Pampa, ha oficializado las listas para la contienda electoral del 14 de octubre y me ha sido conferida la responsabilidad y el honor de encabezar la lista de los candidatos a senadores por el Partido Justicialista. Y, como los señores senadores y el señor presidente saben, no es una costumbre de los peronistas de La Pampa perder elecciones, porque hemos ganado sucesivamente las elecciones desde 1983 hasta la fecha. Así que, a quienes están preocupados por mi continuidad laboral, les digo que pueden quedarse tranquilos.

Voto en contra de esta ley porque estoy convencido en ese sentido y no porque no me hayan dado un lugar en el directorio del Banco Central.

Sr. Pruyas. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Pruyas.

Sr. Pruyas. — Es para dejar constancia de mi voto negativo.

Sr. Sala. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Sala.

Sr. Sala. — En el mismo sentido, no sólo quiero consignar mi voto negativo, sino también aclarar que mi presencia en el recinto no es solamente a los efectos de dar quórum, sino para votar en contra.

Sr. Carbonell. — Pido la palabra.

Sr. Baum. — Pido la palabra.

Sr. Zalazar. — Pido la palabra.

Varios señores senadores. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Losada). — Al igual que los señores senadores Carbonell, Baum y Zalazar, entiendo que quiénes están solicitando la palabra lo hacen a los efectos de hacer referencia al mismo motivo...

Sr. Tell. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Tell.

Sr. Tell. — Le iba a solicitar al señor senador Verna que continúe leyendo lo que publicó este columnista, quien nos tiene acostumbrados a su pluma, para evitar tener que leer el final del artículo periodístico; pero, si usted me permite, señor presidente, procederé a continuar con dicha lectura. Dice así: "¿Qué será de mí después de diciembre?, repitió a su vez, el senador peronista Alberto Tell ante cada interlocutor del gobierno que le reclamaba su voto para el déficit cero. Tell es senador por Jujuy y el gobernador peronista de esta provincia, Eduardo Fellner, le ha hecho la cruz como candidato a la reelección".

Señor presidente: debo decir que he decidido no participar de la interna del Partido Justicialista de mi provincia para la reelección por un hecho netamente personal.

Alguna dirigencia de mi provincia —no fueron más de dos personas— ha hecho un análisis de mi desarrollo en el Senado y dijo que entendía que durante todos estos años he prestado un correcto servicio representando a mi provincia y que, haciendo distinción entre senadores nacionales, me distinguían con el alto honor de

haber representado no solamente a mi provincia sino también al peronismo. Pero se me veía por los hechos de soborno en el Senado.

Personalmente entendí —y debo decir que sin ningún tipo de soberbia— que perfectamente podría haber participado de esta interna y lograr mi reelección, a pesar de que a los medios no les guste que vuelva algún senador de los que actualmente participan en este Senado.

Pero aclaro que, como dije desde un comienzo, ha sido una decisión personal: hasta que la justicia argentina decida la suerte de este vil hecho que se nos quiso endilgar, yo no ocuparé ningún cargo político. Y lo hago con la firme convicción personal de que no tengo dudas de lo que estos “tiburones” de los medios pretenden hacer con la política.

También señalo que no he participado en ningún tipo de reunión en la cual se me haya pedido el voto afirmativo. Por eso, estas plumas que por ahí dicen ser de periodistas honorables, creo que son de los golpistas de esta Argentina.

Y con gusto veo hoy en este recinto a senadores, y fundamentalmente de la oposición, que están participando del debate con sus criterios inteligentes y su oratoria brillante. El cuerpo tiene integrantes que fueron y siguen siendo hombres honorables de esta Cámara. Todos hemos sido objeto de esta vil actitud. Por eso cuando hice uso de la palabra también solicité, señor presidente, que consignara perfectamente mi voto negativo para que el día de mañana ningún juez me haga partícipe de algún hecho ilícito.

Tampoco quería pasar por alto la oportunidad para decir que, bajo ningún punto de vista, se me ha solicitado el voto afirmativo. Mi voto es por convicción, porque entiendo que con esta ley no se soluciona nada. Yo creo que en la Argentina ya estamos en crisis y en default.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador San Millán.

Sr. San Millán. — Para que se consigne mi voto negativo.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Zalazar.

Sr. Zalazar. — En el mismo sentido.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Baum.

Sr. Baum. — Señor presidente: quería saber cómo había resultado la votación en general.

Sr. Presidente (Losada). — Fueron 26 votos por la afirmativa.

Tiene la palabra el señor senador Cafiero.

Sr. Cafiero. — Para dejar constancia de que el bloque justicialista 17 de Octubre vota en contra de esta ley.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Arnold.

Sr. Arnold. — Señor presidente: yo no tengo el honor de figurar en la nota periodística mencionada por mi colega Verna. Ni siquiera soy suplente en las próximas elecciones, pero también quiero que conste mi voto negativo.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Sager.

Sr. Sager. — En el mismo sentido, señor presidente, pido que conste mi voto negativo.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Massat.

Sr. Massat. — En el mismo sentido, señor presidente: para que conste mi voto negativo.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Sapag.

Sr. Sapag. — Para que se tome nota de mi voto negativo, señor presidente.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Palacio.

Sr. Palacio. — En el mismo sentido, señor presidente, que conste mi voto negativo.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. — Lo mismo, señor presidente: para que conste mi voto negativo para esta iniciativa.

Sr. Presidente (Losada). — Así se deja consignado, señores senadores.

En consideración en particular.

—Se enuncian y aprueban los artículos 1º y 2º.

—Se enuncia el artículo 3º.

Sr. Verna. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Verna.

Sr. Verna. — Señor presidente: el artículo 3º del proyecto de ley en consideración dice lo siguiente: “Sustitúyese el artículo 1º de la ley 25.413 por el siguiente: ‘Artículo 1º: Establécese un impuesto, cuya alícuota será fijada por el Poder Ejecutivo nacional hasta

un máximo del seis por mil (6 ‰), que se aplicará sobre: a) Los créditos y débitos efectuados en cuentas —cualquiera sea su naturaleza— abiertas en las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras'...". Yo propongo que se agregue la siguiente expresión: "... y en las que éstas tengan en el Banco Central de la República Argentina".

Motiva mi propuesta lo siguiente. Un empleado que cobre 300 pesos por mes, al que se le pague por caja de ahorro, cuando haga una extracción superior a los 300 pesos —supongamos que tenga ahorrados 100 pesos y tenga un saldo de 400— deberá pagar el impuesto a las transferencias sobre la diferencia entre su saldo total y los 300 pesos de su salario. Los bancos que tienen cuentas abiertas en el Banco Central de la República Argentina mueven diariamente entre 8 mil y 11 mil millones de pesos. Esto significa que, aplicando el mismo impuesto que a cualquier tenedor de una cuenta corriente o de una caja de ahorro y gravándola con sólo el uno por mil, se estaría en condiciones de recaudar 10 millones de pesos por día. Creo que tiene mucho más sentido gravar la renta financiera, gravar lo que producen las cuentas corrientes que los bancos tienen en el Banco Central y que utilizan para sus transferencias que recortar los haberes de los jubilados. Por eso propongo esta modificación.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Altuna.

Sr. Altuna. — Señor presidente: entiendo la buena intención del señor senador preopinante, que tendría por objeto incrementar los recursos del Estado, pero por todo lo que aquí se ha dicho durante esta larga jornada es obvio que una modificación de esta naturaleza significaría enviar la sanción que daría este Senado otra vez a la Cámara de Diputados, y nosotros queremos darle hoy mismo al Poder Ejecutivo esta herramienta. Por eso no aprobamos esta modificación que constituiría un agregado al inciso a) del artículo 3º.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Preto.

Sr. Preto. — Señor presidente: en sintonía con lo que manifestaba el senador Verna señalo que uno de los cuestionamientos que hago a este proyecto de ley reside en el hecho de que se grava hasta a las cajas de ahorro, cuando estas inversiones precisamente pagan muy poco inte-

rés debido al breve tránsito que tienen los fondos allí depositados, dado que se utilizan como reaseguro para los ahorristas que saben que sus fondos están mejor guardados en una entidad financiera, que cumple con mayores requisitos de seguridad, que en sus casas.

Considero que este problema se puede resolver por la vía de la reglamentación de esta ley en la que el Poder Ejecutivo analice la posibilidad de fijar un piso debajo del cual las cajas de ahorro no tributen impuesto, de manera tal que la psicología de los usuarios, que a veces puede más que el análisis económico financiero de conveniencia, haga que la gente no retire sus depósitos de la caja de ahorro para guardarlos en su casa.

En consecuencia, teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo ha querido gravar también a los depósitos en cajas de ahorro, lo que me parece un exceso, analice la viabilidad de fijar un piso de 3, 4 o 5 mil pesos para este impuesto.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Maglietti.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: quiero dejar sentado que voy a votar favorablemente la moción del señor senador Verna, porque interpreto que hace tiempo que muchos de los senadores venimos bregando para que se aplique y se grave al sector privilegiado del país, que siempre sigue sacando beneficios y obteniendo las mejores rentas en perjuicio del resto del pueblo argentino.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Maya.

Sr. Maya. — Señor presidente: debo dar una explicación de por qué nuestro bloque no va a votar esto. Hemos planteado un proyecto alternativo en el que consta en forma precisa esta propuesta. Más aún, fue acercado a la mesa. Pero realmente estoy sorprendido porque no sé de qué se trata. Porque he visto manejar milimétricamente el quórum entre los bloques mayoritarios en mi propia presencia; y como desconozco las razones por las cuales en esta circunstancia ha dejado de funcionar esta operatoria de manejo articulado y de común acuerdo entre las bancadas mayoritarias, realmente no puedo acompañar algo que no alcanzo a comprender, ya que en un momento viabilizaron la aprobación de este proyecto que nosotros hemos rechazado y en otro no.

Por esta razón, lamento no poder votar esto, con lo cual estoy de acuerdo, porque realmente

desconocemos cuáles son las razones de esta lamentable e inexplicable circunstancia que se produce en el recinto. En consecuencia, como no queremos avanzar más allá de lo que vemos con absoluta claridad, vamos a votar en contra y, por ende, no acompañaremos esta propuesta.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. — Señor presidente: comprendo que el oficialismo no quiera aceptar la modificación propuesta, pero al solo efecto de la interpretación eventual que deba hacerse de este artículo, quiero que se tenga en cuenta que las delegaciones legislativas establecidas en esta norma tienen el mismo plazo de vigencia que el impuesto de que trata la ley 25.413, es decir, un año.

Sr. Presidente (Losada). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3º de acuerdo con la redacción aprobada por la Cámara de Diputados.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Losada). — Se han registrado veintitrés votos afirmativos.

Tiene la palabra el señor senador Sala.

Sr. Sala. — Señor presidente: pido que quede constancia de mi voto negativo.

Sr. Baum. — Del mío también, señor presidente.

Sr. Maya. — No pueden ser veintitrés votos.

Sr. Verna. — El presidente también vota.

Sr. Presidente (Losada). — Obviamente.

Queda constancia de los votos negativos de los señores senadores.

La Presidencia aclara que vota favorablemente los distintos artículos del proyecto.

—Se enuncia y aprueba el artículo 4º.

—Se enuncia el artículo 5º.

Sr. Preto. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Preto.

Sr. Preto. — Señor presidente: seré muy breve. Insisto en la necesidad de aprobar este proyecto tal como fue aprobado por la Cámara de Diputados, a fin de que entre en vigencia lo antes posible.

Pero quiero decir que, más allá de la garantía que hoy tienen las provincias a partir del Pacto Federal —que garantiza un piso y un te-

cho de 1.364 millones de pesos para la coparticipación—, cuando este acuerdo finalice su vigencia, es decir, en diciembre de 2003, si no existe una nueva ley de coparticipación y continúa esta metodología de pagos a cuenta, las provincias van a perder importantes sumas de dinero en la parte de la masa coparticipable que les corresponde.

Por eso, espero que cuando se discuta este tema y se tomen los promedios para establecer los parámetros de coparticipación primaria y secundaria, el Poder Ejecutivo compute esos pagos a cuenta del lado de los recursos con los que ya se quedó la Nación y no del lado de las provincias. De ese modo, será contemplada acabadamente y como corresponde la coparticipación que legítimamente le pertenece a las provincias, quienes en su momento han cedido en forma reiterada sus partes coparticipables para abastecer al Tesoro nacional, a fin de que éste atienda su situación deficitaria.

Sr. Presidente (Losada). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 5º, de acuerdo con la redacción aprobada por la Cámara de Diputados.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncian y aprueban los artículos 6º a 9º.

—Se enuncia el artículo 10.

Sr. Moreau. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Moreau.

Sr. Moreau. — Señor presidente: seré lo más breve posible, en consideración de la hora y porque ya los fundamentos de mi voto los he expuesto en el tratamiento en general del proyecto.

Voy a proponer modificaciones al artículo 10 en consonancia con la necesidad de establecer, utilizando la nueva terminología, un blindaje para que los recortes salariales a las categorías de jubilados y pensionados como al personal ocupado del Estado nacional no abarque a aquellos que tienen remuneraciones inferiores a 1.000 pesos.

En ese sentido, la reforma que voy a proponer es la de incluir como último párrafo del artículo que modifica al 34 de la ley 24.156 el siguiente texto: "Quedan exceptuados de las restricciones establecidas precedentemente los créditos asignados por la Ley de Presupuesto para la atención de jubilaciones y pensiones y

las retribuciones periódicas correspondientes a sueldos, haberes y adicionales de los agentes ocupados del Estado nacional en tanto que en conjunto no exceda la suma de un mil pesos (1.000 pesos) por agente o beneficiario".

En consonancia con esta modificación, si es que se aprobara, habría que introducir en el texto del artículo 10 dos modificaciones en lo atinente a la expresión "asignaciones familiares". Ello se daría en el anteúltimo párrafo y en el inmediato anterior a éste. Es decir, habría que suprimir la expresión "asignaciones familiares" en ambos casos.

Finalmente, como no me gusta arrogarme lo que intelectualmente no me pertenece, seguramente acompañaré alguna propuesta que haga el señor senador por La Rioja respecto del último párrafo que, lisa y llanamente, debe ser eliminado de la norma.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. — Señor presidente: estoy de acuerdo parcialmente con la propuesta elaborada por el señor senador Moreau. Creo que, además del piso, habría que colocar un tope al porcentaje de descuento de las remuneraciones.

Digo esto, teniendo en cuenta que en el Ministerio de Economía se está evaluando, a partir de la caída de un 6 por ciento de la recaudación de este mes y antes de poner en práctica este perverso mecanismo de reducción salarial, elevar el recorte salarial del 13 al 20 por ciento. Entonces, si no se le pone un tope al porcentaje por el cual el Poder Ejecutivo puede avanzar sobre los salarios, y teniendo en cuenta la absoluta irracionalidad del Ministerio de Economía para manejar este tipo de cuestiones, dejamos tanto a los activos como a los pasivos a expensas de la ciclotimia del ministro de Economía.

Dejar este artículo tan abierto es muy serio, y por esa razón creo que habría que fijar un mecanismo por el cual los recortes previstos no puedan superar el 13 por ciento desde ningún aspecto, además de establecer un piso de remuneración.

La mejor manera de hacer eso es mediante la delegación legislativa. Es decir que se delegue en el Poder Ejecutivo solamente la facultad para la baja del 13 por ciento de aquellos salarios superiores al piso que propuso el señor senador Moreau y dejar las jubilaciones excluidas definitivamente del recorte.

También habría que eliminar el último párrafo del artículo, que dice: "La presente norma es de orden público y modifica, en lo pertinente, toda norma legal, reglamentaria o convencional que se le oponga y no se podrá alegar la existencia de derechos irrevocablemente adquiridos en su contra".

Reitero que hay que eliminar este último párrafo porque se trata de una disposición nula, de nulidad absoluta. Y seguramente va a provocar que un juez la declare como tal.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Maglietti.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: anticipo mi voto negativo a la redacción original del artículo 10.

Es por eso que propongo la siguiente modificación en la parte final del artículo 10: "no se podrá realizar ningún tipo de recortes a los sueldos, haberes, adicionales, asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones, así como a aquellas transferencias que los órganos o entidades receptoras utilicen para el pago de dichos conceptos, los que expresamente quedan excluidos de cualquier tipo de reducción y gozarán de prioridad absoluta de pago respecto de toda obligación que el Estado haya asumido o asumiera en el futuro".

Propongo el presente agregado por cuanto existió de parte del Ministerio de Economía la intención de asegurar el cobro de los intereses de la deuda por encima de los salarios, las jubilaciones y las pensiones.

Además, como a través de este artículo se lo priva de recursos al Estado, está intimamente relacionado con la modificación que propongo para el artículo 12. En consecuencia, es necesario conocer el contenido del artículo 12 para interpretar los alcances del 10.

El artículo 12 diría: "A los fines de garantizar con mayores recursos el logro del equilibrio fiscal a que hace referencia el artículo 10 de la presente ley, se dispone en forma transitoria y por razones de emergencia nacional, la recuperación por parte del Estado nacional de los aportes jubilatorios que actualmente realicen los trabajadores a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones -AFJP-, las que recibirán por dichos valores títulos emitidos por el Estado nacional con vencimiento a diez años, con un interés a tasa Libor, y sobre cuyos montos no recibirán ninguna comisión ni ningún otro

tipo de retribución o beneficio. La cesación de la emergencia nacional sólo podrá ser dispuesta por ley del Congreso de la Nación. La autoridad de aplicación dispondrá con toda urgencia, las medidas tendientes a implementar la efectivización del nuevo sistema que transitoriamente se pone en vigencia, garantizando la inmediata disponibilidad por parte del Estado nacional de los recursos recuperados. La presente norma es de orden público y modifica durante su vigencia transitoria toda norma legal”.

Los recursos que perderá el Estado como consecuencia de la eliminación del recorte de las pensiones, jubilaciones, salarios y otros conceptos que propongo en el artículo 10, los podrá obtener mediante la retención de los aportes a las AFJP —implican anualmente alrededor de 4.400 millones de pesos—, que en este último semestre rondarán los 2.200 millones.

En virtud de esto, tendremos la recaudación suficiente que necesita el Estado y, de esa manera, podremos llegar al famoso déficit cero.

Por otra parte, dejó sentado que en el supuesto de que mis propuestas no sean aprobadas voy a acompañar las formuladas por el señor senador Moreau, ya que aseguran que los jubilados y empleados que perciban retribuciones menores a los 1.000 pesos no van a tener ningún tipo de descuento.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Sala.

Sr. Sala. — Señor presidente: es para manifestar que coincido en la redacción del artículo 10 propuesta por el señor senador Maglietti.

Estoy de acuerdo con que hay que unificar criterios, para no ser preciosistas en la redacción, y en excluir de esta norma a los jubilados y pensionados, a las asignaciones familiares y al personal del Estado.

Por lo tanto, reitero, voy a apoyar la propuesta del señor senador Maglietti.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Vaquir.

Sr. Vaquir. — Señor presidente: en esta noche no resulta fácil para mí encontrar palabras para expresar mi posición, pero digo que ella no está sometida a presión de tipo alguno, tal como un editorialista lo mencionara respecto del señor senador Verna y de quien habla, en este último caso debido a una posible designación, que por cierto hace ya cuatro meses que fue

votada por unanimidad en este Senado. Como bien dijo el señor senador Alasino, que me ahorra las explicaciones sobre las vilezas que muchas veces se dicen de nosotros, he entendido, en conciencia y contando con la generosidad de mi bloque, que debía votar afirmativamente este proyecto de ley que solicitaba el Poder Ejecutivo.

Pero acá hay un solo problema. De las cuestiones económicas en las que mis colegas entienden para modificar el proyecto yo tengo muy poco que decir. Pero hay algo que sí es claro. Este artículo 10 roza prácticamente toda mi vida profesional de médico y mi condición de compañero de trabajo de mucha de la gente que está en este estrado, así como también de muchos otros que están en los pasillos de este Congreso, compañeros míos de trabajo cuando en 1983 me inicié en esta casa.

Si voto afirmativamente este artículo 10 lo hago porque tengo la información plena, clara y absoluta de mi presidente de bloque en el sentido de que el señor jefe de Gabinete de Ministros le habría asegurado que se aceptaría —inclusive creo que también lo ha hecho el presidente del bloque oficialista— que esta norma específica, que tiene que ver con los haberes jubilatorios, sueldos, salarios u otro tipo de remuneraciones de los trabajadores, será modificada.

En ese sentido, soy de los que confían. No creo que vaya a pasar. A esta altura de mi vida, no creo que vayamos al suicidio. Quiero ser optimista. Creo que van a cumplir con los cinco compromisos asumidos con los gobernadores; así lo ratificó, acá, el señor presidente del bloque oficialista.

Como ciudadano, senador y en cualquier condición en que me encuentre a posteriori sería terrible que eso no sucediera, porque lo único que podría decirle a usted, señor presidente, es que si no se modificara eso, la renuncia sería doble, a este cargo o a cualquier otro que tuviera. En ello empeño mi palabra de honor.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador López.

Sr. López. — Señor presidente: quiero manifestar que no voy a votar este artículo.

Sr. Presidente (Losada). — ¿Solicita autorización para abstenerse, señor senador?

Sr. López. — Voy a elegir entre la ética de la convicción y la de la responsabilidad, en consecuencia, solicito que se me autorice a abstenerme.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Verna. — Señor presidente: nosotros también tenemos una redacción alternativa. Compartimos la eliminación del párrafo que propone el senador Yoma y la redacción del senador Moreau, pero con un cambio.

El propone un monto de 1.000 pesos y nosotros, como hemos propuesto otra fuente de financiamiento —que gravaría el sistema financiero en unos 20 millones de pesos por día—, vamos a mantener nuestra postura para no tocar las jubilaciones y los haberes de los empleados públicos, además de las asignaciones familiares.

Por una noción práctica, ya que son muy similares las propuestas de los senadores Maglietti, Moreau, Yoma, Sala y la mía, creo que habría que discutir si este artículo no cuenta con mayoría. Seguramente, quienes la integramos podríamos conciliar las propuestas y hacer una redacción única.

Nuestra propuesta es agregar un párrafo al final que establezca que quedan exceptuados de las restricciones establecidas precedentemente los créditos asignados por Ley de Presupuesto para la atención de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Del mismo modo, se excluyen los créditos destinados a la atención de las retribuciones periódicas correspondientes a sueldos haberes y adicionales.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador por la Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: obviamente, coincidí con la redacción propuesta por el senador Verna. Pero ante la prevención del senador Vaquir y de otros senadores acerca del deseo íntimo de que no se vayan a tocar en el futuro las asignaciones familiares, quiero recordarle a la gente del partido gobernante los antecedentes del actual ministro de Economía cuando ocupaba el mismo cargo durante el gobierno constitucional anterior.

Días antes de que el presidente Menem dispusiera su cesantía, este Congreso rechazó —particularmente este Senado— sendos proyectos de ley que tenían que ver con la eliminación de las asignaciones familiares y de los tickets canasta, y el aumento de la edad jubilatoria de la mujer. Es decir, si hay algo en la mente del doctor Cavallo es, precisamente, avanzar sobre las asignaciones familiares.

Por eso creo que es necesario y llamo honestamente a la reflexión para que nos acompañe la bancada del gobierno en la incorporación de la redacción propuesta por el senador Verna. Porque creo que es un reaseguro de que la perversidad de este artículo no va a ser puesta en práctica para avanzar en cuestiones tan esenciales como son, además de los salarios, las pensiones y las asignaciones familiares.

Creo que los antecedentes del pensamiento del ministro Cavallo respecto de las asignaciones familiares tienen que servirnos para aceptar la propuesta planteada por el senador Verna, que completa las que hicieron los senadores Moreau y Maglietti y la de quien habla.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Moreau. — Señor presidente: quiero hacer una aclaración. Estamos coincidiendo en lo sustantivo, la única diferencia que tengo respecto de la redacción que propone el senador Verna es que —sé que la propuesta está muy lejos de su intención— dejaría afuera de cualquier posibilidad de que participen en el esfuerzo, que los argentinos deben hacer y no precisamente los de menores recursos, las jubilaciones superiores a 3.100 pesos. Este es el tope que la ley fija para las jubilaciones actuales, pero que ya perciben quienes se han jubilado en los regímenes anteriores.

El monto de la masa salarial de esos beneficios —si la memoria no me falla— algo más de 300 millones de dólares al año. En este caso, creo que no habría ningún inconveniente, ni tendríamos por qué tener pudor. Estas jubilaciones comprenden dos bloques. Unas son las que podríamos llamar regímenes de jubilaciones de privilegio. Hay otras que no lo son; se ha alcanzado esa jubilación, sencillamente, porque el volumen de los aportes realizados por el trabajador durante su vida laboral le permitió acceder a una jubilación de esa naturaleza.

Por principios de equidad, en el pasado se fijó el tope de 3.100 pesos para todas las jubilaciones futuras. Es más, el presidente Menem, creo que a través del decreto 78 del año 94, anuló las jubilaciones de privilegio, que el otro día casi fueron restituidas y felizmente el Poder Ejecutivo advirtió a tiempo el error que estaba por cometer.

Pero me parece que un número de jubilados tan pequeño en volumen, que compromete a una

masa salarial tan importante, no tendría que quedar automáticamente afuera de la posibilidad de que participen del esfuerzo.

Por eso, insisto respetuosamente en la redacción que he propuesto para que, efectivamente, no exista esta inequidad de que quienes tienen jubilaciones que en algunos casos llegan a ocho o nueve mil pesos queden exentos de la posibilidad de participar del esfuerzo que todos los argentinos tenemos que hacer en ese sentido.

Digo esto, con la aclaración de que comprendo perfectamente que la norma propuesta pretende excluir la totalidad de los sueldos y jubilaciones de este régimen. Y no le adjudico ninguna intención, porque conozco las calidades morales del senador Verna.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Baum.

Sr. Baum. — Señor presidente: apoyo la propuesta formulada por el señor senador Verna.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Altuna.

Sr. Altuna. — Señor presidente: este tema y este artículo es prácticamente el motor de este sistema de déficit cero que queremos implementar. Y hace fundamentalmente a esta situación, porque nosotros entendemos —y por eso lo he dicho en mi primera intervención— que aquí el Estado, debido a las necesidades económicas, tiene dos caminos para recuperar su solvencia: o reduce sus gastos o impone nuevos tributos.

Aquí hay un mix de las dos cosas. Por cierto que podemos compartir muchos de los conceptos aquí vertidos y que se plantean con la mejor intención. ¿Porque a quién de nosotros le gusta hacer un recorte en las jubilaciones o disminuir los sueldos de los empleados públicos? A ninguno. Nos duele. Pero hoy no tenemos otra alternativa, señor presidente, que votar este proyecto de ley, que ya fue considerado por la Honorable Cámara de Diputados. Y lo estamos haciendo con convicción. A tal punto que el artículo 12, que vamos a tratar luego, dice muy claramente que el Estado garantizará con los ahorros y con los incrementos de recursos el restablecimiento de los haberes, de las pensiones, de las jubilaciones y de las asignaciones familiares que a través de este proyecto de ley se estarían reduciendo en ese 13 por ciento. Si bien no lo dice el proyecto, existe el compromiso de hacerlo de esa manera.

Es decir que garantizamos en función de la recaudación, porque éste es el problema que tenemos. Si no tenemos recursos, por más que fijemos un piso, por más que fijemos porcentajes, el Estado no va a seguir tomando endeudamiento. Pero que quede en claro: este déficit cero quiere decir que de hoy en más el Estado no puede tener, ni en julio ni en los meses que vengan, ningún tipo de déficit.

Habrá tiempo para consensuar alguna ley complementaria que también a nosotros nos preocupa —hoy mismo lo hemos estado hablando con los representantes del Poder Ejecutivo—; una ley que nos contenga a todos: a los oficialistas y a la oposición. Hoy no se termina el mundo, pero hoy sí tenemos la necesidad de darle al Poder Ejecutivo esta herramienta legal.

Por lo tanto, señor presidente, proponemos que se vote el artículo con el texto tal como ha sido enviado por la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente (Losada). — En primer lugar, corresponde votar la solicitud de abstención formulada por el señor senador López.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Losada). — Queda aprobada. Si no se hace uso de la palabra se va a votar el artículo 10.

Varios señores senadores. — Hay empate.

Sr. Genoud. — Señor presidente: hay 21 votos por la afirmativa, 21 votos por la negativa y una abstención. Corresponde que vote el presidente.

Sr. Presidente (Losada). — Voto por la afirmativa.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Maya. — El presidente provisional no tiene doble voto.

Sr. Presidente (Losada). — Sí, señor senador: tiene doble voto.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Maya. — No pierde su voto como legislador, pero no tiene doble voto.

Sr. Yoma. — Cuento bien que son veinte, señor presidente.

Sr. Presidente (Losada). — Por Secretaría se dará lectura del artículo 34 del reglamento que establece el procedimiento a seguir en estos casos.

Sr. Secretario (Oyarzún). — *(Lee)* "Artículo 34: El presidente no discute ni opina sobre el asunto que se delibera. Sólo vota en caso de empate. En los casos en que la Presidencia del cuerpo sea ejercida por un senador, corresponde que el mismo vote en las cuestiones sometidas a resolución de la Cámara, ejerciendo en caso de empate de la votación, el derecho de decidir la misma, conforme a lo dispuesto por el artículo 216".

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Losada). — Queda aprobado el artículo 10.

Sr. Verna. — La Presidencia tiene que manifestar su voto.

Sr. Presidente (Losada). — Manifesté mi voto por la afirmativa, señor senador.

—Se enuncia y aprueba el artículo 11.

—Se enuncia el artículo 12.

Sr. Maglietti. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Maglietti.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: a efectos de aportar más recursos a las arcas del Estado, como bien se ha dicho hoy aquí —y no repetiré las manifestaciones ya realizadas—, propongo la modificación del artículo 12 según el texto leído anteriormente. Es decir que los aportes a las AFJP queden en las arcas del Estado y se emita un bono a diez años a la tasa Libor, de manera tal que los jubilados o futuros jubilados no se vean perjudicados.

Además se deja en claro que las AFJP no podrán percibir ningún tipo de comisión o retribución ya que estas administradoras —cuyos dueños como todos sabemos son los bancos— están cobrando una comisión exorbitante de hasta el 30 por ciento; y como bien dijo el senador Moreau, ya tienen percibido —sin haber invertido absolutamente nada—, más de 7 mil millones de pesos en perjuicio de los jubilados. A su vez, utilizan parte de estos fondos para prestárselos nuevamente al Estado a una tasa del 15 por ciento.

Sin duda, debe darse un corte a estos procedimientos que son realmente perjudiciales para el Estado, porque, lógicamente, ante esta situación de crisis que estamos viviendo no podemos permitir que esos recursos, que son del pueblo argentino y no de los bancos, sean utilizados por éstos para obtener esas enormes ganancias.

Por ello, señor presidente, propongo que el artículo 12 sea aprobado con la redacción que he propuesto y que se encuentra en la Secretaría de la Presidencia.

Sr. Altuna. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Altuna. — Señor presidente: con todo respeto debo decir que modificar este proyecto de ley significaría echar por la borda todo el esfuerzo y el trabajo que venimos haciendo desde que comenzó esta sesión, y antes de ella, en la búsqueda de los distintos consensos.

Por lo tanto, nosotros solicitamos la aprobación de este artículo tal como ha venido de la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente (Losada). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 12.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncia y aprueba el artículo 13.

—Se enuncia el artículo 14.

Sr. Yoma. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. — Señor presidente: hoy estamos asistiendo a un triste récord: es la primera vez, desde la instalación de la democracia que este Congreso vota una reducción salarial.

Sr. Altuna. — No es así.

Sr. Yoma. — Creo que esto erosiona sensiblemente la legitimidad del Parlamento.

Pero, además, a sabiendas, en este artículo 14 estamos votando una norma que avanza groseramente sobre atribuciones de otro poder del Estado y que avasalla garantías constitucionales expresas, como es la defensa...

Sr. Maya. — Solicito una interrupción, señor presidente.

Sr. Presidente (Losada). — ¿Autoriza la interrupción, señor senador?

Sr. Yoma. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Losada). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Maya.

Sr. Maya. — Señor presidente: creo que durante la votación del artículo anterior se produjo un error y que es necesario consignar su voto de desempate, porque según visualicé, los senadores Maglietti, Romero Feris y Moreau no votaron afirmativamente el artículo 13. En consecuencia, existiendo cuarenta y tres señores senadores, eso implica que hubo un empate de veinte a veinte...

Sr. Presidente (Losada). — Como existen sospechas sobre la labor de la Presidencia, le voy a pedir al señor senador Moreau...

Sr. Maya. — No; no sospecho desde ningún punto de vista. Me pareció...

Sr. Presidente (Losada). — Como lo está diciendo con alguna sutileza...

Sr. Maya. — ¡No lo digo con ninguna sutileza!

Sr. Presidente (Losada). — Le voy a dar la palabra al señor senador Moreau para que aclare...

Sr. Maya. — Disculpeme, señor presidente. ¿Me permite que termine y aclare?

Sr. Presidente (Losada). — Le ruego que aclare.

Sr. Maya. — Lo haré. Yo observé que no votaron favorablemente los senadores Romero Feris, Maglietti y Moreau. Si observé mal que me lo aclaren. No estoy sospechando de nadie.

¡Lo único que falta es que se enojen porque hablo!

Entonces, lo que corresponde es que aclaren los señores senadores si votaron favorablemente o no. Nada más.

¡No es para enojarse, señor presidente!

Sr. Presidente (Losada). — Les voy a pedir a los señores senadores que hagan la aclaración pertinente, pero no le voy a permitir que vuelva a poner en duda lo que se está haciendo desde la Presidencia.

Sr. Maya. — ¡No lo he puesto en duda, señor presidente! ¡No le admito que diga que lo he puesto en duda porque no lo he hecho! Y sabe que hablo con tanta claridad como usted.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Moreau.

Sr. Moreau. — Señor presidente: en todos los casos en que he votado en contra de los artículos que propone la Cámara de Diputados en su sanción lo he anunciado previamente a la

votación y, además, he propuesto reformas; en el caso del artículo 13 no lo he hecho porque voté a favor.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Romero Feris.

Sr. Romero Feris. — Señor presidente: aclaro que voté favorablemente el artículo 13.

Sr. Presidente (Losada). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. — Señor presidente: decía que, además del triste día al que nos toca asistir por el hecho de que el Senado vota por primera vez en dieciocho años una reducción de salarios, se está votando un proyecto de ley groseramente inconstitucional a través del cual se avasallan garantías expresas de los ciudadanos.

En este artículo 14 se modifica el artículo 195 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y, en la última parte de la norma en consideración se le prohíbe a los jueces de la República decretar medidas cautelares que afecten, obstaculicen, comprometan, distraigan de su destino o de cualquier forma perturben los recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias. Quiere decir que, además de impedirse a los jueces de la Nación ejercer su magistratura al dictar medidas cautelares contra disposiciones del poder administrador, se protege a los funcionarios que no observen los reglamentos al establecer esta suerte de *bill* de indemnidad, con lo cual los jueces no pueden imponer a los funcionarios cargos personales pecuniarios.

La verdad es que este artículo por lo bochornoso sólo es comparable con el artículo 10, que establece la reducción salarial. Nuevamente quiero llamar a la reflexión a la bancada del gobierno para que este artículo se elimine porque si no lo hacemos nosotros el papelón del Congreso se va a dar cuando un juez de faltas —reitero— lo haga.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Villarroel.

Sr. Villarroel. — Por cierto que la norma que está cuestionando el señor senador por La Rioja, señor presidente y colegas, no es un dechado de perfección, pero tampoco un bochorno.

En primer lugar, por lo que se ha dicho sobre rebaja de salarios, quiero recordar que el

Congreso de la Nación Argentina en 1996 mediante la Ley de Presupuesto ratificó o convalidó el decreto del señor presidente Menem por el cual se dispuso rebajas en los salarios, del 5, del 10 y del 15 por ciento respectivamente. La cuestión no necesita de demasiados acuciosos exámenes de memoria porque sucede que el caso "Guida", mencionado hace un rato y resuelto por la Corte Suprema Justicia de la Nación en tiempos recientes, entre otras consideraciones, justamente hace mérito de que mediante una norma de la Ley de Presupuesto el Congreso convalidó de modo explícito esa rebaja de sueldos dispuesta por decreto del presidente Menem, desde luego que hace mucho menos de 18 años.

En segundo término, en lo que hace a la cuestión de las medidas cautelares yo creo que es suficientemente claro, más allá de la imperfección de redacción del artículo, que cuando se habla de la indemnidad de los funcionarios en orden a su patrimonio o a su responsabilidad personal se refiere exclusivamente a medidas cautelares; vale decir, por el estilo, por ejemplo, de imponer astreintes a un funcionario en su peculio personal porque no cumple alguna medida cautelar.

Todos sabemos que las medidas cautelares son medidas provisionales; vale decir, que tienen a asegurar el resultado de un proceso. Ciertamente parece anómalo que una manera de asegurar el resultado de un proceso consista en imponer una carga personal de su peculio al funcionario público. Y eso de ninguna manera significa sancionar un *bill* de indemnidad para el funcionario y sus eventuales responsabilidades.

Sr. Yoma. — ¿Me permite, señor presidente?

Sr. Altuna. — Señor presidente...

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Moreau.

Luego le cederé nuevamente el uso de la palabra, senador Yoma.

Sr. Moreau. — Sí, señor presidente. Siguiendo con la norma que enuncié precedentemente en el sentido de que iba a anunciar de manera previa mi voto negativo, quiero decir que me sumo a las expresiones del senador por La Rioja.

Creo francamente —y por supuesto no quiero competir con quienes tienen más conocimiento

que yo en materia de derecho constitucional— que esto es una flagrante violación a los derechos de los ciudadanos en lo que se refiere a sus acciones frente al Estado.

Pienso efectivamente que esta norma va a caer en un fallo judicial y no quiero sumar mi voto a esto que considero francamente inconstitucional.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador San Millán.

Sr. San Millán. — Señor presidente: por el artículo 14 de este proyecto de ley, supuestamente para atender una situación transitoria, pero que, como veremos, no resulta ser tal, se propone reformar el artículo 195 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es una norma de carácter permanente, agregándosele un tercer párrafo por el cual "los jueces no podrán decretar ninguna medida cautelar que obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los recursos propios del Estado", o sea que los jueces en ningún caso, que de alguna manera pueda "perturbar" los recursos del Estado, podrán dictar medidas para asegurar bienes, o para mantener un estado de cosas, o para asegurar elementos de prueba, o para suspender la ejecución de un acto, etcétera, lo que no significa otra cosa que retrotraer nuestro sistema jurídico del Estado de derecho al sistema absolutista del Estado autocrático que todo lo puede; desde que este no será justiciable, aun por actos de violación grosera y arbitraria de la Constitución Nacional, ya que si no les es posible a los jueces "decretar ninguna medida cautelar", las sentencias podrán llegar a resultar de cumplimiento imposible, dependiendo su ejecución del arbitrio y discrecionalidad del funcionario de turno; con el agravante de que si éste no cumple sino de una manera irregular las obligaciones legales que les son propias, que no es otra cosa que el ilícito del artículo 1.112 del Código Civil, no será civilmente responsable, puesto que no se le podrán imponer "cargas personales pecuniarias", según lo propone el proyecto en el último párrafo del artículo bajo la consideración de este cuerpo.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Maglietti.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: apoyo la moción realizada por los señores senadores Yoma, Moreau y San Millán.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. — Señor presidente: en homenaje a la memoria histórica del señor senador Villarroel, el decreto 290 que como bien dice fue incluido en la Ley de Presupuesto en 1996, respondió también a un acuerdo que hubo entre la bancada del justicialismo y el Poder Ejecutivo de entonces para evitar los juicios que se venían como consecuencia de la ilegalidad manifiesta del decreto. Se incluía en la Ley del Presupuesto, pero con la condición impuesta de que el decreto fuera derogado por el Poder Ejecutivo nacional, cosa que efectivamente ocurrió.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Altuna.

Sr. Altuna. — Señor presidente: que se vote, porque nosotros, por los motivos expuestos, no aceptamos ninguna modificación.

Sr. Presidente (Losada). — Corresponde votar el artículo 14.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncia el artículo 15.

Sr. San Millán. — Señor presidente: iguales consideraciones a las del artículo 14 caben para el siguiente artículo 15 de este proyecto, ya aprobado en general, a más de denunciar y señalar aquí la más flagrante violación al principio fundamental del derecho laboral, consagrado por nuestra Constitución, cual es que el "trabajo goza de la protección de las leyes", artículo 14 bis. La amplitud del proyecto es desmesurada, en tanto enerva la judicialidad del Estado, y absurda al sustraer a los funcionarios de "cargas personales pecuniarias" creando un fuero o privilegio personal. Con lo que además de ser claramente inconstitucional, por violación a los artículos 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional, lejos de profundizar la tan mentada lucha contra la corrupción, con este proyecto la torna impune, por cuanto se consagra el abuso de autoridad y la violación del Estado de derecho en manos de funcionarios inescrupulosos que se podrán sentir dueños de la vida y hacienda de los ciudadanos, ya que no serán responsables pecuniariamente. ¿No es acaso esto consagrar la impunidad y el tan tristemente célebre terrorismo de Estado? ¿Cuál es la seguridad jurídica que tanto pregonaba el Ejecutivo nacional? ¿Cuál es el proyecto de país que propone este proyecto?

Aquí veo que, indudablemente, lo que se proyecta es el caos, la violencia y la desaparición del Estado de derecho.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. — Como bien dice el senador San Millán —obviamente apoyo su moción—, esto se refiere a la norma de procedimiento laboral y repite textualmente la deformación que tiene el artículo anterior respecto de la prohibición de dictar medidas cautelares. Por eso apoyo la moción del señor senador San Millán.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Moreau.

Sr. Moreau. — Anuncio mi voto negativo a este artículo, tal como viene de la sanción de la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Maglietti.

Sr. Maglietti. — Por los motivos expresados, votaré en forma negativa este artículo.

Sr. Presidente (Losada). — Corresponde votar el artículo 15.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncian y aprueban los artículos 16 a 20.

—El artículo 21 es de forma.

Sr. Presidente (Losada). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

10

INSERCIONES

Sr. Presidente (Losada). — Se van a votar los pedidos de inserción formulados por diversos senadores.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Losada). — Se procederá en consecuencia.¹

Queda levantada la sesión.

—Son las 3 y 40 del lunes 30 de julio.

RUBÉN A. MARINO
Director del Cuerpo de Taquígrafos

¹ Ver el Apéndice.

II

APENDICE

I

SANCIONES DEL HONORABLE SENADO

I

**Modificación de la Ley de Impuesto al Valor
Agregado y sus modificaciones, la Ley
de Competitividad, 25.413,
y otras cuestiones conexas**

—El proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la página 3663.

II

INSERCIONES

I

Solicitada por el señor senador Romero Feris

Señor presidente:

Voy a fundar la postura del bloque Autonomista sobre este proyecto del Poder Ejecutivo, ya aprobado por la Honorable Cámara de Diputados.

Sin duda, es un tema de total trascendencia, en horas tan críticas para nuestro país.

Procuraré, con la mayor mesura, pero sin reservar opinión alguna, examinar críticamente este proyecto en revisión, por el cual el Estado nacional se propone alcanzar lo que se ha denominado "déficit cero".

En tal expresión se ha condensado el equilibrio fiscal futuro, por el cual se garantiza la correcta ejecución de los presupuestos, y se compatibiliza el gasto programado con los recursos efectivamente alcanzados.

Es decir, solamente se abonarían los gastos corrientes del Estado nacional, sin incluir los intereses de la deuda pública, en la medida que lo permitan los ingresos, tanto los tributarios y como los no tributarios, las contribuciones de la seguridad social y las rentas de la propiedad, el producido de ventas de bienes y servicios de la administración pública.

De esta manera, quedan excluidos los ingresos provenientes de fuentes financieras que se restringen exclusivamente para la refinanciación de los próximos vencimientos de las obligaciones contraídas.

Se anticipa de este modo la meta propuesta para el año 2004 por la ley 25.152 llamada de convertibilidad fiscal, más tarde conocida por Ley de Solvencia Fiscal, cuya finalidad fundamental era precisamente alcanzar gradualmente ese equilibrio, de modo tal que el déficit fuera previsible y financiable ordenadamente.

Ahora bien, aquellos sanos propósitos de ir menguando el déficit fiscal fueron abandonados en la primera oportunidad, ya que al sancionarse por ley 25.401 el presupuesto general de gastos y recursos para el corriente año 2001, se modificaron los valores máximos trasladándose al año 2005 el primer año de equilibrio fiscal.

Ahora, en esta oportunidad, con este propósito de alcanzar el déficit cero, se dictó primero el decreto 896/2001 y en su reemplazo la Cámara de Diputados ha sancionado las normas a cuya revisión estamos abocados.

Por éstas, bajo el título "Régimen de Equilibrio Fiscal con Equidad", se introducen severas restricciones al gasto público, que incidirán particularmente en el sector de las remuneraciones de los trabajadores activos y en el de los jubilados y pensionados, las que serán reducidas en todos sus conceptos e integrantes, incluso las asignaciones familiares.

El proyecto incluye una garantía del Poder Ejecutivo de que, en el futuro, se restablecerían las retribuciones para todos aquellos que percibían hasta \$ 1.000 mensuales antes de las reducciones. Adelantamos que esta norma no resulta suficientemente clara y ya los integrantes del Poder Ejecutivo se han expedido sobre su condicionalidad.

A fin de garantizar al menos este nivel de remuneraciones se aumenta la carga tributaria en forma inmediata.

Así, se dispone un nuevo incremento sobre las contribuciones patronales del sector servicios, antes elevadas al 16 % por vía del decreto 814/2001 y ahora subidas al 20 %; se dejan sin efecto la disminución del impuesto a la transferencia de combustibles fijada para las naftas y el reintegro del impuesto a las ganancias a los trabajadores de cuarta categoría efectuado el corriente año, como consecuencia de la reforma tributaria que la gente llamó "el impuestazo".

Paralelamente se introducen diversas reformas al sistema tributario, agravando considerablemente la carga fiscal, en particular por la generalización del impuesto a los débitos y créditos bancarios, que se lleva al máximo de la tasa aprobada, duplicando el monto inicial y extendiéndolo a las cajas de ahorros bancarias y eliminando las exenciones para cualquier tipo de entidades privadas, en especial a las cooperativas y las mutuales.

Tampoco pueden dejar de mencionarse las modificaciones al impuesto al valor agregado, entre ellas se ratifica la entrada en vigencia de la suba al 21 % a los abonos de la televisión por cable, establecida por el decreto 493 del 27 de abril pasado.

Pero antes de seguir con esta descripción global del proyecto de déficit cero, es conveniente encuadrarlo históricamente, aunque sea, en aras a la brevedad, de un modo somero, cómo se llegó a esta situación.

Cuando el señor presidente de la Nación, en ocasión de la celebración del Día de la Independencia en la ciudad de San Miguel de Tucumán anunció en su discurso que el país se había quedado sin crédito, ni local ni internacional, vimos corporizarse la gravísima amenaza que desde ya hacía tiempo venía cerniéndose sobre nosotros y sobre la cual, desde este bloque Autonomista habíamos anticipado innumerable veces reclamando el cese de la dañina política de endeudamiento adoptada desde 1995 y proseguida irresponsablemente desde entonces.

Ese endeudarse sin tasa ni medida, año tras año, constituía una burla malsana a la Ley de Convertibilidad, que por un lado se había convertido en una barrera infranqueable para la inflación, pero por el otro su rigidez incommovible nos había sumergido en los serios problemas de competitividad que hoy se procura resolver sectorialmente, con sus consecuencias perniciosas sobre el nivel de empleo.

El anuncio presidencial reconocía la proximidad de la cesación de pagos, es decir del *default* de la Argentina, que ya presagiaban los analistas económicos de los bancos y consultoras internacionales retirándose totalmente la oferta de créditos.

Lo que un año antes lo habían considerado solamente como una mera posibilidad, por ello el riesgo país oscilaba alrededor de los 700 puntos, con un mínimo de 607 al inicio del gobierno y un tope de 865 en noviembre, antes del anuncio del blindaje, pero ya a principios de este año comenzó a tomar entidad la idea de una cesación de pagos, por lo que a partir de abril varias consultoras nos redujeron la calificación, comenzando un incremento del mencionado índice.

Para ello había tenido una clara incidencia el fracaso de la política instrumentada por el ministro de Economía, José Luis Machinea, quien no pudo quebrar la recesión que persistía desde el tercer trimestre de 1998, para convertirse de ese modo en la más larga en la historia económica de nuestro país.

De hecho, fallaron sistemáticamente los pronósticos oficiales de los ingresos tributarios, como venía ocurriendo desde el presupuesto del año 1998 y pese a diversos ajustes impositivos, la carencia de fondos terminó invariablemente suplida por la toma de nuevos créditos, cada vez mayores, a menores plazos y a tasas más elevadas.

Esto quedó palmariamente de relieve en el proyecto de presupuesto de gastos y recursos de la Nación aprobado para este año 2001, cuyo repaso nos permite recordar de qué manera se fue reflejando esta crisis en los mercados.

Anticiparon éstos las dificultades futuras para la refinanciación de las deudas que vencían este año y que sumadas al déficit fiscal previsto importaban el acceso a fuentes de financiamiento por casi \$ 29.000 millones con un incremento neto de la deuda pública del orden de los \$ 7.000 millones.

De nada valió el anuncio a mediados de diciembre pasado del denominado "blindaje" con el cual pareció despejarse el horizonte. Pero los fallidos intentos de reactivación de la economía, unidos a un crecimiento de la desconfianza oscurecieron cada vez más el horizonte social. El blindaje fue horadado y precipitó la renuncia del ministro de Economía.

La efímera actuación de Ricardo López Murphy y su equipo demostraron la falta de consenso dentro del propio gobierno sobre las medidas a adoptar para conjurar la crisis que se aproximaba cada vez más rápidamente.

Los mercados financieros continuaron monitoreando detenidamente la situación y la atención mundial se concentró sobre la situación argentina, multiplicándose los comentarios adversos y generando en forma creciente el retiro de los fondos de inversión que dispusieron la venta de bonos y demás obligaciones emitidas por el gobierno argentino.

El ingreso del doctor Domingo Felipe Cavallo, y su conjunto de propuestas, entre ellas el restablecimiento del impuesto a los débitos y créditos bancarios y la realización del cambio de bonos de vencimiento próximo, el llamado "megacanje", no fueron suficientes para satisfacer a los mercados que acrecentaron su reticencia a proseguir refinanciando a la Nación.

Semana a semana, cada renovación de Letras de Tesorería -Letes-, reflejaba en el índice riesgo país esta dificultad y se llegó al punto anunciado por el señor presidente de la Nación. No hay más crédito. La carencia es total, dijo.

De allí a la cesación de pagos sólo había un paso. Con él también se iba directamente o a una dolarización de hecho o al fin de la convertibilidad y a una devaluación de alcances impredecibles. En mi opinión, una devaluación en estos momentos, reitero, en estas circunstancias, arrojaría consecuencias de tal gravedad en la Argentina que podría causar un nivel de tensión social insostenible. En todos los casos, con una corrida masiva de los depósitos

y el colapso económico. De allí en más, es difícil conjeturar un panorama de los hechos que no sea desolador, pero que seguramente arrastraría a las instituciones.

La alternativa planteada fue alcanzar el déficit cero. El mismo es la nueva propuesta del gobierno argentino para superar la crisis del endeudamiento. Es una idea antigua, de hecho, ya está en la ley 25.152 de solvencia fiscal. Pero en esta ocasión, formulada de manera mucho más estricta.

Para ser válida esa política necesita de un consenso mayoritario. No solamente hay que compartir la idea a la que asiente prácticamente la totalidad sino de que modo se alcanza la meta.

Es decir, el ajuste del gasto público se efectúa desde los opuestos: recursos contra gastos.

Fracasó desde 1998 el sistema de los recursos. Se establecieron sucesivamente nuevos impuestos: sea a la ganancia mínima presunta, versión del anterior impuesto a los activos, derogado por ser opuesto a la inversión, o también, a los intereses pagados, de igual característica al anterior.

Se aumentaron tasas del impuesto al valor agregado y se suprimieron exenciones. Subió el impuesto sobre los combustibles líquidos, afectándose con el gasoil a la producción y el transporte y con ello a la competitividad.

Todas estas medidas eran contrarias a la inversión y sin ella no se crean nuevas fuentes de trabajo, no se generan riquezas y, por el contrario, se quita o bien se pierde capacidad de competencia con el exterior y por tanto se termina perdiendo mercados e incluso siendo desplazados del propio por la producción de países de políticas agresivas de exportación.

El cambio de gobierno no alteró estos gravámenes: antes bien, exacerbó la presión tributaria al sancionar mayores alícuotas y reducir mínimos en el impuesto a las ganancias, con lo que se restó capacidad de gasto a la gente y de esa manera menzó en forma progresiva el consumo, generando mayor recesión.

O sea, por el lado de los ingresos las previsiones no se cumplieron. Los recursos presupuestarios nunca alcanzaron para sufragar los gastos.

En cuanto a los gastos, diversas medidas sólo resultaron más enunciativas que reales.

Finalmente se optó por la reducción de las retribuciones que fijó el decreto 439/2000, lo que, a más de ser completamente insuficiente, produjo una elevación de la tensión social que la desocupación había generado.

En esta ocasión se ha dispuesto nuevamente atacar el déficit desde ambos órdenes: recursos y gastos.

Obviamente todos concordamos con el equilibrio fiscal. Lo hemos reclamado de modo permanente.

En materia de recursos entendemos que este permanente procedimiento de modificarlos, en ge-

neral aumentando las alícuotas de los existentes o bien eliminando las exenciones con que fueron creados, o como pasó en los últimos tiempos, creando nuevos gravámenes, ha sido, es y será completamente negativo para la actividad económica en general.

La estabilidad del sistema tributario, su previsibilidad es una norma esencial del funcionamiento de una economía. No por algo, la reducción o la estabilización de los impuestos ha sido siempre una promesa en todas las campañas electorales. También fue un hecho constante su incumplimiento aunque observamos que en los Estados Unidos de América se redujeron efectivamente los impuestos como prometiera George Bush en su campaña.

Por ello, cuando tratamos la ley 25.152 de convertibilidad o solvencia fiscal, afirmé en el debate que tal como estaba diseñado el régimen se parecía a una mesa rectangular de tres patas, donde la falta de estabilidad de los impuestos se transmitiría a todo el sistema.

¿A qué nivel se llegará con este nuevo incremento de la presión fiscal? ¿hasta dónde la mayor presión se traducirá en una mejor recaudación?

Es cierto que esta vez los mercados no han dado el respiro que las medidas pro competitividad que desde el gobierno se fueron proponiendo a partir de marzo. Lo que no queda suficientemente en claro es si esto les es suficiente.

Por el lado del gasto también se asume un compromiso que hoy parece situarse en una reducción del orden del 13 % en los programas, incluidos sueldos, jubilaciones y pensiones.

Desde el punto de vista de una justicia con equidad aparece como notablemente injusto esta postergación del individuo y sus familias cuyos ingresos se encuentran en un nivel que apenas alcanza a la subsistencia.

Se justificará con que ésta es la única medida inmediata disponible. Pero no se ofrece ninguna compensación futura. Entiendo la gravedad de la situación, pero gravita en mi ánimo de modo agobiante no ofrecer a la gente otras soluciones.

Señor presidente: desde mi incorporación a esta Honorable Cámara, he participado en numerosas sesiones donde por enormes urgencias del Poder Ejecutivo nacional se sancionaban reformas tributarias o ajustes de diferente naturaleza. Han quedado en el recuerdo aquellos proyectos para estimular la inversión y generar así más puestos de trabajo.

Todas ellas tenían una tesitura constante: financiar un gasto público creciente en forma cada vez mayor. Hoy ha llegado el momento de su reducción. Pero la vía elegida no parece la más apropiada.

Por las razones expuestas, votaré en general a favor de este proyecto de ley, con las disidencias en particular que efectuaré oportunamente.

Solicitada por el señor senador Alasino*Comisión de Presupuesto y Hacienda*

Dictamen en el proyecto venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados correspondiente al expediente C.D.-68/01, modificando leyes impositivas, y otras cuestiones conexas.

Dictamen de comisión*Honorable Senado:*

Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el proyecto venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados correspondiente al expediente C.D.-68/01 modificando leyes impositivas, y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su rechazo.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 30 de julio de 2001.

FUNDAMENTOS

Señor presidente: nuevamente el Poder Ejecutivo nacional propone a este Congreso de la Nación un ajuste en sus gastos. Si bien aparece como novedad el programa de reducción de créditos presupuestarios y modificación de leyes de impuestos, no nos resulta novedoso el temperamento que el proyecto venido en revisión adopta en relación con la forma de producir tales restricciones en el gasto público. En efecto, en una segunda oportunidad en un período apenas mayor a un año, el gobierno pretende que esta Cámara de Senadores legitime un recorte de salarios a los empleados públicos y a los haberes jubilatorios de nuestros abuelos.

Compartimos junto a la mayoría de los argentinos que el objetivo de lograr el déficit cero es una cuestión de Estado y que todos debemos apoyar. Fuimos los primeros en advertir la necesidad de llegar al déficit cero, cuando en 1999 desde nuestro bloque surgió la iniciativa, que luego se convirtió en la ley 25.152, de regular la administración de los recursos públicos, de forma tal de reducir gradualmente el déficit hasta llegar a cero. Pero rechazamos cualquier intento que, fundado en el objetivo del déficit cero, implique realizarlo a costa de la reducción generalizada de salarios públicos y jubilaciones.

En oposición al criterio del gobierno de que cualquier plan que tienda al déficit cero pasa por la rebaja de las remuneraciones del sector público, siempre hemos rechazado tal posibilidad. Ello traduce la coherencia que hemos manifestado con respecto al sensible tema de reducciones o recortes de salarios, tanto en el sector público como en el privado.

Al respecto, es justo recordar que cuando el bloque Justicialista propuso modificaciones al proyecto de reforma laboral del año pasado, un número importante de legisladores nos hemos visto obligados a enfrentar ante la Justicia imputaciones sobre aceptación de dádivas a cambio de votar a favor esa reforma laboral propuesta por el Poder Ejecutivo. Y las modificaciones que este Senado propuso eran las necesarias para que las normas que alteraban disposiciones del derecho colectivo del trabajo no trajeran supeditados ni despidos arbitrarios de trabajadores, ni rebajas salariales.

A más de un año de tal debate parlamentario, y después de que la Justicia declarara recientemente la falta de mérito de todos los sindicatos en semejante imputación, debemos manifestar que, a pesar del costo que nos ha significado aprobar tal reforma laboral con las modificaciones que impedían despidos y reducciones salariales, tal decisión implicó nuestra irrestricta defensa de los derechos del trabajador.

Tal coherencia fue mantenida cuando el Poder Ejecutivo dictó el decreto 430, de necesidad y urgencia, a pocos días de la reforma laboral.

El decreto reducía los salarios de los empleados públicos en razón de un 12 % de la nómina salarial, cuestión que también fue debatida en este Senado el día 14 de junio de 2000. En tal fecha, el Senado, basado en claros fundamentos de justicia social y amparado por la Constitución Nacional, rechazó tal reducción salarial hacia los empleados públicos con argumentos que giraron en torno a la división de poderes, en tanto el decreto incursionaba en materias propias del Congreso de la Nación, el derecho de propiedad y la intangibilidad de las remuneraciones de los empleados públicos —al igual que su estabilidad—, la confiscatoriedad que asumía tal reducción, toda vez que al no prever una devolución de los emolumentos retenidos, se tomaba en un virtual impuesto al empleado público, así como también una flagrante violación al principio de legalidad tributaria, habida cuenta de que se estaba imponiendo por decreto y saltando la intervención constitucional que en forma exclusiva le cabe al Congreso de la Nación.

En idéntico sentido, en la misma sesión referida, el Senado en pleno declaró la inaplicabilidad a este cuerpo del decreto 668/00 suscripto, por sendos presidentes de ambas salas legislativas, que —reduciendo las remuneraciones del personal legislativo— adhería al decreto 430 de necesidad y urgencia.

Nuevamente, repitiendo errores recientes, se presenta una vez más ante el Senado una iniciativa que toma como variable de ajuste ya no sólo a los salarios públicos, sino que adiciona al recorte a los haberes de los jubilados y pensionados.

Esta modalidad, ya conocida por todos, además vuelve a incurrir en una injusticia. Pretenden reducirles a todos por igual, tanto al jubilado que con sus aportes de treinta años alcanzó una jubilación

de seiscientos pesos como a aquellos que tienen un salario de más de cuatro mil pesos. Paradójicamente, ponen como título a este punto del proyecto del Poder Ejecutivo: "Régimen de Equilibrio Fiscal con Equidad".

Por otra parte, merece destacarse que la iniciativa cuyo rechazo proponemos significa una marcha atrás de los planes de reactivación estimulados por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, en el entendimiento de que la suspensión de la rebaja de combustibles y la devolución del impuesto a las ganancias profundiza aún más la recesión económica. Tal cuadro recesivo, con respecto a los empleados públicos, es todavía más agudo, teniendo en cuenta si se cristalizara la reducción salarial.

Abocándonos al fondo del proyecto venido en revisión, observamos también que no contempla el criterio invariable de que toda reducción salarial debe ir de la mano de un mecanismo de devolución de tales importes. De manera tal que constituya un ahorro al que se ven forzados los empleados públicos en igualdad de condiciones, y que tales mecanismos contemplen el privilegio en el tiempo para su devolución a los estratos remuneratorios más bajos del sector público. Del mismo modo sostenemos que las jubilaciones deben quedar al margen de cualquier recorte de créditos presupuestarios.

Desde el Poder Ejecutivo han instalado la idea de ahorrar a costa de salarios de trabajadores, haberes jubilatorios y sectores productivos. Cabría preguntar, en rigor de verdad, cuánto significa este ahorro al lado de los gastos estatales superfluos e innecesarios, del doble presupuesto a organismos por la misma tarea, de la abultada planta de funcionarios, de la elevada remuneración a los mismos, etcétera. La única faceta del ahorro debería ser percibida en relación a los gastos estatales, pero no con respecto a los empleados públicos y los haberes jubilatorios.

Por otra parte, a pesar de quitar capacidad de consumo a empleados y beneficiarios del sistema de jubilación, también la forma en que se encuentra plasmada esta reforma legal trae aparejada una gran dosis de incertidumbre hacia todo el trabajador, víctima de este recorte. Nótese que el proyecto no establece si se trata de reducciones de carácter temporal y si se van a constituir en percepciones *ad infinitum* si se mantiene el déficit de las cuentas públicas.

En ese sentido, también merece reproche la circunstancia de que, derivada de la forma en que se intenta modificar la ley 24.156 de administración financiera, la reducción de créditos presupuestarios para salarios y haberes se transforma en permanente, porque siempre estará sujeta a la existencia de déficit de caja. Es decir, el déficit cero a través de la reducción de salarios y haberes se transformará en un principio general de administración financiera estatal, ya que tal concepto quedará plasmado en el

artículo 34 de la citada norma. No será, en definitiva, una medida fundada en razones de emergencia pública ni limitada en el tiempo.

En tal orden de ideas, debe compararse este ajuste esbozado con el emanado del decreto 290/95, suscripto por el doctor Carlos Menem durante su presidencia. El mismo, por razones de emergencia, implementó reducciones salariales progresivas que partían de porcentajes mucho más reducidos que el que nos propone la iniciativa que rechazamos, y que posteriormente fuera confirmado en su constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del precedente "Guida, Liliana c/Poder Ejecutivo nacional s/Empleo público", en sentencia de fecha 2 de junio de 2000.

De todos modos, huelga manifestar que las reducciones de salarios y jubilaciones no es el único factor que induce al rechazo íntegro de la media sanción de la Cámara de Diputados, en razón de que otras disposiciones allí contenidas no satisfacen nuestras esperanzas de salir de una vez por todas del estancamiento económico en que el país se halla inmerso.

Con respecto al capítulo referido al impuesto sobre créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, debe rechazarse su generalización a todo tipo de transacciones, inclusive hacia movimientos en cajas de ahorro en que se acreditan importes salariales. Si consideramos que el ministro de Economía está aplicando el máximo de la alícuota autorizada por este Congreso a partir de la ley 24.414, debemos colegir que el nuevo impuesto pesa considerablemente sobre todas las actividades productivas, agudizando de ese modo —como hemos referido más arriba— el cuadro recesivo y conspirando contra la competitividad que se pretende mejorar.

En el mismo orden de ideas, en el sentido de que la norma en discusión dista bastante de mejorar las condiciones de competitividad y de fomentar el consumo, el diferimiento para el año 2002 de la devolución del impuesto a las ganancias y la suspensión de la rebaja de \$ 0,10 sobre combustibles líquidos, específicamente sobre la nafta, no contribuyen para nada para superar el estancamiento actual.

Finalmente, el aumento de cuatro puntos en las contribuciones patronales para empresas cuya actividad principal sea la locación y prestación de servicios, amén de proveer de recursos al Estado, expone a los usuarios de esos servicios al riesgo del aumento de tarifas por tales prestaciones y no afianza una política encaminada hacia la competitividad ni al aumento del consumo.

Agregamos que también existen en el proyecto en cuestión una serie de autorizaciones que barruntan la delegación de facultades legislativas hacia el Poder Ejecutivo, por intermedio de sus ministerios de Economía y de Trabajo, Empleo y Recursos Humanos.

Si bien este Congreso ha admitido delegar poderes en el Poder Ejecutivo en la ley 25.414, tal norma fue dictada con un plazo para su ejercicio y en el marco de una base para la misma. Ni la delegación introducida por el artículo 1º de la media sanción que se refiere al cambio en el sistema de liquidación del impuesto al valor agregado —del sistema de lo devengado al sistema de lo percibido—, ni la autorización pretendida en la modificación al artículo 1º, de la ley 25.413 —que deja al arbitrio del Poder Ejecutivo definir nada menos que el alcance definitivo de los hechos gravados por el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios—, así como también a crear un régimen especial de determinación de ese impuesto para las entidades financieras, dejando librado un amplio margen de incertidumbre fiscal a los contribuyentes, ni el artículo 4º, de la ley 25.413 —en tanto faculta al Ejecutivo a disponer que este impuesto constituya un pago a cuenta de todos o algunos de los impuestos y contribuciones sobre la nómina salarial—, pueden ser admitidas como delegaciones de facultades legislativas si nos atenemos a los recaudos constitucionales del artículo 76 de la Carta Magna. El proyecto no menciona —repetimos— ni el plazo por el que se pretende ejercer tal delegación de facultades titularizadas por el Congreso de la Nación, ni tampoco estima cuál debe ser la base de tal delegación o si se trata de una extensión de las otorgadas a través de la ley 25.414, de reciente data.

Por último, pero no menos relevante, el proyecto arremete contra el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y contra la ley 18.345, de procedimientos en materia laboral.

Establece nuevas normas en estos plexos de rito encaminadas a modificar los recaudos a tomar por los jueces antes de dictar una medida cautelar en contra del Estado nacional, tales como merituar si la medida afecta, obstaculiza, compromete, distrae de su destino o de cualquier forma perturba los recursos propios del Estado, o que signifique imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias. Nos animamos a afirmar sin temor a equivocarnos que tal como está concebida, esa disposición es de supina inconstitucionalidad por violar la garantía del debido proceso y por recortar facultades dispositivas de los jueces. En la forma planteada, puede suceder que si los jueces no dictan medidas cautelares condicionados por esta modificación, podría suceder que todas las sentencias posteriores devinieran de cumplimiento abstracto, o que las situaciones que se intentan recomponer, de dudosa reparación ulterior.

Si dudábamos de la legitimidad y conveniencia de esta nueva propuesta, la sospecha manifiesta a la que estamos siendo expuestos a través de distintos medios de comunicación sobre la existencia de “incentivos” provenientes del Poder Ejecutivo para la aprobación de este proyecto de ley —prácticamente el único beneficiario de la misma—, nos lleva a adoptar la decisión de rechazar en forma total la iniciativa en revisión. Ni las presiones de algunos medios de comunicación y del sector financiero nos harán cambiar de opinión, en el sentido de que este proyecto va en contra de los trabajadores, siendo la forma más inequitativa de lograr el déficit cero y a su vez de profundizar la recesión que padecemos.

3

Solicitada por el señor senador Arnold

Señor presidente: el debate que se presenta a través de este paquete de medidas es profundo y va más allá de lo que nos podemos imaginar. Es el futuro del país y de su crecimiento lo que se debate y decide. Contrariamente a lo presentado por el Ejecutivo, no debatimos la admisión legislativa del “déficit fiscal 0”, sino una decisión mucho más amplia de país: y es el futuro mismo. Para habilitar este debate tenemos que tener presente:

1. Que las medidas propuestas confunden la expresión, “déficit 0” con equilibrio fiscal.

2. Que el equilibrio fiscal, que se busca en todos los países del mundo, es dinámico, tiene una lectura de mediano o largo plazo, es el resultado de una política pública coherente, con visión de proyecto de país a futuro y ajuste del Estado a través de una revisión de su política en distintos sectores, que permitan ajustar las distintas variables de composición del gasto público y sus ingresos para garantizar equilibrio y crecimiento.

3. Que nada de este proceso activo y dinámico se pretende implementar con las medidas que el ejecutivo manda. Que se busca la inmediata eliminación lisa y llana del déficit fiscal en el corto plazo, sin la evaluación de las consecuencias dinámicas que son los mecanismos normales de cualquier sociedad que ajusta sus variables económicas y financieras.

A esto sólo puedo responder con una aclaración: no estamos en un laboratorio y no somos cobayos.

Pero entremos en debate: soy partidario del equilibrio fiscal. Este estaba contenido en la ley 24.156, artículo 34, que se modificó con el decreto 896/01.

El equilibrio fiscal es un concepto básico de cualquier economía. No se puede gastar más de lo que se genera. El Estado argentino viene de décadas de gastos irrestrictos. Paliaba con emisión de moneda, y, cuando no pudo hacerlo por convertibilidad, lo palió con la emisión de bonos. Todos coincidimos en ese diagnóstico.

Hoy nos encontramos con un Estado sobredimensionado, en estructura y en gastos.

La propuesta del Ejecutivo fue inicialmente más impuestos, recargando sobre el sector privado el costo del desequilibrio. Y agregó algo: sobre el sector privado que abona sus impuestos, es decir, la clase media y media baja. El impuesto lo

votamos porque nos dijeron que era la solución. Esta propuesta trajo más recesión.

En una segunda etapa, ya con el actual ministro, se requirieron además de nuevos impuestos (el del cheque) facultades legislativas, aduciendo el escaso margen de operación que se tenía ante la emergencia y la supuesta lentitud legislativa. Los hechos posteriores demostraron que se hizo uso discrecional de las facultades, que el ministro apeló a nuevos impuestos, marchas y contramarchas. El país siguió en profunda recesión. Una gira por Europa, principal inversora en la Argentina de la última década, llevó al ministro al convencimiento de que el modelo está más agotado que lo que inicialmente supuso y que desde el exterior reclamaban seriedad. Es decir, ajuste en el Estado.

Y otra vez una medida de "shock". El déficit 0. El inmediato paliativo a todos los males. Lo que no hemos hecho en décadas lo haremos en un día. Ya que todo está fijado en términos superlativos: el megacanje, el megajuste. Sin considerar que el shock que se requiere es de confianza.

¿No será hora de parar con este criterio de soluciones facilistas y pensar al futuro y corregir el déficit fiscal, con criterio, evaluando las consecuencias y las reacciones, y no negociar estas medidas que lejos de beneficiar deprimen más la economía y transforman un amesetamiento en un espiral descendente?

Quiero hacer dos reflexiones respecto de otros países que han logrado el equilibrio fiscal en la última década:

- Tanto Irlanda como Suecia no tienen más de 8 millones de habitantes cada uno.

- Antes del ajuste, sólo el 4 % de sus empleados eran empleos públicos.

- La relación deuda externa/PIB era de ... %¹

- Su mercado natural, el europeo, es de 350 millones de personas, con un poder adquisitivo de ...¹ per cápita en 1995.

Ninguna de estas condiciones mínimas se cumple en la Argentina.

- Somos 37 millones, el 25 % de los cuales está desempleado, un 5 % ya ni siquiera busca trabajo, y un 35 % es empleado público

- La relación deuda externa/PIB es de 33 %. El ingreso per cápita, de 12.000. Un 8 % de más de 40.000, mientras que el restante 92 % es inferior a 3.000.

- Nuestro mercado natural es el Mercosur, 300 millones de habitantes, más de la mitad de los cuales tienen necesidades básicas insatisfechas. Y en nuestra propia población, el 40 % de la niñez también tiene necesidades básicas insatisfechas, por lo que la reconversión laboral y productiva es difícil.

Cuál es el objetivo y si las medidas propuestas por el Ejecutivo van direccionadas al logro, son el argumento del debate.

¹ Datos incompletos en el original, no remitidos al momento de la presente publicación.

Si el objetivo es la reactivación económica, debe salirse de la recesión. Para ello es importante bajar la presión tributaria, fomentar el consumo. Paralelamente, es perseguir la evasión. No se está logrando esto. No hay voluntad política de lucha contra la evasión. Nosotros propusimos control de combustibles y nunca se llevó a cabo (al menos 400 millones se pierden en ese concepto). Se anunció con bombos y platillos la creación de una Justicia tributaria y aún no hay ni sombra de que aparezca. Ni hablar de deudores ciertos que no se les aplica el principio del *solve et repete*. El consumo tampoco se fomenta retrayendo el mercado y negando a quienes su propensión al consumo supera el 100 % parte de su ingreso.

Si se persigue el déficit 0, como equilibrio fiscal, éste tiene que tener el concepto del largo plazo, y debe ser dinámico. Esto requiere dos requisitos básicos: dinamismo en el ajuste y certeza en el reconocimiento entre medidas reactivadoras y productivas de las que no lo son.

Aclárese que lo que se está dejando de lado es el crecimiento. Por ello las medidas son recesivas. No apuntan a sacar el país adelante y la única lectura que se está teniendo es la de "hacer buena letra con el exterior".

Las medidas están reconociendo el *default*. Están reconociendo que el Estado no puede pagar sus gastos corrientes y que impone a quienes contratan con él una quita *sine die* de porcentaje indeterminado. Es decir, declara una cesación a medias, que padecen los acreedores corrientes y no aquellos que tienen obligaciones negociables del Estado (bonos).

Si lo miramos desde otro punto de vista, estas medidas habilitan llanamente lo que se le negó con la delegación de facultades, porque al garantizar el pago de las obligaciones de Estado con el ingreso, se habilita que la recaudación, aun la coparticipable, sea prenda común de los acreedores.

Lo que no permite la Ley de Quiebras a los privados se lo permitimos al Estado.

Es decir, lo que tenía expresamente prohibido por la Ley de Crédito Público lo hace con el cuco a cuentas a través de la ley de déficit 0.

La extensión de impuestos y la creación de mayor presión fiscal sobre los cumplidores es recesiva. Es decir, pretende hacer el ajuste del sector público en parte a través de los privados, proveedores del Estado, generalmente empresas nacionales medias y pymes.

Las medidas, que deben entenderse como complementarias a las otras medidas ya tomadas, que agudizan la situación de aquellos con ingresos medios y bajos, generalizando el IVA, logran atacar a todos los que pagan impuestos indirectos y libera a los sectores altos. También decretada la bancarización de los pagos, se incorporan nuevas cargas sobre los contribuyentes.

Solicitada por el señor senador Costanzo

Señor presidente: quisiera en esta oportunidad anticipar mi voto negativo al proyecto de ley en tratamiento. Y al hacerlo, no quisiera dejar de expresar mis temores, mis preocupaciones y, hasta diría, mi falta de convicción acerca de la actitud que debemos asumir frente a la situación generalizada que vive nuestro país y al insistente y, de pronto, dramático reclamo del Poder Ejecutivo y de algunos sectores de la sociedad para una rápida sanción de este proyecto de ley.

Tengo la sensación de que las circunstancias nos han puesto frente a la opción entre la continuidad de nuestras instituciones y una especie de apocalipsis de las mismas. No es ésta la primera vez que se nos reclama apoyo legislativo, haciendo hincapié en un argumento traducido como "esto o el abismo".

Pero tanto los comentarios y estudios de prestigiosos analistas como las visibles secuelas de una situación financiera nacional y provincial en crisis y de una economía crecientemente debilitada y en recesión desde hace largo tiempo parecerían señalar que realmente nos encontramos en una situación límite. ¿Será ésta realmente una situación límite? ¿O como en oportunidades anteriores se tratará simplemente de un capricho?

¿No será oportuno recordar aquella conocida fábula del *Pastorcito y el lobo*? ¿La recuerdan? Según esta fábula, un pastorcito mentiroso reclamaba ayuda frecuentemente a la gente de su pueblo, diciéndoles que venía el lobo a devorar sus ovejas y, al obtener esta ayuda, se jactaba de ello. Un día, cuando solicitó la ayuda de su comunidad porque efectivamente acechaba el lobo, nadie le creyó y fue devorado por el animal. La pregunta que me formulo es, entonces, si realmente estaremos hoy frente al lobo. ¿Se nos cae la economía, se desploma el PIB, será obligación devaluar?

De todos modos, de ser así, no estoy seguro de que éste sea el mejor camino para la situación que estamos enfrentando, ya que es precisamente la reiteración de viejos mecanismos la que nos está llevando a la peligrosa espiral de crisis y más crisis, de ajuste y más ajuste.

Sé que hay algo con lo cual nadie puede disentir: el concepto de déficit cero. No podemos seguir gastando más de lo que se recauda; porque si así ocurre, teniendo cancelada –afortunadamente– la máquina de emitir billetes, sólo nos queda recurrir a la vía del financiamiento, y hoy esas vías están cerradas. Si a ello sumamos las posibilidades de acceso al crédito caro, la consigna de "vivir con lo nuestro" más que una decisión parece ser una imposición de los hechos.

Y en relación con esta consigna de no tener más egresos que ingresos, quisiera recordar que fuimos los primeros en advertir la necesidad de llegar a un

equilibrio fiscal o déficit cero –según como se lo quiera llamar–, cuando nuestro bloque, a iniciativa del ex senador José Manuel de la Sota, impulsó un proyecto –que fuera luego convertido en la ley 25.152– tendiente a regular racionalmente la administración de recursos, de forma tal que permitiera reducir gradualmente el déficit hasta llegar a cero.

Ahora bien, señor presidente, entre las preocupaciones que mencionaba al principio, se encuentra mi duda acerca de si es imperativo llegar a este necesario equilibrio fiscal a costa de la disminución generalizada de salarios públicos y jubilaciones. Y en este sentido, cito textualmente que "en oposición al criterio del gobierno de que cualquier plan que tienda al déficit cero pasa por la rebaja de las remuneraciones del sector público, siempre hemos rechazado tal posibilidad. Ello traduce la coherencia que hemos manifestado con respecto al sensible tema de reducciones o recortes de salarios, tanto en el sector público como en el privado".

Y al hacer referencia a este tema, señor presidente, quisiera recordar aquí que el año pasado muchos de quienes –como yo– propusieron en el seno del bloque Justicialista modificaciones al proyecto de Ley de Reforma Laboral, debieron enfrentar luego un proceso judicial ante la sospecha generalizada de haber recibido sobornos para sancionar dicha norma. Y, precisamente, las modificaciones que impulsábamos tenían por objeto proteger a los trabajadores de despidos y rebajas salariales. Ese fue el objetivo que tuvimos en mente al aprobar, con modificaciones, la Ley de Reforma Laboral.

Y ésa fue también la postura que mantuvimos frente al decreto 430/00 del Poder Ejecutivo nacional, por el que se reducían en un 12 % los salarios de los empleados públicos. En efecto, en junio del año pasado debatimos en este recinto el recorte en los salarios de los trabajadores y, basándonos en los principios de la justicia social y los consignados en nuestra Carta Magna, rechazamos dicha reducción salarial.

Se dice hoy que esta situación es consecuencia del descomunal e inconsciente aumento del gasto público. Sin embargo, la realidad no es tan simple: si consideramos los ingresos que prevé el presupuesto general de gastos de la administración, podríamos observar que tales ingresos no se verían excedidos por los gastos que anualmente realiza el Estado, de no ser por la gran cantidad de fondos que se desvían para el pago de los intereses de la deuda.

Por lo tanto, no podemos atribuir la responsabilidad de esta crisis al gasto público. El aumento del riesgo país no es el resultado de la incapacidad del sistema político de asumir sus responsabilidades, sino de la imposibilidad de nuestro país para garantizar el pago de sus compromisos en un contexto de profundo endeudamiento, prolongada recesión, falta de crecimiento y oportunidades de conseguir crédito por parte del Estado.

Debemos hoy focalizar nuestro interés sobre el verdadero problema que enfrenta nuestro país. No dudo que deben recortarse los gastos innecesarios e improductivos del Estado, como tampoco dudo que la política tiene que dar el ejemplo aplicando la máxima de sentido común según la cual "se gasta sólo en la medida de lo que se tiene". Sin embargo, no puedo aceptar que se diga que la base de nuestro problema es el gasto político. Hoy es necesario enfrentar las verdaderas causas del déficit: el problema de nuestro país es económico y está dado por un núcleo de fuertes intereses que debemos enfrentar.

No obstante ello, estamos hoy nuevamente frente a un proyecto de ley que centra su atención no sólo en los salarios de los trabajadores públicos, sino también en las jubilaciones y pensiones; un proyecto que, además, propone el recorte de un mismo porcentaje para todos ellos, sin distinguir entre un alto sueldo de un funcionario público y una jubilación alcanzada tras largos años de aporte; un proyecto que, en síntesis, contradice claramente los planes de reactivación propuestos hace un tiempo por el Ministerio de Economía, ya que junto con la suspensión de la rebaja de combustibles y la devolución del impuesto a las ganancias profundiza la recesión económica.

Queda claro, entonces, que dudo tanto de la legitimidad como de la conveniencia de aprobar este proyecto de ley. Agrego a ello la injusta y pertinaz sospecha a la que estamos siendo expuestos los senadores por los medios de comunicación que, irresponsablemente, hablan de la existencia de incentivos para aprobar esta ley. Es esta situación, junto con los argumentos ya expuestos, la que me ha llevado a adoptar la clara determinación de rechazar en forma total la iniciativa que nos ha sido girada en revisión.

En efecto, si cuando votamos el proyecto de ley de reforma laboral —introduciéndole modificaciones para asegurar los haberes y los salarios de los trabajadores activos— fuimos sometidos a un injusto proceso de esclarecimiento basado en la sospecha del cobro de sobornos, no quiero siquiera imaginar cuáles podrían ser las consecuencias de votar a favor de una norma cuyo objetivo, declarado consistente en el logro del déficit cero a costa de una importante reducción en los salarios de los trabajadores activos y pasivos.

Es por ello, señor presidente, que ninguna presión hará que cambie la opinión que me he formado sobre esta iniciativa; sin perjuicio, claro está, de reconocer que mucho me preocupa la angustiante situación que enfrenta nuestro país tras un largo proceso de crisis generalizada.

5

Solicitada por el señor senador Carbonell

Señor presidente: una profunda conmoción, un permanente bombardeo informativo, una descripción del precipicio, han invadido a la sociedad.

Hace apenas dos meses la actual administración anunciaba con bombos y platillos que la era de los ajustes había concluido.

Que debíamos alentar por vía del aumento de la competitividad (¡vaya término que hoy parece de la prehistoria!) el incremento de la producción, del consumo y de las exportaciones para salir de esta recesión.

En cuestión de horas todo ha cambiado. Los diagnósticos y pronósticos del ministro de Economía han sucumbido ante presagios de derrumbe.

El Poder Ejecutivo a través de su ministro de Economía anuncia como única salida una política de déficit cero, ya y ahora.

Nuestro partido había anticipado hace ya tiempo su posición con la sanción del proyecto del senador De la Sota.

No está en discusión el déficit cero. Es más, deberíamos pasar a la política de superávit presupuestario, porque superávit implicará realmente liberarnos de la deuda externa.

Discutir sobre el déficit cero es hoy casi un debate de bachilleres, diría el maestro Sampay.

Lo que debió debatirse —y en profundidad— es la forma como se alcanza ese objetivo.

El Poder Ejecutivo, que cuenta con los medios apropiados, debió plantear las alternativas posibles, su cuantificación y la repercusión sobre la demanda y oferta global.

Nada de esto se ha hecho.

No hay una sola línea en el proyecto que aluda a la evasión impositiva que el propio Poder Ejecutivo ha cuantificado en más de treinta y cinco mil millones de pesos.

La poda lisa y llana de las remuneraciones y de las jubilaciones hasta carece de imaginación.

No se han planteado estudios de reducciones crecientes en función de los montos percibidos.

No se han excluido jubilaciones ni pensiones por invalidez. No se han ponderado con elemental sentido de justicia redistributiva las jubilaciones según se hubieran concedido o no por los denominados regímenes de privilegio.

No se ha pensado en escalas decrecientes según las edades. Es decir, según la posibilidad de suplir magras retribuciones jubilatorias con trabajo.

Las escalas de reducción del personal en actividad se han proyectado también con excesiva simplicidad.

El proyecto en consideración no puede ser aprobado en la forma en que fue sancionado por la Cámara de Diputados.

Existen desde defectos formales hasta errores materiales que lo invalidan.

Introduce sorpresivamente materias ajenas al tema en debate como es la pretendida impunidad con que se pretende beneficiar a los funcionarios

públicos al introducirse, de rondón, este jubileo en la redacción de los artículos que pretenden modificar códigos de procedimiento

Como representante de la provincia de Tucumán, debo remarcar también la intencionalidad manifiesta de rebajar los impuestos coparticipables para compensarlos, desde el punto de vista del Tesoro nacional, con impuestos y contribuciones que no lo son. Ello agravará la situación de las provincias, a las que se les volverán a atribuir todos los males.

Me referiré con algún detalle a los proyectados artículos 10 y 11, que son el meollo del proyecto. En primer término, el proyectado artículo 10:

"Cuando los recursos presupuestarios estimados no fueran suficientes (...) se reducirán proporcionalmente los créditos correspondientes a la totalidad del sector público nacional". Si estas dos afirmaciones fuesen normas para la elaboración del presupuesto, estaríamos de acuerdo.

Pero en el caso se trata de la ejecución (no de la elaboración) de un presupuesto ya sancionado. Y lo que se pretende es que el Poder Ejecutivo tenga la facultad de recortar "los créditos destinados a atender el pago de retribuciones periódicas por cualquier concepto".

Ohsérvese que las jubilaciones no son retribuciones, sino obligaciones. Es decir, se trata de obligaciones como lo son cualesquiera de las deudas estatales con proveedores, prestamistas, etcétera, exigibles.

Caso diferente es el de autorizaciones para gastar que pueden ser reducidas no gastando.

Pero otorgar al Poder Ejecutivo la potestad de reducir las obligaciones exigibles, según su propia ineptitud para preverlas o para recaudar, implica otorgarle una facultad extraordinaria por la que las fortunas de los proveedores y jubilados argentinos quedan a merced del Poder Ejecutivo. Acto expresamente calificado por el artículo 29 de la Constitución Nacional.

Diferente sería si se autorizara a no pagar la deuda externa, porque el artículo 29 de la Constitución Nacional se refiere sólo a las fortunas de los argentinos (protegiéndolas de no quedar a merced de gobierno o persona alguna); y porque el artículo 75, inciso 7° de la Constitución Nacional confiere al Congreso la potestad de "arreglar el pago de la deuda interior y exterior". Paso ahora al artículo 11.

Si los contratos afectados por las reducciones dispuestas podrán revocarse por razones de oportunidad, no veo cuál es el ahorro. Porque cuando el Estado revoca por razones de oportunidad o mérito un acto que dio lugar a un derecho subjetivo, debe pagar.

Los actos administrativos estables que han dado nacimiento a derechos subjetivos pueden ser revocados cuando se expropia el derecho subjetivo al que dieron nacimiento y se lo indemniza ("Bordieu versus Municipalidad"; "Fallos"; tomo 176, página 363, etcétera).

En el caso de rescisión de un contrato por uso de la prerrogativa rescisoria de la administración pública, siempre da lugar a indemnización del particular. El derecho emerge del artículo 17 de la Constitución Nacional.

Esta cláusula daría lugar a la tan temida "industria de los juicios", que generalmente se debe a la ineptitud de la administración o a la actitud dolosa de los administradores.

Por último, séame permitido, señor presidente, recordar las enseñanzas de quien fuera por tres veces presidente de los argentinos.

En su primer discurso al asumir la Secretaría de Trabajo y Previsión en los años cuarenta, dijo que a partir de ese momento las pensiones por invalidez y por edad dejaban de ser una dádiva para transformarse en un derecho.

Convocó a los argentinos a defender ese derecho caiga quien caiga, y con su sentido visionario convocaba a afirmar ese derecho frente a toda influencia espuria que se interpusiera.

En ese discurso acuñó por primera vez su bandera de que "mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar".

Porque no quiero traicionar ese mandato y porque me opongo a conceder al Poder Ejecutivo nacional facultades extraordinarias; ni la suma del poder público, ni otorgarle sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobierno alguno, es que voto en forma negativa del proyecto en consideración.

6

Solicitada por el señor senador Menem

Acerca de la desnaturalización del presupuesto y del empleo público

Señor presidente:

1. EL RÉGIMEN JURIDICO DEL PRESUPUESTO

La administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional se encuentran regulados por la ley 24.156.

El eje central de dicha norma lo constituye la regulación que hace del presupuesto nacional. De conformidad a lo establecido en el artículo 75, inciso 8, de la Constitución Nacional, corresponde al Congreso Nacional "fijar anualmente (...) el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas...". De ahí que se conceptúe al presupuesto como una norma habilitante de competencia administrativa, y desde una perspectiva política institucional, resulte en la proyección de la acción de gobierno pretendida por el gobierno y avalada por los legisladores.

En este sentido constituye un instrumento de control de gestión por parte del Congreso, especialmente en lo que se refiere a la razonabilidad en la elección de las alternativas a través de las cuales se cumplirá el interés público, y con el control de su ejecución por el legislador, que permitirá determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados en su ejecución.

En este sentido se debe considerar que el presupuesto se debe orientar a concretar los programas de la Constitución Nacional en cuanto a producir una aplicación del gasto en forma equitativa, privilegiando la solidaridad económico-social, acorde con el criterio de lograr un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio de la Nación (artículo 75, inciso 2º, párrafo tercero, de la Constitución Nacional).

Las leyes de presupuesto en nuestro país se caracterizan por su anualidad, tal cual lo establece el artículo 75, inciso 8, de la Constitución Nacional, ya citado. La atemporalidad atenta contra la forma republicana de gobierno, y por ende, contra la seguridad jurídica. Por ende, en situaciones de emergencia, la regulación que ésta requiera debe ser especial y ajustada a esa particular situación, y no puede introducir modificaciones en la regla general.

La Ley de Presupuesto, conforme lo establece la ley 24.156, contiene una autorización del límite máximo a gastar (límite cuantitativo) y en qué puede gastar (límite cualitativo).

2. EL PROYECTO DE "DÉFICIT CERO"

En contraste con esta breve introducción, el análisis del proyecto de ley que corre en el expediente C.D.-68/01 en lo atinente a la modificación que pretende introducir en el artículo 34 de la ley 24.156, no revela que los párrafos que se propone agregar implican la desnaturalización del presupuesto.

a) Defectuosa técnica legislativa

En primer lugar, queriendo acotar la emergencia, situación típicamente coyuntural, introduce una modificación sustancial y permanente en los principios de ejecución del presupuesto. De ahí que se acuse al proyecto en cuanto a su defecto técnico, toda vez que ello en todo caso debería articularse mediante una norma especial y no mediante la modificación de una ley de fondo, que reglamenta un aspecto básico de la estructura económico-financiera del Estado y su articulación institucional.

Si la idea es introducir el criterio de ejecución de "déficit cero", lo apropiado es darle la redacción técnica necesaria a tal fin para los presupuestos venideros. Esto implica una decisión política, que no sea fruto del apuro o la urgencia y requiere una planificación y un compromiso político de que no se tolerará nunca más déficit en las cuentas fiscales y, por ende, una decidida restricción en la asunción de nuevos créditos por parte del Estado, cualquiera fuera el fin de que se trate.

b) El único propósito de la norma es bajar los sueldos sin piso.

La norma sólo se ocupa de las erogaciones corrientes, y su claro propósito es reducir los salarios y haberes jubilatorios, sin establecer cuál será el piso. Con el criterio expresado en el proyecto, bien podría llegar a resultar que no existen créditos para otra cosa que no sea para pagar los servicios de la deuda pública.

Puntualizando algunos aspectos de los efectos sobre el salario, podemos afirmar:

— La Constitución Nacional garantiza la estabilidad del empleo público, y la legislación regulatoria de la función pública establece que la retribución es un derecho.

— Como tal, la retribución tiene el carácter de intangible, ya que mientras se mantenga el empleo la misma debe permanecer igual.

— Aun cuando pueda aceptarse que por una norma general la retribución pueda ser disminuida en el marco de una emergencia declarada, la misma debe mantener el carácter de estable.

— Desnaturaliza el concepto de remuneración la circunstancia de que vaya a ser fijada mensualmente en base a un parámetro externo, como puede ser en este caso la recaudación.

— Así, la remuneración se transformaría en una dádiva graciosa que el Estado otorga mensualmente al empleado de acuerdo a los fondos con que cuenta. Por vía hipotética del absurdo, en un mes podría no existir recaudación, razón por la cual los trabajadores no percibirían remuneración, transformándose su trabajo en un servicio gratuito, lo que es inaceptable, ya que el trabajo no se presume gratuito.

En cuanto a las jubilaciones, caben las siguientes reflexiones:

— El haber jubilatorio resulta de un cálculo en función de los aportes realizados por el trabajador durante un período de tiempo.

— Por lo tanto, se trata de un derecho que integra el derecho de propiedad en sentido amplio.

— Los haberes no pueden ser disminuidos porque no tienen el carácter de una relación contractual entre el beneficiario y el Estado (como la del empleo público) sino que se trata de una prestación realizada en función de aportes que el Estado debe garantizar.

— El artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece: "El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable", y agrega "jubilaciones y pensiones móviles", que debe interpretarse en el sentido que podrán incrementarse pero no disminuirse.

c) Ausencia de racionalidad en la afectación del gasto

Por otra parte, el sistema automático y proporcional de la totalidad de los créditos del sector público

carece de racionalidad. La norma, al establecer que "cuando los recursos presupuestarios estimados no fueren suficientes para atender a la totalidad de los créditos presupuestarios previstos, se reducirán proporcionalmente los créditos correspondientes a la totalidad del sector público nacional..." no posibilita ninguna discriminación de acuerdo a la naturaleza del gasto de que se trate. No existe ninguna posibilidad de ponderación en cuanto a qué créditos o sectores del Estado se afectan. Es lo mismo reducir los salarios de algunos funcionarios que dejar sin recursos a los hospitales o abandonar la seguridad pública, dejando sin medios a la policía, o abandonar definitivamente la educación. Todo está en la misma bolsa, salvo los créditos destinados al pago de la deuda pública, lo cual no se compadece con el espíritu de bienestar general y solidaridad que impone la Constitución Nacional.

d) Desbarata la posibilidad de control legislativo

Al establecer una reducción automática y generalizada de los créditos presupuestarios, se priva al Congreso de participar en la elección de las alternativas que estime más razonables para aplicar una reordenación del gasto público, aun conservando el criterio del "déficit cero".

La Ley de Presupuesto, de tal manera, queda desvirtuada, ya que desaparece en la práctica como parámetro para ejercer el control de su cumplimiento. Más aún cuando la mecánica de ajuste permanente, según las disponibilidades de fondos que implica la modificación del artículo 34 de la ley 24.156, estaría determinando una suerte de presupuesto mensual, en el mejor de los casos trimestral, para determinar en cada oportunidad cuánto se dispone para pagar y cuál va a ser la mentada reducción proporcional.

7

Solicitada por el señor senador Gioja

Señor presidente: esta Cámara se encuentra, al igual que la de Diputados hace siete días, sesionando un fin de semana. Esta imagen es muy representativa del momento actual. Representa a un gobierno acorralado por una crisis que parece no tener fin.

La amenaza de esta crisis fue determinante para que el Poder Legislativo le aprobara a este gobierno cuanto ley éste nos solicitó. A todas estas leyes tratamos de introducirle reformas y hacer nuestro aporte, los cuales, en general, no fueron tomados en cuenta por aquel gabinete de economistas del cual la Alianza oficialista se jactaba. Pero estas leyes no fueron suficientes, poniendo de manifiesto que no nos equivocábamos cuando planteábamos un debate amplio y profundo para corregir leyes mal planteadas y peor implementadas.

En el medio quedó un promocionado "blindaje". Recuerdo en este momento cómo la original publi-

cidad oficial presentaba al blindaje como una panacea. Es más, en esa publicidad se decía: "como el gobierno hizo todo lo que había que hacer, conseguimos el blindaje". Es decir, disfrazaban la realidad en forma vergonzosa. Pero la crisis se profundizaba, y los mecanismos institucionales en manos de este gobierno parecían insuficientes. Entonces apareció Cavallo y nos solicitaron facultades extraordinarias, como alternativa al abismo. Nuevamente quedó al descubierto que no sabían qué hacer con estas facultades, las más amplias que a gobierno democrático alguno le fueran concedidas en la historia argentina reciente.

Y hoy, otra vez el fantasma del abismo nos impide debatir seriamente una iniciativa del Poder Ejecutivo. La amenaza de los mercados es agitada por hombres de negocios, empresarios, banqueros, funcionarios del Poder Ejecutivo y algunos políticos sin distinciones. Esta vez nos piden aprobar una serie de medidas, algunas de las cuales son terriblemente injustas y traerán consecuencias nefastas sobre muchos de nuestros compatriotas. Y una de mis grandes dudas radica en qué es lo que nos va a pedir el Poder Ejecutivo en los próximos días.

Creo que se ha generado un amplio consenso alrededor del principio del déficit cero. Pero una cosa es plantear un principio rector, como el del déficit cero, y otra cosa es señalar que hay un solo camino hacia dicho principio, con lo cual se le quiere quitar a los representantes del pueblo toda posibilidad de discutir y plantear alternativas, negando de plano cualquier crítica. Y el gobierno ha hecho suya la interpretación que le atribuye al Estado todos los males económicos, sin reparar en que lo que se cuestiona es la eficiencia del Estado. No es lo mismo el gasto en seguridad o educación que el gasto administrativo. El déficit cero es un principio cuya gran virtud es la de establecer un punto de partida para redefinir seriamente el rol del Estado en la Argentina futura. Este es nuestro próximo desafío, que espero estemos en condiciones de dar, porque el déficit cero sin un programa concreto de reestructuración y modernización del Estado será, simplemente, un mecanismo creado para bajar salarios y jubilaciones.

Creo que el gobierno ha perdido de vista que las herramientas por sí solas no producen milagros. Para gobernar, no sólo hay que tener herramientas, sino, fundamentalmente, hay que tener objetivos y políticas concretas, para implementarlas utilizando las herramientas correctas para cada caso. No se gobierna sólo con buenos *slogans* de campaña.

Confieso que concurro a este recinto con una gran carga de conciencia, para aportar por última vez la cuota de oxígeno necesaria para asegurar la gobernabilidad de la democracia, que la Alianza gobernante parece incapaz de brindarle al sistema institucional argentino.

Las incoherencias puestas de manifiesto por radicales y frepasistas por igual, que se compor-

tan como oposición siendo oficialistas, sin poder respaldar la gestión e iniciativas de su propio gobierno, nos ha llevado a esta realidad de crisis constante. La economía funciona en base a expectativas e incentivos, por lo que sólo un poder político enérgico y cohesionado puede lograr la reactivación del país. Si el gobierno no puede dar las señales políticas necesarias de que posee objetivos y políticas creíbles, y de que se encuentra encausado detrás de ellos, el país entero seguirá de crisis en crisis.

Este gran déficit de la Alianza, totalmente desgredada e incapaz de ponerse de acuerdo en mínimas políticas de gobierno, es lo que realmente motiva la desconfianza de los mercados. No sólo está en discusión el tamaño y la eficiencia de la estructura estatal, sino, fundamentalmente, el desempeño del oficialismo en el manejo del Estado. Y en este punto, sólo quiero remitirme a datos objetivos: este gobierno tiene un penoso récord, ya que en 20 meses de economía recesiva ha lanzado nueve paquetes económicos con subas de impuestos y promesas de baja de gastos. Esto es, un plan de ajustes prácticamente cada dos meses, sin contar el fallido de López Murphy.

El gobierno ha tratado de experimentar con todo tipo de medidas para mejorar las cuentas fiscales, restablecer la confianza en la economía y, en definitiva, hacer crecer el país.

Apenas asumido, y a pesar de una campaña en la cual la Alianza prometía bajar impuestos, aniquilaron los primeros síntomas de una incipiente reactivación cuando el gobierno puso en marcha el primer ajuste, con Machinea a la cabeza, y con una visión eminentemente fiscalista, es decir, aumentar la recaudación en cerca de 2.000 millones de pesos.

Recuerdo que los genios de la comunicación oficial se quejaban de que popularmente se lo denominó "impuestazo", en vez de ser conocido como una "amplia y progresista reforma tributaria", como ellos querían disfrazarla. Hubo fallas en la comunicación. Pero, como decía el general Perón, la única verdad es la realidad. Y los resultados de esta realidad marcaron un profundo fracaso, ya que se profundizó la recesión, disminuyó el consumo, la recaudación del IVA cayó en 2 puntos.

Como esto no bastaba, en abril salió el famoso decreto 430, con rebajas del 12 y 15 % para los sueldos estatales; y a fines de octubre un nuevo paquete de medidas, al que se le denominó Ley Anti-evasión.

Pocos días después se anunciaba el cuarto ajuste: la Ley de Emergencia Económica. En este aspecto quiero resaltar un aspecto muy significativo: nunca reglamentaron esta ley en lo relativo a las medidas que buscaban bajar el gasto. Y el período de vigencia de algunas de estas medidas ya venció.

A fines del año pasado sale el quinto ajuste: el último de Machinea que subía algunos impuestos

(se gravaba con ganancias los plazos fijos, obligaciones negociables empresarias, etcétera) y bajaban otros (impuesto a los intereses pagados y costo del endeudamiento empresario).

Pocos meses después se iría Machinea y vendría López Murphy con un fallido intento que provocó una dura reacción en amplios sectores sociales y políticos.

El sexto ajuste, el primero de la etapa Cavallo, vendría con la Ley de Competitividad y el impuesto a las transacciones en cuentas corrientes. Y diversas medidas que pretendían combatir la evasión. Poco después, con el incremento de las alícuotas, generalización del IVA, aumento de alícuotas de ganancias para transacción de algunos títulos y acciones, etcétera, se implementa el séptimo ajuste.

El mes pasado conocimos el octavo paquete, con amplias modificaciones tributarias, suba de aportes patronales, la creación del denominado factor de convergencia o dólar comercial, IVA al transporte, subas del precio del gasoil y bajas a las naftas, etcétera. Y el noveno ajuste fue anunciado hace diez días y cuyos puntos principales —los cuales abordaré más adelante—, nos disponemos a tratar en esta sesión.

Entre todos estos intentos idearon el blindaje, el megacanje, solicitaron facultades extraordinarias, reforma laboral.

Ahora yo me pregunto: si nada de esto tuvo efecto, si a pesar de todos estos intentos, el gobierno no pudo reactivar la economía. ¿de quién es la culpa? ¿De un oficialismo que no sabe qué hacer con el país, o de una oposición que siempre aportó opiniones y propuestas, y acompañó permanentemente las decisiones del Poder Ejecutivo? Porque las presiones para que aprobemos lo que no compartimos son enormes, y tanto de diversos medios como desde el gobierno quieren hacer creer a los argentinos que, si esta ley no sale hoy, las consecuencias serán culpa nuestra. Pareciera como si la desconfianza de los mercados es responsabilidad de este Senado, que si no apoya a un gobierno débil, no sabemos en qué termina esta crisis.

El sistema político argentino se estructura básicamente en dos tipos de responsabilidades: el oficialismo, que debe gobernar, y la oposición, que debe vigilar, controlar y aportar propuestas. En este momento, la confusión es tal que se le exige al justicialismo, que es la oposición, una actitud que ni el propio oficialismo puede tomar: "salvar al país del abismo, al cual nos conduce este gobierno de dirigentes irresponsables o que abandonaron su lugar a la primera disidencia". Y pareciera que la única forma de salvar al país es votando estas medidas que, si bien apuntan a objetivos que compartimos, violan numerosas reglas de la más elemental justicia y legalidad.

Y ante la mínima posibilidad de que, en base a principios básicos de un sistema democrático nos

tomemos el tiempo minimamente necesario para estudiar las propuestas y aportar soluciones, nos amenazan con un escenario terriblemente pesimista, con los mercados abatiéndose sobre nosotros, estallidos sociales en nuestras provincias por los incumplimientos de la Nación en enviar los fondos que les pertenecen por coparticipación y pactos fiscales.

El gobierno quiere que los justicialistas votemos en contra de nuestras convicciones. Nuestra Constitución Nacional es clara y precisa al establecer que el Congreso debe legislar y promover toda medida que garantice igualdad de oportunidad y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la misma y por los tratados internacionales sobre derechos humanos.

Asimismo, en el artículo 14 bis establece la obligación del Estado de otorgar los beneficios de la seguridad social, en mérito de ello los legisladores tenemos la responsabilidad de sancionar leyes que garanticen el derecho a los ancianos de gozar una vejez segura, en virtud a tantos años de trabajo y de aportes que realizaron a las respectivas cajas previsionales.

Sancionando este proyecto de ley estaríamos convalidando un decreto de necesidad y urgencia donde el Poder Ejecutivo desconoce y altera derechos previsionales adquiridos, ¡qué lejos estamos hoy del principio de previsión social que pretendió la sociedad reconocer e instrumentar hace aproximadamente un siglo!

Más allá de la necesidad y urgencia que nos presenta el Ejecutivo para lograr el denominado "déficit cero", no debemos perder de vista que no todas las medidas propuestas están fundadas en equidad y justicia social que el pueblo de nuestra nación tanto exige.

No puede ser tomado el régimen previsional como un mero componente del gasto público, olvidando el origen y la esencia del derecho previsional, que ha sido y es valuarlo de cualquier pueblo y democracia que se precie de serlo. Por lo tanto los justicialistas, reafirmando nuestras banderas, que no son otras que la defensa de los actuales trabajadores y de aquellos que hoy integran la clase pasiva, hombres y mujeres que le dieron mucho más que un aporte monetario a sus correspondientes cajas, dieron años de su vida en pos del bienestar general, los justicialistas decimos *no* a la reducción de los haberes jubilatorios, *no* a la reducción del sistema previsional en su conjunto.

Señor presidente, aprovechando esta oportunidad, en este debate que se realiza en un momento crítico para nuestra Nación, que pareciera ser un punto de inflexión, es que creo conveniente que nos pongamos de una vez a revisar a fondo el régimen jubilatorio y eliminar toda prerrogativa que no corresponda.

Decir *no* no significa dejar de trabajar para lograr el déficit cero, tampoco significa ser ciegos y ne-

cios y no ver la realidad, entendemos que hay cosas que seguramente son perfectibles, pero estamos seguros de que el camino elegido en lo que respecta a la reducción de los haberes jubilatorios no es el correcto.

Con tipo de medidas antisociales y retrógradas, el Poder Ejecutivo vuelve a mostrarnos que su ineptitud no hace más que volver a generar más incertidumbre. Los argentinos no sabemos qué hacer, no se trata de un delirio colectivo, sino de una lógica reacción instintiva ante las contradicciones del poder público. Más de la mitad de las personas que tienen trabajo sospecha que puede perderlo. La angustia se apodera de millones de compatriotas, viendo que el futuro, en vez de ser una esperanza, una promesa, se ha transformado en una amenaza.

Cabe destacar que el decreto 205 del año 2001, que se encuentra vigente, establece que a los trabajadores que tienen remuneraciones menores a cien pesos se les quita su salario familiar. La cantidad de trabajadores afectados son 235.000, según datos oficiales, aunque esta cifra es discutida por informaciones de carácter privado. Señores senadores, esto es una vergüenza, es inhumano.

Las demandas sociales urgen al trabajo para mejorar la condición de vida de nuestros compatriotas, esos que confiaron su voto a un cambio que se decía superador y no a un retroceso como el que estamos viviendo, la incertidumbre.

Como justicialistas, nuevamente nos sentamos en nuestras bancas con el ánimo de no obstaculizar la acción de gobierno de la Alianza. Damos quórum, pero no aceptamos la responsabilidad política por la situación en la cual se encuentra el país. Son los propios miembros de la Alianza, tanto radicales como frepasistas, quienes deben poner la cara y explicarle al pueblo qué es lo que quieren hacer y cómo van a hacerlo.

Y, de una vez por todas, por favor, únanse para gobernar este país, que volverán a tener nuestro apoyo. Esta es la única manera en que evitaremos que en pocos días más los mercados, y tras ellos nuestro gobierno, le pidan a nuestro pueblo sabe Dios qué nuevos sacrificios.

Muchas gracias.

8

Solicitada por el señor senador San Millán

Señor presidente: nos encontramos hoy aquí para considerar este proyecto mediante el cual, con el objetivo de arribar al déficit cero -principio de prolijidad presupuestaria que nadie discute- se efectúa un nuevo ajuste sobre el bolsillo de los más desprotegidos, afectando la vida y el futuro de miles de argentinos.

Para ello se nos ha convocado de urgencia. El gobierno, los bancos y algunos medios de comunicación vienen presionando, una vez más, para

que aprobemos este proyecto, porque —según nos dicen— la Nación se encuentra al borde del abismo. Quiero apelar a la memoria de mis colegas. En efecto, no es la primera vez que se nos convoca a aprobar iniciativas del Poder Ejecutivo bajo la amenaza de que si no le damos pronta sanción y sin modificaciones, daríamos un salto al vacío. Comenzó a principios de la gestión actual, en diciembre de 1999, con la reforma de la Ley de Ministerios y el Impuestazo; siguió con la Ley Antievasión, los compromisos federales (pactos fiscales), con la reforma laboral, también la Ley de Emergencia Económica, la Ley de Impuesto a las Transacciones Financieras y, por último, la concesión de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo. Todas estas herramientas, consideradas fundamentales por el gobierno para poner en marcha el país y solucionar los problemas fiscales o coyunturales, fueron concedidas por nuestra bancada, aun cuando muchos no estábamos de acuerdo con las mismas. Hoy, a un año y medio de gestión y pese a haber otorgado todos los instrumentos que se nos pidieron —en una actitud sin precedentes históricos por parte de la oposición—, parece que nos encontramos, nuevamente al borde del abismo.

¿Qué pasó? ¿Las herramientas que nos pidieron y que concedimos no sirvieron? ¿No eran idóneas? ¿No estábamos entonces al borde del abismo y ahora sí lo estamos? ¿Nos mintieron antes? ¿Nos mienten ahora?

Ante esta circunstancia, en lo personal, quiero decir basta! No puedo aceptar que, como consecuencia de la ineficaz acción de gobierno, se termine castigando una vez más a los sectores más desprotegidos, especialmente a nuestros jubilados.

Este nuevo ajuste vuelve a afectar a los empleados públicos. Pero, si por imperio del decreto 430/00 estaba vigente un recorte del 12 % a los asalariados del sector público, ¿qué necesidad había de aumentar la tensión social al solo efecto de elevar dicha deducción a un 13 %?

Por supuesto que estoy de acuerdo en una re-ingeniería del Estado tendiente a hacerlo más eficiente y menos costoso para el conjunto de la sociedad argentina. Pero este fin sólo se logrará con estudios serios y mediante la aplicación de metodologías apropiadas, pero nunca a través de la aplicación de hachazos salvajes e indiscriminados que, muchas veces, recaen donde no deberían.

Y no es que no existan otros sectores de donde obtener los recursos que necesita la Nación sin afectar los ingresos de la gente, como por ejemplo mediante la eliminación de los recursos destinados a la publicidad del Estado, o gravando a las entidades financieras en sus operaciones de *call money* y cuentas corrientes en el Banco Central; por qué los bancos no y si el tenedor de una cuenta corriente o caja de ahorro. Bajar las comisiones de las AFJP;

que paguen impuestos a los bienes personales los que tienen domicilio en el extranjero y residen en el país, como lo hace cualquier argentino y como rige en todos los países del mundo.

Este Senado, en actitud solidaria, no sólo ha recortado y ajustado en un 15 % su presupuesto anual, sino que sus integrantes nos hemos reducido parte de nuestros salarios, habiendo renunciado también, a la percepción del aguinaldo y terminado con los gastos reservados.

Resulta extraño que en un momento de ajuste generalizado que exige la solidaridad de toda la ciudadanía, el Poder Judicial no se haya puesto a la altura de las circunstancias bajo pretexto de la intangibilidad de sus ingresos. Este principio de intangibilidad, consagrado por el artículo 110 de la Constitución Nacional, resulta así interpretado con un alcance distinto al que originalmente tuvo en cuenta el legislador. En efecto, mediante el principio de intangibilidad de la remuneración, se consagra la independencia de las decisiones de los magistrados. Sin embargo, ello no autoriza a interpretar que los integrantes de ese poder del Estado puedan permanecer ajenos a los sacrificios que el país requiere de la sociedad toda. No parece, en definitiva, que una reducción generalizada en los ingresos de los jueces pueda afectar su independencia de criterio.

Más grave aún es la situación de los sectores pasivos, ya que no sólo es injusta en virtud de la especial y precaria situación por la que atraviesan, sino porque a través de la metodología que se pretende implementar se les está quitando su propio dinero, ahorrado a través de los aportes efectuados a lo largo de su vida laboralmente activa. Es la plata de los jubilados, no es la plata del Estado nacional.

Señor presidente, el incumplimiento a esta obligación implica un fuerte agravio a la seguridad jurídica y, por ende, a la imagen exterior del país que, por otro lado, tanto se trata de defender.

Además, atacar el salario y las jubilaciones implica una nueva caída del consumo y un agravamiento de la espiral recesiva, que terminará provocando una crisis mayor, más aún si consideramos que estos salarios y jubilaciones estarán condicionados al nivel de recaudación, por lo que nada impide que estos descuentos puedan aumentar, con lo que la incertidumbre e inseguridad de la situación de los asalariados generará una crisis social de consecuencias imprevisibles.

Nos están diciendo que del total que se recaude primero se pagará hasta el último centavo de los intereses de la deuda externa, cumpliendo así con los acreedores, y que luego se verá hasta qué monto se pagan las jubilaciones, los salarios y se atienden todas las demás necesidades de funcionamiento del Estado nacional.

En la Argentina hay superávit primario. Si quitáramos del presupuesto de la Nación lo que se paga

en concepto de intereses de la deuda externa, los ingresos superarían los gastos que anualmente realiza el Estado nacional. Por eso hay que plantear un tratamiento en serio de la deuda externa.

¿Qué estamos esperando para abordar, con responsabilidad y madurez, la negociación que el país tiene que llevar adelante y plantear a nuestros acreedores que nadie quiere dejar de cumplir los compromisos?, ¿por qué nuestros acreedores financieros tienen que ser la excepción?

Vivimos una situación claramente recesiva, y ésta es la raíz del problema. Aplicar estas recetas de ajuste—reducir salarios, jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y el pago a los contratistas del Estado—conduce al círculo vicioso que ya estamos viviendo: caída de la actividad, disminución de la recaudación, agravamiento del déficit fiscal y nuevo ajuste.

Este es el sexto ajuste de nuestro gobierno.

Si estoy de acuerdo con que el país está en una crisis muy delicada, que es necesario un programa de equilibrio fiscal.

Sólo digo que el esfuerzo no lo pueden hacer una vez más los jubilados, los trabajadores, y los carentes de nuestro país. Es necesario que por una vez el esfuerzo se reparta equitativamente en términos sociales y de capacidad económica.

Cuando se ataca el salario y a las jubilaciones las medidas se vuelven inconducentes desde el punto de vista económico, pues se provoca una nueva caída en el consumo y con esto se acentúa la espiral recesiva, llevándonos desgraciadamente a una crisis más grave.

Ningún país sale de la recesión con un ajuste recesivo, hay una sola manera de lograr este objetivo: haciendo crecer la economía.

Por último, debo señalar que nuevamente el sector financiero, uno de los pocos segmentos de la economía que ha fructificado sus ganancias en los últimos años con tasas usureras, a expensas de la sociedad en general y del Estado en particular, ha sido excluido por el Poder Ejecutivo para hacer su contribución, circunstancia ésta que torna aún más inequitativo e irritativo el sentido del ajuste, ya que no se grava con el impuesto a los movimientos de las cuentas corrientes a las operaciones de *call money*, que son préstamos entre los bancos para luego prestarlos a terceros, mientras que las cajas de ahorro de cualquier ciudadano, por humilde que sea, sí se gravan.

Es más, con el declamado combate contra la evasión, el gobierno ha contribuido a aumentar la bancarización de la sociedad, lo que no implica otra cosa que derivarle a las entidades bancarias nuevos e involuntarios clientes que aumentarán sus utilidades, sin que esto se vea reflejado en una proporcional baja de las tasas de interés.

También los sectores productivos que vienen soportando ajustes del gobierno, el que mediante el recorte e incumplimiento en el envío de sus recursos los empuja hacia el abismo de la desaparición. Un claro ejemplo de ello lo sufre el sector tabacalero, a quien se le han retenido los recursos correspondientes al Fondo Especial del Tabaco en forma arbitraria y desproporcionada. Ya nos cansamos de manifestar y defender que el Fondo Especial del Tabaco no es un subsidio, sino que constituye parte integrante del precio que debe recibir el productor por el tabaco ya entregado. Además, al ser un recurso con asignación específica, no puede ser utilizado para otros fines que no sean los previstos en la ley que le dio origen.

El Estado nacional adeuda al sector tabacalero más de cincuenta millones de pesos, recaudados con el fin específico de integrar el precio del tabaco ya producido.

Esto demuestra que el ajuste que lleva adelante el gobierno no sólo afecta principalmente a los sectores más desprotegidos, sino que, además, violenta el estado de derecho, generando una absoluta inseguridad jurídica, no cumpliendo con sus obligaciones legales. Para ello se pretende modificar códigos procesales, exonerando de responsabilidad a los funcionarios que actúan con la mayor arbitrariedad, cuando pretende impedir a los jueces la imposición de cargas pecuniarias personales a los funcionarios (última parte de los artículos 14 y 15 del proyecto).

Esto en cuanto al carácter general de la ley. Habida cuenta de que a lo largo de su articulado se verifican una serie de aspectos con los que no concuerda en razón de que los mismos evidencian graves distorsiones a los principios de equidad social, me reservo su consideración para el momento de su tratamiento en particular. En definitiva, si no se aceptan cambios en la ley, en cuanto a sustituir la rebaja de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares por gravámenes fundamentalmente a sectores de privilegio como el financiero, a pesar de estar totalmente de acuerdo con el déficit cero, voy a votar en contra.